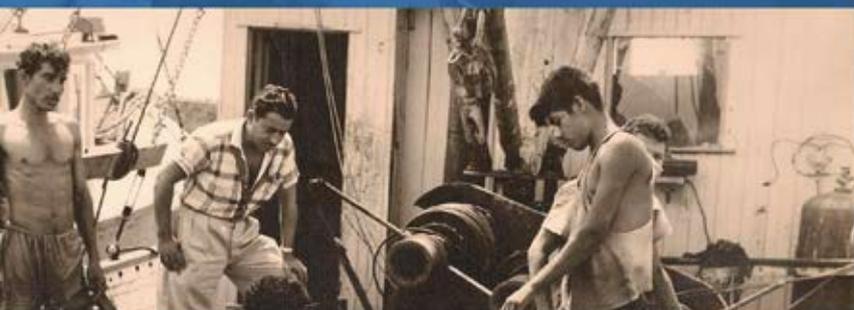


JEFFREY L. GOULD



# Solidaridad bajo asedio



Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe  
Universidad Nacional Autónoma de México

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

RECTOR

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers

SECRETARIO GENERAL

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa

COORDINADORA DE HUMANIDADES

Dra. Guadalupe Valencia García

CENTRO DE INVESTIGACIONES  
SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

DIRECTOR

Mtro. Rubén Ruiz Guerra

SECRETARIA ACADÉMICA

Dra. Guadalupe Gómez-Aguado

ENCARGADO DE PUBLICACIONES

Gerardo López Luna

# SOLIDARIDAD BAJO ASEDIO

EL MOVIMIENTO OBRERO SALVADOREÑO  
ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO, 1970-1990

# SOLIDARIDAD BAJO ASEDIO

EL MOVIMIENTO OBRERO SALVADOREÑO  
ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO, 1970-1990

Jeffrey L. Gould



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
México 2021

**Catalogación en la publicación UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información.**

**Nombres:** Gould, Jeffrey L., autor. | Walter, Knut, traductor.

**Título:** Solidaridad bajo asedio : el movimiento obrero salvadoreño entre el cielo y el infierno, 1970-1990 / Jeffrey L. Gould ; traducción, Knut Walter.

**Otros títulos:** Solidarity under siege. Español. | Movimiento obrero salvadoreño entre el cielo y el infierno, 1970-1990.

**Descripción:** Primera edición. | México : Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, 2021.

**Identificadores:** LIBRUNAM 2102374 | ISBN: 9786073045025.

**Temas:** Movimiento obrero – El Salvador – Historia – Siglo XX. | Sindicatos – El Salvador – Historia – Siglo XX. | El Salvador – Política y gobierno – Siglo XX.

**Clasificación:** LCC HD6567.G6818 2021 | DDC 331.88097284—dc23

Traducción: Dr. Knut Walter

Diseño de la cubierta: Mtra. Marie-Nicole Brutus H.

Diseño de interiores: D.G. Irma Martínez Hidalgo

Primera edición: abril 2021

Fecha de edición: 30 de abril de 2021

D. R. © 2021 Universidad Nacional Autónoma de México  
Ciudad Universitaria, Coyoacán  
C.P. 04510, México, Ciudad de México

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
Torre II de Humanidades, 8° piso,  
Ciudad Universitaria, 04510, México, Ciudad de México  
Correo electrónico: [cialc@unam.mx](mailto:cialc@unam.mx)  
<http://www.cialc.unam.mx>

ISBN 978-607-30-4502-5

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Impreso y hecho en México

*A la memoria de dos grandes historiadores:*  
*Emilia Viotti da Costa, mi mentora*  
*Fritz Stern, mi tío*  
*A mi compañera de siempre*  
*A nuestros hijos e hijas*  
*A nuestros nietos y nietas*  
*Al pueblo de Puerto El Triunfo que reside allí*  
*y al que está en la diáspora*

## ÍNDICE

Introducción .....	11
1. Hartos del abuso. El género y el auge del Sindicato de la Industria Pesquera, 1970-1990.....	41
2. El precio de la solidaridad. El movimiento sindical salvadoreño en Puerto El Triunfo y en el Gran San Salvador, 1979-1980.....	101
3. La última oportunidad. La Junta Revolucionaria de Gobierno y la guerra civil en ciernes.....	151
4. Conflictos obreros en Puerto el Triunfo, El Salvador, 1985.....	213
5. La extrema derecha y el fraude.....	269
6. Solidaridad y desacuerdos en el movimiento obrero 1984-1989.....	307
7. La huelga más larga de la historia.....	335



## ÍNDICE

Conclusión. La desindustrialización tropical y sus descontentos .....	379
Epílogo.....	399
Agradecimientos.....	411
Bibliografía .....	417

## INTRODUCCIÓN

### UN ARCO DE TRIUNFO Y LA DESESPERACIÓN

Guardemos la esperanza de que, en el próximo siglo, los historiadores recojan las piezas rotas de este campo y puedan crear una visión más rica y menos caótica que les permita a ellos (y a otros) liberarse de la camisa de fuerza del narcisismo, de manera que puedan reinventar nuevas formas de solidaridad y consigan rotular nuevos senderos a un mundo más abierto y verdaderamente democrático, donde todas las personas de diferentes géneros, clases, etnicidades, religiones y nacionalidades se unan para participar en igualdad de condiciones de la riqueza de este mundo.

EMILIA VIOTTI DA COSTA, “New Publics,  
New Politics, New Histories”.

Nos aproximábamos a una tienda esquinera ubicada a la orilla de una polvorienta calle de Puerto El Triunfo, en El Salvador, a más de cien kilómetros al sureste de San Salvador. Guillermo bajó la ventana del carro y le preguntó a un hombre joven que barría frente a la tienda en qué dirección se encontraba la calle 14. Nos dirigíamos a grabar una entrevista con una antigua trabajadora de una empresa empacadora de mariscos. El joven respondió con inusitada ecuanimidad que “aquí todo es Calle 18”, indicando con eso que estábamos en territorio de la Mara 18. A medida que nos devolvíamos y salíamos de ese vecindario, caí en cuenta de cómo el alto nivel de lealtad, legitimidad y solidaridad que apenas unas décadas atrás era asociado con el Sindicato de la Industria Pesquera (en adelante SIP), ahora pertenecía a la Mara Calle 18 que, por si fuera poco, reinaba con terror en aquel lugar.

El paisaje de hoy camino al muelle está dominado por unos pocos pescadores, que pasan a la par de las corroídas armazones de las plantas empacadoras, situadas a la orilla de la altamente contaminada Bahía de Jiquilisco. Los más ancianos recuerdan el ruido ensordecedor de las máquinas, el implacable olor a camarón y las noches de desenfreno cuando volvían al puerto. También evocan cómo, en la década de 1970, la industria camaronera experimentó un auge (fue la tercera actividad más importante entre las exportaciones salvadoreñas) y sus 2 mil trabajadores organizados estaban entre los más privilegiados obreros de la nación. Después de haber enfrentado a las compañías, que fueron apoyadas casi por una década por la dictadura militar, hacia 1980 esos trabajadores veían que se concretaban sus esperanzas de una vida digna para sus hijos. Sin embargo, para inicios de la década de 1990, el colapso de la industria había aniquilado aquellas aspiraciones.

Como un eco de la angustia de la región estadounidense del Rust Belt,<sup>1</sup> una buena parte de los 16 mil habitantes de este puerto regido hoy por las maras culpan a los sindicatos —particularmente al Sindicato Agua, que era el sindicato de los marineros de los barcos camaroneros— por la destrucción de su comunidad y de sus formas de vida. Esa culpa deviene de dos huelgas que el Sindicato Agua emprendió y dirigió; la segunda de esas huelgas, que se extendió de 1987 a 1991 y fue la más larga en la historia de Latinoamérica, coincidió con el cierre de Pezca S. A., la planta procesadora de camarón más importante del país. Empero, como mostramos en este libro, la causa principal del deterioro de la industria fue un fraude de más de 20 millones de dólares emprendido por los dueños derechistas de la compañía y por el presidente de un banco estatal. Como muchas de las estafas maquinadas durante la puesta en marcha del neoliberalismo, los detalles de ese escandaloso fraude permanecieron escondidos e invisibles a los ojos de la ciudadanía.<sup>2</sup> Fue más fácil culpar a aquellos cuya intransigente militancia era imposible de justificar, en una memoria moldeada por el triunfo del neoliberalismo que, además, barrió con muchos sindicatos del sector privado en El Salvador y en todo el hemisferio.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Nota del traductor. El autor se refiere aquí a la llamada región del *Rust Belt* del noreste de Estados Unidos, cuya principal actividad económica era la industria pesada y que sufrió un revés económico sin parangón durante las décadas de 1970 y 1980.

<sup>2</sup> Carlota McAllister y Diane M. Nelson, “Aftermath: Harvests of Violence and Histories of the Future”, en Carlota McAllister y Diane M. Nelson [eds.], *War by Other Means: Aftermath in Post-Genocide Guatemala*, Durham, NC, Duke University Press, 2013, pp. 33-40.

<sup>3</sup> Además de las numerosas entrevistas con los residentes que a menudo utilizaban la frase “mataron a la gallina de los huevos de oro”, José Isidro Arias Segundo, *Puerto El Triunfo: 487 años de antología histórica*, Puerto El Triunfo,

Solidaridad Bajo Asedio presenta un caso de estudio de trabajadores que lucharon y prosperaron en condiciones extremadamente adversas durante la década de 1970, solamente para sufrir la discordia, las privaciones y, a la larga, el desmoronamiento de su industria y sus sindicatos en las décadas siguientes. Sus historias son muy instructivas para develar un camino que no se pudo concretar. Después de ser aplastados por el terrorismo de Estado en 1980 y 1981, los trabajadores no pudieron mantener las condiciones de vida digna y de relativo poder que habían alcanzado para los obreros temporales y permanentes. Unos años después, los obreros se reorganizaron, pero las diferencias de género, las políticas sindicales y las desavenencias políticas impidieron su avance y, en última instancia, obstruyeron las posibilidades de emprender en forma cooperativa una industria camaronera en Puerto El Triunfo.

## UNA TRANSICIÓN LOCAL AL NEOLIBERALISMO

El fraude bancario referido ofrece una ventana centroamericana a lo que David Harvey, un precursor de los estudios sobre el neoliberalismo, llamó “acumulación por desposesión”. Para Harvey, la financialización constituye un componente fundamental del proceso de implantación neoliberal: “La desregulación permitió que el sistema financiero se convirtiera en uno de los principales centros de la actividad redistributiva por medio de la especulación, la

---

Centro de Tecnología, 2009 reúne ese sentimiento común cuando señala: “tuvimos que ver con tristeza cómo cerraban una por una las compañías debido a los largos conflictos entre trabajadores y administradores”. El libro de Arias Segundo no menciona el fraude por ninguna parte.

depredación, el fraude y el saqueo”.<sup>4</sup> Harvey concibe al neoliberalismo como un proyecto fundamentalmente político, emprendido por la élite corporativa del Atlántico Norte, que logró dar un golpe fulminante a los movimientos laborales y, a la vez, se las arregló para presionar a los gobiernos nacionales para que avanzaran hacia la promoción de una desregulación de los mercados financieros y hacia la privatización de las instituciones públicas de servicios e industria. De acuerdo con Harvey, el triunfo de esta forma radical de capitalismo dependió de la derrota y desmoralización del movimiento obrero en Estados Unidos y en Europa occidental y del traslado de las industrias a los países en vías de desarrollo, donde también debieron enfrentar un movimiento sindical envalentonado.

Solidaridad Bajo Asedio describe un camino singular, particularmente tormentoso, hacia el neoliberalismo que incluye una época de represión violenta, marcada también por la acumulación y la desposesión que benefició, fundamentalmente, a algunos de los dueños de las compañías. Los marineros y los obreros de planta se enfrentaron a las estrategias de la llamada flexibilidad laboral asociada con el neoliberalismo. Sus dos sindicatos, empero, emprendieron sus batallas en tiempos diferentes. Es más, hubo muy poca solidaridad entre los trabajadores de tierra y mar, una vez que emprendieron sus huelgas.<sup>5</sup> Las diferencias políticas, las

<sup>4</sup> David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Nueva York, Oxford University Press, 2007, p. 161. [Nota del traductor: hay traducción al español de este texto, titulado como *Breve historia del neoliberalismo*, Madrid, Akal, 2007].

<sup>5</sup> Como veremos, aunque informalmente se referían a ellos como “sector tierra” y “sector agua” o Sindicato Sector Tierra y Sindicato Sector Agua, de hecho el Sindicato Tierra tuvo en sus filas a muchos marineros de Mariscos de El Salvador y de Atarraya S. A., pero también de Pezca S. A. Sin embargo, el Sindicato Agua reclutó a obreros de las plantas procesadoras, especialmente en la década de 1980.

variadas formas de resistencia al capital y las tensiones de género impidieron una mayor solidaridad entre estos sindicatos en el largo plazo.

El análisis desarrollado por Greg Grandin con relación a la transición violenta al neoliberalismo en Latinoamérica se ajusta bien a la experiencia de Puerto El Triunfo y El Salvador. El terror emprendido por el Estado quebró alianzas y doblegó a los militantes.<sup>6</sup> La represión no fue la única arma que se usó para acabar con la solidaridad entre los trabajadores. Durante la década de 1980, de forma gradual, los líderes sindicales izquierdistas del SIP se convirtieron en discípulos de políticas congruentes con el modelo neoliberal y que, desde luego, estaban reñidas con sus anteriores formas de solidaridad: se opusieron al manejo cooperativo de la empresa camaronera, aceptaron un plan de subcontratación para los marineros presentado por la compañía y se enfrentaron a las huelgas del Sindicato Agua. De esa forma, los militantes del SIP comenzaron a poner en práctica lo que algunos investigadores llaman “la racionalidad neoliberal”.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Greg Grandin, *The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War*, Chicago, University of Chicago Press, 2004, pp. 196 y 197. Un excelente estudio de caso, que sustenta la tesis de Grandin es el de Lesley Gill, *A Century of Violence in a Red City: Popular Struggle, Counterinsurgency, and Human Rights in Colombia*, Durham, NC, Duke University Press, 2016. Para una importante reflexión sobre casos similares véase Gilbert M. Joseph, “Latin America’s Cold War: A Century of Revolutionary Process and U.S. Power”, en Greg Grandin y Gilbert M. Joseph, *A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin America’s Long Cold War*, Durham, NC, Duke University Press, 2010, pp. 397-414.

<sup>7</sup> Harvey, y en cierto sentido Grandin, representa un polo del debate sobre el neoliberalismo. El otro polo tiene sus orígenes teóricos en Foucault, pero algunos teóricos han promovido su análisis de la “gobernanza” y la racionalidad neoliberal. En lugar de un proyecto político, estos teóricos conciben al neoli-

## SOLIDARIDAD Y CONCIENCIA DESDE ABAJO

Durante la década de 1970, el movimiento de trabajadores salvadoreños fue parte del auge de actividad sindical en Latinoamérica. Como en El Salvador, muchos movimientos huelguísticos tuvieron que luchar contra regímenes militares. En el Cono Sur, los golpes de Estado emprendidos desde los cuarteles aplastaron a los enormes y dinámicos movimientos de trabajadores en Argentina y Chile. En Brasil, en cambio, a pesar del régimen militar, los obreros de las industrias automovilística y metalúrgica emprendieron una masiva y prolongada huelga que tuvo un impacto decisivo en el proceso democratizador. La cronología desempeñó un papel crucial en las relaciones entre los trabajadores y los regímenes. El régimen militar brasileño, que había estado en el poder desde 1964, comenzó un proceso de liberalización en 1978, que formalizó en 1979, provocado en no poca medida por la ola de huelgas, mientras que en ese momento los regímenes del Cono Sur ape-

---

beralismo como la invasión de lo político por el liberalismo económico: una “técnica de gobierno que se ha transformado en la racionalidad dominante y que coloca a la competencia como su primer principio. [...] El impulso hacia la responsabilidad individual y del ser como empresa es un principio fundamental del arte neoliberal del gobierno. Ese principio lleva a los sujetos a desarrollar acciones que refuerzan su propia sujeción”. Mathieu Hilgers, “The Three Anthropological Approaches to Neoliberalism”, en *International Social Science Journal*, vol. 61, núm. 202, octubre de 2011, p. 358. Dos importantes teóricos de este punto de vista son Pierre Dardot y Christian Laval, *The New Way of the World: On Neoliberal Society*, Nueva York, Verso, 2014. [Nota del traductor. Hay versión en español de este libro *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*, Barcelona, Gedisa Editoria, 2013]. Para una crítica de su escrito, véase Bruce Robbins, “The Monster of Governmentality”, *Los Angeles Review of Books*, 10 de junio de 2014. En <https://lareviewofbooks.org/article/monster-governmentality/#!>

nas iniciaban sus brutales embestidas al movimiento obrero.<sup>8</sup> En El Salvador, el movimiento obrero se había desarrollado durante más de dos décadas a la sombra de regímenes militares. El auge de la militancia obrera al final de la década de 1970 presionó al régimen a tomar medidas altamente represivas que, a su vez, condujeron a una expansión todavía mayor del movimiento. Si usamos el número de huelgas y huelguistas como rasero, para 1979 el movimiento obrero salvadoreño seguía proporcionalmente al de Brasil en la lista de los más combativos en las Américas. Por si eso fuera poco, si uno toma como indicador de militancia las tomas de plantas, el movimiento de trabajadores salvadoreños a finales de la década de 1970 fue el cuarto más combativo en la historia latinoamericana, solamente superado por sus camaradas obreros en Argentina, Chile y Uruguay.

En muchos sentidos, el movimiento salvadoreño se parecía al guatemalteco, tan brillantemente descrito y estudiado por Deborah Levinson-Estrada en su libro *Trade Unionists against Terror*.<sup>9</sup> Los trabajadores organizados en Guatemala también se enfrentaron con un régimen cada vez más homicida; de hecho, es posi-

<sup>8</sup> Para un análisis excelente del movimiento de trabajadores brasileños durante la década de 1970, véase John D. French, *Lula's Politics of Cunning: From Trade Unionism to the Presidency*, 2ª parte, Chapel Hill, University of North Carolina Press (en prensa).

<sup>9</sup> Deborah Levenson-Estrada, *Trade Unionists against Terror*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1994 [Nota del traductor: hay versión en español: *Sindicalistas contra el terror*, Guatemala, AVANCSO, 2007]. El movimiento obrero hondureño tenía un mayor porcentaje de la población económicamente activa organizada en sindicatos y consiguió logros significativos durante la década de 1970 de cara a regímenes mucho menos violentos. El movimiento obrero nicaragüense era más débil que el de sus vecinos, pero creció de manera significativa luego del triunfo de la revolución en 1979.

ble que los dos gobiernos intercambiaran apuntes con relación a sus situaciones respectivas. La principal diferencia entre esos dos movimientos fue que la izquierda radical salvadoreña (las organizaciones populares) dirigió la mayoría de las huelgas en 1979 y 1980, mientras que en Guatemala, los sindicatos no identificados con la extrema izquierda encabezaron la mayoría de las acciones; los salvadoreños también emplearon las tácticas de toma con más regularidad. Si se dejan de lado esas diferencias, los activistas sindicales de ambos países se encuentran entre los más heroicos y salvajemente maltratados en la historia de los trabajadores del siglo xx.

Solidaridad Bajo Asedio explica el éxito alcanzado por el movimiento obrero en Puerto El Triunfo al lograr mayores cuotas de autonomía y mejoras sustanciales en los salarios de los trabajadores y sus condiciones laborales, algo que había comenzado en la década de 1970, con el liderazgo de una federación obrera controlada por el régimen militar. Ese logro dependió sobre todo de un cambio importante en la conciencia de una fuerza laboral mayormente femenina.

Como sus contrapartes en Guatemala, los trabajadores salvadoreños lucharon por una mejor vida para que sus hijos pudieran recibir salud, educación, vestido y alimentos adecuados en una comunidad saludable, libre de actos de represión arbitraria. Para alcanzar esa meta fundamental concertaron alianzas, lo que finalmente los convirtió en blanco de la violencia estatal y paramilitar. Enfrentados a un mismo enemigo asesino, las alianzas entre trabajadores resistieron hasta bien entrada la década de 1980.

Este libro también estudia la transformación multifacética de la conciencia de los trabajadores. En mi primer libro, *To Lead as Equals...*, analicé las formas por medio de las cuales los campe-

sinos y peones en el noroeste de Nicaragua experimentaron una transformación endógena de su conciencia.<sup>10</sup> Los campesinos usaron y ampliaron los significados del concepto de élite —por ejemplo, el de propiedad privada— para comprender y transformar su mundo social. Además, utilizaron ese concepto de forma que primero pudieron interactuar y posteriormente dejar de hacerlo con sus aliados de la élite. En lugar de construirse como un espacio separado y completamente autónomo, una dialéctica entre autonomía y dependencia se puso en juego consistentemente en sus formas contradictorias de conciencia. Solidaridad Bajo Asedio sigue el camino de “Aquí mandamos todos igual”, en tanto que subraya las transformaciones endógenas de conciencia, pero se embarca en una nueva dirección al explorar las cualidades desiguales de los cambios vinculados con las múltiples y coexistentes afiliaciones e identidades de los trabajadores. Éstas, a su vez, condicionaron los malentendidos y desacuerdos al interior del movimiento obrero, que tenían sus raíces, en cierta medida, en las divisiones estructurales de género y la segmentación del trabajo. Para citar un ejemplo significativo, los aproximadamente 500 pescadores que trabajaban en Puerto El Triunfo se dedicaron a una forma particular de resistencia conocida como “la movida”, que consistía

<sup>10</sup> Jeffrey L. Gould, *To Lead as Equals: Rural Protest and Political Consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912–1979*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1990. [Nota del traductor: hay versión en español *Aquí todos mandamos igual: lucha campesina y conciencia política en Chinandega, Nicaragua, 1950-1979*, Managua, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 2008]. Mi análisis se asemeja, por un lado, a los primeros trabajos de la escuela de estudios subalternos y, por el otro, a los estudios de James Scott. Como desconocía aquellos importantes aportes cuando investigaba y escribía en aquel momento, mi análisis difiere en el énfasis que le doy al uso que los subalternos hicieron de los conceptos de la élite.

en ventas ilegales de camarón que se volvieron espacios de disputa entre todos los trabajadores del Puerto. Debido a su ilegalidad, nadie pudo hablar públicamente sobre “la movida”.

El silencio condicionó lo que aquí llamo un “desencuentro”. Los individuos de dos grupos diferentes pueden tener interpretaciones diferentes de la misma palabra o concepto que, a su vez, pueden condicionar unas prácticas diferentes en un momento histórico dado.<sup>11</sup> En palabras del lingüista ruso V. N. Volosinov: “Cada palabra, como sabemos, es un pequeño espacio en donde tiene lugar el choque y el entrecruzamiento de acentos sociales de orientación diferente. Una palabra en la boca de un individuo en particular es el producto de una interacción viva de las fuerzas sociales”.<sup>12</sup>

Propongo utilizar la palabra “desencuentro” como una herramienta metodológica, para comprender mejor las divisiones entre

<sup>11</sup> Otros usos del término desencuentro pueden consultarse en Bruno Bosteels, *Marx and Freud in Latin America, Politics, Psychoanalysis, and Religion in Times of Terror*, Londres, Verso Press, 2012. [Nota del traductor: hay traducción al español *Marx y Freud en América Latina. Política, psicoanálisis y religión en tiempos de terror*, Madrid, Ediciones Akal, 2016]; Julio Ramos, *Divergent Modernities: Culture and Politics in Nineteenth Century Latin America*, Durham, NC, Duke University Press, 2001. [Nota del traductor: hay traducción al español: *Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo XIX*, Santiago, Ediciones Callejón, 2005]. Para otro uso interesante del término relacionado con la noción de un encuentro fallido, véase Álvaro García Linera, “Indianismo y marxismo: el desencuentro de dos razones revolucionarias”, en *Revista Donataria*, núm. 2, marzo-abril de 2005.

<sup>12</sup> V. N. Volosinov, *Marxism and the Philosophy of Language*, traducido al inglés por Ladislav Matejka e I. R. Titunik, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1973, p. 41 [Nota del traductor: hay traducción al español *El marxismo y la filosofía del lenguaje: los principales problemas del método sociológico en la ciencia del lenguaje*, Buenos Aires, Godot, 2014].

fuerzas subalternas opuestas. En otro trabajo mencioné que, en la década de 1980, los sandinistas y los activistas campesinos de base comprendieron de manera diferente el concepto “propiedad popular” y eso tuvo consecuencias políticas significativas. La noción campesina, enraizada en una conceptualización previa de “propiedad privada”, enfatizaba el acceso individual a la tierra con un control colectivo local, mientras que la naciente noción revolucionaria limitó el significado al control y propiedad del Estado. En algunos momentos, utilizo el término (desencuentro I) en un sentido más fuerte para enfatizar el impacto lingüístico en los desacuerdos políticos. En otras ocasiones, el término (desencuentro II) se refiere a dos grupos que comparten metas comunes, pero que no han podido aliarse, sin especificar una dimensión lingüística.

Este libro también examina una línea de análisis originalmente desarrollada por Daniel James que enfatiza la relación dialéctica entre el discurso ideológico formal y la conciencia práctica.<sup>15</sup> Solidaridad Bajo Asedio revela cómo los movimientos laborales y campesinos crecieron de formas cuantitativa y cualitativa cuando esa relación pudo florecer y muestra lo que pasó cuando esa dinámica se vio frenada.

En El Salvador y en otros lados, la disyuntiva entre la ideología formal y la conciencia práctica se relacionaba con la contradicción entre las grandes utopías revolucionarias y las pequeñas utopías subalternas. En algunas ocasiones, esos espacios de comunicación horizontal irrestricta no fueron visibles a los diferentes protago-

<sup>15</sup> Daniel James, *Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class, 1946-1976*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. [Nota del traductor: hay versión en español: *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2010].

nistas.<sup>14</sup> En América Latina, esas utopías menores, “visiones de transformación parcial, de senderos para dejar atrás los estragos de la guerra o alejarse de las indignaciones de los abusos de los derechos humanos”, estuvieron a menudo contenidas en el discurso de una “gran” utopía revolucionaria.<sup>15</sup> El resultado fue que la izquierda organizada ignoró o malinterpretó a menudo esas experiencias igualitarias y utópicas porque estaban reñidas con toda forma de jerarquía. También se desarrolló un espacio turbio —con frecuencia lleno de florituras retóricas— entre el imaginario revolucionario nacionalista y las posibilidades objetivas de cambio político y social, vivamente ilustrado por el abismo entre los ideales del gobierno sandinista de izquierda y sus logros reales, por notables que hayan sido.

A pesar de los desencuentros, las discordias y las desilusiones asociadas con la izquierda en Centroamérica, la consagración de nociones fundamentales de solidaridad se convirtió en un logro colectivo significativo. Hoy en día, la palabra solidaridad tiene significados elásticos que abarcan desde la compra de café con sello de comercio justo hasta la ayuda humanitaria para víctimas de inundaciones. Empero, a pesar de sus diferentes usos, en la década de 1970 el término poseía un poderoso atractivo en todo el mundo. Una de las principales contribuciones de la Teología de la Liberación, que se esparció por toda América Latina durante las décadas de 1960 y 1970, fue encontrar un hilo conductor del

<sup>14</sup> Jay Winter, *Dreams of Peace and Freedom: Utopian Moments of the Twentieth Century*, New Haven, Yale University Press, 2006, p. 5. Winter llama “utopías menores” a: “imaginarios de liberación usualmente más pequeños en escala, sin las grandes pretensiones o la inimaginable arrogancia y la crueldad de los proyectos de utopías mayores”.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 5.

cristianismo primitivo, particularmente su noción de hermandad, para darle nuevos significados a la solidaridad que tomó forma en el pensamiento y la práctica de decenas de miles de Comunidades Eclesiales de Base (en adelante CEB). La solidaridad llegó a significar un profundo compromiso para ayudar y apoyar a los oprimidos en general y a las CEB en particular, tanto en el nivel local como nacional, en sus luchas por una liberación material y espiritual. La Iglesia Popular también presionó a las iglesias tradicionales a ofrecer apoyo (solidaridad) a las CEB y a unirse a su cruzada contra las profundamente desiguales estructuras sociales que mantenían abatidos a la mayoría de los salvadoreños en la pobreza. Estas nociones de solidaridad cristiana se asemejaban a las que desarrollaron grupos anarco-sindicalistas en las primeras décadas del siglo XX, particularmente en España y en el Cono Sur, y sirven para ilustrar la opinión del filósofo Kurt Bayertz de que:

La solidaridad que se practica al interior de los movimientos sociales adquiere así una dimensión que es tanto arqueológica como anticipativa. Es arqueológica en la medida en que descubre una disposición, enterrada bajo las condiciones sociales establecidas, hacia la cooperación, la ayuda mutua, los sentimientos compartidos, en una palabra: solidaridad. Y es anticipativa en la medida en que dibuja al ser humano futuro, quien será finalmente libre de poner en práctica y sin obstáculos el poder de cooperación y comunidad de la solidaridad. [...] Puesto así, se refiere directamente a un medio de la lucha: la solidaridad como un arma. Al mismo tiempo, sin embargo, se refiere al final de la lucha: la solidaridad como anticipo de una sociedad futura, y como parte de una utopía ya vivida.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Kurt Bayertz, "Four Uses of Solidarity", en Kurt Bayertz [ed.], *Solidarity*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1999, p. 20.

Estas nociones de solidaridad cristiana tuvieron un impacto determinante en el desarrollo del movimiento campesino en El Salvador: la gran mayoría del ala rural del Bloque Popular Revolucionario (en adelante BPR) tuvo una conexión íntima con las CEB. Los campesinos trasladaron sus prácticas de solidaridad social dentro de las CEB, incluyendo unas nociones altamente desarrolladas de trabajo colectivo y reparto de bienes, a las luchas radicales por la tierra, por salarios justos y por mejores condiciones de trabajo. En el BPR y en otras organizaciones populares, las nociones de solidaridad de la Iglesia Popular se confundieron con aquellas conectadas históricamente a los movimientos obreros y luego a las que se relacionaban con el incipiente movimiento revolucionario que irrumpió en el escenario mundial en 1981. Pero como advirtió el intelectual jesuita Ignacio Ellacuría, la integración de estas expresiones distintas de solidaridad no careció de problemas. Cuando criticó a las organizaciones populares por minimizar la influencia de las CEB, Ellacuría escribió que aquellas precisaban de éstas “para transformar nuestro ser mismo y la conciencia de la clase trabajadora; éste es el más profundo y más valeroso principio de liberación”.<sup>17</sup>

En el Puerto, la transición de las formas más elementales de sindicalismo —es decir, desde un sentimiento de solidaridad con los compañeros trabajadores de la planta hasta una voluntad de sacrificarse por todos los miembros del sindicato— no dejó de ser tensa y apenas unidireccional. También fue parcial y contradictorio el paso de la solidaridad laboral al apoyo a organizacio-

<sup>17</sup> Tomás Campos, “La iglesia y las organizaciones populares en El Salvador”, en *Estudios Centroamericanos*, vol. 35, núm. 359, septiembre de 1978, p. 699.

nes político-militares comprometidas con la revolución social y política.

Para 1979 y 1980, en la medida en que se intensificaba la represión estatal, la resistencia popular creció. Los escuadrones de la muerte vinculados con las fuerzas de seguridad ejecutaron entre 8 mil y 11 mil civiles en 1980. En medio de esa orgía de violencia, la oposición al régimen fue equiparada usualmente como un apoyo a la izquierda revolucionaria. A finales de ese año, cuando los escuadrones de la muerte aniquilaron a toda la dirigencia de la oposición civil, esa identificación entre disenso y revolución resultó más que obvia.

El 22 de enero de 1980, se desarrolló la más grande manifestación en la historia del país, en la que entre 150 mil y 200 mil trabajadores, campesinos y estudiantes marcharon en San Salvador; muchos líderes de izquierda interpretaron esta manifestación como el punto máximo de la movilización de la izquierda revolucionaria. El panorama que se apreció desde el Puerto ese 22 de enero, empero, sugiere una interpretación algo más matizada. Para los militantes obreros en el Puerto, y quizá también para una minoría sustancial de los afiliados a sindicatos en un nivel nacional, la marcha representó el poder del movimiento obrero. Al mismo tiempo, el SIP y la federación obrera a la que pertenecía echaron mano de pequeñas formas de coerción para que sus miembros se unieran a la marcha. Este libro sugiere que la izquierda revolucionaria gozó de menos apoyo del que se ufanaba tener y que ese apoyo fue ambivalente a veces. A la vez, sus mandos medios fueron muchos más populares, dadas sus raíces en las clases trabajadoras rurales y urbanas, que lo que algunos analistas y académicos han señalado hasta ahora.

## HISTORIOGRAFÍA

Han aparecido recientemente varios estudios valiosos acerca de los orígenes y el desarrollo de la guerra civil en El Salvador. El libro de Joaquín Chávez, *Poets and Prophets of the Resistance: Intellectuals and the Origins of El Salvador's Civil War*, examina la alianza que se estaba forjando entre los intelectuales urbanos y los campesinos durante esa crítica y poco estudiada etapa.<sup>18</sup> Describe la manera en que los campesinos se educaron y se convirtieron en educadores a través de medios no tradicionales alentados en general por la Iglesia católica. Chávez también aporta un fino análisis excelente del proceso de movilización y radicalización, al centrar su mirada sobre el ascenso de diferentes tipos de intelectuales, incluyendo a intelectuales campesinos.

En *Modernizing Minds...*, Erick Ching y Héctor Lindo-Fuentes ofrecen una narrativa convincente del papel fundamental de ANDES 21 de junio, el sindicato de maestros al interior de la oposición antirrégimen.<sup>19</sup> Por otra parte, los autores revelan con mucha precisión una grieta profunda en el gobernante Partido de Conciliación Nacional (es decir, los militares), entre aquellos que estaban comprometidos con una reforma socioeconómica y los que luchaban por mantener el *statu quo*. Ching ha publicado recientemente, su libro *Stories of Civil War in El Salvador: A Battle over Memory*.

<sup>18</sup> Joaquín Chávez, *Poets and Prophets of the Resistance: Intellectuals and the Origins of El Salvador's Civil War*, Nueva York, Oxford University Press, 2017.

<sup>19</sup> Héctor Lindo-Fuentes y Erik Ching, *Modernizing Minds: Education Reform and the Cold War, 1960-1980*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2012. [Nota del traductor: hay versión en español *Modernización, autoritarismo y Guerra Fría. La reforma educativa de 1968 en El Salvador*, San Salvador, UCA Editores, 2017].

Este bien logrado y sofisticado trabajo examina los procesos de formación de la memoria posteriores a la guerra civil. Ching analiza cuatro narrativas: las de las élites civiles, las de los oficiales del ejército, las de combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (en adelante FMLN) y la de los comandantes del FMLN. Mediante un análisis literario de testimonios escritos, Ching plantea que, a partir de interpretaciones diferentes sobre la historia de El Salvador, cada una de esas narrativas se muestra sorpresivamente coherentes dentro de cada grupo, incluso a pesar de su elaboración individual.<sup>20</sup>

El reciente libro de Kristina Pirker, *La redefinición de lo posible...*, constituye una contribución extraordinaria a nuestro entendimiento de la izquierda salvadoreña durante un periodo de 40 años, y especialmente en lo que se refiere a las acciones de las organizaciones populares al final de la década de 1970.<sup>21</sup> Pirker describe su impacto democratizador en los sindicatos existentes. El libro de Paul Almeida, *Waves of Protest...*,<sup>22</sup> un relato de la relación causal entre la represión estatal y la radicalización popular, también es muy útil para comprender el periodo en estudio. Finalmente, el escrito de Jocelyn Viterna, *Women in War...*,<sup>23</sup> re-

<sup>20</sup> Erik Ching, *Stories of Civil War in El Salvador: A Battle over Memory*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2016.

<sup>21</sup> Kristina Pirker, *La redefinición de lo posible: militancia política y movilización social en El Salvador, 1970-2012*, México, Instituto Mora, 2017.

<sup>22</sup> Paul Almeida, *Waves of Protest: Popular Struggle in El Salvador, 1925-2005*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008. [Nota del traductor: hay versión en español *Olas de movilización popular. Movimientos sociales en El Salvador, 1925-2010*, San Salvador, UCA Editores, 2011].

<sup>23</sup> Jocelyn Viterna, *Women in War: The Micro-Processes of Mobilization in El Salvador*, Nueva York, Oxford University Press, 2013. También es importante un escrito anterior de Gilles Bataillon, *Génesis de la guerras intestinas en*

presenta uno de los primeros análisis serios sobre la relación entre género y militancia. A través de un análisis sofisticado y multidisciplinario logra descubrir las motivaciones y las experiencias de las mujeres guerrilleras del FMLN, que constituían, a la sazón, un tercio aproximadamente de los combatientes de esa agrupación.

Solidaridad Bajo Asedio se nutre en términos intelectuales de todos estos libros, pero se aparta de ellos en algunos aspectos. Primero, se centra principalmente en sindicatos industriales compuestos fundamentalmente por mujeres. Luego de una oleada de estudios muy interesantes sobre la clase trabajadora y los movimientos populares, escritos en las décadas de 1970 y 1980, han aparecido muy pocos escritos académicos sobre los trabajadores salvadoreños de ese periodo.<sup>24</sup> Este libro también se concentra en un pueblo que experimentó una calma relativa durante la guerra. Además, el libro se ocupa de un espacio sociogeográfico inusual: una región con control nacional. Puerto El Triunfo se asemejó a un enclave de propiedad extranjera, en tanto que el Puerto estaba aislado geográficamente del resto del país y sus residentes

---

*América Central (1960-1983)*, México, FCE, 2008. Su análisis sofisticado de la Junta Revolucionaria de Gobierno llega a las mismas conclusiones que nuestro estudio, utilizando una metodología diferente.

<sup>24</sup> Mario Lungo, *La lucha de las masas en El Salvador*, San Salvador, UCA Editores, 1987; Lungo, *El Salvador in the Eighties: Counterinsurgency and Revolution*, Philadelphia, Temple University Press, 1996; Rafael Guido Béjar, “El movimiento sindical después de la Segunda Guerra Mundial”, en *Estudios Centroamericanos*, vol. 45, núm. 502, agosto de 1990, pp. 871-892; Rafael Menjívar Larín, *Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño*, San Salvador, UCA Editores, 1982; Salvador Samayoa y Guillermo Galván, “El movimiento obrero en El Salvador: resurgimiento o agitación”, en *Estudios Centroamericanos*, julio-agosto de 1979, pp. 591-600; Samayoa y Galván, “El cierre patronal de los empresarios: prueba de fuego para el sindicalismo revolucionario”, en *Estudios Centroamericanos*, vol. 34, núm. 371, septiembre de 1979, pp. 793-800.

dependían de una sola industria, cuyos productos se vendían casi siempre en mercados extranjeros. Las condiciones eran tan similares a un enclave y los patronos estaban tan distantes en términos sociales de los trabajadores, que periódicamente los sindicatos denunciaban a las empresas como propiedad “extranjera”.

## EL PUERTO Y SU GENTE

A inicios del siglo xx, John Wright era un próspero capitán de un barco pesquero en San Francisco, California. Se casó con una muchacha de la familia Meléndez, una de las principales de la oligarquía cafetalera de El Salvador. Su hijo, también llamado John, un día decidió mudarse a El Salvador, donde se integró a su familia materna y eventualmente se convirtió en el propietario de “La Carrera”, la más grande y rentable plantación de algodón en el país, ubicada cerca de la Bahía de Jiquilisco en Usulután, a unos 100 kilómetros al este de San Salvador. Cuando murió en 1952, su hijo Juan Wright Alcaine se encargó de sus propiedades y negocios. A mediados de la década de 1950, Juan advirtió cómo un grupo de pescadores portugueses que operaban desde Puerto El Triunfo, fundaron una compañía y comenzaron a pescar grandes cantidades de camarón en alta mar frente a la Bahía de Jiquilisco. En 1957, junto con otras personas, Juan decidió hacer una inversión fuerte en la compañía portuguesa y la bautizaron con el nombre de Pezca S. A. (para que no se confundiera con una compañía guatemalteca Pesca S. A.). La planta procesadora y las compañías pesqueras asociadas se convirtieron en parte de su floreciente im-

perio: para 1960, Wright era dueño de 61 empresas con más de 20 millones de dólares en capital social.<sup>25</sup> La mayoría de las compañías de Wright estaban vinculadas con la industria algodonera (insecticidas, textiles, aceite vegetal, etc.). En vista de que el camarón nunca había sido explotado en las aguas cercanas a la Bahía de Jiquilisco, la industria experimentó un éxito fenomenal, llegó a alcanzar una producción de más de seis millones de libras en 1961. Sin embargo, la producción del camarón blanco, que se cotizaba mejor, declinó dramáticamente en la siguiente década de 2 030 toneladas en 1960 a 1 054 toneladas en 1970. Irónicamente, esa reducción se debió en buena medida a la contaminación del agua por las escorrentías cargadas de pesticidas procedentes de las plantaciones algodoneras cercanas, incluyendo “La Carrera” de Juan Wright.<sup>26</sup> La industria fue altamente rentable gracias no sólo a los altos precios del camarón en el mercado estadounidense, sino también porque los pesticidas no afectaban a los camarones cafés ni a los camaroncillos o “chacalines”. Wright invirtió una buena parte de sus utilidades en una mayor mecanización de la planta. A inicios de la década de 1970, con un total de 750 empleados, la planta era una de las más grandes industrias del país; la compañía reportaba unos activos de 3 millones de dólares y un capital social de 1 millón de dólares.

<sup>25</sup> Es decir, el valor neto de los activos de una compañía que no serán devueltos a los accionistas.

<sup>26</sup> Peter Phillips y Charles Cole, “Fisheries Resources of Jiquilisco Bay, El Salvador”, en *Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute*, 30th Annual Session, noviembre de 1977, pp. 83 y 84. Los insecticidas se aplicaban de agosto a enero coincidiendo con la etapa temprana de vida de los camarones blancos y rosados. Los camarones cafés no emigraban a la bahía sino hasta después de la estación lluviosa y los camaroncillos, que localmente se conocían como chacalín, no eran afectados por los insecticidas.

Juan Wright era el mayor accionista de cinco compañías pesqueras, con 39 barcos que abastecían directamente a Pezca S. A.<sup>27</sup> Esas compañías estaban formalmente desconectadas de la compañía matriz, en parte debido a las restricciones gubernamentales por lo que respecta a la propiedad de barcos pesqueros y, presumiblemente, debido también al pago de impuestos y posiblemente a asuntos laborales. Hasta el final de la década de 1970, por lo general, Wright se mantuvo al margen de la política. En 1944, empero, su familia había apoyado la lucha contra el dictador Hernández Martínez. De hecho, el hermano de Juan Wright fue asesinado accidentalmente durante el levantamiento.<sup>28</sup>

Los otros empresarios asociados a la industria del camarón también procedían de familias oligárquicas. Los Alfaro, los Salaverría, los Daglio y los Dueñas figuraban entre los terratenientes más grandes del país y entre los mayores accionistas de Atrarraya S. A.<sup>29</sup> Por asuntos de impuestos, la compañía estaba dividida en tres plantas separadas, pero contiguas, que eran propiedad de tres compañías, la mayoría de cuyos accionistas eran las mismas personas. Ward Foods de Nueva York también tenía invertidos 250 000 dólares. Las tres plantas de Atrarraya empleaban a menos de 500 obreros. Los mismos dueños también controlaban varias compañías de barcos pesqueros. Finalmente, Rafael Guirola, cuya familia era la segunda mayor propietaria de tierras en el país y una de las más importantes productoras de café, era el dueño de Mariscos

<sup>27</sup> Eduardo Colindres, *Fundamentos económicos de la burguesía salvadoreña*, San Salvador, UCA Editores, 1977, p. 251. Este libro indica 1.7 millones de colones en utilidades.

<sup>28</sup> Fabio Castillo, Servicio de Informativo Ecuménico y Popular, entrevista con el autor, 27 de junio del 2005.

<sup>29</sup> Colindres, *op. cit.*, pp. 54, 55 y 158.

de El Salvador, el negocio de camarones más pequeño del Puerto, que empleaba 200 trabajadores y pescadores.<sup>50</sup> Guirola también era propietario de otra empresa de camarones en el Departamento de La Unión.

Puerto El Triunfo fue, sin duda, el corazón de la industria camaronera de El Salvador. Fundado en 1829 en honor de una victoria militar de las fuerzas liberales de Francisco Morazán en contra del bando conservador, adquirió cierta importancia durante la bonanza cafetalera de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como el sitio por donde se exportaba el café producido en el departamento de Usulután. Luego, en la década de 1960, la industria del camarón lo cambió todo.

#### MAPA DE PUERTO EL TRIUNFO

A medida que la industria camaronera despegaba en la década de 1960, pasando de cero en 1958 a casi 10 millones de libras en 1966, muchos migrantes, mayormente campesinos, se instalaron en el pueblo. La población del Puerto saltó de 673 a 4 470, la mayoría de la cual terminó viviendo en ranchos hechos de madera de mangle en las décadas de 1960 y 1970. Ni las compañías ni los desfinanciados gobiernos municipales se molestaron por atender los problemas crónicos de salud o la falta de electricidad fuera de las plantas procesadoras. Mucha gente usaba una alcantarilla o letrinas públicas ubicadas al margen del manglar para hacer sus necesidades. Los trabajadores se referían al Puerto como “Puerto el Tufo”. Lo que ocurrió cuando un puerto relativamente somno-

<sup>50</sup> *Ibid.*, p. 158.

lento se convirtió en un pueblo económicamente pujante es el objeto de las páginas del libro que siguen.

### *El libro*

El Capítulo 1 de este libro está armado en torno a las historias de varios sindicalistas que fueron claves en el Sindicato de la Industria Pesquera (fundado en 1961); también describe el proceso de producción, prestándole especial atención a la división laboral por género. Asimismo, en el capítulo se narra y analiza el papel de las mujeres y las ideologías de género en la movilización de la década de 1970, que convirtió al sindicato en un miembro fundamental de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (en adelante FENASTRAS), una gremial obrera de izquierda. También se estudia a los marineros, a los pescadores y su forma particular de resistencia [“marineros” significa pescadores en los barcos industriales]. En el segundo capítulo se examinan las causas y la naturaleza del crecimiento y la radicalización del movimiento nacional de trabajadores que irrumpió con una fuerza inusitada en los primeros meses de 1979. La narración también vuelve su mirada sobre Puerto El Triunfo: para finales de agosto de 1979, el SIP obligó a las tres compañías para que otorgaran un estatus permanente, con todas sus prestaciones correspondientes, a los trabajadores temporales. Este revés de la estrategia global de flexibilización laboral se debió, en parte, a la alianza del SIP con FENASTRAS. De hecho, Alejandro Molina Lara, el secretario general del SIP, se volvió una figura de alto perfil dentro de dicha federación obrera. Esos lazos presionaron a las bases, a veces contra su voluntad, hacia una participación más activa en huelgas y en las marchas de solidaridad.

En el Capítulo 3 se analiza un momento crítico en la historia de El Salvador: del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, hasta el inicio de la guerra civil y la represión masiva de la segunda mitad de 1980. El golpe instaló una junta cívico-militar que estaba formada en parte por izquierdistas moderados que prometieron una solución por la vía de reformas a la crisis económica, social y política que evitara la guerra civil inminente. Este capítulo presenta una nueva interpretación de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno (en adelante JRG), que gobernó desde el 15 de octubre de 1979 hasta el 2 de enero de 1980 y, en particular, de la tregua de seis semanas que representó tanto la suspensión de las acciones represivas del Estado como el florecimiento del movimiento laboral rural. La disyuntiva entre la retórica revolucionaria y las luchas y necesidades de las bases impidió una potencial alianza entre la JRG y las organizaciones populares. El encuentro fallido entre las dos fuerzas condicionó en seguida un estallido de violencia desde la derecha. Para finales de 1980, los escuadrones de la muerte llegaron al Puerto, ejecutaron a varios líderes del SIP y enviaron a otros al exilio.

En el Capítulo 4 se estudia los primeros años de la guerra civil. Durante esta etapa, el Puerto casi no sufrió los efectos de la guerra porque la guerrilla lo usó para que sus combatientes se recuperaran (y quizá también con fines financieros) y los militares se beneficiaron directamente de la industria camaronera. Gradualmente, el SIP se recuperó de la ola de represión de 1980-1981, reconstituyéndose en el Puerto a la altura de 1984 y todavía aliado a la izquierda, al menos nominalmente, a través de FENASTRAS. El Sindicato Agua, el sindicato de los marineros, se alió al gobierno de la Democracia Cristiana y recibió un apoyo significativo de parte del American Institute for Free Labor Development (Instituto

Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (en adelante AIFLD). El Sindicato Agua también desarrolló una ideología anti-comunista, empero radical, de corte populista. A mediados de la década de 1980, el sindicato emprendió una campaña en dos frentes para expulsar al SIP de Pezca S. A. (la compañía más grande) y para combatir los esfuerzos de la compañía por instaurar una forma de subcontratación que daría al traste con los derechos de negociación de los marineros. Sus líderes sindicales agitaron las aguas para presionar al gobierno a expropiar la industria y entregarla a los marineros y a los trabajadores para que la administraran como una cooperativa. A pesar de que ambos sindicatos se identificaban con una industria de propiedad pública, los líderes del SIP rechazaron el proyecto de una cooperativa.

En el Capítulo 5 se tiene por objetivo analizar cómo la política de derecha vinculó a los dueños de la compañía camaronera con un fraude a gran escala que llevaron a cabo. A pesar de que la actividad de los escuadrones de la muerte en el Puerto no puede ser atribuida a los dueños, algunos de ellos se radicaron en Miami desde donde, supuestamente, financiaron la actividad de los grupos paramilitares derechistas en El Salvador. El capítulo utiliza archivos judiciales para develar el enorme fraude que algunos dueños ejecutaron con la complicidad del presidente del Banco Agrícola Comercial.

El movimiento obrero logró reorganizarse a mediados de la década de 1980 debido, en parte, a una alianza entre el presidente democristiano José Napoleón Duarte y los sindicalistas de centro. En el Capítulo 6 se describen las relaciones contradictorias entre el gobierno de Duarte y los sindicalistas de centro e izquierda en el área metropolitana de San Salvador. Solidaridad Bajo Asedio revela una contradicción de fondo en la política de la administración

Reagan entre sus metas neoliberales y su estrategia contrainsurgente que suponía todo lo contrario, es decir, gastos fuertes en bienestar social por parte del Estado, apoyo a los trabajadores, nacionalización de la banca y propiedad cooperativa. En el Puerto, el AIFLD respaldó financieramente al Sindicato Agua durante más de cuatro años de huelgas, que minaron directamente los esfuerzos del gobierno estadounidense por estabilizar la economía.<sup>51</sup>

En el último capítulo se retorna al Puerto y narra y analiza la huelga muy controversial que estalló en 1987. El Sindicato Agua reaccionó contra el plan de subcontratación de Pezca. Una vez más, el SIP y el Sindicato Agua no lograron superar sus diferencias, enraizadas en conflictos ideológicos y de género, para presionar por la propiedad cooperativa de Pezca; en cambio, la compañía colapsó junto con los sindicatos.

*Un comentario sobre las fuentes  
y la película Puerto El Triunfo*

Tal y como ocurre en mis anteriores libros, Solidaridad Bajo Ase-dio depende de un uso considerable de entrevistas, propias de la historia oral. A pesar de ello, existen algunas diferencias significativas entre esta obra y las otras. Las entrevistas que hicimos [con Carlos Henríquez Consalvi] durante más de una decena de visitas al Puerto coincidieron generalmente con la producción de una pe-

<sup>51</sup> Norman Schipull, comunicación con el autor en 2014. Schipull fue un antiguo jefe del AIFLD. Él asegura que la organización sólo podía apoyar al sindicato por medio de fondos para programas de educación, por un monto aproximado de 20 mil dólares al año. Esa versión fue sustentada por Ruperto Torres, antiguo líder del Sindicato Agua (oficialmente conocido como el Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y Anexos, en adelante SGTIPAC).

lícula documental sobre la misma temática. Si bien es cierto que las entrevistas fueron un recurso invaluable para la producción de la película,<sup>32</sup> el montaje de la filmación podría haber intimidado a algunos de los entrevistados, afectando así la calidad de sus testimonios. Empero, mis repetidas entrevistas con los informantes en ocasiones posteriores, quizá ayudaron a mitigar los efectos que se producen al sentarse frente a una cámara. En efecto, los informantes se veían más relajados durante las entrevistas filmadas de seguimiento. También realicé varios viajes a Los Ángeles donde una buena parte de mis conversaciones con sindicalistas se desarrollaron fuera de cámara.

Un golpe de suerte me permitió acceder a los archivos abandonados del Sindicato de la Industria Pesquera y del Sindicato Agua, consistentes en documentos que abarcan desde su fundación en 1961 hasta 1995. Dichos documentos consisten principalmente en actas de reuniones de seis seccionales del sindicato y de las transcripciones de las reuniones con representantes de la compañía en el Ministerio de Trabajo y de comisiones obrero-patronales efectuadas en la compañía. Además, tuve la fortuna de encontrar un asistente de investigación buenísimo en la persona de David Segovia, quien tuvo que aguantar las condiciones extremadamente difíciles de calor sofocante en los antiguos edificios clausurados del sindicato en Puerto El Triunfo para organizar y fotografiar esos archivos totalmente desorganizados. Según entiendo, éstos son los únicos archivos sindicales grandes existentes en el país para ese periodo. También tuve acceso a un archivo judicial en San Salvador, donde otro asistente, Rubén González, pudo fotografiar alrededor de 3 mil páginas de archivos vinculados al caso del fraude

<sup>32</sup> Véase [www.puertotriunfofilm.com](http://www.puertotriunfofilm.com).

Figura 1.1 El archivo en la sede del sindicato



Foto de Guillermo Escalón.

bancario. Además, tuve cierto éxito con una solicitud amparada en el Freedom of Information Act (Ley para la libertad de acceso a la información pública) para conseguir documentos del Departamento de Estado relativos al movimiento obrero y los problemas en el Puerto. Finalmente, revisé algunos periódicos salvadoreños del periodo en estudio que incluyen los que se encuentran en la imprescindible colección del archivo del North American Congress on Latin America (NACLA). Desafortunadamente, como les ha ocurrido a otros investigadores, no pude acceder a los archivos militares salvadoreños a pesar de años de un gobierno supuesta-

mente de izquierda. Aunque obtuve algunas fotos valiosas del actual dueño de Atarraya (hoy convertida en una pequeña empresa pesquera), no pude revisar ningún archivo de las compañías ni entrevistar a alguno de los antiguos empleados de gerencia (con una sola excepción). Así que, una vez más, esta monografía no puede presumir de un cierto equilibrio entre las opiniones de los de abajo y los de arriba.

1. HARTOS DEL ABUSO.  
EL GÉNERO Y EL AUGE DEL SINDICATO  
DE LA INDUSTRIA PESQUERA, 1970-1990

Nosotros éramos felices, hasta bromeábamos adentro del trabajo. Sería que nos sentíamos más liberadas por el apoyo sindical o era porque ya nos habíamos cansado de que nos tuvieran así. Y de ahí para allá nosotras vimos la luz. Las cosas cambiaron ya no nos regañaban a cada rato. Nosotras nos sentíamos liberadas.

GLORIA GARCÍA, 2015.

Me ayudó a construir mi sindicato, me enseñó cómo hablar.

WOODY GUTHRIE, “Dear Mrs. Roosevelt”

Gloria García nació y fue criada en un pequeñísimo pueblo a orillas del mar en el oriente de El Salvador.<sup>1</sup> Cuando cumplió los

<sup>1</sup> Las referencias personales sobre Gloria García se derivan de entrevistas con el autor, Lake Elsinore, 2015; Los Ángeles, 2016 y 2017.

diez años, su papá la trajo junto con sus dos hermanas a Puerto El Triunfo. De inmediato comenzó a trabajar en una hacienda algodонера cercana. Sembró, podó y recogió algodón por 25 centavos al día. Recuerda el sol abrasador, el cansancio, la prohibición de jugar y sus manos infectadas. El papá de Gloria encontró trabajo en la planta de procesamiento del camarón de la empresa Pezca S. A. Su hermana mayor también consiguió un trabajo allí pelando chacalines. Aunque pagaban poco alquiler por su vivienda hecha de corteza de manglar, el dinero apenas les alcanzaba. Su papá eventualmente le consiguió un trabajo a Gloria en la planta procesadora, pero tuvieron que alterar su partida de nacimiento para cambiar su edad de 12 a 14 años. El capataz se quejó de que estaba tan delgada que parecía una niña de nueve. Y el trabajo era agotador al principio. Después de un día de labores, sus manos estaban cortadas, despellejadas e infectadas pero la paga era mejor y el trabajo menos oneroso que en la hacienda algodонера. Pudo jugar en el equipo de béisbol de la empresa Pezca contra las otras empresas, Atrarraya y Mariscos de El Salvador. También comenzó a ir a la escuela nocturna durante el resto del año y terminó el sexto grado. A pesar de que iba bien en la escuela, su jornada de trabajo era muy demandante e impredecible como para seguir con los estudios.

Durante los siguientes años, Gloria se volvió muy hábil para pelar el camarón y eventualmente logró un puesto permanente, de tal suerte que no quedaba cesante al finalizar el periodo del chacalín como ocurría con el 40% de la fuerza de trabajo. También la emplearon en diferentes tareas, lo que atenuaba el aburrimiento y le permitió conocer a más personas entre la fuerza laboral de más de 500 trabajadores en la planta. Cuando Gloria cumplió los 18 años en 1971, se había acostumbrado a la vida y el trabajo en la planta y no padecía de tantas dolencias o cansancio. Pudo darse un mínimo

de esparcimiento —en ciertos momentos viajando a Usulután con sus amistades para ir al cine. A veces los viernes compraba ropa y cosméticos en las ventas que se instalaban afuera de la planta. Sin embargo, casi todas sus ganancias de 18 colones semanales (1.00 dólar = 2.50 colones) las entregaba a su papá.

Como veremos, las frustraciones de Gloria debido al autoritarismo de los gerentes, la poca paga y las condiciones laborales deficientes, eventualmente la condujeron al activismo sindical. Su participación en el sindicato marcó su vida de manera dramática. Su esposo se opuso a su papel de líder y la dejó para que criara a sus dos hijos como madre soltera. En 1981, las amenazas y la violencia desatada por los escuadrones de la muerte la obligaron a exiliarse.

Con la excepción de sus malas experiencias con los escuadrones, éstas fueron las mismas de sus compañeros que migraron a Puerto El Triunfo. En un plazo de pocos años, Gloria y muchas de sus compañeras de trabajo se unieron a un movimiento laboral que creció rápidamente en el Puerto en alianza con una federación sindical de izquierda. Sus experiencias de movilización como mujeres, el tema central de este capítulo, reflejan los procesos de activismo y radicalización sindical de los movimientos salvadoreños de trabajadores y campesinos, cuya militancia y valor frente a una represión violenta llamó la atención del mundo entero. Sin embargo, existen diferencias notables en la historia en el nivel local. La mayor parte de los académicos afirman que la radicalización de los obreros y campesinos fue en respuesta directa a la represión del Estado.<sup>2</sup> Aunque la Guardia Nacional capturó a cuatro

<sup>2</sup> Véanse Charles Brockett, *Political Movements and Violence in Central America*, Nueva York, Cambridge University Press, 2005; Paul Almeida, *Waves of Protest: Popular Struggle in El Salvador, 1925-2005*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008.

dirigentes sindicales en noviembre de 1977 y los mantuvo bajo arresto por un par de días, no hubo más represión antisindical de importancia en el Puerto hasta el año de 1980. La transformación del Sindicato de la Industria Pesquera (en adelante SIP), avalada por la empresa e integrada a una federación sindical afín al régimen, a un elemento constituyente de un movimiento sindical radicalizado en el nivel nacional fue un proceso mayormente endógeno y no como respuesta a la represión estatal. Las luchas de las mujeres por obtener sus plenos derechos como trabajadores de temporada (casi todas ellas mujeres) en respuesta a sus propias necesidades y por dignificar sus puestos de trabajo, le dieron forma a ese proceso de manera decisiva.

No obstante, la transformación del movimiento obrero, que enfrentó a las empresas camaroneras y sus dueños oligárquicos fue un proceso tenso, contencioso e incompleto. El liderazgo sindical emergente tuvo que enfrentarse a tres grandes obstáculos. En primer lugar, el sindicato tenía que confrontar —o cuando menos neutralizar— el conservadurismo político de la mayoría de la fuerza laboral. En segundo lugar, los activistas del SIP tuvieron que superar las consecuencias ideológicas de una división del trabajo altamente sesgada por consideraciones de género que caracterizaban las vidas privadas y públicas de las trabajadoras y su consecuente apatía.

Las trabajadoras, quienes constituían la mayoría de la fuerza de trabajo, fueron un factor clave para que el sindicato alcanzara el éxito. Su activismo comenzó a la par de un esfuerzo consciente de dar a conocer sus preocupaciones y superar las divisiones internas. El liderazgo masculino también tuvo que superar sus prejuicios en la medida de que las mujeres se esforzaban en que sus reclamos también fueran los del sindicato. En tercer lugar, la dirigencia sin-

dical tuvo que lidiar con el estilo de vida y la ética machista de la mayoría de los marinos, quienes se oponían también a la militancia de la dirigencia sindical emergente del SIP. Durante la década de 1970, esa oposición se derivó fundamentalmente de la postura pro-empresa del Sindicato Agua. Es más, su forma particular de resistencia ante las empresas hacia la década de 1980 tendría una repercusión negativa muy fuerte entre los trabajadores de las plantas.

En octubre de 1971, Gloria fue testigo del arribo de 39 barcos pesqueros administrados por empresas afiliadas a Pezca S. A. Hubo una ceremonia durante la cual los capitanes y los marinos renunciaron a su afiliación al SIP y el dirigente sindical aceptó sus renunciaciones. A continuación fundaron su propio sindicato que habría de denominarse SGTIPAC.<sup>5</sup> Muchos marinos y obreros de las plantas creyeron que el gerente general de Pezca, Francisco Varela, había arreglado toda la operación a partir de su amistad con un grupo de capitanes. Conminó a los capitanes para que creyeran que recibirían un trato especial de la compañía que no sería posible como miembros del SIP. Ese momento fundante de la complicidad entre obreros y patronos habría de determinar sus relaciones armoniosas hasta 1979.

Durante ese periodo, nunca apoyaron las medidas reivindicativas del SIP. Cuando se fundó el sindicato Agua no existían diferencias ideológicas significativas entre los sindicatos, pero eso habría de cambiar durante el transcurso de la década en la medida de que la dirigencia del SIP comenzó a vincularse con la Federación

<sup>5</sup> El sindicato SGTIPAC también era conocido como “Sector Agua” en contraposición al “Sector Tierra”. Aquí nos referiremos a SIP o Sindicato Tierra y Sindicato Agua (en adelante SGTIPAC).

Obreras de Pezca S. A., en la década de 1970



Foto: cortesía de Migdalia Chavarría.

Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (en adelante FENASTRAS), una federación sindical independiente de izquierda.

Durante el resto de 1971, la compañía pasó a la ofensiva contra el SIP. Pezca se negó a otorgar más concesiones durante las negociaciones para un nuevo contrato laboral colectivo. En diciembre de 1971, el sindicato decretó la primera huelga en la historia de la compañía. A la vez, los trabajadores de Aarraya S. A., la segunda más grande planta procesadora, declararon una segunda huelga; la mayor parte del Puerto se paralizó. Los marinos del sindicato Agua, afiliado a Pezca, siguieron trabajando, lo que debilitó grandemente la posición de los trabajadores de la planta. Los fondos para mantener la huelga se fueron agotando en tanto el SIP General (el sindicato distrital) tuvo que hacerse cargo de los trabaja-

dores de Atarraya también. Ambos grupos tuvieron que pasar la Navidad sin dinero para comprar regalos para sus hijos. Entonces el secretario general del SIP, Manuel Muñoz, con el apoyo de otros de la directiva, presionó a las bases para que aceptaran la oferta que les hacía Pezca. La compañía ofreció un aumento de apenas 5 centavos (entonces 0.02 de dólar) por día para los trabajadores permanentes y 3 centavos por día para los trabajadores eventuales. La oferta parecía una broma pero Muñoz, un dirigente respetado y un carpintero altamente calificado, se jugó su prestigio al apoyarla y casi todos los trabajadores sindicalizados no vieron alternativa. Casi de inmediato comenzaron a circular los rumores de que Muñoz había sido sobornado. Hasta la fecha, Gloria está convencida de que el aumento fue realmente de un 1 colón y 3 centavos diarios y que Muñoz se embolsó la diferencia.

Con independencia de la verdad sobre el asunto, Gloria y sus amistades estaban furiosas ante los dirigentes del sindicato, la empresa y los rompehuelgas. Decidió involucrarse más en el sindicato. Hasta entonces había pertenecido al sindicato pero no asistía a las reuniones y no se enteraba mucho de lo que pasaba, al igual que la mayoría de las otras trabajadoras jóvenes. Gloria se dirigió a Noé Quinteros, de 23 años, quien había sido integrante del comité de huelga y se había percatado de lo que él también entendió como corrupción. Se desempeñaba como trabajador eventual que también laboraba en el área de refrigeración de la Planta II donde se procesaba el chacalín. Había crecido en el campo en el departamento de Morazán, en el nororiente del país, hasta que a los 18 años de edad llegó al Puerto en 1966, cuando su papá encontró trabajo como capataz en una finca algodonera cercana. Consiguió un trabajo como eventual en el área de refrigeración durante la temporada del chacalín. Cuando se terminaba la temporada, trabajaba

como supernumerario en los barcos pesqueros; su tarea principal era cortarle la cabeza a decenas de miles de camarones por día. Esa experiencia le provocó un disgusto con la vida de marinero. Su hermano también trabajaba en Pezca y aun así el ingreso familiar apenas alcanzaba para mantener a la familia de nueve. Enfurecido con la dirigencia del sindicato, Noé buscó otros aliados. Se dio cuenta de que la huelga en Atarraya había producido resultados mucho más favorables para sus aproximadamente 200 trabajadores. Se acercó a uno de sus líderes, Evelio Ortiz Palma.

Ortiz Palma era el dirigente sindical clave en Atarraya. Se desempeñaba como carpintero en el varadero donde los barcos eran reparados y recibían mantenimiento por un grupo de obreros en su mayoría calificados. Ese grupo aportó casi toda la dirigencia del sindicato de Atarraya. Anteriormente había sido dueño de una pequeña carpintería en el pueblo vecino de Jiquilisco. Cuando comenzó la industria del camarón, trabajó como pescador atraído por la posibilidad de ganar bien. Como joven, disfrutó el trabajo y le dedicó dos años, pero cuando el capitán se dio cuenta de sus habilidades como carpintero le dieron un trabajo en el varadero.

Durante los siguientes seis años, Evelio trabajó como carpintero en el varadero, que quedaba como a ocho kilómetros de Puerto El Triunfo al otro lado de la Bahía de Jiquilisco. Allí pudo trabajar con bastante autonomía y se llevó bien con el dueño holandés y su equipo gerencial. Cuando Atarraya compró el pequeño varadero, Evelio se trasladó a Puerto El Triunfo. Se casó con una trabajadora de la planta y se mudó de la barraca de la planta a una pequeña casa hecha de madera de manglar. Poco después de la guerra con Honduras en 1969, Atarraya contrató a José Noltenius como el nuevo gerente de la planta. Noltenius provenía de una familia de la élite e introdujo un nuevo nivel de autoritarismo en las rela-

ciones obrero-patronales en la planta. Su acento y entonación al hablar y su comportamiento resultaban extraños a Evelio y sus compañeros de trabajo hasta llegar a creer que Noltenius era hondureño. Pensaron que el nuevo gerente quería contratar a sus propios trabajadores, quizá refugiados salvadoreños que habían sido expulsados de Honduras. En la histeria de guerra que imperaba entonces, resultó fácil relacionar la guerra con Noltenius y el enojo y la ansiedad que provocó en la planta.

Aunque ya existía un sindicato en la planta, Evelio no se involucró sino hasta la llegada de Noltenius. En 1970, Evelio y otros encabezaron un paro laboral que reintegró a los trabajadores que habían sido desplazados a raíz de la llegada del nuevo gerente y su equipo. En ese mismo año fue elegido por las bases a la Junta Directiva de la subseccional del sindicato de Atarraya y “trabajaba muy en serio...”<sup>4</sup> Hacia fines de 1971, Evelio y el resto de la dirigencia de la subseccional iniciaron las negociaciones para un nuevo contrato laboral colectivo con la empresa. Al mismo tiempo, comenzaron a recibir quejas de las trabajadoras con mayor frecuencia.

Las mujeres se quejaban mucho del jefe de personal, Rafael Villatoro. Acostumbraba llevarse los fines de semana a mujeres jóvenes de la planta para ponerlas a trabajar como empleadas domésticas en su casa. Peor aún, abusaba sexualmente de ellas. El enojo de los trabajadores de Atarraya se intensificó todavía más cuando la empresa despidió a seis activistas del sindicato y comenzó a utilizar táctica dilatorias en las negociaciones del contrato colectivo. En diciembre, la subseccional del sindicato de Atarraya decretó una huelga para conseguir mayores salarios y ponerle fin

<sup>4</sup> Evelio Ortiz Palma, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2015.

al acoso sexual. La empresa utilizó a rompehuelgas incluyendo marinos pero también echó mano de otros obreros de fuera de la planta. Una trabajadora recuerda cómo fue la Navidad ese año:

Nosotras pasamos la navidad arrullando nuestros pequeñitos, sin juguetes... los cipotes [niños] chillaban a moco tendido y no teníamos que darles, ni tortillas frías, a pura agua y azúcar, no había pa' donde, mientras la radio vociferaba canciones de FELIZ NAVIDAD... los sirvientes patronales se paseaban en frente de nosotras con sus enormes regalos que el patrón les había dado por su servilismo y nosotras saboreando con nuestros chiquitines barrigudos, y la tristeza de la vida.<sup>5</sup>

A pesar de las adversidades extremas y dolorosas, los trabajadores sindicalizados se mantuvieron en paro durante 31 días hasta que Atrarraya cedió.<sup>6</sup>

El 21 de enero de 1972, el SIP alcanzó un acuerdo con la gerencia. La empresa se resistió a considerar el asunto clave de los salarios caídos durante la huelga, pero prometió devolver sus plazas a seis de los trabajadores que habían sido despedidos por sus actividades sindicales y a no tomar represalias contra los “agitadores”. Es más, se comprometió a separar a los rompehuelgas de la planilla. Ofreció aumentos de 68 centavos diarios, equivalente a un 20% aproximadamente. La empresa también aceptó separar a

<sup>5</sup> “Obreras de la industria pesquera”, en *Pueblo*, febrero de 1979.

<sup>6</sup> Para efectos fiscales, Atrarraya S. A., estaba integrada formalmente por tres compañías diferentes: Atrarraya, Ballena, y Alimentos Atrarraya. Había subseccionales del SIP en cada empresa y en teoría debían negociar contratos por separado, aunque por lo general eran idénticos, ya que los dueños de las tres empresas eran las mismas personas. Todas eran propiedad de los mismos accionistas, pero tenían diferentes equipos de gerencia. El sindicato negociaba contratos colectivos con las tres empresas.

Mujeres trabajadoras en Atarraya S. A.,  
a finales de los sesenta o inicios de los setenta



Foto: cortesía de Mario Sáenz.

Villatoro de su puesto en respuesta a las acusaciones de acoso sexual, una de las exigencias fundamentales del sindicato.<sup>7</sup> A partir de la

<sup>7</sup> El aumento salarial no se precisa. La empresa apartó 50 000 colones (20 000 dólares en ese entonces) para los aproximadamente 200 trabajadores durante el año, a distribuirse bajo acuerdos de una comisión obrero-patronal. La nota periodística no mencionó las acusaciones específicas de acoso. *La Prensa Gráfica*, 22 de diciembre, 1971; *El Diario de Hoy*, 22 de enero, 1972. Sobre Pezca, Alejandro Molina Lara, entrevista con el autor, Los Ángeles, septiembre

Mujeres trabajadoras en Atrarraya S. A.,  
a finales de los sesenta o inicios de los setenta



Foto: cortesía de Mario Sáenz.

huelga, la afiliación de mujeres al sindicato se disparó hasta alcanzar casi un 80% del total de afiliados, una proporción mucho más grande con relación a la fuerza de trabajo en la empresa.<sup>8</sup>

---

de 2012; Noé Quinteros, entrevista telefónica con el autor, Houston, marzo de 2015.

<sup>8</sup> Las mujeres tenían 136 miembros y los hombres 38. El total de empleados es más difícil de calcular debido al carácter temporal del trabajo en varias de las secciones, pero las mujeres ocupaban alrededor de la mitad de las plazas

Evelio había participado en las negociaciones junto a un activista sindical más joven de 28 años, Alejandro Molina Lara, quien en ese momento fungía como segundo secretario de conflictos del SIP General. Molina Lara representaba una promesa para el sindicato debido a sus habilidades retóricas y negociadoras, así como por su valor. Había nacido en la ciudad de Usulután, la cabecera departamental, y a los 22 años llegó a Puerto El Triunfo para efectuar unas soldaduras en un tanque de refrigeración. Un capataz en la empresa Mariscos de El Salvador quedó impresionado por su trabajo y le ofreció de inmediato un trabajo fijo. En comparación a la inestabilidad laboral del trabajo de los artesanos que Alejandro conocía, le resultó atractiva la promesa de un trabajo fijo relativamente bien pagado. Sin embargo, el Puerto propiamente no era gran cosa. Era conocido como Puerto El Tufo en vista de que no existían servicios sanitarios fuera de las plantas empacadoras. La mayoría de los residentes hacían uso de letrinas y de los pantanos de los manglares como baños públicos. Como casi todos los trabajadores, Molina Lara viajaba todos los días al trabajo.

Disfrutó plenamente su trabajo como soldador en el varadero; se desempeñó bien y la gerencia y los demás trabajadores lo trataron bien. Durante la hora del almuerzo, se iba al muelle donde descargaban la pesca y platicaba con un panguero, quien piloteaba las pequeñas lanchas que iban y venían entre el muelle y los barcos camaroneros. El panguero, era un activista del SIP. Si bien conversaban amigablemente, Alejandro no comprendía la relevancia del sindicato para su situación particular. No obstante, reconoció la situación atroz de la mayoría de trabajadoras en las plantas em-

---

en la compañía. “Nómina de trabajadores afiliados a SIP por empresa, la Ballena”, 1973 (Archivo General SIP, Puerto El Triunfo, Usulután, El Salvador).

pacadoras, quienes no tenían estabilidad laboral o cualquier beneficio correspondiente; la empresa también les negaba el sueldo por horas extra trabajadas. A pesar de su desinterés en el sindicato, los capataces de la empresa observaban estas conversaciones con recelo. Al rato comenzaron a amenazarlo con despido. Molina Lara sabía que cuatro años antes, Mariscos de El Salvador había aplastado al sindicato. Aunque el sindicato seguía existiendo jurídicamente, no tenía ningún poder de negociación. El hostigamiento convenció a Alejandro sobre las relaciones de poder desiguales y cimentó sus ideas elementales sobre la justicia social. Es más, entendió que un cargo en la dirigencia del SIP le proporcionaría estabilidad laboral.<sup>9</sup> En 1968, se afilió al sindicato y se postuló para un cargo en la directiva. A partir de sus presuntas habilidades retóricas y su carisma, fue electo a la directiva de la subseccional de Mariscos de El Salvador. Nadie podría haberse imaginado en ese momento que poseía dotes de liderazgo excepcionales, que puso a prueba de inmediato en las negociaciones exitosas para alcanzar un contrato laboral colectivo.<sup>10</sup>

Durante los años inmediatamente posteriores, Alejandro se dedicó a impulsar una campaña de afiliación entre las trabajadoras

<sup>9</sup> El código de trabajo estipulaba que un miembro de la junta directiva del sindicato no podía ser despedido.

<sup>10</sup> En 1969, Molina Lara ganó la elección para Segundo Secretario de Conflictos del sindicato en el nivel departamental. Desde ese cargo, participó en tres comisiones especiales, incluyendo una misión organizadora que apoyó a una subseccional en el puerto de La Unión. Aunque Alejandro y Evelio activaron la sección departamental del sindicato, su existencia fue mayormente protocolar; la sección de Usulután se reunía nada más para cumplir con las disposiciones del Ministerio de Trabajo.

jóvenes, las peladoras y las empacadoras.<sup>11</sup> Las mujeres constituían la mayoría de empleados en la planta y, en consecuencia, eran indispensables para cualquier movilización sindical de importancia. En 1970, 38 trabajadoras en Mariscos se unieron al sindicato.<sup>12</sup> El tamaño de la subseccional del sindicato de Mariscos se duplicó con el influjo de estas jóvenes. Hacia 1972, prácticamente todos los trabajadores pertenecían al sindicato. Al igual que Gloria, la mayoría de las trabajadoras jóvenes provenían de familias grandes y empobrecidas de las zonas rurales. Para las que habían comenzado a trabajar en la década de 1960 y comienzos de la siguiente, su experiencia al comienzo fue bastante gratificante. Recibieron su primer salario, por pequeño que haya sido, y estuvieron en capacidad de adquirir los bienes de consumo básicos, sobre los cuales antes habían soñado solamente. La transición a horarios industriales no fue fácil y el trabajo en la banda transportadora era agotador —pasaban todo el día de pie— y altamente reglamentado. Conforme se convertían en adultas, las jóvenes comenzaron a resentir numerosos problemas, desde unas prácticas de contratación degradantes a unas condiciones de trabajo que destruían su ropa y provocaban la inflamación de sus pies (a menudo debían trabajar paradas en agua). Resentían el hambre que sentían hacia el final del turno laboral de ocho horas, la ausencia de recesos, y la gran diferencia salarial con los trabajadores varones.

Molina Lara se reunía constantemente con las trabajadoras nuevas, expresándoles preocupación por sus problemas cotidianos

<sup>11</sup> La legislación laboral salvadoreña prohibía la sindicalización obligatoria; de ahí, la importancia del trabajo de organización en la planta.

<sup>12</sup> “Nómina de afiliados al sindicato de la industria pesquera sub-seccional por empresa Mariscos de El Salvador”, 1980 (Archivo General SIP).

Alejandro Molina Lara



Foto: cortesía de Molina Lara.

y prometiéndoles que lucharía a su favor. A la vez, comenzó a trabajar con Noé Quinteros y Leonel Chávez, otros obreros de Pezca. Todos eran de la opinión de que el liderazgo del sindicato se había vendido cuando la huelga o carecía de la voluntad y la fortaleza para seguir luchando. Dentro de un año, los tres activistas habían

sido electos para ocupar los puestos claves en el SIP General.<sup>13</sup> Su prestigio no se basaba en su jerarquía laboral ya que solamente Molina era un obrero calificado. Más bien, las personas admiraban su habilidad para negociar y su espíritu combativo y optimista. Como resultado directo, un número de mujeres cada vez mayor se afiliaron al sindicato y comenzaron a participar en las reuniones. Entre 1968 y 1973, la asistencia a las reuniones del SIP General aumentó de un promedio de menos de 200 a más de 500.

#### LIDERAZGOS INSURGENTES

La nueva directiva sindical pudo operar en condiciones algo favorables. Los sindicatos obreros ocupaban un espacio importante dentro del régimen autoritario de El Salvador. Los derechos obreros, incluyendo el derecho a la huelga, estaban consagrados en la Constitución política. No obstante, los trabajadores sindicalizados representaban alrededor de solamente 5% de la población económicamente activa en la década de 1970, en parte reflejo de la prohibición de sindicalizar a la población de trabajadores rurales y el tamaño del sector de trabajadores informales.<sup>14</sup> Sin embargo, los sindicatos legitimaron al régimen militar específicamente mediante la existencia de una federación sindical gobiernista. Hacia

<sup>13</sup> El SIP General, de hecho un sindicato distrital, estaba conformado por todos los afiliados al SIP en el Puerto que pertenecían a las tres subseccionales. Si bien existía un SIP departamental, el SIP General en las décadas siguientes fue mucho más importante.

<sup>14</sup> Robert Alexander, *A History of Organized Labor in Panama and Central America*, Westport, CT, Praeger Publishers, 2008; William Bollinger, “El Salvador”, en Gerald Greenfield y Sheldon L. Maram [eds.], *Latin American Labor Organizations*, Nueva York, Greenwood Press, 1987.

finés de la década, la legalidad sindical también podía utilizarse como un contraargumento ante las exigencias del gobierno estadounidense de Jimmy Carter de mayor democratización política. Por otra parte, el régimen militar dependía de una alianza con varios sectores de la oligarquía, incluyendo el capital industrial. La tensión entre el apoyo discursivo del régimen a la actividad sindical y su alianza estratégica con los intereses empresariales le otorgaron a los militantes sindicales un arma retórica potente en apoyo a sus actividades dentro de los sindicatos y en la sociedad en general. Si bien es cierto que las gerencias de las empresas en todo el país a menudo se enfrentaron exitosamente a los sindicatos, los militantes podían echar mano de sus derechos jurídicos, por limitados que hayan sido.

A pesar de las ventajas que suponía pertenecer a la federación gobiernista, especialmente la del acceso al Ministerio de Trabajo, Leonel Chávez, Alejandro y Noé lograron desafiliar al SIP de la Confederación General de Sindicatos (en adelante CGS), la cual era controlada por el régimen. Durante el congreso de la CGS celebrado en 1972, los militantes del SIP se unieron a otros 17 sindicatos para abandonar la sala. Los militantes del SIP impulsaron esta acción porque vincularon a la CGS con la asesoría que ésta brindó a Muñoz cuando el arreglo bochornoso de la huelga en Pezca.

El acto de desafiliación no representó en el momento el inicio de un proceso de radicalización política. En ese entonces, Alejandro era miembro del concejo municipal de Puerto El Triunfo por el Partido de Conciliación Nacional (en adelante PCN), el partido del régimen militar. En tanto creyó que podría mejorar las condiciones de vida en el Puerto, aceptó ser candidato en las listas del PCN para las elecciones nacionales y municipales de 1972, las que fueron generalmente calificadas como fraudulentas. Logró que se

aprobara un incremento significativo del impuesto municipal que pagaban las empresas camaroneras, pero se desilusionó rápidamente con el alcalde y el PCN, a los cuales identificó como corruptos. Al cabo de un año, renunció a su cargo en el concejo municipal y reconoció que la corrupción en el PCN era compartida con la CGS y sus nexos con el gobierno.<sup>15</sup>

A raíz de las elecciones en el sindicato en febrero de 1973, Leonel Chávez ocupó el cargo de secretario general; Noé Quinteros se convirtió en secretario de Organización y Molina Lara en el primer secretario de Conflictos. Ese mismo año, Molina Lara se empeñó en negociar un nuevo contrato laboral colectivo en Mariscos de El Salvador con miras a que su estructura salarial se asemejara a la de las otras empresas. Su estrategia fue la que utilizó durante buena parte del resto de la década: a partir del rechazo de la empresa a las demandas del sindicato, asistía a las reuniones de las subseccionales donde presentaba estadísticas sobre la productividad, los precios en el nivel mundial y las tasas de inflación para educar a los trabajadores sobre la necesidad y los límites potenciales de los aumentos salariales. A pesar de sus esfuerzos, Mariscos de El Salvador terminó despidiendo a casi toda su fuerza laboral.

Molina Lara perdió las elecciones para secretario general debido quizá a una pérdida de prestigio como consecuencia del fracaso del SIP para impedir los despidos en febrero de 1974. Evelio Ortiz fue electo secretario general con 260 votos a su favor y 190 en contra, mientras que otros 90 votos apoyaron al antiguo secretario general, Mercedes Muñoz.<sup>16</sup> Evelio Ortiz siempre mantuvo un nivel de neutralidad entre las dos facciones principales del sindicato,

<sup>15</sup> Molina Lara, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2015.

<sup>16</sup> *Libro de actas 1974*, 3 de febrero, 1979 (Archivo General SIP).

la que se identificaba con Alejandro, Leonel y Noé, y la que apoyaba Muñoz. Eran más sus simpatías hacia la facción insurgente pero siempre mantenía una estrecha amistad con Muñoz. Si bien es cierto que la imagen de Muñoz había sido empañada por las acusaciones de haberse vendido cuando la huelga de Pezca, todavía conservaba una base de apoyo debido a su personalidad afable, su reputación como un trabajador altamente calificado (supuestamente el mejor carpintero en el Puerto) y, hasta cierto punto, sus planteamientos a favor de la armonía obrero-patronal. Molina Lara logró elegirse apenas para el cargo de Segundo Secretario de Conflictos.<sup>17</sup>

#### LA PRIMERA HUELGA LEGAL EN LA HISTORIA

Desde su cargo relativamente bajo dentro de la jerarquía del sindicato, Molina Lara encabezó dos iniciativas. En primer lugar, luchó con fuerza para frenar la introducción en Atrarraya de maquinaria para desvenar el camarón pequeño y el chacalín. De acuerdo con el dirigente del SIP, la maquinaria había sustituido a más de 200 puestos de trabajo en Pezca S. A. Argumentó sin mayores resultados que la maquinaria era altamente ineficiente.<sup>18</sup>

Alejandro obtuvo resultados mucho más favorables en una nueva ronda de negociaciones con Mariscos de El Salvador, donde se enfrentó a Rafael Guirola, un oligarca poderoso. La familia de

<sup>17</sup> Quinteros retuvo su puesto clave de secretario de Organización pero el secretario general Chávez fue relegado a Tercer Secretario de Conflictos. “Acta 1,” *Libro de actas 1974*, 3 de febrero, 1979 (Archivo General SIP).

<sup>18</sup> “Acta 18,” *Libro de actas 1974*, 22 de octubre, 1974 (Archivo General SIP); *Libro de actas*, 11 de abril, 1973 (Archivo Departamental SIP, Puerto El Triunfo, Usulután, El Salvador).

Guirola, una de las cuatro más acaudaladas del país, era dueña de 52 fincas de café y empresas valoradas en aproximadamente 50 millones de dólares.<sup>19</sup> Guirola rara vez negociaba directamente con el sindicato pero cuando lo hacía su actitud era diplomática. Conservaba otros valores tradicionales de la oligarquía, especialmente la exigencia de que sus subalternos participaran en los rituales asociados con su calidad de “don”. Sus trabajadores debían venerar a su santo patrón, San Rafael, el 23 de mayo; les pagaba doble salario a sus trabajadores si trabajaban en ese día sagrado. También le puso el nombre de Pesquera San Rafael a otra planta procesadora de camarón de su propiedad; desde su ubicación en el puerto de La Unión, esa planta procesaba camarón durante las huelgas en Puerto El Triunfo.

En marzo de 1974, Mariscos de El Salvador despidió a 91 trabajadoras en respuesta a las demandas del sindicato para una renegociación del contrato laboral. Molina Lara movilizó a las bases de su sindicato para que realizaran protestas y paros laborales y también denunció a la empresa en el Ministerio de Trabajo. Guirola no respondió al llamado del Ministerio para que asistiera a una reunión. Entre marzo y junio, Molina Lara y Guirola se enfrentaron constantemente. La empresa se negó a reincorporar a todos los trabajadores y, en consecuencia, el sindicato realizó un paro de labores. Mientras tanto, el SIP General ofreció entregar apoyo monetario significativo a los trabajadores despedidos. Por cierto, como una muestra reveladora de solidaridad, los trabajadores en las otras plantas donaron un día de salario para ayudar a los traba-

<sup>19</sup> María Dolores Albiac, “Los ricos más ricos de El Salvador”, en Rodolfo Cardenal y Luis Armando González [eds.], *El Salvador: la transición y sus problemas*, San Salvador, UCA Editores, 2002, p. 159.

jadores de Mariscos.<sup>20</sup> El 9 de mayo, Molina Lara se dirigió a una asamblea de trabajadores del SIP: “El problema con esa empresa se está agrabando [sic] cada día más hasta llegar a romper relaciones directas y pasar a la etapa de conciliación...”<sup>21</sup>

Molina Lara maniobró alrededor de la línea entre la acción directa y un acatamiento estricto con el Código de Trabajo. A pesar de los paros laborales en protesta por los despidos masivos, Molina Lara respetó cada uno de los procedimientos para una huelga del Código de Trabajo: fases consecutivas de negociación, conciliación y arbitraje. Una huelga solamente podía declararse legalmente después de que estas etapas se hubiesen agotado. Además, una mayoría de los empleados debía pertenecer al sindicato y una mayoría de éstos debía votar a favor de la huelga. Guirola procedió como otros tantos empleadores, despidiendo a los activistas del sindicato para que menos del 50% de los empleados votaran a favor de la huelga, la cual entonces sería ilegal.

A las 4:00 p.m., del 11 de junio, los trabajadores de Mariscos de El Salvador se fueron a la huelga por violaciones del contrato colectivo y, específicamente, por los despidos que a su manera de ver eran parte de una estrategia antisindical. Al cabo de dos semanas, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Usulután (un tribunal departamental que se entendía de asuntos laborales) determinó que la huelga en la empresa Mariscos era legal, el primer dictamen de esa naturaleza en la historia del movimiento sindical salvadoreño. Este logro extraordinario se debió en buena medida a la genialidad táctica de Molina Lara cuando encabezó los paros

<sup>20</sup> “Acta 7,” *Libro de actas 1974*, 3 de abril, 1974 (Archivo General SIP). El acta dice que 3 990 colones habían sido donados hasta ese momento a los trabajadores de Mariscos.

<sup>21</sup> “Acta 8,” *Libro de actas 1974*, 9 de mayo, 1974 (Archivo General SIP).

laborales y movilizó el apoyo de otros grupos, mientras acataba estrictamente las disposiciones del Código de Trabajo. La arrogancia de Guirola incidió seguramente en la decisión del tribunal. Durante los tres meses anteriores, simplemente había ignorado los requerimientos del Ministerio de Trabajo en ciertos momentos clave. Quizá hubo un trasfondo político también. La legitimidad del régimen militar estaba en un punto bajo después del muy comentado fraude electoral de 1972. Es más, el régimen había expulsado al Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicatismo Libre (American Institute for Free Labor Development, en adelante AIFLD) ante las preocupaciones de la élite agraria, porque el Instituto se había identificado con un programa modesto de reforma agraria cuando brindó su apoyo a la Unión Comunal Salvadoreña, una organización del centro político.<sup>22</sup> Dicha expulsión provocó protestas del gobierno de Estados Unidos y de sectores del movimiento laboral internacional.

Con independencia de los motivos exactos, el dictamen sobre la legalidad de la huelga representó un gran espaldarazo para el SIP. El derecho a la huelga estaba consagrado en un artículo de la Constitución salvadoreña y el Código de Trabajo obligaba al gobierno a ponerse fundamentalmente del lado del sindicato en huelga legal, además de prohibir el uso de rompehuelgas y obligar a la empresa a pagar salarios mientras durara la huelga. Con los lineamientos del código, el Ministerio del Trabajo ordenó a la Guardia Nacional que prohibiera el ingreso de rompehuelgas

<sup>22</sup> Resulta irónico que el retiro del AIFLD debilitó aún más a la CGS gobiernista. Robert Alexander, *A History of Organized Labor in Panama and Central America*, Westport, CT, Praeger Publishers, 2008, p. 194. El AIFLD, señalado por trabajar con la CIA, era la oficina de proyección internacional de la confederación sindical estadounidense AFL-CIO.

y ordenó a Guirola para que pagara salarios mientras durara la huelga, además de prohibirle el envío de camarón a su planta en La Unión.<sup>23</sup> Sin embargo, la Guardia Nacional no acató las órdenes y Guirola logró enviar camarón a su planta en La Unión antes de que llegaran los inspectores del Ministerio. No obstante, Mariscos sólo pudo encontrar unos cuantos rompehuelgas (incluidos los marinos) y, por lo tanto, no pudo operar de hecho durante la huelga. En vez de negociar, no se diga pagar los salarios, Guirola apeló infructuosamente ante la Corte Suprema. Su rechazo a la negociación generó más muestras de solidaridad de otros sindicatos en el Puerto y otras partes del país. Después de tres meses, Guirola tuvo que ceder ante la exigencia principal de reinstalar y pagar los salarios atrasados (de antes y durante la huelga) de los trabajadores despedidos. El pago de salarios debidos también consideró las pérdidas de los marinos que no pudieron entregar su producto. Otras concesiones incluyeron vacaciones y becas para niños, y la promesa de no enviar el camarón entregado por los marinos que trabajaban para Mariscos de El Salvador para que fuera procesado en la planta de San Rafael.<sup>24</sup>

Ésta fue una victoria dramática, de la cual todos los miembros del SIP se podrían enorgullecer: habían aportado con generosidad al fondo de la huelga.<sup>25</sup> La dirigencia del sindicato se mostró tan

<sup>23</sup> Asamblea Legislativa, Comisión de Trabajo y Prevención Social, Comité de Huelga a Rubén Alfonso Rodríguez, presidente de la Asamblea Legislativa, 28 de agosto, 1974 (Archivo de la Asamblea Legislativa [en adelante AAL], San Salvador).

<sup>24</sup> Dirección de Trabajo, 9 de septiembre, 1974. Debe destacarse que los marinos de Mariscos pertenecían al SIP.

<sup>25</sup> La subseccional de Mariscos reintegró más de 10 000 colones al fondo de huelga con el dinero que recibió del arreglo con la empresa.

complacida que contribuyó con más de 400 dólares para una celebración por la victoria.

El prestigio de Molina Lara creció bastante a raíz de la victoria de la huelga. En febrero de 1975, ganó la elección para el cargo de secretario general de la SIP por 243 votos contra 97, habiéndole ganado a Evelio Ortiz. Éste fue el tercer intento de Alejandro para ocupar el puesto máximo del sindicato. Mucho antes de la victoria, Alejandro tuvo una revelación:

La verdad es que disfrutaba confrontarme con ellos en las negociaciones; estaba al mismo nivel que los dueños y sus abogados [...]. Me sentía más superior ya que representaba el poder de los obreros y obreras.<sup>26</sup>

Es más, tenía un objetivo firme: permitirles a los trabajadores de Puerto El Triunfo la posibilidad de disfrutar una vida digna y realizar un trabajo digno. La satisfacción emocional que recibió fue grande. Desde hacía algún tiempo, sabía que en términos psicológicos estaba a la par de los patronos pero su experiencia al frente de la huelga de Mariscos S. A., y la humillación que le propinó a don Rafael Guirola habían confirmado su intuición.

Durante la segunda mitad de la década de 1970, las tres empresas camaroneras fueron altamente rentables en tanto el precio internacional del camarón llegó hasta 4.00 dólares la libra y la pesca abundaba.<sup>27</sup> Antes de cada renovación del contrato laboral colectivo, Molina Lara le seguía la pista cuidadosamente a las

<sup>26</sup> Alejandro Molina Lara, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2015.

<sup>27</sup> Ya se tenían advertencias sobre la pesca excesiva y los efectos de la contaminación por insecticidas empleados en las plantaciones de algodón cercanas. Ni las compañías camaroneras ni el sindicato prestaron mayor atención a los estudios que señalaban esos peligros.

utilidades de las empresas y trasladaba la información a los afiliados del sindicato.<sup>28</sup> En cada reunión del sindicato, develaba las inconsistencias en los planteamientos de la empresa contra los aumentos salariales, mientras destacaba el problema muy sentido de la inflación monetaria alta en la segunda mitad de la década de 1970. Cuando una empresa se resistía en un año determinado, preparaban sus fuerzas para el año siguiente. Así, Molina Lara informó en septiembre de 1975 sobre el fracaso de las negociaciones con las tres compañías principales. Mientras se dirigía a más de 300 miembros de la subseccional de Pezca, observó que: “se hizo lo humanamente posible pero no existió comprensión patronal así también no se encontró solidaridad de la asamblea para apoyar las demandas”.<sup>29</sup> Se refirió a la falta de unidad entre las bases sobre el uso de la amenaza de decretar una huelga. Sin que se percibiera esa amenaza, las tres empresas no cederían en las negociaciones. Mariscos de El Salvador otorgó un aumento del 6% a los trabajadores de planta y un 8% a los marinos pese a una tasa de inflación de más del 19% en 1975.<sup>30</sup>

A pesar de este retroceso, el SIP siguió presionando a las compañías. En febrero de 1976, después de una sesión de negociaciones maratónica de 10 horas, Pezca concedió un aumento del 15%. Aunque Molina Lara no estaba satisfecho, las bases del sindicato aceptaron el aumento que, combinado con el aumento que reci-

<sup>28</sup> Frente a 112 miembros de la subseccional de Aarraya, demostró con gráficas cómo en los meses anteriores “la producción ha aumentado en grave escala”. *Libro de actas*, 13 de septiembre, 1975 (Archivo General SIP).

<sup>29</sup> Actas del sindicato, septiembre de 1975, núm. 11, 27, folder 75 (Archivos de la Subseccional Pezca, Puerto El Triunfo). La subseccional es la representación local del sindicato.

<sup>30</sup> “Acta 20,” *Libro de actas 1974*, 17 de octubre, 1975 (Archivo General SIP).

bieron en 1975 y la reducción en la tasa de inflación (de 7% en 1976), significó que sus salarios reales se mantuvieron al mismo nivel en tiempos cuando el resto de la clase obrera enfrentaba un descenso de sus salarios reales.<sup>51</sup>

Molina Lara (quien ganó tres elecciones consecutivas para secretario general) y los demás dirigentes sindicales se dedicaron a un trabajo de organización extremadamente lento. Poco a poco, estos dirigentes varones fueron capaces de incorporar a un creciente número de trabajadoras en los cargos de dirección local y distrital e hicieron sentir más su presencia en las reuniones del sindicato. Hacia finales de la década, más mujeres que hombres hablaban en las reuniones del sindicato. En 1977, el SIP de nuevo se empeñó por mejorar los contratos colectivos en las tres empresas. Noé Quinteros y Leonel Chávez fueron electos a cargos en la subseccional de Pezca, desde donde optaron por dedicarse a la movilización de las bases, mientras que Molina Lara se dedicaba de lleno al SIP General. Como parte de un cambio altamente significativo, las mujeres ganaron la mitad de los puestos de dirección en la subseccional de Pezca. La combinación de una dirigencia fogueada y un activismo femenino propició una mayor militancia en la subseccional.

En 1977, la subseccional de Pezca puso en marcha una campaña para demandar mejores salarios y condiciones de trabajo. En julio, la empresa ofreció un aumento de 1.15 colones diarios como parte de un contrato fijo de dos años (algunas partes del contrato podrían renegociarse cada año). Molina Lara se dirigió a la asamblea de la subseccional de 173 trabajadores e hizo un “llamado a

<sup>51</sup> En Atrarraya, la subseccional del SIP rechazó un aumento salarial similar. Después de una negociación dilatada, la empresa otorgó un aumento del 16% junto con otras concesiones que las bases entonces aceptaron. *Libro de actas*, 19 de marzo, 1976 (Archivos de la Subseccional Atrarraya, Puerto El Triunfo).

la conciencia” mientras que Noé pidió “unidad”. Molina Lara siguió negociando mientras que la subseccional de Pezca caminaba hacia una huelga. El 21 de julio, toda la fuerza laboral de Pezca se marchó de la planta por primera vez desde la huelga fracasada de enero de 1972. Esta vez lograron una victoria contundente de un aumento salarial inmediato de 1.60 colones diarios y una serie de otras concesiones de la compañía.<sup>32</sup> Como resultado de la huelga, los trabajadores del SIP se unieron a las filas de los trabajadores industriales mejor pagados del país, la mayoría de los cuales habían sufrido una merma dramática de sus salarios reales durante los años inmediatamente previos.

Debido a la naturaleza altamente perecedera del producto que manejaban, los sindicatos afiliados al SIP poseían lo que Beverly Silver describe como “un poder de negociación laboral... que beneficia a los trabajadores que están insertos en procesos productivos altamente integrados, donde un paro laboral focalizado en un nodo clave puede provocar trastornos a una escala mucho más grande que el paro mismo”.<sup>33</sup> De acuerdo con Charles Bergquist, este poder se incrementa sustancialmente cuando la industria en cuestión es una fuente clave de divisas extranjeras (las exportaciones de camarón representaban la tercera más importante fuente de divisas en la década de 1970).<sup>34</sup> Molina Lara poseía un acendrado conocimiento práctico de la cadena de intercambios comerciales

<sup>32</sup> “Acta 20,” *Libro de actas*, 10:20 pm, 22 de julio, 1977 (Archivo General SIP).

<sup>33</sup> Beverly Silver, *Forces of Labor: Workers' Movements and Globalization since 1870*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, El concepto de “poder de negociación laboral” fue planteado originalmente por Erik Olin Wright.

<sup>34</sup> Durante las décadas de 1970 y 1980, el camarón ocupó desde un segundo hasta un cuarto lugar de importancia como generador de divisas extranjeras.

y el proceso de producción. Pudo depender de las bases sindicales abrumadoramente femeninas para realizar los paros laborales (o el trabajo a desgano) para responder rápidamente ante el aun más pequeño problema que se presentara en el trabajo. Cuando se le agrega a lo anterior su número creciente de afiliados comprometidos —es decir, su “poder asociativo”— el SIP tenía el potencial para transformar la vida de sus miembros y ganarse un espacio de libertades relativamente autónomo en una sociedad autoritaria.

#### LA POLÍTICA Y LAS DESAVENENCIAS

Tal como puede observarse en el llamado a la conciencia y las lamentaciones sobre la falta de solidaridad, el logro de una unidad obrera fue un proceso tenso e incompleto. El primer impedimento a la unidad fue de tipo político. Durante 1975, Molina Lara, quien hasta entonces había sido apolítico, mantuvo contactos cada vez más frecuentes con la Federación Sindical Independiente de Izquierdas (FENASTRAS). En la federación, comenzó a relacionarse con militantes de izquierdas más veteranos, incluyendo aquellos que pertenecían al Partido Comunista Salvadoreño (en adelante PCS) y al Frente de Acción Popular Unificado (en adelante FAPU), un grupo a la izquierda del PCS. A partir de sus contactos con estas organizaciones, Molina Lara tuvo acceso a personas y a algún material de lectura (panfletos) que le permitieron a él y sus amigos comprender la situación de la clase obrera en el país y, más específicamente, del conjunto de fuerzas políticas y económicas que el SIP debía confrontar.<sup>35</sup> Leonel Chávez se unió al PCS y se reunía fre-

<sup>35</sup> Casi todo el material de lectura consistió de revistas o panfletos semi-clandestinos.

cuentemente con Alejandro para platicar más o menos en privado sobre asuntos de política y sindicalismo. Chávez se mostró en desacuerdo, al menos en la práctica, con Alejandro, Noé, Evelio y Gloria García, para quienes resultaba imperativo mantener la política alejada del sindicato. García recuerda cómo regañó a Leonel por proyectar una película soviética sobre viviendas en noviembre de 1977: “Aquí se pelea la cuestión laboral”. A lo que Leonel respondió que pasó la película “para que se abran los ojos”. La posición antipolítica de Gloria y Noé y de muchos otros giraba en torno a su creencia de que el sindicato representaba un espacio democrático único, pero uno que el gobierno podía cerrar fácilmente. Además, los activistas como Gloria y Noé llegaron a convencerse de que una forma de sindicalismo militante era la mejor forma de lograr más poder y una mejora en las vidas de los trabajadores.

A la vez, existía una faceta aún más pragmática asociada con la postura antipolítica debido a que la dirigencia del SIP se enfrentaba a una realidad política difícil. Aunque el Partido Demócrata Cristiano (en adelante PDC) de oposición gozaba de mucha simpatía en el Puerto, la mayoría de trabajadores y muchas trabajadoras pertenecían a uno de los dos partidos de derecha: el oficialista PCN o el Partido Popular Salvadoreño (en adelante PPS).<sup>36</sup> Es más, muchos trabajadores pertenecían a la Organización Democrática Nacionalista (en adelante ORDEN), una agrupación paramilitar de derechas. En vista del fuerte apoyo que la membresía del sindicato le brindaba al régimen, la afiliación del SIP a la cada vez más

<sup>36</sup> Un indicador de la fuerza de ORDEN fue la victoria del partido PPS en las elecciones municipales de 1970. El partido era controlado por el “Chele” Medrano, fundador y jefe de ORDEN.

izquierdista FENASTRAS se convirtió en una fuente de preocupaciones y conflictos en potencia.<sup>57</sup>

Esta preocupación política se volvió más palpable en la medida que aumentaba la represión en el nivel nacional. Las muertes a manos de la Guardia Nacional de campesinos que protestaban en Tres Calles en el departamento de Usulután (donde se ubica Puerto El Triunfo) y en La Cayetana (San Vicente) habían atraído la atención nacional. En términos similares, el 30 de julio de 1975 la Policía Nacional había disparado y matado a cuando menos una decena de estudiantes universitarios que protestaban en San Salvador. El 26 de septiembre, unos atacantes desconocidos mataron a un sindicalista del pcs, Rafael Aguiñada Carranza, jefe de la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (en adelante FUSS), una federación obrera con fuerte presencia del pcs. Molina Lara se unió con otros para exigir una huelga nacional de protesta. Frente a más de 300 miembros del SIP, Leonel Chávez condenó “los golpes al movimiento sindical y campesino que están sufriendo de una manera tenaz por el fascismo que quiere dominar a la clase popular [...]”.<sup>58</sup> Aunque la propuesta de una huelga nacional no prosperó, la dirigencia del SIP introdujo en las discusiones del sindicato la política nacional y un lenguaje de izquierdas de denuncias, mientras intentaba organizar a las bases para que participaran en la protesta.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Una minoría importante apoyaba al partido Demócrata Cristiano (PDC) de oposición. En la década de 1980, la mayoría de marinos apoyó al PDC y una trabajadora de planta ganó una elección para alcalde.

<sup>58</sup> “Acta 20,” *Libro de actas 1974*, 17 de octubre, 1975 (Archivo General SIP).

<sup>59</sup> El sindicato votó a favor de una donación en efectivo para la viuda de Aguiñada Carranza. *Loc. cit.*

Eventualmente, Molina Lara y su grupo lograron convencer a las bases para que apoyaran a la federación independiente de izquierdas con el argumento de que estaba en capacidad de solidarizarse con el SIP cuando lo necesitara. De manera similar, desarrollaron un lenguaje de solidaridad de clases como un resultado lógico de su actividad sindical amparada por la constitución. En otras palabras, la estipulación constitucional de los derechos de organización y huelga ofreció una oportunidad discursiva para difundir las ideas de solidaridad.<sup>40</sup>

Molina Lara se preocupó por proteger su flanco derecho. Por cierto, durante casi todos los procesos electorales en el sindicato incorporó a un miembro de ORDEN para integrar la planilla de candidatos a la directiva. De esa manera, cooptó a la representación local de una organización que habría de constituir el núcleo de los escuadrones de la muerte de la derecha. Molina Lara fue capaz de convertir al miembro de ORDEN y a muchos otros individuos de derecha en buenos sindicalistas, en parte porque les garantizaba que la política estaría vedada en los sindicatos.

## UNA DIVISIÓN POR GÉNERO DEL TRABAJO

El alto nivel de segmentación laboral por género en las tres plantas fue otra fuente de división. Esas divisiones se traducían a menudo en diferencias agudas en torno a las perspectivas y a las

<sup>40</sup> Aunque inusual, los dirigentes del SIP llegaron hasta invitar a un representante de la Liga por la Liberación, una agrupación con vínculos al grupo guerrillero emergente, el Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos (en adelante PRTC), para que se dirigiera a una asamblea del sindicato con presencia de unos 500 miembros. "Acta 23," *Libro de actas 1974*, 21 de diciembre, 1976 (Archivo General SIP).

actitudes sobre la organización sindical. Solamente una minoría de trabajadores, tanto mujeres como hombres, podían estar seguros de recibir salarios y prestaciones durante todo el año. Un sector considerable de las trabajadoras, quienes clasificaban y empacaban el camarón eran cesadas con frecuencia cuando el suministro del producto disminuía. Finalmente, había un grupo todavía más grande de trabajadoras que eran contratadas como “eventuales”, que no tenían sino un mínimo de estabilidad laboral.<sup>41</sup> En la planta procesadora La Ballena del grupo Atrarraya, más del 70% de los trabajadores eran temporales.<sup>42</sup> En Pezca S. A., la mayoría de eventuales —un 40% de la fuerza laboral— trabajaba en la Planta II. Los trabajadores permanentes en la Planta I a menudo manifestaban sentimientos marcados de superioridad frente a los de la Planta II. Una trabajadora de la Planta I recuerda que los de la Planta II eran más pobres, menos educados, “más rústicas”, menos confiables y más rebeldes.<sup>43</sup> Las mujeres de la Planta II recuerdan el desdén con que eran tratadas por las trabajadoras de la Planta I. Una trabajadora de la Planta II, quien llegó eventualmente a ser una dirigente del SIP, tuvo que soportar el apodo de “letrina”, un apelativo que se usó en su presencia más que su propio nombre. Se le llamó así porque vivía en una choza cerca de las letrinas públicas en un tiempo cuando los excusados privados

<sup>41</sup> La nomenclatura oficial era diferente de la versión popular. Los vocablos oficiales de la contratación describían a los eventuales como aquellos que trabajaban de vez en cuando; los trabajadores les decían supernumerarios. Los trabajadores de estación eran usualmente llamados eventuales por los trabajadores pero, según la empresa, eran trabajadores temporales.

<sup>42</sup> Se asentaron 66 como temporales, de los cuales 53 eran mujeres. “Lista de los salarios de los trabajadores de La Ballena S. A.,” 24 de octubre, 1973 (Archivo General SIP).

<sup>43</sup> Migdalia Chavarría, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013.

eran prácticamente inexistentes. Su padre se ganaba unos centavos adicionales limpiando las letrinas; de allí el apodo. Ese nivel de escarnio dentro de la misma clase social no podía superarse con facilidad, pero tenía que lograrse en aras de una fuerza laboral unida.

En Pezca S. A., la más grande y moderna de las tres emparadoras con más de 500 trabajadores, la Planta II estaba dedicada exclusivamente a la variedad más pequeña de camarón, el llamado chacalín. En un principio era un producto que se descartaba pero el mercado nacional se le abrió a fines de la década de 1960 gracias a la introducción de supermercados en San Salvador; hacia mediados de la década de 1970 se agregó el mercado de exportación.<sup>44</sup> En 1976, un viaje de pesca normal producía unas 2 333 libras netas de chacalín y 1 800 libras de camarones de las variedades más grandes. La empresa le pagaba a los marinos 557 colones por tonelada de camarón blanco (se pagaba hasta en 4.50 dólares la libra en Nueva York) y 191 colones por tonelada de chacalín.<sup>45</sup> Durante la estación del chacalín de julio a noviembre, varios centenares de trabajadoras pelaban a mano cada chacalín para después colocarlo en una banda sin fin que lo transportaba por encima de una máquina. Cuando el chacalín llegaba a cierto punto, un cilindro en rotación lo penetraba y le inyectaba un chorro de agua a alta presión para desvenarlo antes de enjuagarlo y depositarlo en otra banda. En el caso de los chacalines más pequeños, una máquina

<sup>44</sup> Según varios informantes, la cadena de restaurantes estadounidense Red Lobster aparentemente compraba chacalín salvadoreño.

<sup>45</sup> En 1975, las tres plantas procesaron 2 669 toneladas de chacalín y 903 toneladas de camarón blanco. Ana Eloísa Herrera Schlesinger, "Los trabajadores de la industria pesquera", 1980 (Tesis de licenciatura en Derecho, Universidad de El Salvador). La tasa de cambio era de 2.50 colones por dólar.

especial pelaba y desvenaba el producto.<sup>46</sup> Las trabajadoras escogían el chacalín entero y lo empacaban antes de que fuera congelado y transportado al aeropuerto o a los supermercados. Los operarios de todas las máquinas en las plantas eran hombres. Éstos y los mecánicos encargados del mantenimiento ganaban hasta un 50% más que las trabajadoras y ocupaban los cargos clave en el sindicato durante la década de 1970.

Las trabajadoras permanentes procesaban el camarón más grande de manera menos intensiva en mano de obra. El camarón salía de una máquina clasificadora (que determinaba cuántas unidades completarían una libra) y las trabajadoras entonces seleccionaban el que no estaba dañado para empacarlo en cajas de cinco libras que serían congeladas y almacenadas.

Desde la perspectiva de la empresa, las trabajadoras eventuales eran descartables, intercambiables y altamente explotables. Al comienzo de cada estación, un silbato anunciaba el arribo de los barcos camaroneros y centenares de mujeres se agolpaban en el portón de la planta con miras a que las contrataran. La mayoría que vivía en las zonas rurales estaban en desventaja extrema porque no tenían información alguna sobre la llegada del primer barco cargado de chacalines.<sup>47</sup> Aunque realizaban el trabajo más duro —tenían que pelar los chacalines uno por uno— los trabajadores eventuales —casi todas mujeres— recibían una remuneración menor, en una tercera parte que las trabajadoras permanentes, que clasificaban y empacaban el camarón más grande; las even-

<sup>46</sup> George B. Gross, “Shrimp Industry of Central America, Caribbean Sea, and Northern South America”, en *Marine Fisheries Review*, vol. 35, núms. 3 y 4, 1972, p. 38; Noé Quinteros, entrevista con el autor, Houston, 2014.

<sup>47</sup> Según varios informantes, los empleados de la compañía y los capataces informaban de antemano a sus novias y queridas.

tuales tampoco recibían sobresueldo por trabajo adicional y no gozaban de seguro médico.<sup>48</sup>

Desde el inicio de su gestión en el sindicato, Alejandro, Noé, Leonel y otros se empeñaron en transformar el estatus de las trabajadoras eventuales como un compromiso de justicia social fundamental, y como pieza clave de una estrategia para aumentar el poder del sindicato. Su atención se centró al comienzo en la abolición del sistema de pago por pieza procesada para sustituirlo por uno según las horas trabajadas. Las trabajadoras apoyaron esta medida abrumadoramente. El sindicato se adjudicó este cambio en la estructura salarial en cada planta hacia mediados de la década de 1970, modificando así el ritmo de trabajo de toda la fuerza laboral. El liderazgo del SIP también reaccionó con fuerza contra cualquier empleado de la gerencia que se comportara agresivamente frente a un militante sindical. En casi todos los paros, una de las demandas era la remoción de un supervisor o capataz.

Molina Lara, tal como se anotó previamente, se esforzó por organizar a las trabajadoras eventuales no organizadas y por aumentar la participación femenina en cada una de las subseccionales en el Puerto. Hacia 1979, cinco de los siete dirigentes sindicales de la subseccional de Pezca eran mujeres. Los puestos altos en el SIP General, no obstante, todavía estaban en manos de hombres. La explicación más común que daban activistas hombres y mujeres del sindicato en ese momento y en recuerdos posteriores es que las mujeres eran más militantes y comprometidas que los trabajado-

<sup>48</sup> De acuerdo con los informantes, la introducción del seguro social en el Puerto en 1968 fue un factor clave para que las empresas optaran por el sistema de dos clases de trabajadores.

res hombres, pero rechazaban los cargos de dirección debido a sus obligaciones domésticas.

En febrero de 1979, una trabajadora de Atarraya comentó sobre las dimensiones del género de la lucha sindical en Puerto El Triunfo. Afirmó que la empresa despedía a las trabajadoras eventuales a quienes la empresa trataba como “machos de carga” y las sustituía por nuevas.

Entonces nosotras como la mayoría en esas plantas la tenemos las mujeres, porque los hombres son los primeros a quienes flagelan, y en las sesiones, como siempre anda la autoridad por ahí, las primeras que protestamos somos las mujeres, los hombres casi no opinan nada, pero ya cuando se deciden a luchar formamos un solo frente.<sup>49</sup>

Ésta es una expresión novedosa de una posición a la vez proto-feminista como también sindicalista. Le hace eco a una creencia y práctica en los movimientos revolucionarios, que plantea que las mujeres son más militantes y valientes que los hombres, en parte porque las autoridades son más propensas a vapulear a los hombres.<sup>50</sup> En la medida que hacen sentir sus voces, las mujeres intentan proteger a los hombres de daño físico. Esta afirmación también

<sup>49</sup> Resulta difícil determinar a qué paliza se estaba refiriendo. Aparte de las palizas de noviembre de 1977, los informantes recuerdan pocos incidentes en que la Guardia golpeó a los piqueteros durante la huelga de febrero-marzo de 1979, en *Pueblo*, marzo de 1979.

<sup>50</sup> Ésta no fue una situación novedosa para las mujeres, ya sea en Estados Unidos o Latinoamérica. Me encontré con una situación muy similar en Nicaragua, donde las mujeres asumieron el liderazgo del pujante movimiento campesino a comienzos de la década de 1960 en vista de que los hombres tuvieron que pasar a la clandestinidad por un rato. Véase Jeffrey L. Gould, *To Lead as Equals: Rural Protest and Political Consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912–1979*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1990, pp. 225-244; Lo-

apunta a la transformación notable de conciencia que vivieron las mujeres trabajadoras durante la década anterior. De una situación previa de trabajadoras apáticas, ahora participan en persona y con voz al frente de la lucha de clases en el Puerto como ejemplos de una ideología y una práctica de solidaridad. La participación femenina en las grandes asambleas aumentó dramáticamente durante la década. Mientras que las voces que se registraron en las actas al comienzo de la década eran mayormente de hombres, hacia 1978 la mitad de las intervenciones —a menudo frente a más de 500 personas— eran de mujeres. Casi todas sus declaraciones promovían la militancia en defensa de las reivindicaciones de los sindicatos y la solidaridad de los trabajadores dentro del Puerto y fuera de él.

Las palabras de la militante sindical anónima que se citaron anteriormente también hacen referencia a la Guardia Nacional. El 18 de noviembre de 1977, poco antes de que el régimen decretara un estado de sitio para suprimir la agitación sindical, estudiantil y campesina, Leonel Chávez organizó la exhibición de una película documental soviética. Antes de comenzar la película, “llegó la autoridad en camionadas. Los niños comenzaron a llorar del miedo, nosotras tuvimos que arrullarlos y nos comenzamos a armar de valentía [...] con bayonetas en mano se metieron en el recinto y primeramente [...] se dirigieron hacia los directivos [...] en esos momentos todos nos tiramos a suelo, porque sonaron las balas y los culatazos [...] a Alejandro le dieron una fuerte golpiza, manaba sangre por oídos y boca; nosotros creímos que ya lo

---

rraine Bayard de Volo, *Women and the Cuban Insurrection: How Gender Shaped Castro's Victory*, Nueva York, Cambridge University Press, 2018, pp. 114-143.

llevaban muerto”.<sup>51</sup> De acuerdo con varios testigos, los atacantes destruyeron cuanto pudieron del salón del sindicato y se llevaron a Alejandro, Leonel, Delia Cristina Hernández y a otros dos dirigentes sindicales.<sup>52</sup>

De inmediato, decenas de miembros del sindicato siguieron a la Guardia Nacional a la cabecera departamental. A pesar de la afirmación del gobierno de que la Guardia Nacional había descubierto “propaganda subversiva”, las protestas del sindicato contribuyeron a liberar a los activistas. A su retorno al Puerto, los trabajadores y sus familias montaron una fiesta espontánea. La vapuleada y la represión no hicieron sino realzar el prestigio de Alejandro. Tal como dijo una militante sindical,

Alejandro es el secretario general de todos, es el ídolo nuestro. Porque si Alejandro dice allá llevo cuando vamos saliendo a las 10 de la noche cumple su palabra. No es como muchos de esos “dirigentes” que pasan apoltronados, engordando como chanchos sin mover un solo pie, en algunas federaciones [...]. El nos orienta en nuestra lucha [...] “VÁYANSE ALLÁ, AL PORTÓN DE PEZCA, AQUELLAS MUJERES NECESITAN SU AYUDA, REANIMÁNDONLAS”.

Otra trabajadora hasta redactó un poema:

Nosotros de Puerto El Triunfo, nunca hemos perdido una huelga  
 Siempre luchamos unidos como hermanos de clase  
 Y no dejamos que nos ultrajen los farsantes patronales  
 Que a diario nos quieren dar;  
 Nuestro líder es Alejandro Molina Lara  
 Es una perla preciosa que encontramos en el mar,

<sup>51</sup> “Obreras de la industria pesquera”, en *Pueblo*, febrero de 1979.

<sup>52</sup> *El Diario de Hoy*, 21 de noviembre, 1977.

Todos los trabajadores de la industria pesquera,  
 Para que a él le hagan daño primero nos matarán  
 Pues no dejaremos fracasar la nobleza de sus principios.<sup>53</sup>

Sin embargo, la dinámica de la relación entre Alejandro y la fuerza laboral predominantemente femenina era mucho más compleja que lo que da a entender el poema. Molina Lara y sus compañeros hombres tuvieron que pasar por una transformación, especialmente en lo que se refiere a sus ideas sobre las mujeres y la femineidad. Tuvieron que reconocer a las trabajadoras militantes como mujeres y no como estereotipos de un lenguaje despectivo.<sup>54</sup> Es más, tuvieron que comenzar a tratar a las mujeres como sus iguales, intelectual y moralmente. Gloria García recuerda que “Alejandro si mejoró bastante pero siempre con la creencia que el sabía más”.<sup>55</sup> La afirmación de García es un reconocimiento implícito de que los cambios en las actitudes sociales aun entre los hombres más progresistas, eran parte de un proceso gradual.

En términos similares, la dirigencia insurgente se dio cuenta casi al comienzo de que las mujeres no tolerarían ningún tipo de acoso de parte de la gerencia de la empresa; por cierto, la huelga de Atrarraya de 1971-1972 dejó en claro que ese tema podría provocar una movilización masiva. Es sorprendente que las mujeres recuerdan apenas unos cuantos incidentes de acoso sexual durante

<sup>53</sup> “Obreras de la industria pesquera”, en *Pueblo*, febrero de 1979.

<sup>54</sup> “Marimacha” es un vocablo despectivo que se empleaba usualmente para insultar a las trabajadoras y las militantes. Véase Deborah Levenson-Estrada, *Trade Unionist against Terror*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1994 y Barbara Weinstein, *For Social Peace in Brazil: Industrialists and the Remaking of the Working Class in São Paulo, 1920-1964*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1996.

<sup>55</sup> Gloria García, entrevista con el autor, Lake Elsinore, febrero de 2015.

toda la década. A pesar de que se daban relaciones amorosas entre los individuos de la fuerza laboral (y entre las bases y la dirigencia sindical), hubo pocos casos, si acaso alguno, de acoso (es decir, de agresión sexual o de propuestas indeseadas). Las trabajadoras reconocen el papel que desempeñó el sindicato para mitigar toda forma de acoso sexual en la planta. Esto se contraponen claramente a la experiencia de trabajadoras en otras partes de Latinoamérica.<sup>56</sup>

Durante la segunda mitad de la década de 1970, más mujeres se tornaron activas en el sindicato e intentaron cada vez con más frecuencia ejercer un control informal sobre los procesos productivos.<sup>57</sup> En efecto, las trabajadoras y los trabajadores no requerían ni aceptaban interferencias de los jefes de producción o de la gerencia. Ahora bien, hubo numerosos choques menores para ejercer dicho control. Mauro Granados, por ejemplo, se paraba a menudo al otro lado del vidrio para observar a los trabajadores. Cuando veía que una mujer se comía un dulce o platicaba con otra, bajaba a regañarlas. Semejantes acciones de la gerencia molestaban a las trabajadoras quienes, hacia fines de la década de 1970, los retaban y los denunciaban con nombre y apellido en las asambleas generales. La trayectoria del SIP de deshacerse de gerentes antisindicalto les dio qué pensar a dichos empleados.

<sup>56</sup> John D. French y Daniel James, *Gendered World of Latin American Women Workers: From Household and Factory to the Union Hall and Ballot Box*, Durham, NC, Duke University Press, 1997, p. 11; Daniel James, *Doña María's Story: Life, History, Memory and Political Identity*, Durham, NC, Duke University Press, 2000, pp. 56-70, quien analiza la asociación discursiva del trabajo de fábrica y la prostitución; Anne Farnsworth-Alvear, *Dulcinea in the Factory: Myths, Morals, Men, and Women in Colombia's Industrial Experiment, 1905-1960*, Durham, NC, Duke University Press, 2000.

<sup>57</sup> Gloria García, entrevista con el autor, Lake Elsinore, febrero de 2015.

Las trabajadoras también formularon una serie de demandas concretas que la dirigencia del SIP adoptó. Lucharon para que se construyera una cafetería, algo que lograron hacia fines de la década. Hubo muchos casos de mujeres que se desmayaban en el trabajo porque tenían que permanecer de pie durante seis horas sin alimento y a veces pasaban hasta ocho horas sin comer, porque no les era posible ir a su casa para almorzar durante la media hora de receso que les permitían. Como dijo Eloísa Segovia, “El sindicato nos dio chance para comer”.<sup>58</sup>

Esa exigencia fue acompañada por otras que, si no específicamente de carácter femenino, beneficiaron fundamentalmente a ese segmento de la fuerza laboral. Por ejemplo, ganaron el derecho a un centro de primeros auxilios en la misma planta para atender a mujeres que sufrían un gran número de cortaduras cuando manejaban el chacalín. Hacia fines de la década de 1970, también adquirieron el derecho a recibir cuatro uniformes y tres pares de botas por año. Además, lograron que se les permitiera tomar café en dos oportunidades. El sindicato también consiguió 30 becas para estudios de bachillerato para sus hijos. Como parte del contrato, se les otorgó el derecho a recibir 5 libras de camarón y 10 libras de pescado al mes. En palabras de Carmen Minero, “Antes trabajábamos a lo burro y no comíamos ni un camarón y empezó Alejandro a trabajar al sindicato para que nosotras como trabajadoras que no sólo deseáramos tocar el producto sino que lo teníamos para comer”.<sup>59</sup> Aunque estas victorias no parecen mayor cosa, en términos acumulativos significaron una mejoría

<sup>58</sup> Eloísa Segovia, entrevista con el autor y Carlos Henríquez Consalvi, Puerto El Triunfo, febrero de 2015.

<sup>59</sup> Carmen Minero, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2014.

Gloria García con su compañera de trabajo de Pezca



Foto: cortesía de Gloria García.

significativa en su vida laboral y doméstica. Sin la participación activa de la fuerza laboral femenina, estas demandas quizá ni se habrían planteado, mucho menos logrado. Esas victorias también fortalecieron y unificaron a trabajadoras y trabajadores en tanto reconocieron su voluntad comprometida y colectiva en aras del mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo. Los trabajadores llegaron a percibir a la planta procesadora, si bien no como un lugar de alegría, al menos como un espacio propio dentro del cual, con ciertos límites prescritos, podían trabajar a su propio ritmo, a su manera, disfrutando de un cierto nivel de entretenimiento.

Durante el turno de la noche, a menudo jugaban, hasta rociándose con las mangueras.

Según recuerda Gloria,

Nosotros éramos felices, hasta bromeábamos adentro del trabajo. Sería que nos sentíamos más liberadas por el apoyo sindical o era porque ya nos habíamos cansado de que nos tuvieran así. Y de ahí para allá nosotras vimos la luz. Las cosas cambiaron ya no nos regañaban a cada rato. Nosotras nos sentíamos liberadas.<sup>60</sup>

Este sentimiento de liberación estaba restringido generalmente al área de trabajo. Pero la participación femenina en el sindicato también contribuyó a transformar a las personas. Los seminarios de educación sindical tuvieron una influencia importante en Gloria y sus compañeras. Según recuerda: “Yo era una persona que a mi me daba pena hablar, yo no era que hablaba y hablaba. Después que me metí a eso (cursillos sindicales) fue que me hice habladora.”<sup>61</sup>

Muchas trabajadoras eran madres solteras, la mayoría de las cuales dependían de las redes de familias ampliadas para el cuidado de los niños más pequeños. De acuerdo con antiguos trabajadores de la planta, las madres solteras no tenían mayores incentivos para casarse. Al volver del trabajo, comenzaba el “segundo turno” de cocinar, limpiar y cuidar a los niños. Este doble turno era todavía más pesado para las trabajadoras casadas, porque tenían que atender a esposos o compañeros bastante exigentes. Algunos de los testimonios sugieren que a pesar de un incremento significativo del ingreso familiar, el trabajo de las mujeres imponía mucha

<sup>60</sup> Los manguerazos generalmente ocurrían en el turno de madrugada. Carmen Minero, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2016.

<sup>61</sup> *Loc. cit.*

presión en el matrimonio. Para las trabajadoras eventuales, las tensiones eran todavía mayores porque se daban cambios en los turnos de trabajo, mientras que durante la época del chacalín muchas trabajaban en el turno de la noche o de la madrugada. Según recuerda Gloria García,

Porque se sentían celosos de que nosotras estábamos metidas en esas cuestiones sindicales. En primer lugar mi esposo me dijo o el sindicato o yo y sus hijos. Entones yo le dije váyase usted y déjeme con mis hijos. Y pasó eso y muchas amigas que decían los mismo... los hombres muy machos no querían que uno saliera a la calle. Ya salía uno y no era porque uno iba a hacer algo del sindicato sino porque iba a buscar otro macho en la calle. Pero cosa que no es cierto porque en ese tiempo nosotras estábamos muy sumisas. Nos entregábamos a nuestros esposos y ya!<sup>62</sup>

Otros matrimonios también se disolvieron debido al activismo sindical de las mujeres. Es difícil seguirle la pista a la relación entre el desarrollo de una conciencia de clase entre las mujeres y el auge de una conciencia de género que devino en una resistencia individual contra el patriarcado masculino. En los casos de Gloria y otras activistas, sin embargo, parece existir una correlación clara.

También existían límites muy claros en torno a la capacidad del sindicato para incorporar los discursos profeministas que comenzaban a surgir; nadie ponía en entredicho la idea de que la mujer tenía ciertas características naturales que le eran propias, tales como manos más ágiles para pelar y clasificar el camarón y una predisposición para cocinar, limpiar y cuidar la familia.<sup>63</sup> Nin-

<sup>62</sup> *Loc. cit.*

<sup>63</sup> Véase Carla Freeman, *High Tech and High Heels in the Global Economy: Women, Work and Pink Collar Identities in the Caribbean*, Durham, NC, Duke

Gloria García con su hermana Concepción García  
y la hija de su hermana



Foto: cortesía de Gloria García.

guna mujer operaba o reparaba la maquinaria. Finalmente, tal como se observó, los tres cargos más importantes del SIP General quedaron en manos masculinas exclusivamente.<sup>64</sup>

---

University Press, 2000, pp. 37-40, quien presenta un resumen provechoso de las opiniones con enfoque de género sobre la idoneidad de la mujer para ciertos tipos de trabajo de fábrica. Curiosamente, como veremos, los hombres también le cortaban la cabeza a miles de camarones cuando trabajaban en altamar.

<sup>64</sup> Por lo general, éstos eran secretario general, secretario de organización y secretario de conflictos. El SIP General tenía un directorio de diez miembros.

## PROBLEMAS EN ALTAMAR

Si el SIP pudo superar los efectos de una división del trabajo por género en las plantas procesadoras, tuvo mucha más dificultad para entenderse con el estilo de vida machista de los marinos, propio de los peligros del trabajo en altamar. Un antiguo marinero describió el trabajo como estar en la cárcel —otros lo compararon con la esclavitud.<sup>65</sup> Ambas metáforas describen la subordinación absoluta de los marinos frente al capitán y su encierro en un mundo de trabajo arduo durante 12 días y noches seguidas.

Barco de pesca de camarones



Foto: cortesía de Mario Sáenz.

<sup>65</sup> Amilcar Galileo, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, julio de 2012. Una muy buena descripción de las condiciones laborales y salariales de los marinos se encuentra en la tesis de Herrera Schlesinger, *op. cit.* La tesis no considera el conflicto entre los sindicatos o el asunto de “la movida”.

Los barcos generalmente navegaban entre 5 y 15 kilómetros mar afuera (aunque a veces infringían el límite de 5, que se había establecido por razones ecológicas) sobre una franja de aproximadamente 60 kilómetros hacia el este y noroccidente de Puerto El Triunfo. La mayoría de viajes duraba 12 días y exigía al menos 16 horas de trabajo diario y a menudo hasta 20 horas. En cada barco, tres marinos y un trabajador adicional botaban y recogían las redes de 20 metros de ancho en cada lado del barco cada cuatro horas.<sup>66</sup> Vaciaban las redes en la cubierta y procedían entonces a separar el pescado, el camarón y los chacalines. Mientras dos o tres de los marinos tiraban las redes de nuevo, el tercero (y a veces el “extra”) procedían con el trabajo engorroso de cortar las cabezas de miles de camarones antes de tirar el cuerpo en el tanque de salmuera.<sup>67</sup> Un mecánico (quien ganaba un 50% más que los otros) estaba a cargo del mantenimiento de los motores; también ayudaba con las redes y relevaba al capitán al timón. Uno de los marinos hacía de cocinero.

Cuando el barco llegaba al muelle en la Bahía de Jiquilisco, la tripulación debía esperar. A veces, los marinos ayudaban a los trabajadores del muelle a descargar el camarón y el pescado y se ganaban unos cinco colones adicionales. De todas maneras, el resto de la tripulación tenía que esperar hasta que se pesara el producto en el muelle; el agua y el hielo pegado a los camarones se descontaba. A los marinos se les daba 20-25 libras de pescado al

<sup>66</sup> Por lo general, cada viaje incluía uno o dos trabajadores adicionales. Estos trabajaban en realidad como aprendices sin sueldo, aunque recibían “propinas” del resto de la tripulación.

<sup>67</sup> Nadie ponía en entredicho la naturaleza masculina de esta labor a pesar de las similitudes con el trabajo de las obreras en la planta cuando le cortaban las cabezas al chacalín.

finalizar el viaje. El capitán designaba a uno de los marinos para que cuidara el barco durante 24 horas, por lo cual se le pagaban cinco colones. La tripulación recibía su sueldo al cabo de 6 a 24 horas de haber atracado y entonces debía estar lista para embarcarse de nuevo dentro de 48 horas.

Un equipo de trabajadores en tierra descargaba el camarón y limpiaba los tanques de salmuera. Con palas metían el camarón en unas tinas de metal, las cuales subían en unos camioncitos que se las llevaban a la planta, donde se pesaba el camarón de nuevo. Los trabajadores en el muelle y en el varadero representaban entre un 10 y 15% de la fuerza laboral. Debido a que tenían mucho contacto con los marinos, el SIP y el Sindicato Agua (el sindicato que se separó en 1971) competían entre sí para reclutar a estos trabajadores. La situación se complicaba por el estatus de “eventuales” con el cual estaban contratados los trabajadores del varadero. Es más, la división entre los sindicatos no era nada clara. Por ejemplo, el SIP representaba a los 59 marinos que trabajaban para Mariscos de El Salvador (1980) y a la mayoría de los marinos (incluyendo los capitanes) que trabajaban para Atrarraya.<sup>68</sup> Una mayoría considerable de los aproximadamente 200 marinos que trabajaban para las siete compañías afiliadas a Pezca S. A., pertenecían al Sindicato Agua. En términos jurídicos, Pezca S. A., era solamente una planta procesadora, pero sus dueños también eran dueños de suficientes acciones como para controlar las compañías pesqueras. Ese arreglo representaba ventajas fiscales para la compañía y sus accionistas.

<sup>68</sup> “Nómina de afiliados al sindicato de la industria pesquera subseccional por empresa Mariscos de El Salvador,” 1980 (Archivo General SIP); “Lista de salarios de los trabajadores de La Ballena S. A.,” 1973 (Archivo General SIP).

También les proporcionaba ventajas en sus relaciones laborales porque dividía aún más a la fuerza laboral.

También existía una competencia abierta entre los sindicatos. Durante la década de 1970, la SIP logró incursionar en las bases del Sindicato Agua, en buena medida debido a su ineficacia en las negociaciones. Por ejemplo, en febrero de 1976, Molina Lara informó a la asamblea de la SIP que 78 marinos se habían afiliado a la SIP porque “el sindicato hermano” se había negado a respaldar sus demandas.<sup>69</sup> Las relaciones todavía parecían amigables tal como lo sugiere el uso del vocablo “hermano”. En diciembre de 1976, Molina Lara alentó a los 500 miembros del SIP presentes para que ayudaran a fomentar lazos más estrechos con el Sindicato Agua. En términos similares, otro dirigente sindical pidió a sus miembros: “concientizar de mejor forma para que de una vez para todos consigamos la unidad de trabajadores pesqueros”.<sup>70</sup> Muchos trabajadores de planta y marinos percibían al Sindicato Agua como “patronalista” (pro-empresa) y corrupto. Desde su creación, el Sindicato Agua había dependido del fuerte apoyo brindado por los capitanes vinculados a Pezca S. A., y, a su vez, de los vínculos clientelares entre los capitanes y sus tripulaciones.

Aunque la competencia en torno a la membresía era una fuente de discordia entre los sindicatos, el estilo de vida machista de los marinos tendía a distanciar especialmente a las bases femeninas del SIP, algunas de las cuales estaban casadas o acompañadas con marinos. En esas unidades familiares, la mujer pertenecía a

<sup>69</sup> “Acta 22,” *Libro de actas*, 3 de febrero, 1976 (Archivo General SIP).

<sup>70</sup> Esta afirmación es del mismo momento cuando el sindicato informó que un número considerable de marinos afiliados al Sindicato Agua se habían cambiado al Sindicato Tierra. “Acta 24,” *Libro de actas*, febrero de 1977 (Archivo General SIP).

menudo al SIP y el hombre al Sindicato Agua. Muchos marinos racionalizaban su comportamiento machista en el Puerto como consecuencia de su trabajo. Los doce días en altamar, a menudo horribles y siempre agotadores, los condicionó, por así decirlo, a desempeñar su imagen estereotipada de un marino cuando llega a puerto. Tal como confesó un antiguo marino: “Éramos unos degenerados”.<sup>71</sup> La representación máxima de esta degeneración según recuerdan muchos de los trabajadores del Puerto era la presencia de pangas llenas de prostitutas cuando entraban los barcos camaroneros en la Bahía de Jiquilisco justo antes de atracar en el puerto. El pago en camarón a las prostitutas sólo agrega color a estos cuentos de corrupción.<sup>72</sup> Los residentes del Puerto, incluyendo las compañeras y los parientes, consideraban a los marinos como unos mujeriegos inveterados y alcohólicos compulsivos. “Muchas veces nosotros ni siquiera íbamos a nuestras casas, nos íbamos directo al bar, al billar o al burdel”. Otro comentó, “Nos merecíamos la diversión”.<sup>73</sup> Semejante comportamiento no fue bien recibido por muchas mujeres de familia y trabajadoras de planta. Un antiguo trabajador de planta dice con desdén: “Algunos patrones de barco tenían cuatro o cinco mujeres”.<sup>74</sup>

<sup>71</sup> Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, mayo de 2013.

<sup>72</sup> Casi todos los entrevistados recuerdan esta costumbre, incluyendo los marinos, Torres, Pérez y Escobar.

<sup>73</sup> Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013; Migdonio Pérez, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013; Ángel Escobar, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2016.

<sup>74</sup> Rolando Franco, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2015. Una versión similar se encuentra en Ana Paniagua, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, agosto de 2015.

## LA MOVIDA

Los patrones de barco (los capitanes) y las tripulaciones podían costear sus vicios gracias a “la movida”, es decir, unas ventas ilegales a “comerciantes pirata” en altamar o en playas deshabitadas. Esta práctica le permitía a los marinos ganar 400 a 800 dólares más por mes (a veces mucho más) por encima de los 100 dólares mensuales que usualmente percibían hacia finales de la década de 1970. La tajada del capitán a veces llegaba a los 2 000 dólares en algunos viajes. Esta forma única de resistencia surgió como un tipo de “seguro de vida” y también como respuesta ante la negativa de Pezca de indemnizar a los familiares de 10 marinos que perdieron la vida en el mar durante el ciclón de mayo de 1977. En palabras de un marino, “Aquí se muere uno y nadie responde, entonces me cobro el Seguro por adelantado”.<sup>75</sup>

Para los marinos existía una dimensión económica de tipo moral, fundamentada en un sentimiento de asimetría del riesgo y un cálculo de justicia económica. Arriesgaban sus vidas cada día cuando salían a pescar para llenar unos “tanques vacíos” de camarón; la empresa solamente “arriesgaba” el costo del alimento y el combustible.<sup>76</sup> Muchos marinos justificaban las ventas como una apropiación directa del valor de su trabajo y como una forma de resistencia ante un equipo de gerencia inhumano y rapaz.

Casi todos los marinos afirman que esta forma de resistencia se desarrolló a partir del ciclón. Pero Noé Quinteros y otros subrayan que esta práctica comenzó antes de 1977. La evidencia en los documentos apuntala sus planteamientos. Unos pescadores arte-

<sup>75</sup> Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, febrero de 2016.

<sup>76</sup> Migdonio Pérez, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013.

sanales llamados “murrayeros” se arrimaban a los barcos camaroneros para recibir obsequios de murraya, el pescado excedente de poco valor. Algunos de los murrayeros comenzaron a comercializar parte de la captura del camarón. En junio de 1975, Leonel Chávez denunció la contratación de agentes de policía conocidos como Asociación de Vigilantes de Industria y Comercio (en adelante AVIC) disfrazados como agentes de seguridad privados para que se hicieran cargo de este problema tan pequeño. En septiembre de 1975, Quinteros argumentó que los 47 agentes de AVIC (para los 39 barcos) representaban 400 colones mensuales para cada agente más su gasto de alimentación. En vez de botar el dinero, “La empresa debe aumentar los salarios de los trabajadores por la inflación”.<sup>77</sup> Para Quinteros, “la movida” se convirtió en una forma generalizada de resistencia como respuesta directa a la represión ejercida por la gerencia.<sup>78</sup>

Con independencia del origen exacto de “la movida”, después del ciclón, en palabras de Ruperto Torres: “Éste fue un estallido, todo mundo buscaba camarón”.<sup>79</sup> Hasta fines de la década de 1970, los trabajadores de las plantas empacadoras y su dirigencia sindical aceptaron esta práctica a regañadientes, debido en parte

<sup>77</sup> Su argumento era que Pezca estaba gastando dinero justo en momentos de niveles de producción extraordinariamente altos y también de fuertes inversiones en infraestructura y mantenimiento de la planta. No debían estar invirtiendo en unos niveles de vigilancia “(que) nunca se ha visto en todo el historial de la industria de la pesca”. Acta del sindicato, septiembre de 1975, núm. 11, p. 27, juego 75 (Archivos de la Subseccional Pezca).

<sup>78</sup> De acuerdo con Quinteros y otros, los agentes de AVIC se convirtieron después en parte de “la movida”. A otros se les amenazó para que se quedaran callados. Noé Quinteros, entrevista con el autor, Houston, 2014.

<sup>79</sup> Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, febrero de 2016.

a la indignación que compartían debido al comportamiento de la gerencia de Pezca después del ciclón. El ingreso adicional que recibían las compañeras y los familiares de los marinos atenúa cualquier oposición. Muchos llegaron a justificar “la movida” como una forma de apropiación directa del valor de su trabajo o una forma de resistencia. Según una activista sindical de una de las plantas empacadoras: “Bueno, después de llenar sus tinas para la empresa, los trabajadores merecían ganar lo que producían. No era robo”.<sup>80</sup>

Pero también había un lado más oscuro de “la movida”. Algunos oficiales de alto rango del ejército figuraban entre los comerciantes. Un ejemplo patente de complicidad militar en estas actividades ilegales ocurrió cuando un coronel despidió a dos agentes de la Guardia Nacional por haber capturado a los empleados de una de las principales operaciones “pirata”.<sup>81</sup>

Hacia fines de la década de 1970, las compañías comenzaron a buscarle solución urgente al problema de “la movida”. Por un lado, lanzaron una campaña publicitaria.<sup>82</sup> Culparon a los robos por el aumento de los precios del producto, pero curiosamente no señalaron directamente a los marinos. Más bien, agentes de la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda comenzaron a perseguir a los supuestos compradores y hostigar a la población local de pescadores artesanales con el argumento de que los comerciantes

<sup>80</sup> Virginia Reyes, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, mayo de 2012.

<sup>81</sup> Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013; Ovidio Granadeño, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2014; Adela Amaya, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013.

<sup>82</sup> “Las empresas pesqueras enfrentan el robo continuo del camarón en sus mismas embarcaciones, robos que perjudican a las empresas y al público y al país por aquello de que el Fisco deja de percibir impuestos”, en *El Diario de Hoy*, 13 de febrero, 1979.

piratas provenían de ese sector.<sup>85</sup> Los pescadores artesanales denunciaron “una verdadera cacería” contra ellos. Los agentes no solamente capturaron a algunos pescadores artesanales a quienes encontraron camarón, sino que también extorsionaron a otros, exigiéndoles camarón o dinero.<sup>84</sup>

Las empresas percibían a los pescadores artesanales como una molestia, especialmente cuando los barcos de las empresas violaban el límite de 5 kilómetros mar afuera, que estaba reservado para los pescadores artesanales o cuando accidentalmente capturaban larvas de camarón en los manglares de la Bahía de Jiquilisco. La respuesta de los pescadores artesanales ante la represión representó un momento histórico definitivamente adverso para los dueños. Un grupo de pescadores se hicieron presentes en las oficinas de un periódico de oposición, diciendo que representaban a 15 000 más, quienes habían pescado por generaciones en las aguas de Jiquilisco y en los mares costeros. Los “monopolios” junto con el régimen estaban decididos a quitarles sus medios de vida.

Quiénes son los ladrones? Si ellos consideran que el mar y sus productos fueron hechos por Dios para todos los humanos o estos empresarios que creen que tienen escrituras firmadas por a saber quién para sentirse dueños absolutos del mar.<sup>85</sup>

Este discurso sobre el derecho natural puede que haya existido durante generaciones como una “hidden transcript” [norma oculta] entre los pueblos del mar en la Bahía de Jiquilisco. Sin embargo, en un contexto en el Puerto de tensiones entre clases

<sup>85</sup> *La Crónica*, 23 de enero, 1979.

<sup>84</sup> *Loc. cit.*

<sup>85</sup> *Loc. cit.*

intensificadas, estos pescadores pudieron expresar públicamente este discurso antimonopólico. Existía interacción y algún traslape entre los pescadores artesanales que vivían en caseríos alrededor de la Bahía de Jiquilisco y los marinos y trabajadores de Puerto El Triunfo. Algunos marinos de Pezca también pescaban en Jiquilisco en forma artesanal. Por lo tanto, las luchas obreras seguramente tuvieron un impacto en los pescadores artesanales, como también los tuvieron las luchas campesinas que estaban proliferando en el departamento de Usulután. Para las compañías, estos harapientos pescadores artesanales y su retórica radical agregaban todavía otra dimensión al antagonismo de clases cada vez más enconado.

\* \* \* \* \*

La conciencia y las acciones de la clase trabajadora de Puerto El Triunfo cambiaron sustancialmente entre 1970 y 1977. En primer lugar, el nivel de participación en los sindicatos aumentó de manera dramática, pasando de menos de 200 asistentes en las asambleas del SIP General a más de 500. Las asambleas de la subseccional tuvieron aumentos similares. Las asambleas más grandes eran reflejo naturalmente del incremento de la membrecía del sindicato, especialmente mujeres, en las plantas empacadoras. En vista de que la legislación salvadoreña no permitía la sindicalización obligatoria, un incremento de la membrecía del sindicato dependía de la capacidad para persuadir a los no afiliados.

Durante la década también se vivió un incremento sustancial de la actividad femenina en los sindicatos. Por cierto, las mujeres ocuparon puestos de dirección, especialmente en las subseccionales y participaban activamente en las reuniones sindicales, a menudo presionando a sus compañeros masculinos a adoptar pos-

turas más militantes. Por ejemplo, Victoria Ventura exclamó en una asamblea del sindicato: “¡Hay que ser valientes! ¡No dejemos que los patrones se salgan con la suya! ¡Que no se dejen dominar por los patrones!”<sup>86</sup> Su participación y militancia eran parte de un proceso mediante el cual las trabajadoras estuvieron en capacidad de articular y resolver sus reivindicaciones que eran de particular importancia para ellas, como los puestos de primeros auxilios (para las que pelaban el chacalín), mientras ejercían un mayor control simultáneamente sobre el proceso de producción. Es más, fueron capaces de crear formas democráticas de sociabilidad en el área de trabajo que les ofrecían todos los días unos vistazos a un tipo de sociedad diferente. Las trabajadoras, especialmente las del turno nocturno, bromeaban y jugaban. Expresaban un nuevo sentimiento de poder que mantenía a raya a la gerencia.

Este sentimiento de liberación no se tradujo en una transformación total de la familia. Los maridos y los padres seguían ejerciendo un fuerte control patriarcal y las trabajadoras con frecuencia se resistían a esas venerables cadenas, en particular lo que tenía que ver con las finanzas. El conflicto de género alcanzó niveles altos de intensidad en el caso de los cónyuges que eran marinos. La violencia doméstica ocurría con cierta frecuencia.<sup>87</sup> Un porcentaje significativo de mujeres se divorciaron o permanecieron solteras, confiadas de que sus salarios respaldados por el sindicato y el apoyo de sus familias extendidas les permitirían sobrevivir con dignidad, al igual que sus familias.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> “Acta 35,” *Libro de actas*, 19 de abril, 1979 (Archivos de la Subseccional Pezca).

<sup>87</sup> Ana Paniagua, entrevista con el autor, Montreal, 2016.

<sup>88</sup> Desafortunadamente, no existen estadísticas de este periodo sobre madres solteras en el nivel municipal. En el nivel nacional, una minoría de mujeres

Esta transformación de conciencia también supuso un elemento político cada vez más relevante, a pesar de que fue circunscrita en gran medida por una idea muy arraigada de sindicalismo. Como veremos en el Capítulo 2, la clave conceptual para la transformación se encuentra en los conceptos de interés y solidaridad. Durante el transcurso de la década, los trabajadores de las plantas ampliaron el significado de estos términos de tal suerte que un número cada vez más grande de trabajadores comprendieron que la represión del Estado o de los patronos contra los trabajadores sindicalizados en otras partes del país era un ataque contra su interés propio. Los contactos de la dirigencia sindical con organizaciones de izquierda, por medio de su participación en la federación sindical FENASTRAS, propició la ampliación de esos significados. Es más, introdujeron un vocabulario de sindicalismo militante a las discusiones entre trabajadores.

El análisis que hace Deborah Levinson del movimiento obrero guatemalteco hacia fines de la década de 1970 es pertinente para este breve momento de la historia de la clase obrera salvadoreña, justo antes de que el destino de los trabajadores se viera entrelazado con el movimiento revolucionario. Levinson escribe:

Si bien es cierto que no tenían un programa revolucionario, los sindicalistas dieron a conocer posibilidades excepcionales de un ser y un accionar social de corte radical. Querían vivir más allá de los límites reales, y se abocaron a la creación de un mundo de resistencia que no era proyecto ni propiedad de nadie más, una sociedad alternativa

---

adultas estaban casadas pero eso no nos dice mucho acerca de las madres solteras, porque existían muchas mujeres que vivían acompañadas. Casi todos los informantes sugieren que la mayoría de madres eran solteras.

preocupada siempre por los detalles para oponerse conscientemente al barbarismo que la amenazaba.<sup>89</sup>

Las luchas de las trabajadoras del Puerto fue similar a las que se daban en otros países, en tanto contribuían dramáticamente a la defensa del sindicato cuando se encontraban bajo amenaza. Tal como escribe Greg Grandin, “En Guatemala, así como en otros lugares, durante momentos de crisis, la segregación institucionalizada entre lo público y lo privado se derrumbó y las mujeres se hicieron cargo de lo que a menudo fue una defensa agresiva de sus comunidades”.<sup>90</sup> Mujeres como Gloria se mantuvieron dentro del sindicato hasta que la muerte les fijó la vista.

Las experiencias de Puerto El Triunfo fueron reflejo de transformaciones más amplias en la sociedad salvadoreña y, por lo tanto, nos permiten reconocer el proceso de movilización y radicalización obrera, en otras partes del país. La narrativa tradicional de una represión estatal, que termina radicalizando a las organizaciones populares resulta cierta en el Puerto pero solamente hasta cierto punto. No hay duda que el asalto de la Guardia Nacional a las oficinas del sindicato en 1977, cuando se proyectaba el documental soviético radicalizó en alguna medida a los afiliados. Sin embargo, éste fue un incidente aislado hasta diciembre de 1980. Más bien, la transformación del sindicato fue en respuesta principalmente a factores endógenos, especialmente la lucha entre trabajadores y dueños en torno a salarios, condiciones en las plantas y derechos laborales. A la vez, la transformación fue extremadamente desigual en tanto que sectores significativos de

<sup>89</sup> Levenson-Estrada, *op. cit.*, p. 141.

<sup>90</sup> Greg Grandin, *The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War*, Chicago, University of Chicago Press, 2004, p. 137.

los sindicatos del Puerto siguieron siendo políticamente conservadores, afines a los gerentes y hostiles a las ideas de solidaridad e igualdad. Y un sector clave de la fuerza laboral, el de los marinos, se mantuvo apático en el mejor de los casos frente a los llamados del SIP demandando solidaridad.

Los éxitos del SIP, cuando se miden en términos del aumento real de salarios y unas mejores condiciones y beneficios laborales, habrían sido inconcebibles sin el surgimiento de un grupo de líderes insurgentes a comienzos de la década de 1970 y su disposición de aceptar un tipo de profeminismo que comenzaba a emerger entre algunas de las trabajadoras. No obstante, el éxito de estos líderes acarreó, como hemos visto, la creación de nuevas relaciones de dependencia, si bien radicalmente diferentes de las anteriores relaciones de clientelismo entre líderes y bases sindicales. Esa dependencia creó, al mismo tiempo, un sentimiento de ambivalencia entre las bases sindicales sobre las ideas y las acciones que provenían desde arriba. A la vez, sin embargo, las trabajadoras se incorporaban cada vez más a la dirección sindical, que les permitía introducir nuevas preocupaciones e ideas al debate sindical.

Como veremos en el Capítulo 2, los años de 1978 y 1979 resultaron ser el momento culminante de la movilización y militancia sindical cuando, en términos proporcionales, El Salvador se ubicó en segundo lugar después de Brasil como el país con mayor actividad huelguística. Es más, como una muestra única de su militancia, los trabajadores salvadoreños ocuparon más fábricas que cualquier otro país del continente. Y los trabajadores del Puerto desempeñaron un papel principal. Las mujeres recientemente movilizadas y los líderes insurgentes de Puerto El Triunfo habrían de comprobar su temple en la medida que fueron arrastrados hacia el ciclo —violento y rápido— de represión estatal y resistencia popular.

## 2. EL PRECIO DE LA SOLIDARIDAD. EL MOVIMIENTO SINDICAL SALVADOREÑO EN PUERTO EL TRIUNFO Y EN EL GRAN SAN SALVADOR, 1979-1980

Tomábamos turnos, algunos encargados de la seguridad, vigilando por las amenazas de la policía, de la guardia nacional o de los escuadrones de la muerte. Recuerdo que tenía la sensación doble —era tan emocionante escuchar y cantar las canciones revolucionarias— todos los activistas y trabajadores se llevaban bien. Los niños corriendo por todas partes. Estábamos llenos de furia y de gozo. Pero también llenos de miedo, ansiosos [...] ya que los escuadrones de la muerte estaban en todas partes.

FIDEL CAMPOS al referirse a la toma de la planta.

Les dije [a ERP] que en el futuro, si ustedes ganan van a necesitar trabajadores y nos deberán de tratar como trabajadores.

NOÉ QUINTEROS

Dentro de cada obrero hay un sindicalista que intenta tomar cuerpo.

ERIC HOBSBAWM

## TRABAJANDO BAJO ASEDIO

El 10 de noviembre de 1977, unos 1 500 activistas del Bloque Popular Revolucionario (en adelante BPR) se reunieron en el Mercado Central de San Salvador. El régimen militar había impedido anteriormente su intento de manifestarse en el Parque Cuscatlán en apoyo a dos huelgas de los obreros de la industria textil. Bajo el amparo de la muchedumbre que compraba, trabajaba y se congregaba en torno al Mercado Central, la organización de la izquierda radical montó una manifestación “relámpago” y después marchó hacia el Ministerio de Trabajo a pocas cuadras de distancia. Cerraron la calle frente al ministerio y colocaron altoparlantes. Cuando algunos de los activistas vieron que los agentes de seguridad estaban cerrando las puertas, se abalanzaron a ocupar el edificio. A pesar de estar desarmados lograron tomar como rehenes a 100 empleados, incluyendo al Ministro de Trabajo y al Ministro de Economía. Hicieron un llamado al Ministro de Trabajo para que interviniera a favor de los sindicatos y que aumentara el salario mínimo de 6.20 colones a 11 colones (4.40 dólares) por día. Después de 48 horas, con la promesa del ministro de que intervendría, los activistas del BPR abandonaron el edificio.<sup>1</sup> Al otro

<sup>1</sup> El BPR fue fundado en 1975 como resultado de una escisión del Frente de Acción Popular Unificada (en adelante FAPU), que había sido fundado en 1974. El BPR logró una presencia mucho más grande en las zonas rurales; desarrolló unas federaciones de campesinos y trabajadores agrícolas. *El Diario de Hoy*, 22 de noviembre, 1977.

extremo de la ciudad, unos trabajadores sindicalizados tomaron la empresa Eagle International, una fábrica de guantes de propiedad estadounidense para protestar contra los salarios bajos y la represión antisindical. Unos activistas del sindicato no alineados con el BPR mantuvieron como rehenes a tres ciudadanos estadounidenses durante 24 horas. La respuesta del régimen fue inmediata. En palabras de un observador de la embajada de Estados Unidos:

Estos dos incidentes (las tomas y las huelgas) fueron algunos de los factores que provocaron al gobierno para que decretara la Ley de defensa y garantía del orden público, que entre otras de sus provisiones prohibía las huelgas y las manifestaciones. Una presión cada vez más fuerte que ejercieron la élite de los ricos y los militares fue un factor coadyuvante [...]. Por lo tanto, los disturbios laborales han sido factores significativos para que se aprobara la ley.<sup>2</sup>

El estado de sitio, declarado en noviembre de 1977, se mantuvo hasta febrero de 1979. A pesar de la prohibición de “interrupciones de actividad productiva”, los trabajadores llevaron a cabo al menos 29 huelgas durante 1978. La misma ilegalidad de las acciones propició formas aún más militantes de actividad por parte de los trabajadores, incluyendo muchos casos de ocupaciones de fábricas. Tal como señaló el mismo observador de la actividad laboral en la embajada estadounidense:

<sup>2</sup> US Embassy to State Department, “Annual Labor Report-Part II: El Salvador’s Urban Union Movement since August 1977”, airgram, 11 de mayo, 1979, ES00131, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, Collection, p. 4 (Digital National Security Archive [en adelante DNSA], George Washington University, Washington, DC).

Mientras que antes el método usual de negociación de un sindicato era presentar un pliego de demandas que serían discutidas a continuación con la patronal con la idea en mente de llegar a un acuerdo [...] las tácticas de ciertos sindicatos afiliados al BPR o al FAPU era la de presentar una propuesta de negociación inicial, cerrarse en torno a ella, y proceder a realizar huelgas [...] (incluyendo) la toma directa de las fábricas y la retención de los representantes de la patronal como rehenes.<sup>3</sup>

Los activistas del BPR y del FAPU, de acuerdo con el mismo informe, ofrecían su apoyo a los huelguistas en sindicatos no controlados por la izquierda para después promover tácticas más militantes.

El movimiento obrero liderado por la izquierda creció de manera exponencial durante 1979. La mayoría de huelgas tenían que ver con la defensa del derecho de organización y la resistencia ante una reducción del 9% del salario real desde 1975. Alrededor del 80% de las huelgas incluían la demanda para que se volviera a contratar a los activistas de un sindicato que habían sido despedidos o para que se despidiera a los empleados de la patronal contrarios al sindicato. El éxito relativo de los sindicatos creó un efecto demostración y para fines de año los trabajadores habían llevado a cabo al menos 103 huelgas que involucraron a unas 30 000 personas, además de muchos más paros laborales con la participación aun de más trabajadores.<sup>4</sup> Casi 20% de los obreros industriales participaron en actividades huelguistas. Una “minoría militante” en crecimiento, por citar al historiador del movimiento obrero, David Montgomery, impulsó al movimiento. Cuando escribió

<sup>3</sup> *Ibid.*, p. 6.

<sup>4</sup> Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT), LABORSTA.ilo.org.

acerca del movimiento sindical estadounidense de comienzos del siglo xx, Montgomery planteó que:

Los activistas de la clase obrera, y algunos individuos de otros estratos sociales quienes vincularon sus aspiraciones al movimiento obrero, lucharon sin cesar por fomentar un sentimiento de unidad y dirección entre sus compañeros trabajadores [...]. Compartieron sus análisis de la sociedad y los caminos para lograr “la emancipación de los trabajadores” [...] la “minoría militante”: los hombres y las mujeres que se empeñaron en fusionar a sus compañeros de trabajo y sus vecinos para conformar una clase obrera con conciencia propia y vocación.<sup>5</sup>

Aunque los activistas revolucionarios desempeñaron un papel mucho más grande en el movimiento salvadoreño que en el estadounidense, la idea de Montgomery de una minoría militante capta parte de los valores y las potencialidades inherentes de aquél, especialmente en el área del Puerto. En el Capítulo 1, examinamos el núcleo de la minoría militante en el Puerto. En este capítulo, ampliaremos el análisis hasta incluir a la zona metropolitana de San Salvador.

La mayor parte de las versiones de izquierda de este periodo entienden el crecimiento del movimiento laboral de izquierda como el resultado de la aplicación de ideas correctas a la realidad proletaria: la de unos militantes valientes que combaten las fuerzas de la represión y la patronal con tácticas exitosas que revelan las estructuras del capitalismo e imperialismo al mismo tiempo

<sup>5</sup> El término tuvo su origen entre los sindicalistas de comienzos del siglo xx. David Montgomery, *The Fall of the House of Labor: The Workplace, the State, and American Labor Activism, 1865-1925*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 2.

que conquistan ventajas materiales para los obreros sindicalizados. Este capítulo examinará en más detalle las causas y cualidades del crecimiento y la radicalización del movimiento obrero. Sugeriré que las nuevas formas de conciencia que emergieron en la clase obrera urbana fueron ciertamente radicales, pero no se apegaron necesariamente a cualquier noción ideológica preconcebida. Por cierto, un examen detallado del movimiento obrero en el Puerto y el gran San Salvador presenta un cuadro turbio en el cual los vocablos clase, conciencia de clase y hasta sindicato pierden algo de su coherencia.<sup>6</sup>

El vínculo ideológico común que unía a los obreros del Puerto con el movimiento en San Salvador fue un sindicalismo clásico, aunque rudimentario, que no tenía expresión formal, ni local o nacional. Eric Hobsbawm, cuando valora la utilidad del término para perfilar a la insurgencia de las bases en Inglaterra durante la década de 1970, afirma que las principales características del sindicalismo de comienzos del siglo XX incluyó lo siguientes: una actitud hostil ante los patronos y toda burocracia, incluyendo los partidos políticos; unos valores productivistas (otorgarles un valor supremo a los que producen los bienes); la importancia de la militancia espontánea, echando mano de cualquier táctica para golpear al adversario; una estrategia que descansaba sobre una

<sup>6</sup> El término sindicalismo en inglés se refiere a una tradición radical en Inglaterra que se aproximaba al sindicalismo revolucionario en Francia. Utilizamos el adjetivo “clásico” para tal tendencia analizada por Hobsbawm. La flexibilidad del uso del término “sindicato” se refiere al papel que jugaron las organizaciones populares (en adelante OP) de tinte multclasista que a menudo actuaban como sindicatos durante momentos de luchas intensas. El término de OP se empleaba comúnmente para referirse al BPR, FAPU y las más pequeñas Ligas Populares 28 de Febrero.

proliferación de las huelgas, culminando con una huelga general; y una esperanza de que los trabajadores tomarían control de las industrias. La evidencia que se presenta en este capítulo sugiere que los movimientos local y nacional a fines de la década de 1970 en El Salvador reflejaban algunas de las actitudes, técnicas y estrategias del sindicalismo clásico, mas no necesariamente sus esperanzas. No obstante, esas figuras ideológicas no pasaron de ser expresiones incipientes. Es más, los sindicalistas de El Salvador tuvieron que bregar con condiciones autoritarias y cada vez más terroristas, que habrían sido inimaginables para los fundadores de esta tradición de lucha. Las capturas, las torturas y los asesinatos no sólo provocaron una respuesta militante, sino que también impusieron la necesidad de obrar semiclandestinamente, todo lo cual dificultó mucho la implementación plena de la democracia de las bases —un *sine qua non* del sindicalismo clásico.

La disyuntiva entre los valores sindicales y las expresiones ideológicas formales en el Puerto y la capital tuvieron varias consecuencias. Conllevaron a malentendidos y alienación entre grupos diferentes. Pero al mismo tiempo, estos variados juegos dialécticos entre discursos formales e informales, entre las bases y el liderazgo, y entre el Puerto y la metrópoli, todos desempeñaron papeles significativos en el auge militante y expansivo del movimiento obrero. En su afamado estudio, *Resistance and Integration* [Resistencia e integración], Daniel James escribió:

Los principios del peronismo, más formales y validados por la tradición, fueron ciertamente [...] una presencia importante en la cultura de la clase obrera [...]. En vez de una separación, de una operación rígida, nos enfrentamos a una tensión, tanto explícita como implícita entre los dos [formal e informal]. La misma tensión estaba relacionada con una tensión siempre presente entre la realidad vivida, y la

“conciencia práctica” que generó, y los valores particulares de una ideología formal.<sup>7</sup>

Este capítulo le seguirá la pista a las tensiones dentro de la transformación más amplia de las relaciones laborales, mientras presenta un examen detallado de los cambios en los sindicatos del Puerto, una historia bastante diferente de aquella del área metropolitana que, no obstante, reflejó, influyó y operó en paralelo con el movimiento obrero nacional. La solidaridad y la discordia dejaron su huella en los movimientos tanto locales como nacionales.

#### CAMINO A LAS MAQUILAS

La industria salvadoreña experimentó un periodo de crecimiento sostenido en la década de 1960, impulsado por la estrategia de sustitución de importaciones al amparo del Mercado Común Centroamericano; la producción industrial aumentó de un 13% a un 18% de PIB durante la década. Pero entonces la industria salvadoreña sufrió dos golpes que afectaron el desarrollo del movimiento obrero. Primero, el Mercado Común Centroamericano se disolvió después de la guerra entre El Salvador y Honduras en 1969. Después, la crisis del petróleo de 1973 también afectó negativamente a la industria, especialmente al aumentar el costo de los insumos industriales. No obstante, las empresas estadounidenses y del Asia oriental aumentaron sus inversiones en la industria salvadoreña, especialmente en el área de productos intermedios y el sector de maquilas. Durante la década de 1970, la inversión directa de Estados Unidos en la industria salvadoreña era de 124 millones de

<sup>7</sup> Daniel James, *Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class, 1946-1976*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 94.

dólares, la mayor parte en textiles, productos químicos, electrónica y maquinaria eléctrica; un 75% de la inversión nueva fue producto de inversiones mixtas con socios locales.<sup>8</sup> Los líderes de la industria salvadoreña provenían casi exclusivamente de la vieja élite agroexportadora. Aunque al comienzo habían concentrado sus operaciones en beneficios de café e ingenios de azúcar, este grupo diversificó sus inversiones en la década de 1960 y estaba preparado para aliarse con inversionistas estadounidenses en la década de 1970. Si bien es cierto que algunos académicos han subrayado con toda razón las diferencias políticas entre la élite agroindustrial más progresista y la élite agraria tradicional más reaccionaria, aquella no manifestó una actitud particularmente tolerante frente a los sindicatos obreros.<sup>9</sup>

Después de la mengua del Mercado Común, el gobierno salvadoreño invirtió cuantiosos fondos en la creación de una zona franca en San Bartolo, un suburbio industrial a pocos kilómetros al este de la capital. Esta nueva estrategia de industrialización no logró resolver de manera significativa el problema perenne del desempleo, intensificado por las migraciones rurales a la urbe provocadas por el incremento masivo de la población sin tierra. Alrededor de un 40% de la población urbana padecía desempleo o subempleo; este ejército de reserva de mano de obra deprimió los salarios y proporcionó rompehuelgas en potencia a las empresas. En la zona franca, los sindicatos obreros se enfrentaban a medidas de seguridad severas, a normas hostiles y a todavía más poder de

<sup>8</sup> Esto tenía que ver a menudo con la compra de plantas industriales ya existentes. Los únicos sectores dinámicos enteramente salvadoreños en ese momento fueron las bebidas y el cemento.

<sup>9</sup> Véase Jeffrey Paige, *Coffee and Power: Revolution and the Rise of Democracy in Central America*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1998.

la patronal. Por lo tanto, los sindicatos solamente pudieron organizar a los obreros en contadas fábricas nuevas en San Bartolo. Sin embargo, lograron una fuerte presencia en otras maquilas de propiedad extranjera fuera de la zona franca. Las maquiladoras no pagaban impuestos sobre la maquinaria o la materia prima que importaban, y generalmente se dedicaban al ensamblaje final del producto. Como habrían de darse cuenta los dueños hacia finales del año, 1979, las maquilas podrían reubicar sus fábricas con relativa facilidad debido a su uso intensivo de mano de obra.

#### LA PERSPECTIVA DESDE EL PUERTO

Desde octubre de 1978 hasta febrero de 1979, el sindicato de 1 000 trabajadores de las empacadoras en Puerto El Triunfo se movilizó exitosamente a favor de aumentos de sueldos, mejoras en las condiciones de trabajo y el despido de supervisores represivos.<sup>10</sup> Tal como se observó en el Capítulo 1, unas divisiones sectoriales profundas en la fuerza laboral se oponían al éxito de los sindicatos. Con el liderazgo de Alejandro Molina Lara, el Sindicato de la Industria Pesquera (en adelante SIP) elaboró un discurso efectivo para organizar a la fuerza laboral mayormente conservadora ante las empresas poderosas de propiedad oligárquica respaldadas por el aparato represivo del régimen militar.

En octubre de 1978, Molina Lara asistió a un seminario sobre sindicalismo obrero en Costa Rica.<sup>11</sup> Cuando volvió a Puerto El Triunfo, se enojó cuando le informaron que el SIP había firmado

<sup>10</sup> El SIP reportó una membresía nacional de 2 000 en 1980, un número que también reflejó sus afiliados en Puerto El Triunfo.

<sup>11</sup> Molina Lara fungía entonces como el Secretario de Educación del sindicato.

un acuerdo con Pezca S. A., que renovaba su contrato por un año más.<sup>12</sup> De acuerdo con el Código de Trabajo, el sindicato estaba en capacidad de renegociar un contrato de dos años después de pasado un año si las circunstancias económicas habían cambiado significativamente; de hecho, la tasa de inflación subió a un 13% en 1978.

En vez de continuar con las negociaciones, el secretario general, Leonel Chávez, obtuvo un compromiso de la empresa de aumentar las horas extra. Este acuerdo irritó aún más a Molina Lara y otros, porque la empresa adeudaba a sus trabajadores un año de salarios acumulados por horas extra, un punto que no fue mencionado en absoluto por la empresa o por Chávez.

En octubre, Chávez fue promovido en Pezca al cargo de auxiliar de jefe de producción, un puesto gerencial de nivel medio que se consideraba como “empleado de confianza”, una categoría que no era compatible con un cargo en la directiva sindical. Por lo tanto, la junta directiva exigió y recibió su renuncia.

Dos semanas más tarde, Alejandro Molina Lara ganó la elección para el puesto de secretario general en una victoria aplastante de 500 contra 4, lo que anunciaba una nueva fase de movilización obrera en el Puerto, que duraría hasta marzo de 1979. El voto representó una aprobación de sus tres años anteriores en la directiva del sindicato (febrero de 1975-febrero de 1978) y anunciaba tanto

<sup>12</sup> Cuando se ausentó para asistir al seminario, el comité del sindicato había estado renegociando el contrato. El año anterior, Leonel Chávez, entonces Secretario de Organización (Molina Lara se desempeñaba como Secretario General por tercer año consecutivo), había dicho que esperaba que la inflación no aumentara mucho, porque pensó que el sindicato estaba comprometido a respetar el acuerdo de dos años. Pero sus esperanzas quedaron truncadas cuando la tasa de inflación alcanzó un 13% en 1978.

el rechazo a Chávez, como su acuerdo con Pezca S. A., de extender el contrato vigente.<sup>15</sup>

Para Molina Lara, Noé Quinteros y la mayoría de miembros del sindicato, los problemas con Chávez consistían en sus deficientes habilidades de negociación (“no tenía madera”) y su incapacidad para consultar con las bases.<sup>14</sup> Es más, la coincidencia de su ascenso en el trabajo y su fracaso en las negociaciones resultaba muy obvio. Un boletín del SIP de fecha 13 de noviembre afirmó que: “Por bajas monedas nos vende este ex dirigente sindical”. Molina Lara lo calificó como “traidor a nuestra causa” y “traidor hipócrita” quien firmó el documento “a espaldas de todos”.<sup>15</sup>

Este lenguaje de honor y engaño fue parte íntegra del discurso de movilización del SIP. Gloria García señaló que las acciones y las palabras de Pezca combinaban “una burla y un engaño” y dejaban en claro la total falta de respeto hacia los trabajadores sindicalizados.<sup>16</sup> El ofrecimiento de la empresa de aumentar las horas extras

<sup>15</sup> Es difícil estimar el porcentaje de la fuerza laboral que asistía a las reuniones en vista de que un número fluctuante de trabajadores eran “eventuales” o “supernumerarios”, es decir, personas que trabajaban ocasionalmente pero no por temporada y que no pagaban cuotas al sindicato. La fuerza laboral de trabajadores permanentes y estacionales de planta y mantenimiento rondaba los 1 000-1 100 en los tres establecimientos. Ahora bien, dentro del año eran cerca de un mil los que asistían a las asambleas generales del SIP.

<sup>14</sup> Aunque Molina Lara participó activamente en la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (en adelante FENASTRAS), a su vez aliada al FAPU, un grupo radical muy contrario al Partido Comunista Salvadoreño (en adelante PCS) (al que consideraban “revisionista”), no se hizo referencia alguna a la afiliación política comunista de Chávez en las discusiones en el sindicato.

<sup>15</sup> “Acta 28,” *Libro de actas*, 13 de noviembre, 1978 (Archivo General del SIP, Puerto El Triunfo, Usulután, El Salvador).

<sup>16</sup> En reconocimiento por su vigorosa intervención en torno al asunto de Chávez y por sus actividades sindicales anteriores, la membresía de la seccional

se dio cuando la época del chacalín (el más pequeño y abundante tipo de camarón), que era la principal fuente de ingresos por tiempo extra de los trabajadores de la planta, ya había prácticamente terminado. En un informe sobre las negociaciones preliminares en San Salvador, otro de los representantes del SIP contó cómo el representante de la compañía, el gerente general Cuellar Morán, ofreció un aumento de 5 centavos. Y hasta tuvo la temeridad de burlarse de ellos cuando dijo: “fue así como nosotros fuimos agarrando más calor de valentía”. Los representantes del sindicato respondieron con una exigencia de aumento de 2.40 colones diarios (0.96 de dólar al cambio de entonces) y más prestaciones, especialmente subsidio por enfermedad. Otro representante del sindicato entonces comentó sobre cómo tuvieron que luchar extremadamente duro porque “habían sufrido burlas y humillación a pesar de que exigían sus derechos”.<sup>17</sup> El 14 de diciembre, el equipo del SIP logró una gran victoria: un aumento de 1.56 colones diarios, un incremento del subsidio por enfermedad, el pago de seis meses de salarios por tiempo extra atrasados y un mayor control sobre los supervisores en las plantas. Cuando saludó la victoria, uno de los activistas del SIP se refirió al “valor” del comité.<sup>18</sup>

---

de Pezca la escogió para integrar el comité negociador en representación de los trabajadores de la empacadora en la Planta núm. 2 (especializada en chacalín). “Acta 32,” *Libro de actas*, 21 de octubre, 1978 (Archivos de la Subseccional Pezca, Puerto El Triunfo).

<sup>17</sup> Uno de los negociadores afirmó que la confrontación fue tan intensa al grado de que a uno de los hombres que negociaba “se le llenaron los ojos de lágrimas”. “Acta 33,” *Libro de actas*, 16 de diciembre, 1978 (Archivos de la Subseccional Pezca).

<sup>18</sup> *Ibid.*; Gloria García, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2015; Gloria García, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2016. Gloria ofrece versiones contradictorias sobre las negociaciones. En una de las entrevistas que utilicé en mi

El lenguaje cargado de emociones sobre el honor y las humillaciones podría apuntalar las jerarquías patriarcales y la opresión en la familia y, al mismo tiempo, motivar a las personas para que se rebelaran.<sup>19</sup> En el Puerto, este tropo poderoso se infiltró en el lenguaje de las mujeres y los hombres en la medida que se enfrentaban al mismo perpetrador de la humillación. Aunque el significado de honor y humillación podría haber variado, Gloria y sus compañeros en la mesa de negociación, al menos, sintieron el aguijón de la arrogancia y de los prejuicios. Es más, trasladaron la experiencia de la negociación como una forma de lucha. En la mesa, batallaron con palabras y se resistieron ante el poder lingüístico-cultural del equipo de la patronal. Se sintieron empoderados porque la movilización llegó a tal nivel que pudieron suponer que las bases estaban prestas para irse a la huelga en caso necesario. Tal como se dirigió uno de los militantes a los 295 trabajadores de

---

película *Port Triumph*, ella se refiere a negociaciones con un gerente diferente, Varela Cañas, quien se burló de ellos en términos más serios cuando habló de escuadrones de la muerte que les esperaban a la salida del Ministerio de Trabajo. Es posible que haya confundido las negociaciones que ocurrieron en 1980, cuando las actividades de los escuadrones de la muerte eran generalizadas, con aquellas en que participó —y también sufrió humillación— durante diciembre de 1978. También es muy probable que Varela Cañas haya estado presente en las negociaciones de 1978.

<sup>19</sup> Véase Steve J. Stern, *Secret History of Gender: Women, Men and Power in Late Colonial Mexico*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1995; Arlene Diaz, *Female Citizens, Patriarchs, and the Law in Venezuela, 1786-1904*, Lincoln, University of Nebraska Press, 2004; Sueann Caulfield, Sarah Chambers, y Lara Putnam [eds.], *Honor, Status, and Law in Modern Latin America*, Durham, NC, Duke University Press, 2005. Escribí sobre este tema en Jeffrey L. Gould y Aldo Lauria-Santiago, *To Rise in Darkness: Revolution, Repression, and Memory in El Salvador, 1920-1932*, Durham, NC, Duke University Press, 2008, cap. 5.

Pezca presentes en una reunión de la seccional del sindicato: "...a pesar de esto fueron ustedes que tomaron la decisión de tomar medidas necesarias para reunir a la comisión negociadora".<sup>20</sup>

Debe destacarse que Molina Lara —con sus siete años de experiencia en negociaciones— no estaba presente porque se encontraba aconsejando a los obreros en huelga de una cantera. A diferencia del equipo negociador, rebosaba de confianza al sentir que encarnaba el poder de los trabajadores organizados; sentía alegría en vez de humillación en la mesa de negociación.<sup>21</sup> No obstante, compartía el lenguaje del honor de los demás trabajadores; recuérdese como acusó repetidamente a Leonel Chávez de traicionar la confianza depositada en él y a la patronal de Pezca de engañar a los trabajadores. También denunció a Pezca en los siguientes términos:

"[...] había sido humillado por los poderados de la empresa [...]"<sup>22</sup>

La defensa del honor contemplaba un elemento de género que reflejaba la experiencia cotidiana de las trabajadoras de la planta cuando se esforzaban por mantener una pizca de dignidad en un trabajo que provocaba irrespeto a menudo por la misma naturaleza del trabajo y por vivir en un pueblo señalado por promiscuo. Los prostíbulos improvisados a la orilla de los manglares intensificaban la hedentina de corrupción en la comunidad en tanto que abundaban las acusaciones de que las trabajadoras de las plantas complementaban sus ingresos en las champas. Aun cuando no se sintieran afectadas por esa mancha, tal como se expresó una trabajadora, "uno iba al

<sup>20</sup> "Acta 33," *Libro de actas*, 16 de diciembre, 1978 (Archivos de la Subseccional de Pezca).

<sup>21</sup> Alejandro Molina Lara, entrevista con el autor, Los Ángeles, febrero de 2015.

<sup>22</sup> "Acta 28," *Libro de actas*, 13 de noviembre, 1978 (Archivo General del SIP).

trabajo apestando, pasaba el día apestando y al final del día salía del trabajo apestando. Pero el dinero apesta también”.<sup>23</sup>

La defensa de los derechos constituyó otro de los reclamos clave de la movilización de los trabajadores de las plantas empacadoras. Un modelo político basado de manera informal en el Partido Revolucionario Institucional (en adelante PRI) de México había otorgado derechos a los trabajadores, consagrándolos en la Constitución nacional y en el Código de Trabajo: el derecho a la sindicalización; a unos salarios y condiciones de trabajo decentes y a negociar y renegociar los contratos; y a salarios por trabajo extra, a bonos anuales y vacaciones pagadas.<sup>24</sup> Al contrastar las diferencias entre el discurso oficial y la realidad cotidiana, el SIP introdujo esos derechos fundamentales dentro de un lenguaje populista que enfrentó a los trabajadores contra la élite económica y sus aliados (militares) en el gobierno.

Un pronunciamiento del SIP decía: “No sólo los patronos y estado tienen derecho de hacerse ricos de nuestras riquezas naturales”.<sup>25</sup> Y continúa el pronunciamiento,

Comprendemos que tenemos que sacrificarnos mucho y sufrir represión y amenazas, pero nada va a bajar del cielo por clamor de todos

<sup>23</sup> Maura de Zelaya, entrevista con el autor, febrero de 2013. Véase también Barbara Weinstein, *For Social Peace in Brazil: Industrialists and the Remaking of the Working Class in São Paulo, 1920-1964*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1996; Deborah Levenson-Estrada, *Trade Unionists against Terror: Guatemala City, 1954-1985*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1994.

<sup>24</sup> Jorge Cáceres Prendes, “Estado, sociedad y política de un contexto de insurgencia popular: El Salvador 1980-1987”, en *Anuario de Estudios Centroamericanos*, vol. 14, núms. 1 y 2, 1988.

<sup>25</sup> Junta Directiva, 13 de noviembre, 1978 (Archivo General del SIP).

nosotros. [...] Este es el preciso instante que la patronal si puede temblar de nuestro combate en la Fuerza de Trabajo, pues los empleados no podrán solos sacar la producción de camarón diaria [...]. Todos tenemos que defender nuestros derechos. Unidos combatimos esta explotación.<sup>26</sup>

Aquí podemos observar los perfiles de unos valores productivistas y una ideología práctica que comparten una mayoría de trabajadores sindicalizados: la patronal eran incapaz de sustituir a los obreros en sus faenas. La frase hace eco de la justificación para “la movida”: “los barcos salían del puerto vacíos”<sup>27</sup> y eran los marinos los que las llenaban. En otras palabras, los trabajadores en la planta y en alta mar eran el factor clave en la producción, y los gerentes no podían operar sin ellos. Se insinuaba que lo inverso no era necesariamente cierto.

Adicionalmente, los trabajadores sindicalizados se referían invariablemente a la “defensa de sus intereses”. Los temas de honor, intereses y derechos se entretejían con frecuencia. Por ejemplo, un trabajador se refirió al “derecho de defender nuestros intereses”. De vez en cuando, los derechos y los intereses parecen haberse utilizado de manera intercambiable cuando, por ejemplo, un sindicalista exclamó que “los derechos de los trabajadores son irrevocables”.<sup>28</sup> Molina Lara alabó “la valentía que habían tenido los trabajadores conscientes en Pezca. Combativamente salieron a defensa de sus propios intereses”.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> *Boletín Informativo*, núm. I, 15 de noviembre, 1978 (Archivo General del SIP).

<sup>27</sup> Migdonio Pérez, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013.

<sup>28</sup> “Acta 33”, *Libro de actas*, 16 de diciembre, 1978 (Archivos de la Subseccional Pezca).

<sup>29</sup> “Acta 31”, *Libro de actas*, 1974, 9 de enero, 1979 (Archivo General del SIP).

La idea de los intereses se refería a identidades individuales y sectoriales. Por cierto, un reto discursivo constante fue la de crear un sentido unificado de intereses entre una fuerza de trabajo altamente segmentada en la cual se podría argumentar lógicamente a favor de intereses sectoriales opuestos. Así, por ejemplo, en una reunión del SIP en enero de 1979, los activistas trataron de conseguir apoyo entre los 461 presentes para una huelga en ciernes en Mariscos de El Salvador para lograr salarios iguales que en las otras plantas. Uno de los militantes instó: “Lucharemos unidos porque allí viene la fuerza”. El siguiente expositor se refirió al descontento que expresaron ocho trabajadores de la planta Atrarraya porque el sindicato, después de una huelga breve, había logrado un incremento y nivelación de salarios en la planta. Estos trabajadores estaban “resentidos” porque los otros trabajadores ahora ganaban lo mismo que ellos. Un miembro de las bases afirmó, “No debemos ser egoístas porque así no ganaremos”.<sup>30</sup>

Con referencia a las luchas exitosas en Atrarraya a comienzos de enero de 1979, Molina Lara exclamó que el sindicato había defendido los intereses de los marinos de la empresa y logrado un incremento salarial del 18%: “Lástima que los compañeros del mar no nos acompañaron a pesar de que peleamos sus intereses”.<sup>31</sup> En otro momento Molina Lara comentó: Así es como nuestra política sindical tiene sus éxitos luchando para todos los trabajadores sin discriminar.<sup>32</sup> La invocación de los intereses de los trabajadores resultó ser un tema escabroso porque los intereses de los marinos —en vista de su aprovechamiento directo mediante “la movida”—

<sup>30</sup> *Loc. cit.*

<sup>31</sup> “Acta 31”, *Libro de actas, 1974*, 1º de febrero, 1979 (Archivo General del SIP).

<sup>32</sup> *Loc. cit.*

no eran transparentes del todo. La aceptación de “la movida” por parte del Sindicato Agua (una política salarial de facto) resultó ser muy atractiva para los marinos en Atrarraya cuyas lealtades y afiliaciones iban y venían entre los dos sindicatos. Como veremos, la idea de los intereses se convertiría en un espacio de desencuentros [del tipo I]. La retórica fue importante en al menos dos sentidos. El lenguaje utilizado en las negociaciones resultó ser un elemento crítico en vista de que los dirigentes del SIP, quienes generalmente tenían una educación primaria solamente, tuvieron que entablar diálogos convincentes con adversarios poderosos y muy bien formados. Es más, las palabras debían persuadir a unas bases sindicales políticamente conservadoras para que se prepararan en anticipación a paros y huelgas. Molina Lara y su grupo difundieron el significado de términos clave en alguna medida cuando traían a expositores de otras fábricas y de FENASTRAS. Los expositores subrayaban que los derechos y los intereses eran colectivos y que solamente se podrían defender a partir de una solidaridad robusta.

Los dirigentes del SIP echaron mano del honor, los intereses y los derechos, los tres elementos clave de la movilización, y los juntaron bajo una ética de solidaridad. Para ganarse el honor y el respeto, y defender derechos e intereses, los trabajadores de las empacadoras habían aprendido que la unidad y la solidaridad eran absolutamente esenciales. A comienzos de enero, la dirigencia del SIP protestó vehementemente contra los empleados de seguridad de Pezca, quienes al registrar a las trabajadoras por si llevaban camarón robado al final de la jornada, “tocando sus partes más íntimas”.<sup>35</sup> En respuesta a la protesta del sindicato, la empresa puso fin de inmediato a este procedimiento humillante.

<sup>35</sup> “Acta 31”, *Libro de actas*, 1974, 9 de enero, 1979 (Archivo General del SIP).

A finales de enero de 1979, el padre de Molina Lara falleció inesperadamente. El 1° de febrero antes de la asamblea general del SIP, Molina Lara, entonces de 35 años, juró frente al cuerpo de su padre, “de seguir luchando sin cesar hasta caer por la masa obrera”. A continuación leyó un mensaje de su madre: “Hijo si sé de veras [que] los compañeros te tienen cariño porque te lo han demostrado hoy en el fallecimiento de tu padre. Hoy si me siento más tranquila porque sé que son unidos”.<sup>34</sup> La adhesión de su madre al trabajo de Alejandro, ratificado a su vez por las bases sindicales, le dio forma a un concepto nuevamente fortalecido de solidaridad de clase. El siguiente orador fue un representante de los obreros en huelga de la fábrica cercana de aceite vegetal PRONACSA, propiedad de la familia oligárquica de los Wright, quienes también eran dueños de Pezca S. A. Al explicar cómo los trabajadores de la aceitera tuvieron que resistir la represión antisindical y la negativa de la gerencia de negociar un contrato nuevo, agradeció a los miembros del SIP por sus donaciones a su fondo de huelga. A continuación, uno tras otro de los miembros del SIP dieron discursos llamando a realizar una huelga en solidaridad. Por ejemplo, Gloria García le dijo a la concurrencia que ni se preocuparan por irse a la huelga a menos que lo hicieran “con todo su corazón”.

Como en respaldo a esta idea amplificadora de solidaridad, la asamblea reeligió a Molina Lara para un periodo adicional por 475 votos contra 25. Afirmó que se postuló para un cuarto periodo solamente por la extraordinaria coyuntura de la lucha obrera nacional, prometiendo que ya no sería candidato para el cargo (una promesa que se vio obligado a retractar el siguiente año).<sup>35</sup> En otro

<sup>34</sup> “Acta 31”, *Libro de actas, 1974*, 1° de febrero, 1979 (Archivo General del SIP).

<sup>35</sup> *Loc. cit.*

gesto dramático, Molina Lara cambió el sitio de la toma de posesión de la nueva Junta Directiva del balneario obrero en el lago de Coatepeque a la fábrica de aceite vegetal de PRONACSA, entonces tomada por los huelguistas.

Durante los días inmediatamente posteriores, la dirigencia del SIP siguió movilizándose para llevar a cabo una huelga en solidaridad con los trabajadores de PRONACSA.<sup>56</sup> Uno de los obreros escribió un poema en solidaridad: “Compañeros no están solos; no vayan a desmayar; y la victoria siempre es nuestra; y siempre la ganaremos”.<sup>57</sup> Durante una asamblea el 7 de febrero, muchos trabajadores afiliados al SIP de nuevo expresaron su apoyo a la acción emprendida. Identificaron al contrario que tenían en común y cómo la empresa había tratado de “engañar” a los trabajadores de PRONACSA de la misma manera que a los de Pezca. Gloria García instó a sus compañeros trabajadores a que tomaran la acción en serio y que no actuaran como que fuera “un paseo”.

Casi la totalidad de la fuerza laboral de las tres empresas empacadoras dejó de trabajar al día siguiente. El anuncio público del paro solidario, firmado por otros dos sindicatos afiliados a FENASTRAS en el departamento de Usulután, se diferenció un poco de lo que se acordó en la asamblea, sin violar el sentir de la membresía. En primer lugar, en vez de expresar nada más su solidaridad con PRONACSA, anunció que la acción también se realizaba en apoyo a los conductores de autobús y trabajadores textiles en la capital. El SIP y otros sindicatos exigieron “el respeto al derecho de huelga por parte de las autoridades y empresarios, respeto a los derechos hu-

<sup>56</sup> Aquí utilizo “paro” y “huelga” indistintamente aunque en el contexto salvadoreño una huelga solidaria de un día de duración se denominaba “paro”.

<sup>57</sup> *Pueblo*, 20 de marzo, 1979.

manos, y cese de la represión contra el movimiento obrero[...].<sup>38</sup> La introducción de la retórica de los derechos humanos ocurrió con cada vez más frecuencia en los conflictos laborales salvadoreños y en las protestas en contra de la represión pero también hacía un llamado, en efecto, a la política de la administración del presidente Carter ante el régimen militar.<sup>39</sup> Sin embargo, y a pesar de la congruencia básica entre el mensaje y el sentido de la asamblea sindical, cuando se hizo extensiva la solidaridad a otros, se evidenció la tensión entre los asuntos y acciones puramente locales y las tácticas, estrategias y significados en el nivel nacional.

A continuación del paro solidario, Atarraya y Mariscos, sin duda aleccionados por las huelgas recientes, cedieron ante la demanda del SIP de que se les pagara el día no trabajado.<sup>40</sup> Pezca S. A., sin embargo, rehusó pagar el día y, en su lugar, presentó una demanda contra el SIP en el Ministerio de Trabajo. No tenemos conocimiento sobre los motivos de Pezca S. A. Sin embargo, la familia Wright estaba alineada con la extrema derecha y quizá, lo más importante, quería impedir la sindicalización incipiente en su planta de aceite vegetal.

El SIP respondió ante la negativa de Pezca de pagar por el día del paro prolongando sus acciones huelguísticas e incrementando su militancia. Al verse enfrentados por la amenaza de rompehuel-

<sup>38</sup> “A los trabajadores y al pueblo en general informamos”, en *La Crónica*, 8 de febrero, 1979.

<sup>39</sup> En un informe presentado al Congreso en febrero de 1979, el Departamento de Estado colocó a El Salvador a la par de la Nicaragua de Somoza como los peores violadores de los derechos humanos en Latinoamérica, peor aún que Chile bajo Pinochet o Argentina durante la Guerra Sucia.

<sup>40</sup> El pago de salarios caídos durante los días de huelga era una demanda usual. El Código de Trabajo estipulaba que dicho pago debía hacerse, pero solamente en los casos de las muy infrecuentes huelgas “legales”.

gas, agentes de seguridad de la empresa y la Guardia Nacional, la dirigencia sindical optó por ocupar la planta. El SIP aumentó su lista de exigencias por encima del pago del día de paro para que también se despidieran a Varela Cañas, el gerente de la planta por sus acciones antisindicales, y a otro empleado por acoso a una trabajadora. El SIP había colocado el despido de Varela Cañas como su principal demanda. También insistieron en el reenganche de militantes del sindicato que habían sido despedidos y anunciaron una huelga general del Puerto si sus demandas no se resolvían.<sup>41</sup>

La respuesta del Sindicato Agua a la huelga del SIP fue uno de solidaridad, provocado en buena medida por su animosidad ante la empresa por haber iniciado una campaña a fondo contra “la movida”.<sup>42</sup> Tal como se indicó en el Capítulo 1, la empresa había comenzado a intensificar la vigilancia y a catear y capturar a los pescadores artesanales a quienes equivocadamente acusó de ser los intermediarios piratas.<sup>43</sup> Los voceros de la empresa ofendieron el honor de los pescadores cuando los acusaron de robo y ese insulto sin duda incitó a los marinos sindicalizados para aliarse, aunque

<sup>41</sup> *La Crónica* afirma que ocuparon las instalaciones y retuvieron a rehenes. Ésta es una versión con la cual están de acuerdo algunos trabajadores, pero otros no. Parece que hubo una ocupación pero que a los empleados de gerencia se les permitió irse. Varela Cañas era aborrecido particularmente debido a su manera de tratar al equipo negociador en noviembre y diciembre de 1978. *El Diario de Hoy*, 15 de febrero, 1979.

<sup>42</sup> *La Prensa Gráfica*, 13 de febrero, 1979.

<sup>43</sup> El origen de esta práctica se dio cuando los marinos regalaban pescado sin valor comercial a los pescadores artesanales. Al menos una de esas familias se involucró en la comercialización ilegal del camarón. Sin embargo, cuando las empresas y el gobierno comenzaron a hostigar a los pescadores artesanales, el negocio se formalizó mucho más con militares de alto rango a la cabeza. *La Crónica*, 25 de enero, 1979. Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013; Migdonio Pérez, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013.

fuera por poco tiempo y de manera informal, con los trabajadores de la empacadora. Los marinos se rehusaron a desacatar la huelga al entregar la pesca en las instalaciones del Puerto de La Unión como lo habían hecho durante huelgas anteriores. Más bien, los barcos entraron a Puerto El Triunfo con su captura de 150 000 libras de camarón. La captura se convirtió de inmediato en una cause célèbre. Según los dos sindicatos, el camarón sería procesado solamente si Pezca S. A., accedía a sus demandas. La empresa expresó su actitud intransigente —exacerbada sin duda debido a la ocupación de la planta y su enojo hacia sus antiguos aliados entre los marinos— al rehusarse a negociar e impidiendo que los trabajadores en huelga refrigeraran el camarón. Después de una semana, los 800 000 dólares de camarón fueron botados al mar. Ambos sindicatos entonces exigieron pago por la captura y el procesamiento del camarón que se botó, algo que la empresa descartó sin pensarlo dos veces.<sup>44</sup>

Hacia mediados de febrero, el Sindicato Agua inició una huelga solidaria de facto.<sup>45</sup> Sin embargo, fue una acción peculiar en tanto que los marinos públicamente afirmaron que no estaban en huelga, sino que eran víctimas de un cierre de la empresa por la patronal.<sup>46</sup> La negativa pública y enfática del Sindicato Agua de que sus miembros estaban en huelga es importante porque marcó una diferencia con el SIP; también transmitió un mensaje ambiguo a sus propias bases sindicales. Estaban en huelga, pero

<sup>44</sup> *El Diario de Hoy*, 5 de marzo, 1979.

<sup>45</sup> La acción solidaria en Atrarraya y Mariscos duró solamente unos pocos días, aunque los trabajadores siguieron ofreciendo ayuda material a los huelguistas en Pezca.

<sup>46</sup> Véase el anuncio pagado de página entera de SGTIPAC, en *El Diario de Hoy*, 2 de marzo, 1979 y *La Prensa Gráfica*, 10 de febrero, 1979.

tampoco lo estaban. Expresaron solidaridad hacia el SIP —y la recibieron también— y al mismo tiempo guardaron su distancia con el Sindicato Tierra. Con independencia de la posición ambigua del Sindicato Agua, utilizaron la huelga del SIP para exigirle a la empresa que pagara los salarios que habían ganado en alta mar (además de lo que les tocaba por el camarón que se había botado). Agregaron otra exigencia al pliego que el SIP presentó a Pezca, en el sentido de que se suspendiera la práctica de mandar a los barcos camaroneros de vuelta al mar pocas horas después de haber atracado en vez de esperar las 48 horas estipuladas en el contrato. El Sindicato Agua también exigió con el apoyo del SIP que se contratara una póliza de seguro de vida por 4 000 dólares y el pago de una indemnización a las diez familias de los que perdieron la vida en el mar durante el ciclón de mayo de 1977.<sup>47</sup> Inmediatamente, el SIP ofreció su solidaridad a los huelguistas, especialmente en forma de alimentos. Aparte de depender de sus fondos de reserva para huelgas que se agotaban rápidamente, el SIP estaba recibiendo ayuda en alimentos de los trabajadores de Atarraya y Mariscos, quienes también realizaron huelgas breves en solidaridad. De hecho, el pueblo entero contribuyó: el SIP había alcanzado tales niveles de legitimidad dentro del pueblo que durante la huelga de febrero-marzo de 1979, los observadores recalcaron el alto grado de apoyo de la comunidad. FENASTRAS también entregó suministros a los huelguistas. En ese momento, la federación de izquierdas se encontraba envuelta en conflictos a menudo violentos en el área metropolitana.

<sup>47</sup> Las demandas del Sindicato Agua se incorporaron a las demandas oficiales del SIP.

## VIOLENCIA Y SOLIDARIDAD

Molina Lara se esforzó por involucrarse más con FENASTRAS justo cuando la dinámica nacional de rebelión y represión obrera comenzó a acelerarse. FENASTRAS se adjudicó grandes victorias durante los primeros meses del año. El 22 de enero de 1979, obreros en San Salvador ocuparon la planta de textiles IMES y retuvieron a cuatro empleados de la gerencia como rehenes, incluyendo dos estadounidenses. El sindicato logró que se cumplieran todas sus demandas.<sup>48</sup>

La huelga clave, sin embargo, ocurrió en las plantas embotelladoras de La Constancia y Tropical. El 23 de febrero, un grupo de trabajadores sindicalizados en un sector de la planta acordó una huelga para protestar especialmente por un cambio en la jornada que daría fin a las 2:00 a.m. (los trabajadores preferían terminar a las 6:00 a.m., la hora vigente). También demandaron la reintegración de cinco miembros del sindicato y el despido de once empleados de gerencia a quienes consideraban contrarios al sindicato.<sup>49</sup> A eso le agregaron una exigencia para que se aumentara en un 75%

<sup>48</sup> Documentos del National Security Agency, “El Salvador: The Making of U.S. Policy 1977-1984”, Collection DNSA; US Embassy to State Department, “Chronology of Strike and Holding of U.S. Citizens Hostage in IMES Factory,” airgram, 15 de febrero, 1979, ES00096, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, Collection DNSA.

<sup>49</sup> La Constancia era la empresa cervecera y la vecina Tropical embotellaba bebidas gaseosas, ambas propiedad de las mismas personas y representadas por el mismo sindicato. Aquí La Constancia se refiere a ambas. José Guillermo Rivas, “Viva la combativa huelga de los compañeros de La Constancia y Tropical” (Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación [en adelante CIDAI], Universidad Centroamericana [en adelante UCA], San Salvador, El Salvador).

la bonificación por trabajo nocturno. Al día siguiente, los trabajadores ocuparon las fábricas aledañas. Nueve empleados de gerencia permanecían dentro de las instalaciones para observar la toma y fueron detenidos como rehenes posteriormente.<sup>50</sup>

El Ministerio de Trabajo declaró que la huelga era ilegal, y ordenó a los trabajadores volver al trabajo antes del 10 de marzo o serían despedidos. En la mañana del 10 de marzo, las fuerzas de seguridad rodearon las plantas e impidieron la entrega de alimentos a los huelguistas. Por la tarde, una muchedumbre grande de manifestantes, organizados por el BPR se hicieron presentes para “expresar su solidaridad moral y material”.<sup>51</sup> Aparentemente sin provocación, las fuerzas de seguridad atacaron a los manifestantes, matando a siete e hiriendo a 15. Los obreros enardecidos como respuesta amenazaron con incendiar la planta. Monseñor Óscar Romero se ofreció para facilitar la negociación, junto con el jefe de la Cruz Roja. El mismo día, como para resaltar los límites del pujante movimiento obrero, centenares de obreros, quizá una tercera parte de la fuerza laboral, expresaron su oposición a la huelga frente al Ministerio de Trabajo y exigieron que se les reintegrara a sus trabajos y se les pagara el tiempo que durara la huelga.<sup>52</sup> El día después del tiroteo, los trabajadores sindicalizados de 27 empresas suspendieron su trabajo en solidaridad con los obreros de La Constancia, Pezca y PRONACSA.<sup>53</sup> Éstas fueron las acciones en

<sup>50</sup> *La Prensa Gráfica*, 9 de marzo, 1979.

<sup>51</sup> FENASTRAS, “Hacia la unidad del movimiento popular”, CIDAI/UCA, 1981.

<sup>52</sup> *La Prensa Gráfica*, 14 de marzo, 1979. Este periódico de derechas sugirió que había 575 obreros en el Ministerio de Trabajo.

<sup>53</sup> “President Threatens Measures to Cope with Strike”, AFP, París, 14 de marzo, 1979, trad. de Foreign Broadcast Information Service, FBIS Daily Report, Latin America, 15 de marzo, 1979.

solidaridad más grandes en el país desde 1967. Los militantes del BPR ocuparon la catedral nacional en apoyo a los huelguistas de La Constancia. En la noche del 13, la gerencia de La Constancia llegó a un arreglo con los huelguistas mediante el cual accedió a casi todas sus demandas.

Las huelgas solidarias en la capital repercutieron en el Puerto. Para apoyar a los trabajadores de Puerto El Triunfo, los miembros del Sindicato de los Trabajadores Eléctricos (en adelante STE-CEL) organizaron cortes de energía selectivos que afectaron a la hacienda La Carrera, propiedad del dueño de Pezca, Juan Wright, al igual que los congeladores de las empacadoras de camarón. Los cortes de energía eléctrica y las huelgas solidarias finalmente convencieron a Pezca para que llegara a la mesa de negociación, donde la empresa accedió a la mayor parte de las demandas de los dos sindicatos, incluyendo un 90% de los salarios que habrían devengado para procesar el camarón que se pudrió y un 75% de los días en que estuvieron en huelga.<sup>54</sup> También aceptaron reorganizar la gerencia de manera que el jefe de la planta, Varela Cañas, sería trasladado. El Sindicato Agua logró que se indemnizara a las familias de los marinos que perdieron la vida y que les financiaran pólizas de seguros de vida de 4 000 colones a los trabajadores. PRONACSA también accedió a la mayoría de las reivindicaciones del sindicato.

El 19 de marzo, miles de trabajadores del sector eléctrico abandonaron sus trabajos. Apoyados por militantes del FAPU, cortaron la energía eléctrica en el país entero por 23 horas en demanda de aumentos salariales, mejores prestaciones y condiciones de trabajo y un cese a la represión antisindical. También protestaron contra

<sup>54</sup> *Pueblo*, 20 de marzo, 1979.

las medidas que habrían de privatizar a la industria hidroeléctrica. Ignacio Ellacuría, un importante intelectual jesuita, describió la huelga de STECEL como un ejemplo de un movimiento obrero fortalecido y sus consecuencias más amplias. En primer lugar, les recordó a sus lectores que una tercera parte de la población del país, la oscuridad era su condición permanente. “La situación fue nueva para los poderosos [...]. Durante 23 horas [...] los poderosos quedaron sin poder”. A la par del estilo poético, Ellacuría aconsejaba prudencia. Al reflexionar sobre el crecimiento del movimiento obrero urbano, afirmó: “La clase obrera ha redescubier-to su poder; un poder real e importante, pero limitado y relativo; un poder que se debe manejar con prudencia y realismo”. Para Ellacuría, el capital y sus aliados eran mucho más fuertes y, por lo tanto, resultaba urgente que se resistiera ante la idea “mesiánica” de que las “condiciones revolucionarias” ya existían.<sup>55</sup>

A pesar de su papel decisivo en los triunfos de los trabajadores, FENASTRAS se vio envuelta todavía más en la disputa entre FAPU y el BPR.<sup>56</sup> No obstante, el SIP prácticamente no fue afectado por los desacuerdos tan frecuentes en la izquierda.<sup>57</sup> Los dirigentes de

<sup>55</sup> “23 horas sin poder”, 21 de marzo, 1979, en Rodolfo R. Campos [ed.], *El Salvador entre el terror y la esperanza: los sucesos de 1979 y su impacto en el drama salvadoreño de los años siguientes*, San Salvador, UCA Editores, 1982, pp. 158 y 159.

<sup>56</sup> Véase BPR, “Las luchas de la clase obrera enero/marzo” (Centro Universitario de Documentación e Información, UCA). El BPR planteó que la influencia del “economicismo,” “pacifismo,” “revisiónismo” y “oportunismo” provocaron la prolongación de varias de las huelgas. En términos específicos, el BPR afirmó que “a pesar de la hermosa solidaridad de las pesqueras, las huelgas de Pezca y PRONACSA tenían que confrontar la intransigencia sorda”. El FAPU reaccionó acusando al BPR de sectario.

<sup>57</sup> Aunque hubo algunos miembros del PCS en el sindicato, y al menos uno del BPR, a nadie pareció importarle, en uno u otro sentido.

FENASTRAS se hicieron presentes en una reunión del SIP hacia fines de marzo para felicitar a las bases y recordarles de su compromiso con la unidad y la solidaridad. En un contexto de asesinatos cada vez más frecuentes a manos de escuadrones de la muerte, Bernabé Recinos, dirigente de STECEL y militante de FAPU, alabó su valor y prometió “dar su vida” por la causa si fuera necesario.<sup>58</sup> Otros se refirieron a las trabajadoras por su valor y unidad. Todos mencionaron la defensa de los derechos e intereses.

Varios testimonios sugieren que los activistas sindicales guardaron su distancia de las Organizaciones Populares (en adelante OP) y de la izquierda guerrillera. Según el líder de la seccional de Pezca, Noé Quinteros, el problema táctico estaba relacionado con las consideraciones más amplias de tipo estratégico e ideológico. Cuando se refirió a la agrupación guerrillera del Ejército Revolucionario del Pueblo (en adelante ERP), utilizó las siguientes palabras:

El ERP llegó y ofreció protección armada al sindicato durante las huelgas. A pesar de que las autoridades nos estaban hostigando, podíamos anticipar una masacre de los trabajadores si ellos se metían, así que rechazamos la oferta. Lo mismo ocurrió con FAPU; aceptamos su ayuda de alimentos, pero no dejamos que se metieran con nuestras bases. Les dije que en el futuro, de ganar ustedes, necesitarán trabajadores y nos tratarán como trabajadores.<sup>59</sup>

La formulación de esta cosmovisión protosindicalista quizá fue exclusiva de Quinteros y su círculo inmediato. Sin embargo, su perspectiva era reflejo en términos generales de la de los demás activistas sindicales en el Puerto. Sus altamente afinados senti-

<sup>58</sup> “Acta 34”, *Libro de actas, 1974*, 28 de marzo, 1979 (Archivo General del SIP).

<sup>59</sup> Noé Quinteros, entrevista con el autor, Houston, octubre de 2013.

mientos de solidaridad y todas sus ramificaciones no alcanzaban para comprometerse con estudiantes revolucionarios a quienes consideraban ubicados en una posición social diferente.<sup>60</sup> Estos sindicalistas apoyarían el derecho de los estudiantes a protestar pero no se aliarían con la izquierda radical o revolucionaria. No obstante, su compromiso de solidaridad obrera incondicional les enemistó tanto con el régimen como con la derecha y terminaron en las listas de sentenciados a muerte por los escuadrones.

### UNA VICTORIA HISTÓRICA INADVERTIDA

El sindicato obtuvo su más grande victoria en agosto de 1979, un golpe en contra de la flexibilización del trabajo de inspiración neoliberal. Sin embargo, la violencia rampante en todo el país relegó esta noticia a una página interior. Desde el comienzo de la década, la dirigencia sindical había intentado organizar a los trabajadores temporales en las tres plantas —quienes representaban entre un 35 y un 40% del total de la fuerza laboral— y suplirles sus necesidades básicas, especialmente el acceso a beneficios, incluyendo el sistema nacional de seguridad social, jubilación, vacaciones pagadas, y derechos de antigüedad en el trabajo. Tal como se expresó Virginia Reyes, “Era un problema muy serio. La empresa no quería hacer los eventuales permanentes, ya que podía correr a la gente sin pagar beneficios”.<sup>61</sup>

El crecimiento y la fuerza cada vez mayor del SIP, seguramente pesó en las decisiones de las gerencias de las tres empresas. Hacia

<sup>60</sup> Lo cual todavía representaba una pequeña minoría de la población, menos del 5% de esa cohorte etaria.

<sup>61</sup> Virginia Reyes, entrevista con el autor y Carlos Henríquez Consalvi, Puerto El Triunfo, febrero de 2013.

mediados de 1979, y a pesar de sus divisiones, el SIP había organizado a una gran mayoría de los trabajadores temporales y del personal administrativo, así como a los trabajadores permanentes. La vitalidad constante de FENASTRAS, a pesar de la represión, probablemente también influyó en la decisión de los dueños de rendirse. Finalmente, el mes de agosto era el de la plena temporada del chacalín, un periodo de fuertes utilidades potencialmente. Durante todo ese mes, el SIP se dedicó a negociar contratos y efectuar paros para ganar esos derechos para los trabajadores temporales.<sup>62</sup> El SIP primero se adjudicó victorias en Atrarraya y Mariscos de El Salvador. Pezca S. A., que tenía una planta entera dedicada al chacalín empleando a trabajadores estacionales, resultó ser más difícil de convencer.

No obstante, después de un día de paro y la amenaza de una huelga general, la empresa claudicó y le otorgó un estatus permanente a los 156 trabajadores estacionales de la Planta núm. 2 con todas las prestaciones, incluyendo seguro social, vacaciones y pago de horas extras. Se comprometió a encontrar trabajo de mantenimiento a todos los trabajadores estacionales durante los meses fuera de temporada. También acordó entregarle a cada uno de los trabajadores tres pares de botas y delantales por año. Las tres empresas otorgaron un incremento salarial sin precedentes de 50 centavos la hora (0.20 de dolar), lo que en algunos casos significó un aumento de casi un 30%. Además, Pezca prometió instalar un dispensario de salud y proveer una guardería sin costo. Pezca también acordó cumplir su promesa de construir una cafetería

<sup>62</sup> Gloria García recuerda dos episodios durante los cuales las fuerzas de seguridad o escuadrones de la muerte intentaron atacar a su equipo cuando se reunieron en San Salvador. Gloria García, entrevista con el autor, Lake Elsinoire, febrero de 2015.

Virginia Reyes sosteniendo una foto de sí misma  
de la década de 1970



que, tal como se explicó en el Capítulo 1, era de mucho beneficio. En términos generales, esta victoria rotunda fortaleció aún más al sindicato en tanto que sus filas aumentaron y el nivel de participación, especialmente entre las mujeres, aumentó de manera dramática. Aunque no se apreció un lenguaje feminista específico

en el movimiento, la victoria benefició abrumadoramente a las trabajadoras, tanto temporales como permanentes.<sup>65</sup> En palabras de Gloria García, “no era cuestión de demandas feministas, pero nuestras conquistas sí ayudaron a las trabajadoras”.<sup>64</sup>

El triunfo de la huelga de agosto de 1979 fue realmente notable porque ocurrió en un momento de represión antisindical intensa y representó un golpe a la lógica del capital, un freno al avance de las prácticas gerenciales neoliberales y un rechazo a la segmentación y marginación de los trabajadores temporales. No obstante, las discordias dentro del sindicato opacaron las festividades. Uno de los puntos medulares de disenso fue un incremento en las cuotas sindicales. Manuel Muñoz, un antiguo líder del SIP de línea conservadora, encabezó al grupo de disidentes que objetaron el aumento de las cuotas. Varios miembros argumentaron que la decisión se había tomado, cuando el grueso de los miembros ya se habían retirado del salón. Gloria García niega esta versión y aclaró que los que ocupaban cargos de dirección no ganaban nada que proviniera de las cuotas; éstas, más bien, se utilizaban para que el sindicato pudiera ganar sus batallas mediante la disponibilidad de un fondo de huelgas y unos viáticos mínimos para los negociadores. Después de debatir el asunto, la dirigencia del SIP apoyó una medida para rebajar la suma de 2% del salario a 1.5%. El debate en torno a las cuotas dio lugar a que Molina Lara y Quinteros aclararan a las bases el significado de los intereses y la solidaridad. Molina Lara lo resumió así: “Aquí no se velan por intereses

<sup>65</sup> Hacia 1980, gracias al programa del sindicato, el diferencial de salarios por género había bajado a menos del 5%.

<sup>64</sup> Gloria García, entrevista con el autor, Lake Elsinore, febrero de 2015.

Trabajadores de Pezca



Foto: cortesía de Juan Raúl Alberto.

propios [...] aquí se ven los problemas de todos los trabajadores en general”.<sup>65</sup>

El SIP organizó una gran celebración de victoria, al cual llegaron muchos oradores invitados de FENASTRAS; los trabajadores de la Planta núm. 2 recibieron certificados especiales que registraban su estatus de miembros permanentes. Molina Lara aprovechó para ofrecer una explicación más a fondo del significado del sindicalismo. En primer lugar, echando mano de un gesto retórico, afirmó que el sindicato sería necesario hasta que sus miembros ya

<sup>65</sup> “Acta 39”, *Libro de actas, 1975*, 30 de agosto, 1979 (Archivos de la Subseccional Pezca).

no requirieran salarios más altos o viviendas (la falta de viviendas era un tema fundamental). A continuación, recalcó que —a pesar de sus victorias que fueron el resultado de un batallar intenso— la lucha todavía no terminaba. Como obreros, tenían que acordarse de los trabajadores rurales que ganaban 4.20 colones diarios (un 25% de los salarios del SIP). Después replanteó el tema del día anterior: “hay que luchar para todos no para el bien propio [...] si luchamos unidos si estamos desempeñando un papel sindical”.<sup>66</sup>

Y es que aun cuando los miembros del sindicato hayan crecido con la idea de la solidaridad, la noción de los “intereses propios”, había sido parte íntegra de su propia forma de entender las cosas así como del discurso sindical públicamente aceptado. En otras palabras, el discurso oficial (sin importar lo autoritario de su estructura política) aceptaba fácilmente la noción de la defensa de los intereses personales de la misma manera en que promovía la defensa de la familia. De hecho, ese era uno de los puntales discursivos claves de la legitimidad de los sindicatos en la sociedad salvadoreña. Sin embargo, la transición de intereses individuales a la solidaridad “hay que luchar para todos no para el bien propio” resultó fácil para el liderazgo de la SIP y para un sector significativo de la fuerza laboral, pero no para todos. El movimiento obrero en el Puerto obtuvo victorias sorprendentes. En el camino, sin embargo, la ampliación del significado de los términos “derechos” e “intereses”, permeados por el poder emotivo del honor y la vergüenza, a la vez cautivó a muchos de los miembros del sindicato y alienó a una minoría.

<sup>66</sup> “Acta 40”, *Libro de actas, 1975*, 31 de agosto, 1979 (Archivos de la Subseccional Pezca).

Hacia el final del discurso de la victoria de Molina Lara, arremetió contra el Sindicato Agua, el cual había estado reclutando a miembros del SIP desde abril, quienes se habían desencantado con lo que denominaron la “politización” del sindicato: “Los dirigentes del sindicato del sector agua no dignos de que les digan compañeros”. Subrayó la diferencia clave entre los dos sindicatos. El SIP no discriminaba contra los trabajadores desde ningún punto de vista mientras que sugirió, implícitamente, que el Sindicato Agua sí lo hacía a partir de consideraciones ideológicas que tenían sus raíces en el anticomunismo. Hacia fines del año, la ruptura había llegado a extremos peligrosos. En noviembre, Molina Lara denunció “la movida” —él la llamaba “piratería en el mar”— y agregó que “no hemos podido evitar la fuga de camarón [...] estamos señalando a los señores que sacan el camarón [...] vamos a romperles los candados”.<sup>67</sup> Posteriormente, sostuvo conversaciones con la Marina Nacional sobre esta práctica. Noé Quinteros cree que el precio que le pusieron a la cabeza de Molina Lara se debió, al menos en parte, a la denuncia que hizo sobre estas ventas ilegales.<sup>68</sup>

En Puerto El Triunfo, los últimos días de agosto, estaban cargados de esperanza y ansiedad. La victoria histórica del SIP, combinada con la del mes de marzo, significó un cambio profundo en las relaciones sociales y laborales en el Puerto, en tanto que los trabajadores comenzaron a ejercer su poder sobre las contrataciones y los despidos y revirtiendo las políticas discriminatorias de larga data hacia los trabajadores temporales, así como mejorando tremendamente los salarios y las prestaciones. La victoria no sólo

<sup>67</sup> “Acta 39”, *Libro de actas, 1974*, 26 de noviembre, 1979 (Archivo General del SIP).

<sup>68</sup> Noé Quinteros, entrevista por teléfono con el autor, Houston, marzo de 2013.

mejoró el prestigio local del grupo de Molina Lara, sino que también mejoró la imagen de FENASTRAS en el nivel nacional. No obstante, la victoria tuvo su precio. Tal como se sugirió previamente, el discurso de Molina Lara y su grupo, extraído de sus propias reflexiones sobre su accionar colectivo, extendió los significados del “interés” como para anular cualquier noción particularista, es decir, limitada nada más a los “intereses propios”. Por ejemplo, el sindicalismo ahora se refería exclusivamente a la unidad y solidaridad necesarias para defender los intereses colectivos, que incluían a las clases trabajadoras en los campos y las ciudades de todo el país. En vista de los éxitos del movimiento obrero cuando operó con estos significados ampliados de interés y solidaridad, parecería que buena parte de las bases obreras utilizaron —o cuando menos entendieron— estos conceptos en su nueva formulación.<sup>69</sup>

El SIP se había convertido en una institución poderosa en el Puerto, un símbolo de un movimiento obrero renaciente y cada vez más radical. Pero ambos movimientos local como nacional se enfrentaban a serios y debilitantes obstáculos —unos desencuentros profundos— que no se perfilaban claramente en este momento de auge del radicalismo obrero.

#### REPRESIÓN ESTATAL Y LA RESPUESTA RADICAL

La respuesta del régimen y de la derecha ante el repunte del movimiento obrero en febrero y marzo propinó golpes letales al BPR y al FAPU. Los activistas de los derechos humanos acusaron al régimen de Romero (junio 1977-octubre 1979) de 461 ejecuciones

<sup>69</sup> Es difícil calcular cuántos miembros del SIP abandonaron el sindicato, pero en Pezca es dudoso que hayan sido más del 10%.

extrajudiciales y algunas 300 desapariciones, una nueva táctica diseñada para infundir miedo y ansiedad en las familias de los activistas.<sup>70</sup> El 29 de abril, las fuerzas de seguridad detuvieron a Facundo Guardado, el secretario general del BPR, y a cuatro otros líderes de la agrupación, lo que provocó una alarma en todo el movimiento sindical y la izquierda política. Después de varios días de buscar infructuosamente a sus líderes, el BPR ocupó las embajadas de Costa Rica y Francia, así como la catedral metropolitana de San Salvador. El régimen respondió cercando a las embajadas con fuerzas de seguridad. El 7 de mayo, un número de trabajadores de toda el área metropolitana efectuaron un paro de cuatro horas exigiendo la libertad de los líderes capturados del BPR; esta acción de solidaridad se realizó en 15 fábricas, incluyendo las plantas embotelladoras, muchas plantas de textiles, metalúrgicas y una fábrica de muebles, además de la federación de maestros. El 8 de mayo, el BPR realizó dos marchas que convergieron en la catedral ocupada. Cuando los manifestantes se aproximaban a la catedral, las fuerzas de seguridad abrieron fuego, matando a 22 de los que protestaban; cuatro transeúntes y un policía también murieron y 37 fueron heridos.<sup>71</sup> Uno de los heridos, un joven mecánico, afirmó que “Nos arrasaron como perros”.<sup>72</sup> Algunos de los manifestantes portaban pistolas. Un video que se difundió ampliamente muestra a la multitud en las gradas de la catedral tratando de escapar de

<sup>70</sup> Paul Almeida, *Waves of Protest: Popular Struggle in El Salvador, 1925-2005*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008.

<sup>71</sup> Hasta la *Voz de América* (Voice of America) culpó a las fuerzas de seguridad por haber iniciado el tiroteo. “Un llamado más a la racionalidad”, en *El Salvador: entre el terror y la esperanza*, p. 252.

<sup>72</sup> Alan Riding, “Militants in El Salvador Undeterred by the Death of 22”, *New York Times*, 10 de mayo, 1979. Otros informes listan 19 muertes. Los manifestantes capturados fueron torturados.

los disparos indiscriminados, cuando un manifestante acostado se da vuelta y apunta una pequeña pistola en la dirección de la lluvia de balazos. La imagen que se vio en el mundo entero reveló tanto la barbaridad del régimen como la voluntad de los manifestantes de defenderse, con independencia de las adversidades. A pesar de los esfuerzos de los medios de comunicación nacionales y del gobierno de atribuir la violencia al BPR, la *Voz de América* así como otros corresponsales extranjeros responsabilizaron a las fuerzas de seguridad por iniciar el tiroteo. Después de las muertes, los trabajadores en 10 fábricas realizaron paros de protesta.

El 15 de mayo, el FAPU movilizó a sus simpatizantes en repudio a la represión estatal. Los activistas marcharon de portón en portón de las fábricas en la zona industrial de Soyapango. Uno de los militantes del FAPU narró la protesta en frente del más grande fabricante de galletas y boquitas del país: “En DIANA [...] las obreras cerraron los portones y se concentraron frente a la fábrica para incorporarse masivamente a la movilización de nuestro Frente”.<sup>73</sup> Gritaban consignas tales como “Juicio a los criminales de guerra” y “Viva la alianza obrera-campesina”.<sup>74</sup> Entonces atacó la policía; “brigadistas de propaganda” armados repelieron el asalto. El grupo entonces marchó a una fábrica de calzado: “Mientras caminábamos sobre la calle principal de Soyapango, la gente esperaba que llegáramos frente a la ADOC [fabricante principal de zapatos] cuando de presto dos convoyes del enemigo se abalanzaron sobre los trabajadores”. Las fuerzas de seguridad militarizaron la zona entera e intentaron cerrar todas las salidas a los manifestantes. Los

<sup>73</sup> *Pueblo Internacional*, julio de 1979, p. 8.

<sup>74</sup> *Ibid.*, p. 9. “¡Juicio a los Criminales de Guerra! ¡Y Viva la Alianza Obrero-Estudiantil!

militantes del FAPU levantaron barricadas para repeler el ataque y después encontraron refugio en la iglesia católica de la localidad.<sup>75</sup>

La intensidad de la represión estatal y la defensa propia armada de los militantes de las organizaciones populares (OP) estaban sentando las bases de un estado de guerra de clases incipiente. Con semejantes condiciones, se volvía constantemente más difícil que los trabajadores se mantuvieran al margen en aquellas fábricas que expresaban un apoyo fuerte a las OP. La misma presión para unirse a la lucha contribuyó a los desencuentros entre los miembros de las bases, tal como ocurrió en el Puerto entre las bases y el liderazgo. En cada huelga y toma de fábrica, una minoría sustancial, en efecto, se puso del lado de la patronal al ofrecerse para trabajar. Muchos de esos rompehuelgas en potencia tenían o rechazaban el papel de las OP.

Hacia 1979, el Partido Comunista (en adelante PCS) había sido desplazado de la dirección de FENASTRAS, debido en buena medida a su ineficacia por depender demasiado del Ministerio de Trabajo para la resolución de disputas; su debilidad le abrió las puertas al BPR y al FAPU, que se disputaban el control de la federación y del movimiento obrero en expansión.<sup>76</sup> Aunque los dos grupos tenían diferentes perspectivas sobre cómo alcanzar el cambio revolucionario —el FAPU buscaba una coalición multclasista y el BPR se adhería a una estrategia de “guerra popular prolongada” —compartían ciertas tácticas, especialmente la toma de fábricas y las huelgas solidarias.

<sup>75</sup> *Ibid.*, p. 11.

<sup>76</sup> Unos meses después, el BPR se escindió de FENASTRAS y formó su propia federación, la Federación Sindical Revolucionaria.

Ambos grupos propiciaban presumiblemente la expresión democrática de puntos de vista en sus bases. De acuerdo con Kristina Pirker, una socióloga en el Instituto Mora,

En este sentido la politización de los sindicatos tenía diferentes significados: en primer lugar, romper con las prácticas sindicales cotidianas de la lógica gremial y corporativa, fundamentada en la delegación de la participación a representantes electos, e involucrar [a] los sindicalistas de base en las acciones solidarias con las luchas en otras fábricas [...].<sup>77</sup>

Tal como también reconoce Pirker, esta particular forma de democratización tenía sus límites. En particular, el uso de “vías de hecho” imponía una táctica particular que con frecuencia marginaba y, en efecto, silenciaba las voces de la minoría. El apoyo cada vez más fuerte para la izquierda radical estaba en correspondencia con la ola de huelgas que barrió la zona metropolitana. En la medida que la intransigencia de la patronal demoraba la resolución de las huelgas, los fondos que proporcionaban las OP resultaban básicas para su mantenimiento.<sup>78</sup> Tal apoyo les permitió un contacto vital con los miembros de los sindicatos. Las filas de las OP crecieron. De acuerdo con los estimados del Departamento de Estado de Estados Unidos, en un país de aproximadamente 4.5 millones de habitantes, el BPR tendría unos 60 000-80 000 militantes (la mayoría de ellos eran campesinos y trabajadores agrícolas); el FAPU tenía en-

<sup>77</sup> Kristina Pirker, “Radicalización política y movilización social en El Salvador: los frentes de masas”, en *Observatorio Latinoamericano*, núm. 9, noviembre de 2012, p. 71.

<sup>78</sup> Los fondos fueron canalizados presumiblemente desde los grupos guerrilleros que los habían adquirido en años anteriores mediante atracos a bancos y secuestros.

tre 10 000 y 20 000 militantes; las Ligas Populares sumaban unos 5 000 militantes, muchos de ellos campesinos en el nororiente del país.<sup>79</sup> A su vez, las OP tenían vínculos con las organizaciones guerrilleras. Durante el mismo mes de mayo, las Fuerzas Populares de Liberación (en adelante FPL), vinculadas al BPR, agudizaron al estado de guerra civil incipiente mediante secuestros y 20 asesinatos, incluyendo al Ministro de Educación y el cónsul de Suiza.<sup>80</sup> A fines de mayo, el régimen decretó nuevamente el estado de sitio.

A pesar del estado de sitio, el BPR y FENASTRAS siguieron encabezando huelgas. El 18 de junio, más de 300 trabajadores de IMES, la planta textil que había sido tomada a fines de enero, ocuparon las instalaciones para protestar contra los planes de la gerencia de dejar cesantes a 80 trabajadores durante 50 días.<sup>81</sup> Hacia mediados de julio, los trabajadores en más de doce fábricas adicionales estaban en huelga de solidaridad con los obreros de IMES y en apoyo de sus propias demandas, para que cesara la represión antisindical y se aumentaran los salarios para compensar por la tasa

<sup>79</sup> US Department of State, “Telegram from the Embassy in El Salvador to the Department of State, Subject: High Level Dialogue with GOES”, 29 de mayo, 1979, en *Foreign Relations of the United States, 1977-1980*, vol. xv: *Central America, 1977-1980*, Washington, DC, Government Publishing Office. La embajada estimó que el BPR tenía 60 000 miembros en mayo. Según sus propios cálculos internos, el BPR estimó 75 000 miembros y el gobierno estimó 130 000. Posteriormente, los estimados del Departamento de Estado alcanzaron los 80 000. El rango muy amplio en el caso del FAPU probablemente se debe a la dificultad de separar el apoyo a FENASTRAS del que recibían las OP.

<sup>80</sup> El número se ha entresacado de la sección de cronología del documento e incluye lo que podría denominarse muertes en combate. BPR, “Los sucesos políticos de mayo”, *La alternativa para la liberación* (NACLA Archive), microfilm, pp. 136-145, rollo 7.

<sup>81</sup> *Pueblo Internacional*, julio de 1979, p. 17.

de inflación de un 11%. En dos de las plantas de textiles, varios gerentes estadounidenses fueron tomados como rehenes.

Mientras que en los meses anteriores las luchas se habían centrado en la defensa del derecho a organizarse y a lograr mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo, a mediados de año muchas de las luchas obreras respondían directamente a despidos o la amenaza del cierre de plantas. Debido en parte al fortalecimiento del movimiento obrero, una preocupación creciente fue la fuga de capitales, tanto nacionales como extranjeros. Aproximadamente un 25% de las huelgas tenían que ver con las amenazas de cierres de plantas y despidos de trabajadores (varias fueron en respuesta a represión antisindical).<sup>82</sup> El 6 de agosto, los trabajadores de IMES y otras dos plantas ocuparon la catedral metropolitana de San Salvador y 14 plantas más comenzaron una huelga de hambre exigiendo, por encima de todo, la reapertura de las plantas, todas las cuales habían sido cerradas después de unas huelgas. Los que estaban en huelga de hambre emitieron el siguiente comunicado: “Somos más de mil quinientas familias [...] desde hace más de dos meses viviendo una situación desesperada a causa de [...] las patronales y su cómplice incondicional, el Ministerio de Trabajo [...]”.<sup>83</sup>

La embajada de Estados Unidos presentó su valoración del panorama obrero: “Al menos, la racha reciente de disputas obreras demuestra la influencia creciente del BPR en el campo de los obre-

<sup>82</sup> Los salarios fueron la causa principal en un 17% de los casos; unas condiciones de trabajo deficientes representaron 11.7%; la demanda de materias primas fue de un 11.7% —basado en un análisis de una muestra de 14 huelgas que ocurrieron entre julio y octubre.

<sup>83</sup> El brazo sindical del BPR se llamaba José Guillermo Rivas, mártir obrero, *Boletín Obrero*, núm. 5, CIDAI/UCA, agosto de 1979.

ros organizados”.<sup>84</sup> En un comunicado posterior, los observadores en la embajada decían que tan pronto se arreglaba una huelga, el BPR fomentaba otra y que, en ese momento a fines de julio, tenían bajo su control cinco huelgas con todo y rehenes.<sup>85</sup>

FENASTRAS (que era controlada cada vez más por el FAPU) también alentaba las tomas, que se convirtieron en una práctica común entre los 43 sindicatos afiliados a la federación (incluyendo las seccionales); las tomas se justificaban como medidas defensivas contra la violencia de la policía y los militares y el uso de rompehuelgas (también llamados “negreros”).<sup>86</sup> Durante los primeros nuevos meses de 1979, hubo al menos 46 ocupaciones de este tipo.

El origen de las tomas fue defensivo, en tanto que las fuerzas de seguridad arrestaban a los huelguistas o, cuando menos, forzaban el ingreso de los rompehuelgas a las plantas. A pesar de los ataques ocasionales de la Guardia Nacional para poner fin a las ocupaciones, en ningún caso fueron lastimados los rehenes, lo cual sugiere la naturaleza simbólica de la violencia obrera. En otras palabras, el hecho de las ocupaciones se tornó en evidencia de su violencia en ausencia de daños reales contra los rehenes de la patronal. Esto,

<sup>84</sup> La embajada reconoció una participación importante del BPR en 8 de las 12 huelgas. US Embassy to Secretary of State, “Heavy BPR Involvement in Recent Labor Disturbances”, *Airgram*, 19 de julio, 1979, ES00176, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, Collection DNSA.

<sup>85</sup> US Embassy to Secretary of State, “Teachers’ Strike Ends; Strikes in Industrial Sector Continue,” cable, 30 de julio, 1979, ES00188, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, Collection DNSA. Este mensaje menciona cinco huelgas influenciadas por el BPR donde se habían tomado rehenes.

<sup>86</sup> Todos los informantes de Puerto El Triunfo utilizan este término, que originalmente se refería a los traficantes de esclavos, pero presumiblemente también a los que auxiliaban a los caporales de esclavos (es decir, los rompehuelgas que apoyan a los jefes autoritarios). No he detectado el uso de este término en ningún otro lugar.

a su vez, proporcionó justificación para que el régimen actuara violentamente. De acuerdo con una publicación del FAPU, las tomas tuvieron tres efectos, aparte de su carácter defensivo. Primero, abrieron las puertas para el florecimiento de la democracia obrera y para la creación de una plataforma, desde la cual denunciar los abusos a los derechos humanos y laborales. Segundo, presionaron a las patronales para que negociaran seriamente. Tercero, a veces terminaban en “derrotas parciales” (lo cual sugería que sin la toma, se habría producido una derrota total).<sup>87</sup>

Tal como señaló el analista Salvador Samayoa en aquel momento, el conservadurismo táctico de la izquierda tradicional y el liderazgo centrista del movimiento obrero, así como la inoperancia del Código de Trabajo combinado con el sesgo extremadamente anti-sindical de la mayoría de empresas y la dura represión del Estado, empujaron a los obreros a asumir tácticas cada vez más militantes. El BPR tenía un estilo de acción particular. Por un lado, rechazaban cualquier forma de alianza táctica con otros sectores de la izquierda o el movimiento obrero. Por otro, movilizaban a sectores no obreros de su organización, para que apoyaran las tomas activamente:

La presencia de estudiantes, maestros, y campesinos en los recintos de las fábricas parece molestar sobremedida a las patronales y a los adversarios políticos del Bloque. Como también parece molestar sobremedida a las patronales la inclusión de demandas de tipo político en los pliegos de peticiones, así como los repetidos paros de solidaridad con otros sindicatos en huelga.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> *Pueblo Internacional*, julio de 1979.

<sup>88</sup> Salvador Samayoa y Guillermo Galván, “El movimiento obrero en El Salvador ¿Resurgimiento o agitación?”, en *Estudios Centroamericanos*, julio-agosto de 1979, p. 595.

Samayoa distinguió las tácticas anteriores del BPR de las del FAPU, a quienes estaban eclipsando en términos organizativos dentro del movimiento obrero. El FAPU sí parece haber aceptado un papel subsidiario en las huelgas y en los sindicatos donde ejercían influencia, tal como sugiere la experiencia en Puerto El Triunfo. El ascenso rápido del BPR dentro del movimiento obrero, probablemente, tiene que ver con el éxito de la táctica de emplear militantes de otros sectores para levantar la moral de los huelguistas y para entregar los suministros que necesitaban. La participación de activistas del BPR que no eran obreros aparentemente fue recibido con cierto entusiasmo por los trabajadores de las fábricas, lo que les permitió superar sus ansiedades y aislamiento y expresar una sensación de poder compartida por gente corriente cuando se enfrentaban a unos adversarios claramente perfilados —algunos de los cuales retenían como rehenes. De acuerdo con algunos testimonios, el involucramiento de estudiantes, vendedoras del mercado y campesinos en las tomas tuvo el efecto de crear un ambiente festivo en lo que era, por lo demás, un asunto muy serio.

Carmen Parada, una trabajadora en una maquila y activista sindical, habla de la alegría del trabajo cooperativo durante una toma liderada por FENASTRAS en la zona franca: “Cantábamos, y después trabajábamos todos juntos por igual. Cocinábamos, limpiábamos y manteníamos la maquinaria en buenas condiciones”.<sup>89</sup> Un trabajador joven en una planta metalmecánica, quien se había afiliado al BPR, recuerda cuando se unió a la ocupación de la fábrica textil IMES:

Tomábamos turnos, algunos encargados de la seguridad, vigilando por las amenazas de la policía, de la guardia nacional o de los escuadrones de la muerte. Recuerdo que tenía la sensación doble —era

<sup>89</sup> Carmen Parada, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2012.

tan emocionante escuchar y cantar las canciones revolucionarias— todos los activistas y trabajadores se llevaban bien. Los niños corriendo por todas partes. Estábamos llenos de furia y de gozo. Pero también llenos de miedo, ansiosos [...] ya que los escuadrones de la muerte estaban en todas partes.<sup>90</sup>

Las cualidades de las ocupaciones no parecen haberse diferenciado significativamente con la influencia del FAPU o el BPR. Con independencia de los liderazgos, la experiencia con aires de fiesta no se tradujo directamente en noción alguna del control de los obreros sobre el proceso productivo. Es más, las tomas no incorporaban al número cada vez mayor de trabajadores desafectos, muchos de los cuales habían perdido su trabajo o temían el cierre inminente de las fábricas.

#### SOBRE LA RADICALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO

Durante todo el año de 1979, grandes números de trabajadores se radicalizaron, formalmente o no. Las cualidades de esa radicalización variaban bastante. La mayoría de trabajadores organizados reconocían la dura realidad sociopolítica y creían que desempeñaban un papel vital en su transformación. Dicho de otra forma, lo que hoy en día parece pintoresco —la idea de la lucha de clases se había convertido en una realidad intensa en 1979 para decenas de miles de trabajadores, hasta una cuarta parte de la clase obrera urbana. Diversos actores interpretaron la lucha de clases partiendo desde un protosindicalismo de los dirigentes de Puerto El Triunfo hasta aquellos que aceptaban la idea de la clase obrera como la vanguardia de la revolución popular. Los niveles y las cualidades

<sup>90</sup> Fidel Campos, entrevista con el autor, San Salvador, 2012.

del compromiso con la causa variaban entre los trabajadores dependiendo de factores tales como edad, experiencia laboral, biografías familiares, y su contacto directo con el BPR o el FAPU.

El conflicto obrero en Puerto El Triunfo fue diferente que en el resto del país en parte debido al “poder de negociación laboral” del sindicato (tal como se analizó en el Capítulo 1). La industria camaronera no dependía de capital ni materia prima del extranjero, sino de un mercado de consumidores en expansión en Estados Unidos. Los sindicatos del Puerto se aprovecharon grandemente de la ausencia de una amenaza viable a la industria. Estaban en condiciones de avanzar por caminos no disponibles para sus hermanos de clase, cuyos empleos siempre se encontraban pendiendo de un hilo. El SIP tenía la fortaleza, expresada en una fuerza de trabajo femenina que se movilizó para revertir la tendencia de inspiración neoliberal hacia una flexibilización del trabajo. En este sentido, el otorgamiento de un estatus permanente a las trabajadoras temporales fue un logro histórico.

En el área metropolitana, la estructura de la industria imponía un límite tajante al crecimiento del movimiento en vista de que el sector de maquila podía trasladar sus operaciones con relativa facilidad. La demanda cada vez más frecuente de los trabajadores en toda la industria textil y de prendas de vestir de que hubiera más “materia prima” explica la respuesta de la patronal ante las presiones económicas y laborales. El funcionamiento de las fábricas dependía de materias primas traídas desde fuera. Resulta muy significativo que en agosto de 1979 cuatro plantas se cerraron y dieron a entender que la principal razón fue el conflicto laboral. El gobierno y los medios de comunicación señalaron a la izquierda radical por sus acciones “ilegales”, porque en cada uno de los cuatro casos los trabajadores habían ocupado las fábricas. Hacia

finés de septiembre, más de 20 plantas habían cesado sus operaciones o estaban a punto de hacerlo. Conforme crecía la izquierda, una minoría importante de trabajadores se volvió desafecto del movimiento laboral debido a la crisis del cierre de plantas. Efectivamente, a pesar de los avances del movimiento obrero, en su momento de mayor auge en 1979, a lo sumo un 20% de la clase obrera urbana estaba involucrada en la actividad sindical de una manera u otra (y las estadísticas oficiales hablan de una cifra inferior a un 10%).<sup>91</sup> La izquierda radical no ofrecía solución alguna a este problema sumamente grave, opacado y exacerbado simultáneamente por la tormenta de protestas obreras y campesinas.<sup>92</sup>

Sin embargo, como veremos, en el Capítulo 3, las amenazas y realidades del cierre de las plantas también obligaron a los activistas en las bases a ejercer presión sobre la dirigencia de la izquierda radical, para que considerara seriamente las alternativas de los abordajes del leninismo clásico a la lucha de clases. En ese año explosivo de 1979, los trabajadores industriales confrontaron al Estado y a las patronales como nunca antes. También cuestionaron las limitaciones de las categorías ideológicas por medio de las cuales sus valientes líderes entendieron a este mundo y actuaron para cambiarlo.

<sup>91</sup> Es más, el sindicato de los obreros de la construcción, de lejos el más grande con unos 40 000 miembros, seguía firmemente bajo el control de una dirigencia del centro político que rara vez apoyaba a la izquierda del movimiento obrero. Véase US Embassy to State Department, "Annual Labor Report, II parte, El Salvador's Urban Union Movement since August 1977", p. 4.

<sup>92</sup> Un resumen provechoso de la política de Estados Unidos durante este periodo se encuentra en William Deane Stanley, *The Protection Racket State: Elite Politics, Military Extortion, and Civil War in El Salvador*, Philadelphia, PA, Temple University Press, 1996, pp. 128-130.

### 3. LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD. LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO Y LA GUERRA CIVIL EN CIERNES

Llegaron los del ERP íbamos a hacer una marcha para ver si era revolucionaria o no era [La Junta Revolucionaria].

Escolástico-militante de las LP-28,  
Morazán, 2009.

Han vencido a quienes defendían al pueblo, derecha salvadoreña. Pero celebren rápido, porque la guerra civil está un paso más cerca.

IGNACIO ELLACURÍA, diciembre de 1979.

El sindicalismo salvadoreño ha tenido que pasar a la clandestinidad porque es de la única manera como puede continuar viviendo ya que sus locales

han sido dinamitados y cateados y sus dirigentes encarcelados o asesinados [...].

Activistas sindicales salvadoreños  
encarcelados, julio de 1981.

El 15 de octubre de 1979, varios mandos medios del ejército llevaron a cabo un golpe de estado incruento. Formaron una coalición con civiles de la izquierda moderada y constituyeron la Junta Revolucionaria de Gobierno (en adelante JRG) que emitió una proclama que prometió reformas estructurales (incluyendo una reforma agraria), un cese a las violaciones a los derechos humanos, la abolición de la organización paramilitar Organización Democrática Nacionalista (en adelante ORDEN), la libertad de los presos políticos, la protección y ampliación de los derechos sindicales, y la democratización de la sociedad.<sup>1</sup> El fracaso posterior de la JRG anunció el inicio poco después de una guerra civil que terminó con la vida de alrededor de 75 000 personas.

El fracaso de la primera junta tuvo repercusiones inmediatas y dramáticas en todo el país. En 1980, las fuerzas de seguridad eliminaron a un estimado de 8 000 a 11 000 civiles. La mayoría de analistas y académicos han opinado que el proyecto de la JRG estaba condenado al fracaso desde su inicio debido a la represión implacable desatada por el mando militar, la derecha política y las maquinaciones del gobierno de Estados Unidos.<sup>2</sup> Este capítulo

<sup>1</sup> Rafael Menjívar Ochoa, *Tiempos de locura: El Salvador, 1979-1981*, San Salvador, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2006, p. 157.

<sup>2</sup> *Ibid.*, p. 135. Un análisis sobre la importante influencia conservadora de Estados Unidos sobre la JRG se encuentra en William M. LeoGrande, *Our Own Backyard: The United States in Central America, 1977-1992*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1998, p. 41. A pesar del título “State Department Hand in El Salvador Coup” [La mano del Departamento de Estado

presenta un análisis que modifica un tanto esa visión determinista, y sugiere que varios factores contingentes, diversas limitaciones discursivas y unas decisiones subjetivas desempeñaron un papel importante durante la gestión de la primera junta (15 de octubre de 1979-3 de enero de 1980) y que, por lo tanto, un desenlace histórico alternativo fue posible.

La mayoría de los relatos y análisis de este periodo subestiman la importancia de lo que considero es un momento de significancia crítica. Desde el 6 de noviembre hasta mediados de diciembre, gracias a una tregua informal entre las Organizaciones Populares (en adelante OP) y la JRG, las fuerzas de seguridad por primera vez en una década se abstuvieron de atacar a las manifestaciones o activar a los escuadrones de la muerte. Este periodo de tregua encaja difícilmente en los relatos convencionales, porque una apreciación seria de su validez obliga a un replanteamiento de la perspectiva de las dos extremas, muy común en los medios estadounidenses en tanto que culpaban a la izquierda extrema y a la derecha extrema en igual medida, o de la visión generalmente asociada con la izquierda que supone que los militares y la derecha extrema salvadoreña estaban siempre en plenas condiciones e igualmente comprometidos a aplastar cualquier reforma estructural seria.<sup>5</sup>

---

en el golpe en El Salvador], en *Executive Intelligence Review*, vol. 6, núm. 42, 30 de octubre-5 de noviembre de 1979, el artículo se refiere solamente a la influencia que se intentó ejercer sobre la composición de la junta después de que había comenzado a conformarse (es decir, a partir del 15 de octubre) para asegurarse de que solamente participaran funcionarios de nivel medio [“desk officers”] en su redacción.

<sup>5</sup> William Deane Stanley, *The Protection Racket State: Elite Politics, Military Extortion, and Civil War in El Salvador*, Philadelphia, PA, Temple University Press, 1996; Adolfo Majano, *Una oportunidad perdida: 15 de octubre 1979*, San Salvador, Índole Editores, 2009.

Este capítulo describirá y analizará este interludio breve pero decisivo. También le da seguimiento a nuestro análisis en el Capítulo 2 sobre la interacción dialéctica entre las categorías de la izquierda revolucionaria y las expresiones de conciencia que surgieron dentro de las bases de un movimiento sindical cada vez más radical.

Desde comienzos de 1979, varios oficiales de los mandos medios habían estado conversando sobre la posibilidad de llevar a cabo un golpe militar reformista, en buena medida para desarticular la amenaza revolucionaria. Comenzaron a dialogar con diferentes sectores de la izquierda, incluyendo al brillante académico jesuita, Ignacio Ellacuría y al arzobispo Romero. Muchos de estos oficiales jóvenes involucrados en el complot eran demócratas convencidos, que estaban prestos a depurar a la fuerza armada y reconstituirla como una fuerza no represiva. El 6 de octubre, una asamblea de estos oficiales votó a favor de colocar a otro militar en la JRG junto con el coronel, Adolfo Majano, de línea progresista. Entre los 27 presentes, 17 votaron a favor del teniente coronel René Guerra y Guerra, un oficial de izquierda moderada. Al día siguiente, mientras Guerra y Guerra se reunía con monseñor Romero, el coronel Jaime Abdul Gutiérrez convocó a los mandos medios y les advirtió sobre las inclinaciones izquierdistas del candidato favorito. De nuevo, Guerra y Guerra consiguió 17 votos pero el coronel Guillermo García, de línea conservadora, se adjudicó 14. En vista de que ninguno de los candidatos obtuvo una mayoría de votos, Gutiérrez pudo postularse como un candidato de conciliación.<sup>4</sup> El papel de Gutiérrez antes y después del golpe fue decisivo pero no

<sup>4</sup> Sobre la inclusión aparentemente fortuita de Gutiérrez, véase Stanley, *op. cit.*, pp. 44 y 45. Stanley no encontró evidencia alguna que apuntara a una intromisión de Estados Unidos en apoyo a la segunda votación, p. 144. Véase también, Rodrigo Guerra y Guerra, *Un golpe al amanecer: la verdadera historia*

predestinado. En palabras de William Stanley, “Parece que fue un golpe increíble de mala suerte [ya] que Guerra no estuvo presente en la reunión del 7 de octubre. Guerra se había defendido en el pasado frente a acusaciones de izquierdismo y sabía cómo aprovecharse de la reputación de corruptos que tenían Gutiérrez y los otros para socavar el apoyo que pudieran tener entre la oficialidad joven”.<sup>5</sup> Si, Guerra y Guerra, hubiera programado su visita con monseñor Romero para el día siguiente y en consecuencia hubiera estado presente en la reunión convocada por Gutiérrez, es muy posible que habría formado parte de la JRG, dándole así una mayoría de votos a la izquierda y asegurando un desenlace diferente para el nuevo gobierno.

Tal como afirma Rafael Menjívar Ochoa: “La importancia de la Proclama era obvia para el tiempo y para la historia; no hay en el país una declaración de principios tan avanzada en términos de sensibilidad social y beneficios a las mayorías, al menos no una que hubiera estado en manos de unos gobernantes dispuestos a cumplirla”.<sup>6</sup> La proclama, que llevaba la impronta de Ignacio Ellacuría, anunció un asalto frontal al poder oligárquico y la remoción posible de los militares de la vida política.<sup>7</sup> Ellacuría y monseñor Romero habían ofrecido su apoyo al nuevo gobierno con la condición de que se respetaran los grandes objetivos de los derechos humanos y se enjuiciara a los militares acusados de crímenes. Román Mayorga, un miembro del ala izquierda de la Democracia Cristiana y rector de la Universidad Centroamericana

---

*de la proclama del 15 de octubre de 1979*, San Salvador, Índole Editores, 2009, pp. 62-65; Menjívar, *op. cit.*, pp. 136-141.

<sup>5</sup> Stanley, *op. cit.*, p. 145.

<sup>6</sup> Menjívar, *op. cit.*, p. 157.

<sup>7</sup> Majano, *op. cit.*, p. 74.

(en adelante UCA), fue escogido como miembro civil de la JGR junto con Guillermo Manuel Ungo, un profesor de la UCA y líder del Movimiento Nacional Revolucionario (en adelante MNR) de línea social demócrata. Dentro de pocos días, la JRG anunció una amnistía política e invitó a los exiliados a volver al país.

Ambas, la izquierda y la derecha incursionaron en esta coyuntura, profundamente divididas y, hasta cierto punto, desprevenidas. La derecha estaba dividida entre aquellos que querían un programa de reformas limitado y bien controlado para estabilizar al país y aquellos que querían deponer a la JRG, la cual calificaban de comunista. Además de la brecha entre la izquierda moderada en el gobierno, incluyendo al Partido Comunista Salvadoreño (en adelante PCS), y la izquierda revolucionaria, ésta también se encontraba dividida sobre asuntos de táctica y quién se convertiría en la vanguardia. No obstante, todos los grupos de izquierda estaban de acuerdo en que Estados Unidos había promovido el golpe y que la JRG estaba dirigiendo una estrategia contrainsurgente. Es más, toda la izquierda revolucionaria diseñó acciones que habrían de develar el carácter reaccionario de la JRG.

El Ejército Revolucionario del Pueblo (en adelante ERP) y su organización de masa aliada, las Ligas Populares 28 de Febrero (en adelante LP-28), inmediatamente asumieron una actitud militante frente al régimen. En palabras del líder de las LP-28, César Martí:

El levantamiento armado se prepara durante toda la noche y a las 5 y media de la mañana del 16, ya estaban tomadas las ciudades periféricas [...] con el fin de que esta maniobra imperialista no pasara inadvertida y con el fin de evitar a toda costa la desmovilización.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> César Martí, “LP-28: Unidad revolucionaria y perspectivas de poder”, en *El Salvador: alianzas políticas y proceso revolucionario*, Cuadernos de Coyuntu-

El objetivo de la actividad insurreccional —que Ellacuría catalogó como “suicida”— era política y no militar, con el objetivo de “desenmascarar” al nuevo gobierno. El ERP capturó a los alcaldes y tomó las alcaldías. También ejecutaron a algunos miembros de ORDEN. Los militares respondieron con tanquetas y armas pesadas. En el suburbio industrial de San Marcos, la Guardia Nacional rodeó la alcaldía. Después de cinco horas de combates, los militares habían matado a 24 civiles y guerrilleros y herido a 80. La brutalidad de la respuesta militar dio a entender que el antiguo régimen seguía vigente o que la JRG falló al no ejercer un control sobre los militares.

El mismo día, unos manifestantes afines al Bloque Popular Revolucionario (en adelante BPR) se reunieron frente a la fábrica Diana (de golosinas y boquitas) en apoyo a los trabajadores que habían ocupado la planta el día anterior para protestar contra la presencia de vigilantes privados fuertemente armados en la fábrica.<sup>9</sup> Las fuerzas de seguridad arremetieron contra la manifestación y mataron a una persona, para después ingresar a la fábrica donde arrestaron a 70 trabajadores y mataron a cuatro más. Procedieron entonces a asaltar otras cuatro fábricas aledañas en el suburbio industrial de Soyapango. Durante los ataques a las fábricas, las

---

ra, núm. 5, México, Sociedad de Economía Política Latinoamericana (SEPLA), 1979, p. 21.

<sup>9</sup> La huelga también incluyó varias demandas, entre ellas una solicitud para llevar a cabo una celebración conmemorando la fundación del sindicato que la compañía había rechazado. No está claro cómo los trabajadores ocuparon la planta con la presencia de un contingente de guardias privados (aparentemente antiguos miembros de la Guardia Nacional). Volante fecha 16 de octubre de 1979 y firmado por el Sindicato de Dulces y Pastas Alimenticias (SIDPA)/ Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI)/ Universidad Centroamericana (UCA), San Salvador, El Salvador.

autoridades mataron a cinco trabajadores y arrestaron a decenas más. En la desesperación, los trabajadores supuestamente intentaron darle fuego a dos de las fábricas.<sup>10</sup>

Las posiciones evidentemente contradictorias de la JRG —cuando apelaba al respeto de los derechos sindicales, por un lado, y asalataba las fábricas ocupadas, por el otro— simbolizaba las profundas divisiones en el seno del nuevo régimen reformista. La represión se derivaba de la incapacidad de la JRG de ejercer su autoridad legal sobre las fuerzas de seguridad.

La izquierda, con la notable excepción del PCS, rechazó sin ambigüedades al nuevo gobierno.<sup>11</sup> Las manifestaciones de protesta encabezadas por las OP, siempre con la protección de brigadas de autodefensa, envalentonaron a la derecha dentro y fuera de las fuerzas armadas. El 22 de octubre, la tropa abrió fuego contra una manifestación del Frente de Acción Popular Unificado (en adelante FAPU), dejando como saldo varias personas muertas. En respuesta, su federación sindical aliada, la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (en adelante FENASTRAS), se retiró del Foro Popular, una coalición de grupos políticos y sindicatos que había estado brindando un apoyo clave a la JRG. El 24 de octubre, el BPR organizó una manifestación que culminó en la toma de los Ministerios de Trabajo y de Economía. Entre los rehenes se encontraba el Ministro de Trabajo, un miembro del PCS.

<sup>10</sup> Entre las fábricas se encontraba APEX, donde el gerente general Boorstein, un estadounidense, había sido retenido como rehén y que fue ocupada por dos meses. “Informática El Salvador,” Centro Intercultural de Documentación (CIDOC), octubre-noviembre de 1979, p. 9.

<sup>11</sup> Curiosamente, el 19 de octubre el ERP/LP-28 vaciló y reconoció la presencia de “elementos progresistas” en la JRG y exigió tener una representación en el nuevo gobierno. La confusión y desorientación en las LP-28 se reflejó varios días después cuando la organización, de nuevo, denunció a la JRG.

Las demandas del BPR repitieron los de la izquierda y de la comunidad de los derechos humanos: libertad para los presos políticos y una rendición de cuentas sobre los desaparecidos. Sin embargo, la mayoría de las demandas aludían a las necesidades inmediatas de las clases trabajadoras en las ciudades y el campo, incluyendo un aumento de los salarios en un 100%; unas reducciones puntuales en el precio de las necesidades básicas y del transporte colectivo; y la provisión de agua potable para toda la población.

El 29 de octubre, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra una manifestación de las Ligas Populares en apoyo a la ocupación que realizaba el BPR, y mataron a 29 personas, en su mayoría campesinos del departamento de Morazán. Aunque el gobierno y la prensa de derechas culparon al grupo de izquierda radical por haber iniciado el tiroteo, los observadores imparciales dieron fe de haber visto a las fuerzas de seguridad disparar primero. Ahora bien, un miembro de las LP-28 oriundo de Morazán, Andrés Barrera, recordó que

Fuimos a la manifestación para apoyar a los compañeros del Bloque Popular que habían tomado el ministerio de trabajo. Pasamos dos veces por donde ellos gritando consignas y siempre teníamos que pasar por donde la policía nacional. Como si estábamos persiguiendo y lo que andábamos buscando era que nos dieran riata algo.<sup>12</sup>

Con independencia de que las LP-28 hayan provocado la represión (tal como lo hicieron el 16 de octubre), la reacción violenta de los militares estuvo fuera de toda proporción a la provocación. De nuevo, la JRG se mostró incapaz de contener a las fuerzas de

<sup>12</sup> Andrés Barrera, entrevista con el autor y Carlos Henríquez Consalvi, 2007; entrevista con Barrera, 2011.

seguridad que siguieron mostrándose tan agresivas que los militantes de las LP-28 tuvieron que enterrar a sus muertos dentro de una iglesia vecina.

El 31 de octubre, Ellacuría reprochó a la izquierda por sus constantes y a menudo violentas manifestaciones callejeras: “¿qué hubieran perdido las organizaciones populares en esperar siquiera un mes?”<sup>13</sup> No sabemos si este llamado desempeñó algún papel en las negociaciones entre el BPR y la JRG o si el acuerdo al cual se llegó fue debido principalmente a las protestas continuas de las OP y la sangre derramada en las calles. No obstante, el 6 de noviembre, en la sede de la embajada de Nicaragua, el BPR acordó una tregua de un mes con el gobierno que consideró, entre otros, el cese de las ocupaciones y una serie de concesiones por parte de la JRG. El FAPU y las LP-28 también acordaron plegarse informalmente a la tregua. La JRG acordó reducir los pasajes de autobús interurbanos en un 50% y a intervenir en dos conflictos sindicales en curso. La JRG también se comprometió a negociar una indemnización o a reabrir cuatro de las otras fábricas. La JRG también prometió decretar aumentos significativos de salarios en el campo y las fábricas dentro del plazo de 30 días e instituir políticas de defensa de los derechos humanos, especialmente en los casos de la desaparición de unos 176 presos políticos.<sup>14</sup> El mismo día, la JRG anunció la di-

<sup>13</sup> Ignacio Ellacuría, “Las organizaciones populares ante la nueva situación,” en Rodolfo R. Campos [ed.], *El Salvador entre el terror y la esperanza: los sucesos de 1979 y su impacto en el drama salvadoreño de los años siguientes*, San Salvador, UCA Editores, 1982, p. 614.

<sup>14</sup> Unos días antes, el gobierno había nombrado una comisión para encontrar un total de 300 personas desaparecidas. BPR, *Combate Popular*, North American Congress on Latin America (NACLA) Archive, 15 de noviembre, 1979, microfilm, pp. 590-592, rollo 6; Tomás Guerra, *El Salvador, octubre sangriento:*

solución de ORDEN, el grupo paramilitar de derechas integrado por 100 000 personas.<sup>15</sup>

El 6 de noviembre, 12 000 personas bajo las banderas del BPR comenzaron una marcha en apoyo a las ocupaciones. Los trabajadores en 13 fábricas se fueron al paro y abandonaron las plantas. De acuerdo con los organizadores, miles más se unieron a la marcha camino a los ministerios, donde los ocupantes salieron en fila de los edificios. Los del BPR marcharon entonces hacia la Universidad de El Salvador donde realizaron un acto en celebración de la victoria.<sup>16</sup> Bajo órdenes de la JRG, las tropas y los cuerpos de seguridad se mantuvieron acuartelados. Dos días más tarde, 50 militantes de las LP-28 salieron en fila de la catedral de San Miguel después de varias semanas de protesta contra el “autogolpe fascista de la Junta”.<sup>17</sup>

Mucho se ha escrito sobre la primera JRG (15 de octubre de 1979-3 de enero de 1980) pero el periodo de la tregua, extrañamente, ha sido estudiado muy poco debido, en parte, a que no calza bien en ninguno de los recuentos convencionales. Desde el 6 de noviembre hasta mediados de diciembre, las fuerzas de seguridad se abstuvieron de atacar violentamente a las manifestaciones o las huelgas. En el mes de noviembre se registró un nivel bastante inferior de capturas y enfrentamientos en las calles; también se

---

*itinerario y análisis del golpe militar del 15 de octubre de 1979*, San José, Centro Víctor Sanabria, 1979, pp. 72 y 73; Stanley, *op. cit.*, pp. 157 y 158.

<sup>15</sup> “Government Junta Disbands ORDEN” [Junta de Gobierno disuelve ORDEN], París, AFP, 7 de noviembre, 1979, trad. de Foreign Broadcast Information Service, FBIS Daily Report, Latin America, 7 de noviembre, 1979.

<sup>16</sup> BPR, *Combate Popular*, 15 de noviembre, 1979 (NACLA Archive) microfilm, pp. 590-592, rollo 6; Guerra, *op. cit.*, pp. 72 y 73; Stanley, *op. cit.*, pp. 157 y 158.

<sup>17</sup> STECEL también llevó a cabo una huelga de ocho horas para protestar por la muerte de uno de sus afiliados. Guerra, *op. cit.*, p. 78.

registraron muy pocas ejecuciones en zonas urbanas. Por cierto, en todo el país hubo solamente 10 muertes violentas de civiles documentadas en noviembre, de lejos el total mensual más bajo entre 1979 y 1992.<sup>18</sup>

#### LA JRG EN NOVIEMBRE DE 1979

Al comenzar la tregua el 6 de noviembre, las fuerzas de seguridad suspendieron sus acciones represivas contra las OP. De acuerdo con un analista de aquel momento vinculado a la UCA, no ejecutaron a nadie durante las siguientes seis semanas, un cambio de rumbo notable cuando se compara con sus acciones letales anteriores. Según el analista:

A partir de este momento los Cuerpos de Seguridad se plegarían a los nuevos lineamientos, y desde ese momento comienza un periodo de mayor tranquilidad, en que prácticamente desaparecen las represiones violentas, y nos van a permitir un mes de bastante tranquilidad. Las tomas se negocian, y no se acude a la fuerza.<sup>19</sup>

Existe poca duda de que del 15 al 31 de octubre, las fuerzas de seguridad actuaron en contra de las disposiciones enunciadas por la JRG. Quizá las muertes del 29 de octubre durante la manifestación de las LP-28 y las del 31 de octubre de la manifestación del BPR, alteraron el equilibrio interno de la JRG y la presionaron para que actuara de manera más decidida para controlar a las fuer-

<sup>18</sup> Por cierto, algunos analistas en aquel momento, como Eugenio Anaya, sugieren que las muertes de civiles fueron causadas por la guerrilla. Véase Stanley, *op. cit.*, p. 166, donde se menciona la cifra de 10 muertes en noviembre.

<sup>19</sup> Eugenio Anaya, "Crónica del mes", en *Estudios Centroamericanos*, vol. 34, núm. 374, noviembre-diciembre de 1979.

zas de seguridad. La capacidad del gobierno de parar la represión violenta durante un mes sugiere que al menos dentro de la JRG (en contraste con los militares), una mayoría de sus integrantes se esforzó por responder pacíficamente a las protestas políticas y sociales. Al mismo tiempo, la JRG avanzaba, lentamente, hacia el cumplimiento del contenido de la Proclama. Durante sus primeras semanas, la JRG se mostró atónita cuando supo que todos los presos políticos habían sido ejecutados. Hasta el miembro militar conservador de la junta, Abdul Gutiérrez, quedó profundamente impresionado por las madres de los desaparecidos y enmudeció cuando escuchó sus testimonios. La JRG nombró una comisión que procedió rápidamente a reunir evidencia contra los anteriores presidentes Molina y Romero y sus jefes de seguridad, y a buscar los restos de los desaparecidos.<sup>20</sup> Hacia fines de mes, la comisión había descubierto cadáveres en cárceles clandestinas y pidió que se formularan cargos. El 3 de diciembre, la JRG emitió un decreto para que se comenzaran las indagaciones preliminares contra Molina y Romero.

Durante noviembre y diciembre, la JRG intentó movilizar sus propias bases en apoyo a su programa de reformas estructurales. Rubén Zamora, el ministro de la presidencia de la JRG, se dirigió a unos 5 000 campesinos que asistían a un congreso convocado por la Unión Comunal Salvadoreña (en adelante UCS). Esta organización campesina de línea reformista, financiada inicialmente por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (en adelante USAID) y el Instituto Americano para el Desarrollo del Sin-

<sup>20</sup> “Junta Commission to Investigate Missing Prisoners Issue” [Comisión de la Junta investigará asunto de presos desaparecidos], Panamá, ACAN, 2 de noviembre, 1979, trad. del Foreign Broadcast Information Service, FBIS Daily Report, Latin America, 6 de noviembre, 1979.

dicalismo Libre (en adelante AIFLD), apoyó firmemente el llamado de Zamora para una reforma agraria.<sup>21</sup> El 14 de diciembre, más de 10 000 obreros urbanos afiliados al Foro Popular asistieron a una manifestación en San Salvador que exigió un aumento salarial del 40%, una reducción de los alquileres en un 30% y el derecho a la sindicalización en el campo. Los manifestantes también pidieron la extradición de Romero, Molina y muchos otros violadores de los derechos humanos de los regímenes anteriores. A pesar de la naturaleza de sus demandas que evidenciaba una radicalización del movimiento, el Foro Popular mantuvo su fuerte apoyo a la JRG.<sup>22</sup>

El gobierno también dependía en cierta medida de la Democracia Cristiana (en adelante PDC). En la última semana de octubre, una muchedumbre de 30 000 a 50 000 personas recibió a José Napoleón Duarte cuando volvió al país después de siete años de exilio en Venezuela.<sup>23</sup> El tamaño de la manifestación era reflejo de la fuerza que seguía ostentando el PDC. Tal como señaló la radio

<sup>21</sup> *El Independiente*, 27 de noviembre, 1979.

<sup>22</sup> “La semana fue así (del 8 al 15 de diciembre de 1979)”, 15 de diciembre de 1979 en Campos, *op. cit.*, p. 734. La radio YSAX (del arzobispado de San Salvador) informó que en esta manifestación, que fue esencialmente ignorada por los medios de comunicación de derecha, no pudieron participar los trabajadores agrícolas y campesinos debido a las cosechas. A pesar del retiro de FENASTRAS, la mayoría de organizaciones pertenecientes al Foro era sindicatos obreros. “Three Demonstrations Held in Support of Various Demands” [Tres manifestaciones en apoyo a varias demandas], Panamá, ACAN, 15 de diciembre, 1979), trad. de Foreign Broadcast Information Service, FBIS Daily Report, Latin America, 17 de diciembre, 1979. Véase *El Independiente*, 12 de diciembre, 1979. Catorce grupos, incluyendo a FENASTRAS y otras federaciones obreras, se habían unido antes para oponerse al régimen de Romero. Como se observó anteriormente, FENASTRAS se retiró en protesta por la represión de la JRG.

<sup>23</sup> *Latin American Weekly Report*, 2 de noviembre, 1979, informó que 30 000 personas salieron a recibir a Duarte.

YSAX, del arzobispado, (en palabras escritas por Ellacuría): “es indudable que sólo él [Duarte] puede mover más pueblo que todo el Bloque, el FAPU, y las Ligas. Se nos decía que ya el pueblo, educado por las organizaciones, estaba convencido que Duarte y su partido no tenían nada que hacer [...] muestra lo engañadas que pueden estar las organizaciones en sus juicios[...].”<sup>24</sup> Este error de cálculo fue ciertamente un síntoma de triunfalismo revolucionario.

La JRG recibiría el apoyo del PDC hasta cierto punto en vista de que Duarte y su círculo eran aliados vacilantes. Presionaban por elecciones antes de llevar a cabo reformas estructurales, una posición compartida por la derecha (que simplemente quería bloquear las reformas). Es más, Duarte y otros dirigentes del PDC se dedicaron a negociaciones tras bambalinas con los militares y la embajada de Estados Unidos en tanto que aspiraban a un rol más importante en la nueva junta.<sup>25</sup>

A pesar de las vacilaciones y los disensos dentro de sus filas, la JRG sí pudo implementar algunos elementos clave de su programa reformista. El gobierno aumentó dramáticamente el salario mínimo rural de los tiempos de cosecha al mismo tiempo que congeló los precios de la canasta básica.<sup>26</sup> El 14 de noviembre decretó un salario mínimo para la cosecha de café de 5.70 dólares diarios.<sup>27</sup> A comienzos de diciembre, tomó los primeros pasos para poner en

<sup>24</sup> “La semana fue así (del 20 al 27 de octubre de 1979)”, 27 de octubre de 1979, en Campos, *op. cit.*, p. 606.

<sup>25</sup> Majano, *op. cit.*, p. 178.

<sup>26</sup> Un estimado del costo de los alimentos básicos necesarios para mantener un nivel de vida de subsistencia.

<sup>27</sup> “Foreign Minister Says Talks with Honduran Counterpart Suspended” [Ministros de relaciones exteriores dicen que pláticas con Honduras se han suspendido], Panamá, ACAN, 14 de noviembre, 1979, trad. de Foreign Broadcast Information Service, FBIS Daily Report, Latin America, 15 de noviembre, 1979.

marcha una reforma agraria cuando prohibió la venta de tierras de más de 100 hectáreas (retroactivo al 15 de octubre). Al mismo tiempo, Enrique Álvarez, el ministro de agricultura, logró una reducción considerable de los alquileres de las tierras agrícolas, los que pasaron de hasta 1 000 colones por manzana (1 manzana = 0.71 hectárea) a un máximo de 200 colones y un mínimo de 25 colones (10 dólares). Durante una comparecencia en la televisión, Álvarez presentó unas estadísticas alarmantes que justificaban las reformas, incluyendo un 73% de niños campesinos que padecían de desnutrición y un 40% de la población rural sin acceso a tierras de cultivo.<sup>28</sup> Hacia fines de mes, la JRG nacionalizó el comercio de exportación del café y el azúcar. También congeló los alquileres urbanos y ofreció una ayuda por más de 50 millones de dólares para cubrir las necesidades de aquellas personas que vivían en comunidades marginales.<sup>29</sup>

En el ámbito de las relaciones internacionales, la JRG le dio vuelta a la política anterior y estableció relaciones diplomáticas con el gobierno sandinista de Nicaragua y con Cuba y rompió relaciones con la República de Sudáfrica. Hasta mediados de di-

<sup>28</sup> Otras estadísticas incluyen: un 37% de la población no dispone de agua potable, siete décimas del 1% de los propietarios son dueños del 40% de la tierra —de la tierra más fértil. US Embassy to Secretary of State, “Presentation of Agrarian Reform by Minister of Agriculture” [Informe sobre reforma agraria por el Ministro de Agricultura], cable, 17 de diciembre, 1979, E00322, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, Collection Digital National Security Archive (en adelante DNSA), Washington, George Washington University, 1979.

<sup>29</sup> “Marginal” se refiere, en efecto, a tugurios con ninguna o poca infraestructura. Eugenio Anaya, “Crónica del mes”, pp. 1090 y 1091; US Embassy to Secretary of State, “Presentation on Agrarian Reform by Minister of Agriculture,” cable, 17 de diciembre, 1979, E00322, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, Collection DNSA.

ciembre, por lo tanto, en circunstancias extremadamente tensas e inusuales, la JRG, respaldada por una base social potencialmente fuerte, actuó como un gobierno de centro izquierda que luchaba por concretar su programa y neutralizar a sus opositores.

Durante noviembre y adentrado diciembre, la JRG entabló algún diálogo con las organizaciones populares. A pesar de que los detalles de estas conversaciones no han salido a la luz, sí parece que el FAPU y algunos elementos del BPR estaban listos para asumir un papel parecido al de un partido político de oposición, dedicado a presionar a la JRG para que cumpliera con sus demandas a favor de obreros y campesinos.

#### LA PERSPECTIVA DESDE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

En la administración del presidente Carter, la política exterior de Estados Unidos se inclinó hacia una oposición limitada a la represión estatal en Centroamérica. El triunfo de la revolución sandinista reorientó la política de Estados Unidos hacia una contención de los movimientos revolucionarios mientras expresaba duras críticas de los regímenes militares. La política del Departamento de Estado hacia El Salvador reflejaba claramente esta estrategia de doble carril. A pesar de que el embajador Frank Devine reconoció la amenaza que representaba la derecha, su mayor preocupación fue el fortalecimiento de la izquierda armada y la debilidad de los militares. Se mostró profundamente hostil ante las OP. La izquierda revolucionaria, a su vez, no dejaba de afirmar que la administración Carter y la CIA habían organizado el golpe de estado. A pesar de que existe alguna evidencia de que la CIA había trabajado con el coronel Abdul Gutiérrez antes del golpe, la hostilidad

de la administración Carter hacia el régimen del general Romero, debido a sus abusos a los derechos humanos, había impactado negativamente en las relaciones de Estados Unidos con las fuerzas armadas.<sup>50</sup> El golpe remedió esa situación y es probable que la CIA y la embajada entonces desarrollaron vínculos estrechos con el ministro de defensa García y con Abdul Gutiérrez. No obstante, un informe preparado por la embajada el 8 de noviembre rechazó una estrategia represiva a favor de “una firme disuasión junto con una estrategia política coherente para descalificar a la izquierda extrema”.<sup>51</sup>

A la vez, Devine y sus asesores estaban muy conscientes de las limitaciones sobre su capacidad para intervenir. El informe del 8 de noviembre incluyó la siguiente recomendación:

En este momento delicado de la existencia de la Junta, el rol del Gobierno de Estados Unidos (GOES) es muy importante pero requiere comprensión y reconocimiento de las realidades locales [...]. [La JRG] es de centro pero sigue tambaleándose políticamente en tanto que busca hacerse de una base política amplia al incorporar a una población ideológicamente diversa, parte de la cual se resistiría o incluso se opondría a una relación estrecha y abierta con Estados Unidos.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Al 4 de octubre, Estados Unidos todavía no estaba al tanto ni involucrado en la confabulación del golpe. Véase US State Department to Viron Vaky, “US Policy to El Salvador” [Política de Estados Unidos hacia El Salvador], memorando, 4 de octubre, 1979, EL00624, “El Salvador: War, Peace, and Human Rights, 1980-1994”, Collection DNSA, pp. 1-6.

<sup>51</sup> US Embassy to Secretary of State, “Analysis of Salvadoran Situation [Análisis de la situación salvadoreña] (Redistributed by Department of State on 8 November 1979, to U.S. Embassies in Central America)”, cable, 6 de noviembre de 1979, EL00645, “El Salvador: War, Peace, and Human Rights, 1980-1994”, Collection DNSA, p. 9.

<sup>52</sup> *Ibid.*, p. 10.

Sin proporcionar nombres, el informe se refirió al PCS (y su partido de fachada, la Unión Democrática Nacional-UDN) y a aquellos sindicatos obreros que habían permanecido en el Foro Popular. Por un momento breve, pareció que los funcionarios de la embajada se habían quitado sus anteojeras de la Guerra Fría.

A comienzos de diciembre, la embajada comenzó a ver las zonas rurales con preocupación, en tanto que las OP empezaron a aprovecharse del retiro de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo alrededor de 50 tomas de fincas de café y 25 plantaciones de algodón. Para ese momento, la embajada temía más el auge de la izquierda radical que la reacción de la derecha.<sup>35</sup> Hacia mediados de diciembre, la embajada y presumiblemente también la CIA estaban presionando a la JRG para que respondiera con fuerza ante el “enemigo implacable”, la “extrema izquierda”. La embajada estaba preocupada de que “el tiempo se acababa” y trató de trasladarle esa urgencia a la JRG y también a García.<sup>34</sup>

Estados Unidos desempeñó un papel clave en el fortalecimiento de los militares dentro de la JRG. Sin embargo, no hay indicios de que hayan querido deshacerse de Ungo o Mayorga o provocar las renuncias masivas que los de línea dura en el ejército suscitaron a comienzos de enero. En breve, a pesar de un afán de encauzar o someter a las OP y sus organizaciones guerrilleras afines, existe poca evidencia de una intervención determinante durante

<sup>35</sup> US Embassy to Secretary of State, “General Uneasiness of Salvadoran Political Scene: An Assessment” [Malestar generalizado en el entorno político salvadoreño: una valoración], cable, 4 de diciembre, 1979, E00307, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, Collection DNSA.

<sup>34</sup> US Embassy to Secretary of State, “Survivability of Revolutionary Governing Junta (JRG)” [Posibilidades de supervivencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG)], cable, 19 de diciembre, 1979, EL00646, “El Salvador: War, Peace, and Human Rights, 1980-1994”, Collection DNSA.

esta coyuntura: Estados Unidos no podía dictarle a la JRG cómo debía comportarse ni existe indicio alguno de planes para una intervención militar durante este periodo. Resulta irónico que para mayo de 1980, la administración Carter se dio cuenta de que la principal amenaza a los intereses de Estados Unidos residía en los mismos militares de derecha que Washington había apuntalado hacia fines del año anterior.<sup>35</sup>

#### LA DERECHA Y LOS MILITARES

El golpe de estado tomó por sorpresa a la derecha. Aunque se oponía fuertemente a la JRG, la derecha radical dentro de la oligarquía agraria y algunos sectores dentro del ejército tuvieron problemas para formular una estrategia coherente. Según un informe de la embajada de Estados Unidos con fecha 8 de noviembre, “La amenaza más inmediata desde la derecha parece provenir de una combinación potencial de dos grupos: un elemento reaccionario en el sector privado que se había dedicado al terrorismo de estado bajo Romero y sectores desafectos en las fuerzas armadas”.<sup>36</sup> El infor-

<sup>35</sup> US Department of State, “Telegram from the Embassy in El Salvador to the Department of State, ‘Updating our Strategy for El Salvador’” [Telegrama de la embajada en El Salvador al Departamento de Estado, ‘Puesta al día de nuestra estrategia para El Salvador’], 26 de mayo de 1980, en *Foreign Relations of the United States, 1977-1980*, vol. xv: *Central America, 1977-1980* (Washington, DC: Government Publishing Office). El documento señala que dentro del estamento militar, los oficiales votaron en un 60% a favor de Gutiérrez en contra de un 40 % por Majano (a quien Estados Unidos quería apoyar). El documento también reconoce el poder y el terrorismo de la derecha extrema, vinculada a sectores del aparato de seguridad.

<sup>36</sup> US Embassy to Secretary of State, “Analysis of Salvadoran Situation [Análisis de la situación salvadoreña] (Redistributed by Department of State

me destaca el temor de los militares de una pérdida de disciplina, causada por una interrupción de las líneas de mando como consecuencia del “desplazamiento de unos cincuenta oficiales de alta gradación y unos traslados masivos de personal”.<sup>57</sup> Un representante del Comando Sur de Estados Unidos tuvo la oportunidad de “inspeccionar las unidades militares salvadoreñas en el terreno... [con] resultados alarmantes”.<sup>58</sup>

A partir de un alineamiento estratégico con la derecha, las fuerzas armadas habían controlado los gobiernos desde 1931, y ahora se encontraban formalmente subordinados a la JRG. A comienzos de noviembre, la derecha dentro de los militares, incitada por la extrema derecha, confabuló para llevar a cabo un contragolpe, pero estos planes no pudieron cuajar de inmediato, especialmente debido a que el PCS los denunció.<sup>59</sup> El 15 de noviembre se creó una nueva organización militar electa democráticamente, el Consejo Permanente de la Fuerza Armada (en adelante COPEFA), dando a entender así que los oficiales jóvenes progresistas seguían fieles

---

on 8 November 1979, to U.S. Embassies in Central America)”, cable, 6 de noviembre, 1979, EL00645, “El Salvador: War, Peace, and Human Rights, 1980-1994”, Collection DNSA, p. 7.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>58</sup> Estados Unidos quería presionar a la JRG para que aceptara su asistencia frente a la crisis, pero todavía debía permitir a la JRG que “impusiera limitaciones, si acaso, si cree que fueran necesarias”. US Embassy to Secretary of State, “The Military of El Salvador in Its Moment of Crisis” [Los militares de El Salvador en su momento de crisis], cable, 11 de diciembre, 1979, E00314, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, Collection DNSA, p. 2.

<sup>59</sup> “Junta Calls Countercoup ‘Suicidal’” [La Junta considera que un contragolpe sería suicida], Panamá, ACAN, 2 de noviembre, 1979, trad. de Foreign Broadcast Information Service, FBIS Daily Report, Latin America, 5 de noviembre, 1979; “Right May Launch a Coup in El Salvador”, en *Latin American Weekly Report*, 9 de noviembre, 1979.

a la Proclama y que la derecha militar se encontraba gravemente amenazada. El objetivo preciso del COPEFA era el de asegurar que los militares y la JRG llevaran a cabo las reformas estructurales y pusieran fin a la represión contra la izquierda. En términos parecidos, la abolición de ORDEN decretada por la JRG también desconcertó a la derecha, aunque los dirigentes de dicha organización paramilitar se comprometieron a continuar sus acciones letales con un nuevo nombre.

Aunque la derecha dentro de los militares seguía vacilante y a la defensiva, a partir de los acuerdos del 6 de noviembre la reacción desde los civiles conservadores comenzó a movilizarse. El recientemente formado Movimiento Nacionalista Salvadoreño (que se analizará en el Capítulo 5) apoyó dichas tácticas mientras se dedicaba a promover otro golpe de estado.<sup>40</sup> Un paro empresarial, organizado por el Consejo Nacional de Entidades Agropecuarias, una asociación de finqueros y ganaderos del oriente del país, tuvo en la mira directamente a las “reformas estructurales” y el nuevo salario mínimo para los trabajadores rurales.

La primera señal de que la presión que ejercía la derecha (y quizá la de la embajada) estaba rindiendo frutos ocurrió cuando los huelguistas fueron expulsados del beneficio de algodón, Entre Ríos el 4 de diciembre. Aun así, hasta esa operación no se caracterizó por la violencia de los meses y años anteriores. De mayor significancia fueron las tres manifestaciones de masas promovidas por la derecha. El 10 de diciembre, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (en adelante ANEP), la gremial del sector pri-

<sup>40</sup> Sus dirigentes eventualmente integrarían el núcleo de la Alianza Republicana Nacionalista (en adelante ARENA), el principal partido de oposición durante la década de 1980 y el partido de gobierno de 1989 a 2009.

vado, financió una marcha de mujeres que reunió a unas 8 000 a 10 000 personas a favor de “Paz y Trabajo” pero principalmente en contra del “comunismo”. La ANEP anunció un paro empresarial e instó a sus empleados para que asistieran a la marcha.<sup>41</sup>

ANEP también apoyó dos manifestaciones posteriores en apoyo a Guillermo García. Desde mediados de noviembre, el ministro de defensa se destacó dentro del gobierno por su falta de apoyo para las reformas estructurales, y por su actitud a favor de la represión.

En la medida que la JRG se afanaba en impulsar las reformas, la derecha dentro y fuera del estamento militar comenzó a cohesionarse en oposición. No hay duda que la mayoría de oficiales de alto rango de la Guardia Nacional se opusieron a la separación de 50 a 60 de sus colegas.<sup>42</sup> También se opusieron a las reformas agraria y financiera. Es más, en la medida que las comisiones procedían con su trabajo y la JRG emitió sus primeros decretos contra Molina y Romero, esos mismos oficiales, la mayoría de los cuales había prestado servicio en los aparatos represivos, se sintieron preocupados cada vez más por su propia supervivencia. García reconoció que tenía fuertes apoyos para proceder en contra de las reformas y las OP. Por lo tanto, hacia mediados de diciembre tuvo la fuerza política como para desatar una represión que recordaba los tiempos del viejo régimen. Por supuesto, la embajada se sintió alentada por esta nueva línea dura contra la izquierda.

<sup>41</sup> “Paz y trabajo”, 11 de diciembre, 1979, en Campos, *op. cit.*, p. 715.

<sup>42</sup> El Departamento de Estado informó sobre 50 despidos. “60 Guardsmen Dismissed from Security Corps”, París, AFP, 11 de noviembre, 1979, trad. de FBIS Daily Report, Latin America, 14 de noviembre, 1979.

LAS ORGANIZACIONES POPULARES  
Y LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO

Las OP también se aprovecharon de este momento único que comenzó el 6 de noviembre; siguieron tomándose las calles, aunque de manera menos agresiva, en concordancia con el repliegue de las fuerzas de seguridad a sus cuarteles.

El 28 de noviembre, FENASTRAS convocó a un paro de un día y manifestaciones para protestar contra el gobierno por no haber cumplido con sus promesas. Al menos 5 000 trabajadores se unieron a la marcha a media semana. El Sindicato de la Industria Pesquera (en adelante SIP) envió a uno de los contingentes más grandes de huelguistas y manifestantes, vestidos con sus gabachas para desmentir las versiones de la prensa, que decía que elementos no obreros constituían el grueso de los manifestantes. FENASTRAS y FAPU proporcionaron autobuses y cerca de 1 000 trabajadores de las empacadoras de las tres compañías del Puerto que participaron en la marcha.<sup>45</sup> Los manifestantes exigieron aumentos salariales en general, la extradición y captura de “los criminales del pueblo”, y la desmilitarización de numerosas fábricas que habían sido tomadas por las fuerzas de seguridad desde el 15 de octubre.<sup>44</sup> Además, FENASTRAS hizo un llamado para que se confiscaran las propiedades de antiguos funcionarios vinculados a abusos de los derechos humanos. A diferencia de la mayor parte de la izquierda, FENASTRAS no impugnó directamente la legitimidad de la JRG.

<sup>45</sup> Alejandro Molina Lara, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2015; Ovidio Granadeño, entrevista con el autor interview, Puerto El Triunfo, 2013.

<sup>44</sup> “Grandiosa movilización de la FENASTRAS”, CIDAI/UCA, 28 de noviembre, 1979.

En el campo, el movimiento de trabajadores rurales estalló con una fuerza similar a la del movimiento obrero urbano, que había aparecido inesperadamente unos meses antes, con una militancia y extensión nunca antes vista en la historia del país.<sup>45</sup> El movimiento popular rural siempre había tenido que enfrentarse a una represión brutal de los hacendados, quienes fácilmente movilizaban a ORDEN o a la Guardia Nacional para encarcelar o ejecutar a los organizadores sindicales. La Federación de Trabajadores del Campo (en adelante FTC, afiliada al BPR) y las LP-28 aprovecharon la apertura que proporcionó la JRG.<sup>46</sup> Un comentario de la radio YSAX resumió la nueva realidad:

Las tomas de tierra suceden naturalmente, al reducirse la represión en el campo. En unas circunstancias tan inhumanas como reinan en el campo, los campesinos sólo pueden ser mantenidos callados, pacíficos y tranquilos con una represión brutal, siempre creciente. Cuando cede esta represión, surgen las reivindicaciones, las acciones combativas, y el ímpetu revolucionario.<sup>47</sup>

La promesa de una reforma agraria y la fijación de salarios mínimos relativamente altos (especialmente para los trabajado-

<sup>45</sup> El día de la tregua, 15 miembros del Comité de Madres y Presos y Desaparecidos Políticos tomaron una oficina en el Ministerio de Justicia y se declararon en huelga de hambre, exigiendo una respuesta inmediata de la comisión en vez de los 60 días que había dispuesto la JRG. La huelga de hambre terminó una semana después, cuando las manifestantes dijeron que habían sido amedrentadas por la Guardia Nacional; la comisión entregó sus resultados antes de fines de noviembre.

<sup>46</sup> Inmediatamente después de finalizada la tregua, por ejemplo, los trabajadores del café suspendieron la ocupación de seis beneficios de café al haber conseguido un aumento salarial de 2 dólares diarios.

<sup>47</sup> “Las tomas de tierra”, 4 de diciembre, 1979, en Campos, *op. cit.*, p. 695.

res del café) condicionó, el crecimiento rápido del movimiento. Es más, los campesinos recientemente proletarizados conformaban el grueso de los activistas sindicales en el campo.<sup>48</sup> Estos campesinos eran más propensos a rebelarse que otras poblaciones rurales, en tanto que combinaban a menudo una protesta en contra de expropiaciones de tierras (pasadas) con demandas de salarios mayores, más y mejor calidad de alimentación, mejor saneamiento y un mejor trato en los campos de cultivo, entre otros.<sup>49</sup> El movimiento se extendió a otras partes del país. En la planicie costera, los trabajadores ocuparon unas 30 plantaciones de algodón.<sup>50</sup> En algunos casos, la FTC exigió que los dueños hicieran efectivo el salario mínimo estipulado por la JRG. En otras haciendas, el sindicato exigió que los dueños aumentaran los salarios hasta el mínimo oficial

<sup>48</sup> Véase Jeffrey L. Gould, *To Die in This Way: Nicaraguan Indians and the Myth of Mestizaje, 1880-1965*, Durham, NC, Duke University Press, 1998, pp. 231-238, sobre el tema de la acumulación originaria; Carlos Cabarrús, *Génesis de una revolución: análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, 1983.

<sup>49</sup> *Ibid.* En este estudio ya clásico, este intelectual jesuita proporciona cuantiosa evidencia del pueblo de Aguilares, El Salvador, sobre cómo los semiproletarios (es decir, minifundistas que también trabajaban a cambio de un salario) eran los más proclives a unirse a una OP. Yo agregaría que también son importantes los recuerdos de tierras que se perdieron; véase también Jeffrey L. Gould y Aldo Lauria Santiago, *To Rise in Darkness: Revolution, Repression, and Memory in El Salvador, 1920-1932*, Durham, NC, Duke University Press, 2008. Véase también Jeffrey L. Gould, *To Lead as Equals: Rural Protest and Political Consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912-1979*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1990.

<sup>50</sup> "Army Evicts BPR Peasants from Cotton Plantation" [El ejército expulsa a campesinos del BPR de una finca algodонера], París AFP, 4 de diciembre, 1979, trad. de Foreign Broadcast Information Service, FBIS Daily Report, Latin America, 6 de diciembre, 1979.

aplicado al sector del café. Los decretos de la JRG a favor de los pobres del campo no frenaron el avance de la izquierda rural sino que, más bien, aceleraron el movimiento.

La embajada de Estados Unidos se mostró muy preocupada por semejantes formas de militancia cuando informó que un “grupo agrícola” había denunciado que “fanáticos extremistas [...] habían atacado más de 90 propiedades”.<sup>51</sup> Aún más inquietante desde el punto de vista de la élite agraria, los activistas sindicales rurales habían comenzado a operar algunas de las fincas bajo su propia administración. Un informe de la embajada afirma que:

En algunos casos, los ocupantes se han hecho cargo del manejo de facto de las fincas, con informes de que operan con varios niveles de eficiencia. La ocupación de la planta procesadora de algodón en Entre Ríos por un número de 1 500 campesinos según informes provocó que la Asociación de Cultivadores de Algodón suspendiera totalmente la recepción de algodón de la cosecha.<sup>52</sup>

El 4 de diciembre, tal como se mencionó anteriormente, la JRG envió un contingente del ejército que utilizó gases lacrimógenos para desalojar a los huelguistas en Entre Ríos (cerca de Zacatecoluca). Este desalojo fue la primera medida represiva de la JRG desde el 6 de noviembre y es notable que las fuerzas de seguridad no lastimaron a ningún huelguista durante este operativo.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> US Embassy to Secretary of State, “General Uneasiness on Salvadoran Political Scene: An Assessment”, cable, 4 de diciembre, 1979, E00307, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, Collection DNSA, p. 3.

<sup>52</sup> *Loc. cit.*

<sup>53</sup> “Army evicts BPR peasants from cotton plantation”, París, AFP, 4 de diciembre, 1979; un analista de la embajada de Estados Unidos escribió: “Esta es la primera vez en la historia reciente que las fuerzas de seguridad han in-

El 12 de diciembre, en respuesta a la intransigencia de los propietarios, el BPR convirtió algunas huelgas en ocupaciones. Al día siguiente, el BPR convocó a huelga a unos 3 000 trabajadores en 13 fábricas en el área metropolitana en apoyo a los trabajadores agrícolas y sus propias demandas.<sup>54</sup> El 17 de diciembre, los dueños de 17 fincas de caña de azúcar en el área de Aguilares y el departamento de Cabañas ofrecieron concesiones importantes a la FTC. Aumentaron el salario diario en un colón y el pago a los cortadores por caña entregada. También prometieron mejorar la calidad de la comida, instalar una unidad de primeros auxilios, y mejorar el trato de los capataces hacia los trabajadores. Finalmente, acordaron permitir la sindicalización obrera en sus fincas y haciendas.<sup>55</sup>

El mismo día de esta gran victoria para los trabajadores rurales, a unos 150 kilómetros al oriente, en una finca de café en Berlín, departamento de Usulután, un grupo de más de 200 obreros, ocuparon las oficinas del dueño para protestar por el incumplimiento del pago del salario de una semana. Las LP-28 habían organizado a los cortadores de café; muchos de ellos provenían de Morazán donde habían participado inicialmente en comunidades eclesiales de base (CEB), al igual que muchos campesinos en Aguilares. A las 7:00 p.m., una fuerza combinada de Guardias Nacionales y poli-

---

tervenido exitosamente contra ocupantes extremistas sin violencia excesiva o derramamiento de sangre”. US Embassy to Secretary of State, “Troubles in Agricultural Areas: Incidents and Agrarian Reform” [Problemas en áreas agrícolas: incidentes y reforma agraria], cable, 6 de diciembre, 1979, E00509, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, Collection DNSA.

<sup>54</sup> “Strikers Demand Immediate Solution to Factory Problems” [Huelguistas exigen solución inmediata a problemas en fábricas], San José Radio Reloj, 13 de diciembre, 1979, trad. de Foreign Broadcast Information Service, FBIS Daily Report, Latin America, 14 de diciembre, 1979.

<sup>55</sup> *El Independiente*, 19 de diciembre, 1979.

cías atacó a los huelguistas con armas automáticas. Caifás, quien se había afiliado poco antes a las LP-28, recuerda:

Nos tomamos las oficinas. Sólo estábamos reclamando los salarios que nos debían y el aguinaldo. Cuando de pronto llega la guardia y abre fuego. Algunos de nosotros teníamos algunas pistolas, pero para nada nos valían en contra las automáticas. Teníamos que salir huyendo.<sup>56</sup>

Las fuerzas de seguridad mataron al menos a un cortador, hirieron a 5 y capturaron a 25. Esta fue la primera muerte a manos de las fuerzas de seguridad desde el 6 de noviembre.<sup>57</sup>

Al día siguiente del ataque a los trabajadores agrícolas en Berlín, la Guardia Nacional atacó a unos obreros organizados por las LP-28 quienes habían ocupado El Porvenir, una finca de café grande, ubicada a unos 50 kilómetros al norponiente de la capital, en demanda de mayores salarios y prestaciones y mejores condiciones laborales. De acuerdo con un comunicado oficial de las fuerzas armadas: “en la ausencia de negociaciones entre el finquero y los huelguistas, el gobierno decidió desalojar a los trabajadores”. Según los militares, los huelguistas dispararon primero, seguido por una batalla de cuatro horas de duración. La tropa mató a unos

<sup>56</sup> Caifás (nombre de guerra), entrevista con el autor y Carlos Henríquez Consalvi, Morazán, 2009.

<sup>57</sup> En palabras de Ellacuría, “Llevábamos mes y medio sin que la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad derramaran sangre”, en *De nuevo sangre sobre El Salvador*, 19 de diciembre, 1979, en Campos, *op. cit.*, p. 743. El número de muertos en Berlín fue cuestionado acaloradamente por las LP-28. Un participante recuerda que hubo cinco muertos. Caifás, entrevista con el autor, Morazán, 2009.

25 obreros, hirió a 10 y capturó a otros 16.<sup>58</sup> La tropa no sufrió ni heridos ni muertos.<sup>59</sup>

Ignacio Ellacuría, el rector la Universidad Centroamericana regentada por jesuitas, quien anteriormente había expresado un apoyo condicional pero significativo a la JRG, hizo el siguiente comentario sobre los militares:

De nuevo ha sido engañada por no escuchar más que a la oligarquía. Ni en el Congo ni en Berlín se han enfrentado con grupos guerrilleros; han matado a veinticinco y no han capturado más que un número menor de armas; han matado, pues, a gente sin armas.<sup>60</sup>

Ellacuría y otros analistas reconocieron que se había dado un cambio fundamental en el seno de la JRG. Un analista se refirió a un “contragolpe” el 18 de diciembre. La semana siguiente, Ellacuría pronosticó la salida de los elementos de izquierda moderados de la JRG, cuando ofreció sus felicitaciones irónicas a la derecha por su éxito al haber colocado a los militares bajo su control nuevamente: “Han vencido a quienes defendían al pueblo, derecha

<sup>58</sup> “More Farmworkers Clash with Police in El Congo” [Más trabajadores agrícolas chocan con la policía en El Congo], París, AFP, 19 de diciembre, 1979, trad. de Foreign Broadcast Information Service, FBIS Daily Report, Latin America, 20 de diciembre, 1979, informa que: “Estas huelgas coinciden con las huelgas exitosas de los trabajadores rurales en 17 haciendas y plantaciones de azúcar que habían comenzado el 27 de noviembre”. Véase también *El Independiente*, 19 de diciembre, 1979.

<sup>59</sup> “More on Farmworkers Clash with Police in El Congo”, París, AFP, 19 de diciembre, 1979, trad. de Foreign Broadcast Information Service, FBIS Daily Report, Latin America, 20 de diciembre, 1979.

<sup>60</sup> La semana anterior el ejército había atacado una plantación de algodón y capturado a un número indeterminado de trabajadores. “De nuevo sangre sobre El Salvador”, 19 de diciembre, 1979, en Campos, *op. cit.*, p. 744.

salvadoreña. Pero celebren rápido, porque la guerra civil está a un paso más cerca”.<sup>61</sup>

Los coroneles García y Gutiérrez y sus aliados en el ejército habían logrado el control, gracias en buena medida a la campaña de propaganda masiva en los periódicos, la movilización de la derecha y alguna corrupción monetaria de la oficialidad. No obstante, a pesar del triunfo de la derecha a semejanza de un golpe silencioso en contra de los elementos progresistas en la JRG, García y Gutiérrez todavía necesitan echar a andar algunos componentes del programa de reformas. Por ende, en el mismo momento en que el aparato represivo desencadenó su violencia por primera vez en seis semanas —las fuerzas de seguridad mataron a unas 40 personas durante las dos últimas semanas de 1979— el gobierno anunció la nacionalización del comercio exterior y prometió seguir avanzando hacia una reforma agraria. Los analistas en aquel momento bautizaron a esta estrategia como “reformas con represión”, una frase que caracterizaría la política del régimen durante 1980. En pocas palabras, la derecha oligárquica había desplazado al gobierno de centro izquierda, pero no pudo asumir un control completo con miras a impulsar su agenda.

Durante una reunión el 27 de diciembre, Eugenio Vides Casanova, el viceministro de defensa, se dirigió a los miembros civiles de la JRG y exclamó: “¡Nosotros somos quienes los tenemos allí en el gabinete. Y cuando queramos los podemos quitar!”<sup>62</sup> Al día siguiente, 22 miembros del gabinete acusaron a García de orde-

<sup>61</sup> “Rumores de golpe de estado”, 20 de diciembre, 1979, en Campos, *op. cit.*, p. 746.

<sup>62</sup> Majano, *op. cit.*, p. 176. Majano también recuerda varios esfuerzos serios de soborno para que se inclinara hacia la derecha y apoyara una represión en gran escala contra las OP, pp. 172-174.

nar una represión violenta innecesaria.<sup>63</sup> El 3 de enero de 1980, los miembros progresistas de la JRG y el gabinete renunciaron y fueron reemplazados por una junta nueva que incorporó a José Napoleón Duarte y al Partido Demócrata Cristiano (PDC).

#### RETÓRICA Y REALIDAD DENTRO DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

El periodo de movilización en paz llegó a su fin sin que la izquierda se percatara mucho de ello. Recuérdese que toda la izquierda revolucionaria había denunciado a la JRG desde su inicio: todos sus grupos se referían al gobierno como la Junta Contrarrevolucionaria de Gobierno. A su manera de ver, toda la razón de existir de la JRG fue desmovilizar a la izquierda y a los movimientos populares, y así impedir un desenlace revolucionario. Cuando el BPR alcanzó varios de sus objetivos en negociaciones, el 6 de noviembre, proclamó su victoria contra el protector pro-imperialista, ahora desenmascarado, de los “ricos explotadores”.<sup>64</sup> A pesar de todo, durante tres semanas las manifestaciones y ocupaciones dirigidas por las OP fueron pacíficas y no sufrieron represión. No obstante, los manifestantes denunciaban constantemente a la JRG “que siguen capturando, torturando, desapareciendo, y asesinando gente [...]”.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> El mismo grupo había presionado a la JRG para que removiera a Mario Andino, un representante del sector empresarial en la Junta, por haber empujado al gobierno hacia la “derecha”, en *Latin American Weekly Report*, 4 de enero, 1980.

<sup>64</sup> BPR, *Combate Popular*, 15 de noviembre, 1979, NACLA Archive, microfilm, pp. 590-592, rollo 6.

<sup>65</sup> Citado en Guerra, *op. cit.*, p. 87.

El 27 de noviembre, las LP-28 celebraron los actos de clausura de su congreso, al cual asistieron unos 3 000 militantes. Ana Guadalupe Martínez, la dirigente guerrillera que había sufrido meses de tortura en cárceles clandestinas, apareció sorpresivamente, recalcando que su presencia no fue producto de una concesión de la JRG, sino el resultado de la lucha popular contra la “oligarquía criolla, el fascismo militar y el imperialismo yanqui”.<sup>66</sup> También denunció a la JRG por retrasar los procedimientos que permitieron la fuga de los principales violadores de los derechos humanos de los regímenes anteriores. Las LP-28 declararon que su principal objetivo era el derrocamiento de la Junta Contrarrevolucionaria de Gobierno “y la instauración de un gobierno de Democracia Popular que dé paso a una sociedad socialista”.<sup>67</sup> Aunque la presencia de la líder guerrillera en el acto de cierre había sido anunciada previamente, el congreso se realizó sin incidentes, simbolizando así la brecha entre la retórica de izquierda y la realidad cotidiana durante la tregua.

Aun cuando seguía denunciando al gobierno como contrarrevolucionario, el FAPU enunció una posición algo más matizada que

<sup>66</sup> “La clausura del Congreso de las Ligas Populares”, 28 de noviembre, 1979, en Campos, *op. cit.*, p. 680; US Embassy to Secretary of State, “LP-28 National Congress Brings Indication of Unity Move with BPR” [Congreso nacional de las LP-28 ofrece indicios de unidad con el BPR], cable, 29 de noviembre, 1979, ES00300, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, Collection DNSA.

<sup>67</sup> “Declaración del Primer Congreso de las Ligas Populares 28 de Febrero, ‘Irma Elena Contreras’”. Juan Chacón, un dirigente del BPR, asistió a este evento con una delegación pequeña e hizo un llamado a la unidad. Los militantes del FAPU no asistieron al congreso. Todavía había encono por la ejecución a manos del ERP de Roque Dalton, un connotado poeta y camarada de los fundadores del FAPU.

las otras OP. Un dirigente del FAPU comentó que la existencia de un sector progresista en las fuerzas armadas y la JRG remarcó que “se abre cierta posibilidad para el movimiento popular y revolucionario de avanzar, ya que no es lo mismo que nos enfrentemos a una dictadura fascista o en escalada fascista, que un régimen que pueda ceder [con la lucha organizada del pueblo] alguna apertura”.<sup>68</sup> Sin embargo, el análisis del BPR sobre la JRG sostuvo que sería difícil aceptar semejante “apertura”. Más bien, Rafael Menjívar, uno de los ideólogos del grupo, reconoció un cambio en el “modelo de dominación... la JRG intenta, en definitiva, mediatizar, reprimir, al movimiento revolucionario...”.<sup>69</sup> No obstante, al igual que el FAPU, el BPR sostuvo conversaciones con la JRG y le instó a que implementara las reformas con rapidez.<sup>70</sup>

Aunque todas las OP evitaron la violencia en sus manifestaciones durante el periodo de la tregua, las Fuerzas Populares de Liberación (en adelante FPL), un grupo guerrillero alineado con el BPR, no hizo lo mismo y siguió atacando a ORDEN en las zonas rurales y llevando a cabo acciones selectivas de secuestro y terrorismo. Los analistas de la UCA los culparon por las muertes de 10 civiles que ocurrieron durante las seis semanas de la tregua. Algunas de las ejecuciones de militantes de ORDEN bien pudieron haber sido ajustes de cuenta en el nivel local. Los secuestros del embajador de Sudáfrica y de un cafetalero de la élite obedecieron claramente a decisiones tomadas en la cúpula. Estas acciones militares plantean la interrogante: ¿si el BPR se atuvo escrupulosamente a la tregua,

<sup>68</sup> *Pueblo*, 28 de octubre al 3 de noviembre, 1979, p. 15.

<sup>69</sup> “El Salvador: alianzas políticas y proceso revolucionario”, en *Cuadernos de Coyuntura*, núm. 5, México, SEPLA, 1979.

<sup>70</sup> Ignacio Ellacuría, *Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989)*, tomo II, escritos políticos, San Salvador, UCA Editores, 1991, p. 768.

por qué no lo hicieron las FPL? No tenemos acceso a la manera en que se tomaban las decisiones en el seno de las FPL en esta coyuntura, pero Ignacio Ellacuría ofrece una importante intuición.

Ellacuría era la principal figura pública —si acaso la única— que centró su atención en noviembre en la distinción entre las acciones de las OP y la guerrilla como un ejemplo de la autonomía de aquellas:

Para entender este problema de la guerrilla, donde parece haber tanta confusión es menester separar drásticamente los grupos guerrilleros FPL, FARN, ERP de sus frentes políticos de masas el Bloque, FAPU, y las Ligas. Se dan conexiones entre los frentes políticos y los grupos guerrilleros, pero son distintos.<sup>71</sup>

Para este intelectual jesuita, resultaba fundamental que la JRG entendiera esta distinción para que no reprimiera a las OP, a las cuales consideró un elemento clave para el “proceso de liberación”.<sup>72</sup> Además, guardaba la esperanza que su autonomía (y su unidad) se fortalecerían.<sup>73</sup> Adelantó que la razón de ser de la guerrilla comenzaría a disiparse cuando la protección para las huelgas y manifestaciones ya no sería necesaria. También pensó que en la medida de que amplios sectores de la población aceptaran alguna

<sup>71</sup> “Las acciones guerrilleras”, 12 de noviembre, 1979, en Campos, *op. cit.*, p. 643.

<sup>72</sup> Ellacuría, “Las organizaciones populares ante la nueva situación”..., p. 771.

<sup>73</sup> Rafael Menjívar, *El Salvador: alianzas políticas y proceso revolucionario*, Mexico, SEPLA, p. 17; reimpresso en Rafael Menjívar Larín, *El Salvador: el eslabón más pequeño*, San José, Editorial Universitaria Centroamericana, 1980, pp. 93 y 94.

forma de socialismo, su imposición por la fuerza terminaría careciendo de cualquier justificación posible.

Para algunos antiguos militantes, la distinción resultaba ilusoria porque la mayoría de dirigentes del BPR también eran militantes de las FPL.<sup>74</sup> No obstante, la observación de Ellacuría era válida porque las OP y la guerrilla tenían necesidades organizativas diferentes y, por lo tanto, sus tácticas eran divergentes. Sin embargo, la tregua no podía sostenerse porque las OP y los integrantes de izquierda moderada de la JRG, a pesar de compartir objetivos fundamentales y de haber dialogado tras bambalinas alguna vez, no estaban en capacidad de formar una alianza, por informal que haya sido. A su vez, esta imposibilidad se debió a sus diferencias sobre cómo habrían de lograrse los cambios políticos y sociales fundamentales y el papel de las OP en tales transformaciones. Existía un desencuentro profundo sobre el significado de reformas estructurales y su cambiante significado en relación a los métodos para su implementación. Este desencuentro impedía una alianza potencial entre la izquierda radical y el sector “moderado”, que se encontraba en torno al Foro Popular, una agrupación más pequeña pero que se radicalizaba con el paso del tiempo. No es seguro que semejante alianza haya impedido la guerra civil, porque la derecha militar no habría entregado el poder sin pelear.<sup>75</sup> No obstante, algunos mandos medios del ejército aliados con Majano y en comunicación con Rubén Zamora (ministro de la presidencia) y Román Mayorga estaban organizando un golpe para desplazar a

<sup>74</sup> Miguel Huevo Mixco, comunicación personal con el autor, noviembre de 2017.

<sup>75</sup> Véase Jeffrey L. Gould, “Ignacio Ellacuría and the Salvadorean Revolution”, en *Journal of Latin American Studies*, vol. 47, núm. 2, mayo de 2015.

García y Gutiérrez.<sup>76</sup> Majano se negó a participar. Su decisión fue el golpe de gracia para la JRG.

La izquierda revolucionaria no pudo haber sido un aliado en potencia para este segundo golpe de estado porque nunca dejó de condenar a la JRG en pleno. Este repudio total —aun cuando el gobierno había comenzado a llevar a cabo su programa de reformas estructurales y transformación del estamento militar— resultaba problemático. La relación de la dirigencia de las OP con las bases dependía de su capacidad de lograr mejoras concretas para sus bases. En este sentido, aun cuando la JRG haya intentado impedir una insurrección revolucionaria al restringir la represión y llevar a cabo una reforma agraria, durante este tiempo las bases de las OP se beneficiaron materialmente y conquistaron cuotas mayores de poder real.

Las limitaciones retóricas de las OP —es decir, las categorías dentro de las cuales operaban— parecen haberles impedido una comprensión adecuada del momento político. A pesar de la ausencia de represión en noviembre, el BPR y las LP-28 siguieron pintando a la JRG como “fascista” y contrarrevolucionaria. Y en este momento, la “aceleración” del tiempo que caracteriza a los movimientos revolucionarios seguramente desempeñó un papel fuerte. Tal como observa Greg Grandin, “La aceleración del tiempo sentido correspondió a —y fue impulsado por— una aceleración de la capacidad del Estado para reprimir. Para un sinnúmero de

<sup>76</sup> Menjívar Ochoa, *Tiempos de locura...*, pp. 202 y 203, cita a Rubén Zamora sobre su versión de una visita que le hizo un joven oficial del ejército a nombre de Ellacuría para que se involucrara en la conspiración para reemplazar a Gutiérrez y García. Tres de los más cercanos colaboradores de Ellacuría —Rodolfo Cardenal (s.J.), Jon Sobrino (s.J.) y Héctor Samour— todos niegan que Ellacuría se haya involucrado.

latinoamericanos, la vida durante tiempos revolucionarios significó vivir parte de la suya cuando la violencia y el terror políticos eran realidades de la existencia cotidiana”.<sup>77</sup> La represión durante las primeras dos semanas después del golpe había sido brutal, y radicalizó más a los que ya estaban radicalizados.<sup>78</sup> Para muchos en las OP, era imposible absolver a la JRG de la responsabilidad por las masacres y su furia era tal que no pudieron percibir el cambio en las acciones de la JRG. En palabras de un campesino de Morazán, un militante de las LP-28, “íbamos a hacer una marcha para ver si era revolucionaria o no era [La Junta Revolucionaria]”.<sup>79</sup> La masacre de los campesinos de Morazán el 29 de octubre proporcionó una respuesta clara. Por lo tanto, resultó relativamente fácil mantener la versión en público de que la JRG era, en esencia, “antipopular”.

Las seis semanas sin violencia represiva y las consecuencias positivas para los movimientos obreros rurales y urbanos no encajan con las narrativas imperantes de la izquierda revolucionaria, con la excepción parcial del FAPU. En las semanas posteriores al colapso de la primera junta, Rafael Menjívar del BPR escribió: “Desde el 15 de octubre hasta fines del 79 se dio un ascenso en la represión a los movimientos populares, mientras el tiempo político se perdía en la impotencia de introducir las reformas estructurales planeadas [...] en el mes de diciembre la presión de la derecha

<sup>77</sup> Greg Grandin, “Living in Revolutionary Time”, en Greg Grandin y Gil Joseph, *A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin America's Long Cold War*, Durham, NC: Duke University Press, 2010, p. 2.

<sup>78</sup> Miguel Huevo Mixco, comunicación personal con el autor, noviembre de 2017.

<sup>79</sup> Escolástico, entrevista con el autor y Carlos Henríquez Consalvi, Morazán, 2007.

sobre el ejército condujo a un incremento de la represión[...]”.<sup>80</sup> A pesar de la sofisticación de este intelectual revolucionario, podemos percibir su dificultad para abordar este periodo. Primero destaca que los dos meses y medio fueron un periodo de creciente violencia, pero entonces subraya que el último mes fue uno de represión todavía mayor. Notablemente ausentes de este recuento casi contemporáneo están las seis semanas cuando no hubo represión violenta.

A pesar del silencio de la izquierda revolucionaria, las posturas asumidas por la JRG sobre salarios rurales, sindicalización y reforma agraria, junto con el repliegue de las fuerzas de seguridad, condicionó a uno de los movimientos de trabajadores del campo proporcionalmente más grandes y militantes en la historia reciente de Latinoamérica. Los militantes de la izquierda se imaginaban la ola de huelgas en los campos como el fruto de su trabajo de organización y un presagio del triunfo revolucionario. Por cierto, las tomas de hilanderías de algodón y beneficios de café y el control posterior ejercido por los trabajadores sobre la producción fueron bastante extraordinarias, en tanto que excedieron lo que el movimiento obrero radical se había imaginado o logrado. Sin embargo, las llamaradas en el campo parecían cegar a la izquierda.

El desarrollo de una conciencia entre el campesinado fue muy desigual. Un grupo de trabajadores del café, por ejemplo, escribió a otro afiliado al FAPU a mediados de diciembre pidiéndole que enviaran una “comisión investigadora” para que informara sobre las terribles condiciones de trabajo en la finca, donde hasta el agua era racionada. El grupo de cortadores de café afirmó, “Us-

<sup>80</sup> Menjívar Larín, *El Salvador: el eslabón más pequeño...*, p. 109. Menjívar Larín fue el padre del finado Rafael Menjívar, *Tiempos de Locura...*

tedes son nuestra única esperanza.<sup>81</sup> Los 900 obreros de la finca estaban ubicados en el corazón de la zona cafetalera, lo que revela un bolsón grande de subdesarrollo en un paisaje revolucionario. Es más, algunos episodios bien conocidos de la historia reciente de Latinoamérica pudieron haber convencido a los activistas del campo, para que asumieran una posición diferente ante la JRG. La reforma agraria de 1952 en Guatemala impulsó un año de intensa movilización campesina. El apoyo a la sindicalización rural y la promesa de una reforma agraria profunda por parte del gobierno brasileño de Joao Goulart propició una movilización campesina masiva. Finalmente, los gobiernos de Frei y Allende en Chile, cada uno con sus respectivas políticas de reforma agraria, estimularon el crecimiento explosivo de organizaciones de campesinos y trabajadores rurales. Los militares con apoyo de Estados Unidos montaron golpes de estado en los tres países como respuesta, en parte, a los movimientos rurales y esto puede haber debilitado cualquier interés por parte de los revolucionarios por aliarse con gobiernos reformistas. No obstante, a diferencia de la mayoría de otros países latinoamericanos, en El Salvador la izquierda tendría potencialmente el apoyo de un sector de los militares.

La amplitud y la intensidad del apoyo y el rechazo a la represión violenta posterior al golpe, le dio forma al pensamiento de la izquierda. Cuando la JRG comenzó a ejercer control sobre el aparato represivo y procedió a poner en marcha su programa de reformas, las OP no encontraban las opciones discursivas que le permitirían interpretar el momento en que vivían. No podían trascender de las denuncias casi rituales de la JRG como un cuerpo contrarrevolucionario a pesar de la realidad de una derecha

<sup>81</sup> *El Independiente*, 20 de diciembre, 1979.

dentro y fuera de los militares que estaba en su punto más débil desde 1952. De mayor significancia, bajo el gobierno de Carter el imperio no estaba listo para atacar. A partir de solamente estas realidades, fue una “oportunidad perdida” según la frase del coronel Majano.

El interregno de comienzos de noviembre hasta mediados de diciembre de 1979, se caracterizó por un auge sin precedentes de movilización de campesinos y obreros agrícolas, que perfiló la posibilidad de una reestructuración radical de la sociedad rural. El repliegue de las fuerzas de seguridad también permitió una sinergia intensa de una conciencia radical de cristianos y marxistas, especialmente cuando la gente se tomaba las fincas y las hacían funcionar, aunque brevemente, como cooperativas. Por lo tanto, la verdadera actividad de los movimientos subalternos no podía ajustarse dentro de categorías heredadas de otros tiempos.

UN AÑO DE VIDAS EN PELIGRO:  
MOLINA LARA Y FENASTRAS BAJO ASEDIO

El 12 de diciembre de 1979, Alejandro Molina Lara se trasladaba en un pick-up con Bernabé Recinos, el secretario general de FENASTRAS. Cinco trabajadores les acompañaban a una reunión en el Puerto de La Unión. Molina Lara, recientemente electo como secretario de organización de la federación sindical de izquierdas, había estado trabajando con el sindicato de los trabajadores portuarios, quienes estaban exigiendo un aumento salarial de un 75% y una ampliación del presupuesto para las prestaciones sociales de sus miembros. Al aproximarse a la ciudad de San Miguel, vieron adelante un retén de la Policía Nacional: Recinos exclamó, “a la gran puta [...] aquí quedamos. Tenemos pistolitas. O, peleamos o

nos van a arrestar, a saber Dios que nos va a pasar”. Después de una consulta breve, decidieron no responder con violencia.

La policía encontró las pistolas e inmediatamente los capturó como guerrilleros. Molina Lara trató de apelar a sus orígenes de clase en común: “Mire somos sindicalistas y a veces los patrones nos persiguen con sus matones, así que tenemos que andar con estas pistolitas”.<sup>82</sup> Quizá para corresponder debidamente, la policía los trató amablemente. Recinos pudo llamar a STECEL (el sindicato de los trabajadores eléctricos que había encabezado por años). El sindicato informó a la Policía Nacional que si los dirigentes no eran liberados de inmediato procedería a interrumpir el suministro eléctrico en todo el país (tal como habían hecho durante la ola de huelgas en marzo). Después de cuatro horas fueron puestos en libertad.<sup>85</sup>

En 1980, Molina volvió a La Unión para apoyar la organización sindical, esta vez con los trabajadores del camarón y de nuevo fue detenido. “Me soltaron con una advertencia: ‘¡vete y no vuelvas!’ Lo hicieron bien claro que si regresaba al puerto me mataban”.<sup>84</sup> Las experiencias de captura y liberación de Molina Lara en 1980 eran reflejo de las tensiones cada vez mayores entre la legalidad

<sup>82</sup> Molina Lara, entrevista con el autor, Los Ángeles, enero de 2015.

<sup>85</sup> FENASTRAS echó mano de la detención como una herramienta de organización en tanto que presionaron a las autoridades del Puerto para que les concedieran sus demandas. El sindicato organizó una marcha el 20 de diciembre para que otorgara “el pronto cumplimiento de sus demandas a los trabajadores portuarios [...] y en protesta por la captura de [Recinos and Molina Lara]”. Otro volante de FENASTRAS denunció la detención como un “acto provocativo contra el sindicalismo consecuente y que confirma una vez más la actitud represiva de ‘los cuerpos de seguridad’”. “Gran movilización en La Unión”, volante, 17 de diciembre, 1979, CIDAI/UCA.

<sup>84</sup> Molina Lara, entrevista con el autor, Los Ángeles, enero de 2015.

de fachada de la junta militar-demócrata cristiana y la realidad cada vez más represiva. Poco después de que fuera juramentada la junta, las OP intentaron unificar e incorporar a aquellos en la izquierda que habían apoyado a la JRG. Formaron la Coordinadora Revolucionaria de Masas (en adelante CRM). Esta nueva coalición convocó a una marcha el 22 de enero de 1980 como símbolo de la nueva unidad. El resultado fue la manifestación más grande en la historia salvadoreña con una afluencia estimada en 150 000 a 250 000 personas que marcharon por las calles de la capital. Monseñor Romero anotó en su diario: “[...] pero a la altura del Palacio Nacional, se inició un tiroteo que desbandó esta preciosa demostración, que era una fiesta del pueblo”.<sup>85</sup> Francotiradores del ejército abrieron fuego contra los manifestantes, matando a entre 22 y 50 personas. Al día siguiente, la tropa cercó a cuando menos 40 000 manifestantes que se habían refugiado en el recinto de la Universidad de El Salvador. Cuando la tropa se preparaba para ingresar al recinto universitario con el pretexto de que los manifestantes tenían armas, monseñor Romero intercedió e impidió una masacre aún mayor.

Más de 1 000 obreros de las empacadoras del Puerto El Triunfo, una mayoría considerable de la fuerza laboral, participaron en la marcha vestidos con sus uniformes de trabajo. Aunque Molina Lara se había afiliado al FAPU, su perspectiva de la marcha de protesta del 22 de enero no fue la de una manifestación de la izquierda revolucionaria, sino más bien “Era la expresión de poder de los trabajadores, el poder de la clase obrera organizada”.<sup>86</sup> Ese

<sup>85</sup> Óscar A. Romero, *Archbishop Óscar Romero: A Shepherd's Diary*, trad. de Irene B. Hodgson, Cincinnati, OH, St. Anthony Messenger Press, 1993.

<sup>86</sup> Molina Lara, entrevista con el autor, Los Ángeles, septiembre de 2012.

En las afueras de San Salvador: autobuses trasladan a gente  
a la marcha del 22 de enero de 1980



Foto: de Laurent Vogel, cortesía del Museo de la Palabra y la Imagen.

análisis era reflejo del afán de Molina Lara de mantener una división clara entre el sindicato y el movimiento revolucionario, con la esperanza de que surgiera una forma de hacer política desde la clase obrera, que no estuviera bajo la dirección de personas radicalizadas de la clase media.

Como hemos visto, la tensión entre los objetivos revolucionarios y los intereses más inmediatos calaron profundamente en el movimiento obrero de izquierdas en las ciudades y el campo. Tanto el BPR como el FAPU —fuera de Puerto El Triunfo— estuvieron en condiciones de liderar luchas económicas de manera efectiva siguiendo el abordaje leninista clásico, impulsando a los trabajadores sindicalizados hacia una “conciencia política más alta”.

Pero no fue un proceso unidireccional. El deseo de los militantes de abordar las necesidades inmediatas de sus bases los condujo a efectuar un giro ideológico importante que los apartó de un planteamiento leninista.

El 21 de enero, FENASTRAS emitió un comunicado denunciando las maniobras de “la patronal imperialista” para debilitar al movimiento obrero, mediante el cierre de fábricas y la creación de un escasez artificial de productos tales como azúcar y aceite de cocina para luego echarle la culpa al movimiento obrero. La federación obrera redactó su respuesta en mayúsculas: “NUESTRA RESPUESTA A ESA MEDIDA ECONÓMICA Y POLÍTICA DE LA PATRONAL SERÁ LA DE IMPULSAR LA AUTOGESTIÓN DE LAS FÁBRICAS CERRADAS PARA QUE ÉSTAS SEAN NACIONALIZADAS”.<sup>87</sup>

El llamado para la autogestión —una demanda/estrategia marcadamente no leninista— no fue un gesto meramente retórico. Más bien, Recinos y otro dirigente de FENASTRAS se dirigieron a la embajada de Estados Unidos y entablaron discusiones serias, tratando de convencer al Departamento de Estado para que interviniera y persuadiera a las empresas para que reabrieran sus plantas o que permitieran que los trabajadores las administraran. El negociador de la embajada señaló que FENASTRAS cargaba con parte de la culpa por la salida de las empresas estadounidenses y que dudaba que la embajada pudiera ayudar a resolver la situación.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> FENASTRAS, “Con la unidad hacia la liberación definitiva”, 21 de enero, 1980, CIDAI/UCA.

<sup>88</sup> Bernabé Recinos afirma que Beckman era esencialmente contrario a la sindicalización y que FENASTRAS garantizaría condiciones de estabilidad laboral si se les daba la oportunidad de operar bajo la gestión de trabajadores y técnicos salvadoreños. Los funcionarios de la embajada de Estados Unidos les escucharon con simpatía pero aclararon que no podían intervenir. US Embassy to Secretary of State, “FAPU and FENASTRAS Make Offer in Factory Closing; Ex-

Llamando a la gente en el mercado para que asista  
a la manifestación del 22 de enero



Foto: de Laurent Vogel, cortesía del Museo de la Palabra y la Imagen.

El 15 de febrero, la sección obrera del BPR ocupó las instalaciones del Instituto Salvadoreño de Comercio Exterior. El objetivo principal de la toma fue obligar al gobierno para que tomara cartas en el asunto cada vez más serio del cierre de fábricas; 12 de ellas habían cerrado en los meses anteriores. Durante los tres primeros meses de 1980, el cierre de fábricas dejó cesantes a unos 11 000 trabajadores, lo que representaba aproximadamente 7% de

---

press Concern over Loss of Employment” [FAPU y FENASTRAS entregan oferta sobre cierre de fábricas; expresan preocupación sobre pérdida de empleos], 28 de enero, 1980, ES00397, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, Collection DNSA.

Los manifestantes se concentran en San Salvador  
para la manifestación del 22 de enero



Foto: de Laurent Vogel, cortesía del Museo de la Palabra y la Imagen.

la fuerza de trabajo industrial. El acuerdo comprometía al gobierno para que explorara todas las alternativas para reabrir las fábricas. Si esas no fueran exitosas, el gobierno obligaría a las empresas a que indemnizaran a sus trabajadores.<sup>89</sup>

El caso de la fábrica Aplar en la zona franca de San Bartolo, es particularmente revelador. Esta empresa de tecnología de punta producía potenciómetros (un dispositivo sofisticado que mide y divide el voltaje en palancas de control), pantallas de cristal lí-

<sup>89</sup> BPR, *Combate Popular*, febrero de 1980, NACLA Archive, microfilm, p. 600, rollo 6; véase también “Las tomas pacíficas: una alternativa obrera frente a los cierres de las fábricas, Federación Sindical Revolucionaria”, abril de 1980.

quido y circuitos integrados de plástico moldeado. En septiembre de 1979, un pequeño grupo guerrillero secuestró al gerente de la compañía y un técnico que estaba de paso. A comienzos de noviembre, después de acceder a las demandas respectivas, los rehenes fueron liberados.<sup>90</sup> La empresa matriz, Beckman Instruments, decidió finalizar sus operaciones en una nueva línea de transistores de circuitos integrados porque hubiera requerido el envío de técnicos estadounidenses a El Salvador. Los rumores de un inminente despido de 200 trabajadores (una tercera parte del total) provocó la toma de la planta por el sindicato el 11 de diciembre.<sup>91</sup> La compañía entonces acordó que discutirían las demandas del sindicato; la ocupación terminó ese mismo día. Durante las fiestas navideñas, Beckman decidió poner fin a sus operaciones en la planta valorada en 3 millones de dólares en Aplar y comenzó a desmantelar la maquinaria. Los trabajadores fueron advertidos de la situación por unos “vigilantes honestos” y procedieron a ocupar la planta de nuevo e impidieron el traslado de la maquinaria.<sup>92</sup>

<sup>90</sup> Las demandas del Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos incluyeron la publicación y amplia divulgación de un manifiesto y una cantidad desconocida de dinero. Arnold Thackray y Minor Myers Jr., *Arnold O. Beckman: One Hundred Years of Excellence*, Philadelphia, PA, Chemical Heritage Foundation, 2000, pp. 315 y 316.

<sup>91</sup> “FENASTRAS ante la clase obrera y pueblo en general”, 3 de enero, 1980, Colección Obreros, CIDAI/UCA.

<sup>92</sup> Un ejecutivo estadounidense había sido secuestrado por un grupo guerrillero pequeño en septiembre. Fue liberado después de que la compañía pagó un rescate. FENASTRAS apoyó una toma breve a comienzos de diciembre para exigir el pago de salarios atrasados de 600 trabajadores y mejoras en las condiciones de seguridad industrial. La empresa accedió a las demandas pero entonces decidió en secreto cerrar la fábrica y llevarse la maquinaria necesaria para continuar la producción en otro lado. Mark Kantor, Michael D. Nolan y Karl P. Sauvant, *Reports of Overseas Private Investment Corporation Determinations*, Oxford,

Después de sufrir una represión violenta en enero, los trabajadores de Aplar continuaron su ocupación durante febrero cuando, con la supervisión de FENASTRAS, formaron una cooperativa. A continuación, enviaron una delegación a Los Ángeles para negociar con Beckman Instruments, la cual acordó que podrían seguirse fabricando los potenciómetros.<sup>95</sup> Con financiamiento de los ahorros del sindicato, la cooperativa comenzó la producción en marzo.<sup>94</sup> Sin embargo, hacia fines de año la empresa Beckman suspendió el acuerdo con el argumento de que la demanda se había reducido. No obstante, este experimento laboral apoyado por FENASTRAS representó un importante distanciamiento de las propuestas leninistas sobre la lucha de clases por dos razones. En primer lugar, presenta una alianza entre el capital y el trabajo sobre los medios de producción, mediante la cual los obreros se encargarían de gestionar la producción mientras la propiedad se mantiene incólume en manos de la empresa. En segundo lugar, los marxistas-leninistas generalmente se han mofado de las cooperativas como paliativos para los trabajadores que socavan la lucha de clases.

Tal como vimos en el Capítulo 2, en Puerto El Triunfo, así como en el nivel nacional, podemos discernir el surgimiento espontáneo de un discurso desde las bases que impugnó las relaciones de poder existentes, tanto económicas como políticas. En el caso del

---

Oxford University Press, 2011; *La Crónica*, 4 de enero, 1980; American Arbitration Association Commercial Arbitration Tribunal, “Award in the Matter of the Arbitration between Beckman Instruments, Inc. and Overseas Private Investment Corporation”, en *American Society of International Law*, vol. 27, núm. 5, septiembre de 1988, p. 1265.

<sup>95</sup> Kantor, *Reports of Overseas Private Investment Corporation Determinations...*

<sup>94</sup> “Award in the Matter of the Arbitration between Beckman Instruments and Overseas Private Investment Corporation”, p. 1265.

En busca de seres queridos  
después de los asesinatos del 22 de enero



Foto: por Laurent Vogel, cortesía del Museo de la Palabra y la Imagen.

Puerto, fueron visibles los perfiles de una ideología protosindicalista que recalcó la solidaridad de clase. En el nivel nacional, de cara a la oleada de cierre de fábricas, los leninistas comenzaron a distanciarse de la idea de un proceso revolucionario que concebía el control obrero de la producción en un sistema capitalista como una desviación ideológica.<sup>95</sup> Estas ideologías incipientes fueron el producto de la lucha sostenida de la clase obrera urbana y rural en 1979 por defender los derechos a la organización sindical, por unas condiciones laborales decentes y por el trabajo asegurado. Las bases de los trabajadores a menudo iniciaban las tomas; anunciaban la posibilidad de una nueva forma de política obrera en El Salvador, enraizada en la praxis de una minoría significativa de la clase obrera urbana y rural. A pesar de esto, la derecha paramilitar y sus aliados en el gobierno no tenían interés alguno en permitir que semejante práctica política se desarrollara.

#### UNA SENTENCIA DE MUERTE EN EL PUERTO

Con independencia de que se entienda como la cima del movimiento obrero o el cenit del movimiento revolucionario, el 22 de enero de 1980 representó otro momento de ruptura en las relaciones entre los sindicatos de izquierda y el Estado. En el Puerto, los acontecimientos provocaron un deterioro pequeño en el apoyo a Molina Lara y el SIP. Unos pocos miembros se pasaron al Sindicato Agua en protesta, entre otras cosas, por la coerción limitada que ejercía el SIP y por las implicaciones políticas del 22 de enero. El sindicato obligó a las empresas a descontar un día de salario a los

<sup>95</sup> La mayor parte de la dirigencia de las OP se identificaba con alguna forma de marxismo-leninismo.

trabajadores portuarios si no participaban en la marcha.<sup>96</sup> A pesar de la disensión, el grupo de Molina Lara retuvo un control firme del poder y respondió a las críticas por sus inclinaciones radicales con un discurso coherente. Dijo ante una asamblea con 470 personas presentes, unos pocos días antes de la manifestación, que el Estado estaba asesinando a activistas de FENASTRAS que defendían los intereses colectivos de los trabajadores y que, por lo tanto, “No podemos quedarnos con los brazos cruzados”.<sup>97</sup> También vinculó la manifestación con la necesidad colectiva de “arrancarle a la patronal”. Molina Lara alegó, en efecto, que la identificación con FENASTRAS era necesaria para asegurar los intereses individuales y colectivos de las bases del SIP.

Una trabajadora del Puerto El Triunfo resultó muerta a manos de los francotiradores el 22 de enero. Molina Lara acompañó su féretro de vuelta al Puerto. Su velorio se realizó en la sede del SIP. El 4 de febrero, más de 800 personas estuvieron presentes en la asamblea del SIP. Molina Lara habló en el funeral de la mártir Lidia Cortez. Recuerda la profunda responsabilidad que sintió por su muerte y se mostró aliviado cuando se dio cuenta que las bases

<sup>96</sup> El sindicato obligó a las compañías a no pagarles un día de trabajo a los trabajadores si se rehusaban a participar. Molina Lara estima en retrospectiva que cerca de la mitad de los participantes no habrían viajado a la capital sin esa coerción simbólica. En el pasado, rara vez habían participado más de un centenar de activistas del sindicato en marchas en la capital. Véase Carmen Minero, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2014; Molina Lara, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2015. Otros creían que el sindicato se encargaría de que fueran despedidos si no participaban. Adela Amaya, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013. Amaya se separó del SIP y más tarde llegó a ser dirigente del SGTIPAC.

<sup>97</sup> “Acta 41”, *Libro de actas*, 17 de enero, 1980 (Archivo General del SIP, en manos del autor).

no parecían culparlo a él por lo acontecido. Después del discurso que destacó los vínculos entre la represión local y nacional del movimiento obrero, el sindicato procedió a realizar sus elecciones anuales. A pesar de haber prometido el año anterior de que ese sería su último periodo al frente del sindicato, Molina Lara se postuló de nuevo para el cargo de secretario general y ganó por 600 votos contra 213.<sup>98</sup> Molina Lara y su grupo creían que los desafíos eran tan grandes, con el país al borde de la guerra civil, que él era indispensable para el movimiento obrero debido a sus habilidades altamente desarrolladas como negociador, su legitimidad entre las bases y su cargo importante en FENASTRAS.

Unos meses después, Molina Lara se dirigió al Puerto después de una visita familiar en Usulután. Cuando salía de la ciudad, dos pickups con hombres armados lo aventajaron para cerrarle el paso. Logró maniobrar y entrar a una gasolinera y aceleró el motor. El carro que FENASTRAS le había prestado tenía un motor modificado diseñado especialmente para escapar de los escuadrones de la muerte. Así pudo eludir a los pickups y aventajarlos para llegar al Puerto.

Molina Lara reflexionó sobre sus circunstancias precarias. Hasta ese momento, había sobrevivido dos emboscadas y tres capturas. Pero no consideró una vuelta atrás; siguió dedicándole sus energías al SIP y a FENASTRAS. No quería morir, pero no le vio muchas posibilidades a una solución pacífica al cada vez más violento conflicto de clases. Sabía que sus instintos y habilidades de super-

<sup>98</sup> Cortez tuvo un hijo que se volvió activista de la izquierda radical. “Acta 43”, *Libro de actas*, 4 de febrero, 1980 (Archivo General del SIP).

vivencia eran fuertes y que podía depender de esos atributos para moverse entre los peligros de los escuadrones de la muerte.<sup>99</sup>

La Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM -la expresión organizada de la unidad de la izquierda de la cual FENASTRAS aportaba el contingente más grande) convocó a una huelga general nacional para el 17 de marzo para protestar en contra de los despidos, las cesantías y el cierre de fábricas. La huelga exitosa fue opacada por el asesinato de monseñor Romero el 24 de marzo. La CRM convocó a otra huelga general para el 24 de junio en demanda de aumento de salarios y un cese a la represión. A pesar de las advertencias y amenazas severas de los militares contra los que participan, los miembros del SIP se unieron a un estimado de 150 000 obreros urbanos y 100 000 trabajadores rurales en la huelga general nacional. Los observadores extranjeros calcularon que un 90% de la fuerza laboral se unió a la huelga en el área metropolitana.<sup>100</sup> En Puerto El Triunfo, los trabajadores ocuparon las tres plantas empacadoras en apoyo a la huelga general y para proteger las instalaciones. El SIP no llamó a la huelga a sus marinos afiliados debido a las dificultades logísticas que eso acarrearía. A pesar de los vínculos estrechos entre la gerencia y la oligarquía y el régimen, no se dio represión alguna, ya sea directa o indirecta; las empresas hasta pagaron el salario de uno de los días de huelga.<sup>101</sup>

Un día después de la huelga general, un corresponsal extranjero envió la siguiente nota:

Unos 500 fuertemente armados elementos de tropa del gobierno, apoyados por carros blindados, atacaron la sede de la Coordinadora

<sup>99</sup> Molina Lara, entrevista con el autor, Los Ángeles, enero de 2015.

<sup>100</sup> Menjívar Ochoa, *Tiempos de locura...*, p. 297.

<sup>101</sup> Molina Lara, entrevista con el autor, Los Ángeles, febrero de 2016.

Revolucionaria de Masas (CRM) en la universidad e incursionaron en el vecino barrio La Fosa. Más de 50 personas perdieron la vida [...] el ejército todavía tiene ocupada a la universidad [...] en el momento del ataque la CRM estaba reunida para evaluar los resultados de la huelga.<sup>102</sup>

La acción brutal sin precedentes de los militares quizá fue una respuesta en compensación por su incapacidad de frenar la huelga general.

Hacia mediados de agosto de 1980, la CRM convocó de nuevo a una huelga general, pensada como un ensayo potencial para una insurrección popular. Solamente un 60% de la clase obrera del área metropolitana participó, debido a los altos niveles de represión y quizá a la apatía inducida por la cada vez más grande amenaza y realidad del cierre de fábricas. Sin embargo, el arzobispo Rivera y Damas (quien reemplazó al arzobispo mártir Romero) entendió que la huelga era más bien un plebiscito, debido a la participación de la mayoría de la fuerza de trabajo como un claro repudio al régimen.<sup>103</sup> La actividad de los escuadrones de la muerte en contra los militantes sindicales se intensificó. Dieciséis miembros de las bases de STECEL fueron asesinados durante la huelga. En respuesta, el sindicato, encabezado por Recinos, tomó todas las plantas generadoras de electricidad y, en una medida desesperada para frenar la represión, amenazó con volarlas si las plantas eran atacadas.<sup>104</sup> El gobierno aplastó la huelga, disolvió el sindicato y

<sup>102</sup> *Latin American Weekly Report*, 4 de julio, 1980.

<sup>103</sup> Citado en Óscar A. Morales Velado, *La resistencia no violenta ante los regímenes salvadoreños que han utilizado el terror institucionalizado en el periodo 1972-1987*, San Salvador, UCA Editores, 1988, p. 62.

<sup>104</sup> Menjívar Ochoa, *Tiempos de locura...*, pp. 267 y 268.

encarceló a su dirigencia.<sup>105</sup> Poco después, las fuerzas del gobierno y los escuadrones de la muerte obligaron al resto de la militancia de FENASTRAS a pasar a la clandestinidad, aunque Molina Lara siguió actuando abiertamente, pero con cautela.

El régimen de terror que mató a unos 8 000 a 11 000 civiles en 1980 no afectó mucho a Puerto El Triunfo debido, en parte, a la hegemonía del SIP y su táctica de incorporar a miembros de ORDEN (vinculada a la Guardia Nacional y a los escuadrones de la muerte) en sus cuadros directivos. Un incidente que recuerda Noé Quinteros evidencia la legitimidad del SIP aun durante esos tiempos oscuros. A finales de 1980, escuchó que tocaban a la puerta de su casa. Cuando la abrió, el miedo lo congeló: era un conocido asesino de los escuadrones. “Discúlpeme por molestarlo,” dijo. “pero tengo un problema en el trabajo. Están tratando de correrme y espero que el sindicato me pueda ayudar”. Al día siguiente Noé fue a hablar con el supervisor del hombre en Pezca S. A., y le planteó el caso. El supervisor exclamó, “¡estás loco que no sabes quién es él!” Noé le respondió, “Ese es el caso, pero siempre él es un afiliado del sindicato”. La noche siguiente, el hombre tocó la puerta de nuevo. Con menos temor que la noche anterior, Noé abrió la puerta. “Quiero darte las gracias por ayudarme. Pero tengo que decirte —y es posible que me maten por esto— pero estás primero en la lista. Tenés que salir del país en las próximas 24 horas o sos hombre muerto”.<sup>106</sup> Este incidente revela mucho sobre la legitimidad del SIP entre toda la clase obrera en Puerto El Triunfo; también deja en claro cuán fácil le resultó a la derecha paralizar

<sup>105</sup> William Bollinger, “El Salvador”, en Gerald Greenfield y Sheldon Maram [eds.], *Latin American Labor Organizations*, Nueva York, Greenwood Press, 1987, p. 319.

<sup>106</sup> Noé Quinteros, entrevista con el autor, Houston, octubre de 2013.

a los sindicatos cuando estaban a punto de transformar la vida de sus afiliados.

A pesar de la violencia cada vez mayor, el SIP y las empresas camaroneras siguieron operando como si fueran “tiempos normales”. A pesar del terror, la dirigencia del SIP todavía estaba en capacidad de convocar a reuniones a un gran número de sus afiliados. En junio de 1980, más de 500 trabajadores se hicieron presentes en una reunión de la seccional de Pezca S. A., y en agosto más de 1 000 llegaron a una reunión general del SIP. Todavía en noviembre de 1980, poco después de que el ejército había desatado una campaña masiva de tierra arrasada para aplastar un movimiento guerrillero incipiente en Morazán, la seccional de Pezca S. A., obtuvo un incremento salarial de 2 colones diarios, retroactivo al mes de agosto.<sup>107</sup> El patrón establecido de demandas, negociaciones en el Ministerio de Trabajo y amenazas de huelga siguió dándose durante todo ese año manchado de sangre.

En diciembre, sin embargo, el terror se hizo presente en el Puerto. De acuerdo con un informe de FENASTRAS:

Manuel Rivera [un miembro de la dirigencia de SIP] fue capturado a las 10:30 de la noche, el día 10 de diciembre en el cafetín “La Taberna” Puerto el Triunfo, por agentes de los cuerpos represivos vestidos de civil; Y José Margarito Reyes [conserje de SIP] fue capturado el viernes 5 de diciembre a las 4:30 pm, en Usulután, por agentes vestidos de civil y fue conducido directamente a la comandancia de Usulután.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> “Acta 44”, *Libro de actas*, 4 de noviembre, 1980 (Archivos de la Subseccional Pezca); FENASTRAS, Boletín FENASTRAS *Combate*, diciembre de 1980, CIDAI/UCA.

<sup>108</sup> *Loc. cit.*

Ovidio Granadeño, un militante del SIP, recuerda que le había rogado a Manuel Rivera que no saliera esa noche después de una reunión del sindicato. Nunca se supo nada más de los dos activistas del sindicato. Granadeño describe los desaparecimientos como el comienzo de una era en el Puerto de “represión muy brutal”.<sup>109</sup> Temprano en la mañana del 15 de enero de 1981, Molina Lara se despertó en las oficinas de FENASTRAS en San Salvador. Varios agentes de policía vestidos de civil irrumpieron en el local y lo amarraron y vendaron.<sup>110</sup> Durante tres horas esperaron la llegada de otros militantes de FENASTRAS. Capturaron a dos más; una tanqueta llegó después a la oficina para llevárselos. Los metieron en un calabozo en el sótano del cuartel general de la Policía Nacional. Durante seis días, Molina Lara fue vendado, golpeado y torturado con descargas eléctricas; los interrogadores no dejaban de exigirle que les proporcionara nombres a cambio de salvar su vida y la de su familia. Finalmente, la Cruz Roja llegó a la cárcel y cesaron las torturas. Dos semanas después fue trasladado a la penitenciaría de Mariona. Al cabo de casi seis meses fue liberado y se exilió en Estados Unidos.

A comienzos de agosto de 1981, Gloria García, junto con algunas compañeras del sindicato, deambulaban entre los matorrales en las afueras del pueblo de Tierra Blanca. Habían recibido información de que podrían encontrar los restos de Juana Páez, una

<sup>109</sup> Ovidio Granadeño, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, febrero de 2012. No es fácil estimar un número exacto de las personas asesinadas o desaparecidas entre los activistas sindicales del Puerto. Calculo que fueron entre cinco y siete.

<sup>110</sup> La detención ocurrió unos pocos días después de la explosión de una bomba en el edificio de FENASTRAS. Bollinger, *op. cit.*, p. 357; Molina Lara, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2012.

activista del sindicato que había desaparecido dos semanas antes. Poco después, caminando por una senda lodosa, vieron su cabeza ensartada en un poste. Cerca de allí encontraron su cadáver tirado en la tierra. Una estaca la atravesaba, entrando por su vagina y saliendo por su cuello. Los estudiosos han analizado la violación como una estrategia y una práctica oportunista de la guerra que infunde el miedo en el “adversario” y socava la autoestima del varón.<sup>111</sup> Los militares salvadoreños y los escuadrones de la muerte efectivamente practicaron la violación, notablemente en la masacre de El Mozote y la violación y ejecución de las tres monjas y la colaboradora laica estadounidenses. Los miembros del escuadrón de la muerte muy probablemente violaron a Juana, pero también se propusieron crear un impacto escénico de mutilación, ya sea por furia o muy a propósito. Allí, entre matorrales —sin más testigos que los buitres quizá— atacaron el cuerpo de su adversaria a manera de profanar su identidad como militante obrera. Diez años más tarde, otro escuadrón de la muerte haría estallar los cerebros de Ignacio Ellacuría y otros intelectuales jesuitas destacados. La violencia contrainsurgente salvadoreña identificaba a sus enemigos y por ende los mutilaba. Horrorizadas, Gloria y sus amigas recogieron los restos de Juana y los llevaron al Puerto para sepultarlos.

Esa misma noche, estremecida hasta lo más profundo de su ser, Gloria García pudo conciliar el sueño. Fue despertada por golpes en la puerta, gritos y maldiciones. Miró su reloj —eran las 2 de la mañana. Llena de pánico, salió cautelosamente de su dormitorio.

<sup>111</sup> Elisabeth Wood, “Conflict-Related Sexual Violence and the Policy Implications of Recent Research”, en *International Review of the Red Cross* 96, núm. 894, septiembre de 2015, pp. 457-478.

Decenas de hombres uniformados con pasamontañas irrumpieron en su casa. Observó horrorizada como quemaban todas sus fotografías y papeles y destrozaban las camas y los muebles. Le gritaban “¡puta guerrillera!” Después de unos momentos de terror, se fueron. Gloria García fue la última persona militante del SIP que huyó al exilio. A pesar de los vínculos de los dueños de las empresas camaroneras con la extrema derecha, ningún activista obrero en aquel momento o posteriormente creyó que tuvieron responsabilidad directa alguna por los ataques. Más bien, las acciones de los escuadrones de la muerte en el Puerto fueron parte de una campaña nacional de terror que eliminó a un estimado de 5 000 afiliados a sindicatos urbanos y rurales entre 1979 y 1983.

En julio de 1981, varios militantes obreros encarcelados redactaron una nota que hicieron llegar a un periodista holandés: “El sindicalismo salvadoreño ha tenido que pasar a la clandestinidad, porque es de la única manera como puede continuar viviendo ya que sus locales han sido dinamitados y cateados y sus dirigentes encarcelados o asesinados.” A continuación, describieron su propia situación: “... aquí se encuentran compañeros quemados con ácido, torturados la mayoría con golpes y con choque eléctricos. La persecución y asesinato de nuestros familiares que nos visitan en la prisión se incrementa cada día con el objeto de aislarnos de nuestro pueblo”.<sup>112</sup>

Podemos entender esta breve historia de insurgencia obrera y represión violenta como evidencia que apuntala el argumento de Greg Grandin acerca de la violencia contrarrevolucionaria como la partera del neoliberalismo. En sus palabras: “La represión

<sup>112</sup> “La situación de la clase obrera en El Salvador”, Kooster Collection, International Institute of Social Studies, Ámsterdam.

destruyó las alianzas entre élites reformistas y clases populares, desarticuló poderosos movimientos colectivos y los convirtió en estrategias individuales de supervivencia, extrajo a los líderes de sus comunidades y redefinió la relación entre los seres humanos y la sociedad".<sup>115</sup> No obstante, el movimiento obrero en el Puerto y en San Salvador reemergería con fuerza a mediados de la década de 1980 en el contexto de una brutal guerra civil que terminaría costando 75 000 vidas. Pese al valor con el cual los obreros se enfrentaban a los empleadores y al gobierno en condiciones de inimaginable dificultad, la oleada de represión violenta de 1980 había despojado en gran medida el potencial emancipador de los movimientos.

La insurgencia obrera que provocó tanta resistencia sanguinaria de derecha no fue únicamente una criatura de la izquierda revolucionaria, ni en términos organizativos o ideológicos. Profundamente arraigados en el discurso y la praxis del movimiento obrero radical, se encontraban los esfuerzos y las expresiones de unas bases obreras por alcanzar una vida segura y digna dentro de una sociedad convulsa y altamente estratificada. A menudo la brecha entre el discurso radicalizado y la conciencia obrera terminaba en desencuentros, debilitando así al movimiento. Sin embargo, las bases presionaban al mismo tiempo a la dirigencia de izquierda radical para que prestara atención muy puntual a sus necesidades y que aceptara los experimentos de autogestión obrera que resultaban anatema al leninismo clásico.

<sup>115</sup> Greg Grandin, *The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War*, Chicago, University of Chicago Press, 2004, p. 196. Véase también Deborah Levinson-Estrada, *Trade Unionists against Terror: Guatemala City, 1954-1985*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1994.

El periodo inmediatamente posterior al golpe del 15 de octubre bien pudo haber sido una oportunidad histórica, que se perdió para encontrar una solución a los conflictos de clase que estaban desarticulando a la sociedad salvadoreña. Los desencuentros debilitaron al movimiento obrero en el Puerto y en todo el país. Si la izquierda radical se hubiera mantenido siempre dispuesta a un diálogo práctico con la JRG, podría haberse constituido en un baluarte más efectivo frente a la derecha homicida, que se propuso deliberadamente aniquilar todas las expresiones de resistencia dentro de las clases populares.<sup>114</sup> La transición al neoliberalismo en El Salvador pudo haber sido inevitable, pero unos escuadrones de la muerte auspiciados por el Estado no tienen por qué haber sido sus parteras.

<sup>114</sup> Es más, si el gobierno de Estados Unidos se hubiera apegado algo más a su compromiso con los derechos humanos, podría haber promovido semejante alianza, o al menos haberla aceptado. US Embassy to Secretary of State, “Troubles in Agricultural Areas: Incidents and Agrarian Reform”, cable, 6 de diciembre, 1979, E00309, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, Collection DNSA.

#### 4. CONFLICTOS OBREROS EN PUERTO EL TRIUNFO, EL SALVADOR, 1985

Las formas cotidianas de resistencia no figuran en los titulares. Pero de la misma manera en que millones de pólipos antozoos crean caprichosamente los arrecifes de corales, así también las acciones diversas de insubordinación y evasión del campesinado crean sus propias barreras de arrecifes. Y es de esta manera que el campesinado hace sentir su presencia política por lo general.

JAMES SCOTT, *Weapons of the Weak*

En virtud que como hombres amantes del trabajo que somos, hemos acordado todos los trabajadores a la orden de Pezca S. A., constituir una cooperativa en el Puerto El Triunfo [...].

MAURICIO BENÍTEZ y JOSÉ LUIS GRANDE PREZA,  
mensaje a la Asamblea Legislativa, 1985.

Algo Huele a Podrido en Puerto El Triunfo

Titular, *El Diario de Hoy*, julio de 1985.

Ovidio Granadeño conoció la represión antes de llegar a Puerto El Triunfo. En 1974, en la catedral de San Vicente, se había pronunciado en contra de la remoción de su parroquia de un sacerdote de la línea de la Teología de la Liberación, David Rodríguez. Desde ese momento, Ovidio se enfrentó a hostigamientos y discriminación por parte de los terratenientes locales quienes lo identificaban como subversivo. Le costó cada vez más conseguir trabajo como trabajador agrícola. Gradualmente, sus simpatías por la Teología de la Liberación, su experiencia previa en el sindicato de panaderos en San Salvador y la reacción de los terratenientes lo encaminaron hacia el activismo en el Bloque Popular Revolucionario (en adelante BPR) y la Federación de Trabajadores del Campo (en adelante FTC).

Ovidio obtuvo acceso a una manzana de tierra (1 manzana = 0.71 hectárea) que su familia todavía poseía y se dedicó a cultivar maíz y algunos vegetales. Ayudó a formar una cooperativa grande en la cual cada familia conservó su propia tierra y producción, pero todos se ayudaban mutuamente con la mano de obra. También compraban abonos y otros suministros en común.

En 1977, Ovidio participó en una toma (ocupación) de la hacienda Las Moras, ubicada a unos 15 kilómetros al oriente de su casa, cerca de Tecoluca. La FTC había organizado la toma y se propuso colectivizar las tierras ocupadas. Ovidio participó con entusiasmo en el trabajo colectivo. Después de seis meses, la Guardia expulsó a los activistas de la FTC. Cuando volvió a su casa, reflexionó sobre su experiencia. Aunque siguió siendo un socialista convencido, pensó que el colectivo había sido un fracaso. “Algunos se volvieron vagos, aunque todos pertenecíamos a la FTC, causando divisiones entre las filas. Yo siempre insistía que todos trabajába-

Ovidio Granadeño, empacando camarón en Pezca S. A.



Foto: cortesía de Ovidio Granadeño.

mos por igual”.<sup>1</sup> Algunos años más tarde, le insistiría a sus compañeros que trabajaran duro y cuidaran la maquinaria. Ellos le

<sup>1</sup> Ovidio Granadeño, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2016.

dirían “negrero”, a lo que él respondía “Cayetano Carpio [antiguo dirigente del sindicato de panaderos y fundador de las Fuerzas Populares de Liberación] me enseñó eso”.<sup>2</sup>

Tiempo después, Ovidio volvió a su caserío cerca de Tecoluca, subsistiendo a duras penas en la parcela de la familia, mientras trataba de reanimar la cooperativa. En marzo de 1979, supo que las fuerzas de seguridad lo andaban buscando. Se escondió en los cerros cuando el ejército allanó su casa. Entonces, portando una bolsa con su ropa, se fue caminando por veredas hacia la costa. No tenía nada en mente, pero su hermana trabajaba en Pezca, así que se dirigió al Puerto donde llegó cuando recién terminaba la huelga.

Ovidio recuerda que no conocía a persona alguna vinculada con el sindicato. Eso cambió cuando durante una manifestación de huelga se puso de pie y cantó “Carabina 30-30”, un corrido de la Revolución mexicana. Bernabé Recinos, el dirigente de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (en adelante FENASTRAS), lo buscó y se convirtió en un activista del Sindicato Tierra (en adelante SIP). Durante tres meses en 1981, la Guardia Nacional vigiló su casa. Se retiraron solamente después de que Ovidio logró que el capitán del Puerto y un alto gerente de Pezca intercedieron a su favor. Hubo al menos un operativo de la

<sup>2</sup> Ovidio había trabajado a la par de Carpio en el sindicato hacia fines de la década de 1960 y participó en huelgas bajo el liderazgo de Carpio. En aquellos tiempos, Carpio era dirigente en el Partido Comunista Salvadoreño (en adelante PCS) pero se separó del partido para fundar el grupo guerrillero. Ovidio colaboró con las FPL/FMLN durante la década de 1980, sobre todo proporcionando oportunidades de descanso y tratamiento médico para la guerrilla que operaba en la región. *Ibid.*

Guardia en la planta. Recuerda que alguien le entregó una pistola para que la escondiera. La introdujo en un barril de hielo.

Después de 1981, sin embargo, el pueblo generalmente quedó a salvo del conflicto armado. No obstante, la guerra civil que descargó su furia sobre el país entre 1980 y 1992 tuvo un impacto en los acontecimientos de Puerto El Triunfo. De manera particular, las amenazas y las acciones de los escuadrones de la muerte fueron determinantes, como vimos en el Capítulo 3, en obligar a la dirigencia del SIP a pasar a la clandestinidad o al exilio en 1980 y 1981. Inmediatamente después del periodo de represión, los dos sindicatos de la industria camaronera, SIP y Sindicato Agua (SGTIPAC), comenzaron a resurgir. Aunque muchos dirigentes del SIP todavía estaban alineados con la izquierda, en la medida que el sindicato se reagrupaba después de la represión de inicios de la década de 1980, la dirigencia redujo considerablemente su militancia y su presencia comprometida dentro del movimiento obrero en el nivel nacional. Ovidio jugó un papel único. Aunque perteneció a la junta directiva del SIP, no quiso aceptar un papel de mayor responsabilidad porque había comenzado a colaborar clandestinamente con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (en adelante FMLN), proporcionando algún apoyo logístico. Este capítulo describe la transición del Sindicato Tierra de un cascarón de lo que había sido debido a la represión violenta a un sindicato relativamente exitoso preocupado por la subsistencia diaria de sus afiliados.

El Sindicato Agua había sido fundado en 1971 como un sindicato identificado, en efecto, con la compañía. Los marineros de esa época no creían que el sindicato se preocupara por su causa (en contraposición a los capitanes o patrones de los barcos). Este capítulo también narra y analiza el resurgimiento explosivo del

sindicato a mediados de la década de 1980. Cuando alcanzó su máxima membrecía de 300 a 500 personas, casi todos ellos marineros hombres, el sindicato se acercó cada vez más al partido Demócrata Cristiano, que dirigió el gobierno de 1984 hasta 1989. Centraremos nuestra atención en el crecimiento del Sindicato Agua y la naturaleza radical de sus demandas, así como su populismo anticomunista. Aunque algunos elementos de este populismo radical convergían a veces con los postulados fundamentales que compartía la dirigencia izquierdista del SIP, las presiones de la Guerra Fría —especialmente desde el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (en adelante AIFLD) y Duarte— y las relaciones de género separaron a los dos sindicatos durante buena parte de la década. Los militantes del Sindicato Agua, en particular, a menudo expresaban desprecio hacia las mujeres y actuaban según los estereotipos de mujeriegos consumados. Por cierto, los dirigentes del Sindicato Agua percibían al Sindicato Tierra como cómplice de las empresas camaroneras. Esa crítica no dejaba de ser algo cierta pero también se derivó de su impresión del Sindicato Tierra como “feminizado” y, por ende, poco militante. Aún más sorprendente, percibían esa complicidad como un reflejo de una alianza más amplia entre el FMLN y la derecha oligárquica. Como veremos en el Capítulo 7, esa división entre los dos sindicatos eventualmente facilitó el triunfo en el nivel local del neoliberalismo y sus consecuencias devastadoras.

## LA MOVIDA EN LA DÉCADA DE 1980

En el Capítulo 1, vimos cómo los pescadores desarrollaron un estilo de vida machista, propiciado por la dureza y los peligros de su trabajo que afectaban negativamente la estabilidad familiar.

Cuando los pescadores desembarcaban en el Puerto, se dedicaban habitualmente al juego, a las mujeres y al trago. Semejantes comportamientos no eran del agrado de sus cónyuges y compañeras, y provocaron numerosos conflictos. A veces eran violentos. Ana Alvarenga recuerda que cuando su esposo se enteró que había sido electa a la directiva del sindicato en 1986, “Me golpeó; me dejó como un monstruo”.<sup>3</sup> Los sindicatos y la empresa se solidarizaron inmediatamente con ella. “Lo iban a arrestar, pero yo le dije a la policía que sólo lo sacaran del pueblo. Él estaba trabajando en Acajutla y ahí tuvo que quedarse”.<sup>4</sup> El poder de las sindicalistas en el SIP contribuyó a frenar la violencia doméstica y todas las formas de acoso sexual en el trabajo.

Tal como se observó en el Capítulo 1, “la movida”, mediante la cual los pescadores vendían parte de su captura a “comerciantes pirata”, subsidiaba el estilo de vida de los marineros. Cuando Alfredo Mena Lagos, un destacado activista de derecha de poco más de treinta años de edad, asumió la presidencia de Pezca S. A., en 1982, se propuso reducir este comercio como su principal tarea: “Cuando yo mi hice presidente de Pezca encontré serios problemas de liquidez. Nos estaban robando demasiado camarón”.<sup>5</sup> El sistema de incentivos que introdujo también consideraba sanciones: “Aquella tripulación que bajaba del piso, la sacamos [...] por fuera”.<sup>6</sup> A partir de 1984, las tripulaciones comenzaron a recibir

<sup>3</sup> Ana Alvarenga, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2015.

<sup>4</sup> Ana Alvarenga, entrevista con el autor, Montreal, 2016.

<sup>5</sup> Alfredo Mena Lagos, entrevista con el autor, San Salvador, febrero de 2016.

<sup>6</sup> Aparte de los incentivos, Mena Lagos instituyó otras políticas, tales como la compra por anticipado de piezas de repuesto; atribuye el incremento en la producción de un 37% a estas nuevas políticas. *Ibid.*

premios, incluyendo refrigeradoras y televisores, si entregaban una cierta cantidad de camarón. La respuesta de los marineros fue aceptar el nuevo sistema y apropiarse del camarón sobrante. Tal como recuerda Escobar, aparte de los incentivos formales de la empresa, “para nosotros la movida era nuestro propio incentivo”.<sup>7</sup>

Hasta mediados de la década de 1980, los trabajadores de las empacadoras y la dirigencia de su sindicato aceptaron “la movida” a regañadientes, aun cuando parte de su paga dependía de las cuotas de producción. El ingreso adicional proporcionado a los cónyuges y parientes de los marineros apaciguó su oposición. Es más, el Sindicato Tierra no podía arrogarse autoridad moral sobre este asunto, porque los marineros afiliados al SIP en las otras dos empresas también se dedicaban a las ventas ilegales, si bien es cierto que en niveles menos notorios.<sup>8</sup> Sin embargo, el silencio público y privado en torno a “la movida” y sus consecuencias materiales creó un desencuentro serio en Puerto El Triunfo. Para citar un ejemplo penoso, en 1984 los militantes del SIP intentaron en vano convencer a los marineros que pertenecían a su sindicato y trabajaban para Mariscos de El Salvador para que no siguieran practicando “la movida”.<sup>9</sup> Cuando meses más tarde la compañía cerró debido a insolvencia financiera, los militantes del Sindicato Tierra culparon a los marineros. No obstante, “la movida” continuó sin cesar.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Ángel Escobar, entrevista con el autor, Los Ángeles, enero de 2016.

<sup>8</sup> Los niveles eran lo suficientemente bajos como para que Molina Lara bromeara con los marineros del SIP, por ejemplo, “¿Te dieron tu sueldo por adelantado?”

<sup>9</sup> Ovidio Granadeño, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2012 y 2014.

<sup>10</sup> Ruperto Torres, un antiguo maquinista y dirigente del Sindicato Agua comentó: “No me recuerdo de nadie que resistiera la tentación”.

Una forma de coerción desde el mercado laboral se impuso contra los capitanes que no permitían las ventas ilegales.<sup>11</sup> Durante la década de 1980, una conversación usual acerca de un capitán incluiría la pregunta: “¿Él vende?” Una respuesta negativa impulsaría a un marinero a buscar trabajo en otra tripulación.

Un informe de 1986 de la embajada de Estados Unidos subraya la importancia del papel de los capitanes en este comercio ilegal.

La mitad de los capitanes están vendiendo camarón a los pequeños pescadores que llegan en cayucos. Los pequeños pescadores a su vez lo venden a una nueva planta procesadora montada con la cooperación del gobierno para apoyar a las cooperativas y pescadores artesanales. A menudo también venden (exportan ilegalmente) a plantas en Honduras y Guatemala. Los capitanes de los barcos reciben su pago dentro y fuera del país [...] y las ventas terminan colocadas en empresas de propiedad de presuntos capos de la droga en Miami.<sup>12</sup>

Alfredo Mena Lagos, el presidente de Pezca S. A., de 1982 a 1985, reitera esta afirmación en términos de un vínculo entre el comercio de estupefacientes y de camarones.<sup>13</sup> Aunque el papel de la droga no se aclara, el informe de la embajada subraya la infraestructura de corrupción:

Existe una creencia difundida en la industria de que la Marina está involucrada en la corrupción. De acuerdo a las fuentes, los informan-

<sup>11</sup> Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, febrero de 2017.

<sup>12</sup> US Embassy to Secretary of State, “Crisis in the Shrimp Industry” [Crisis en la industria del camarón], 22 de marzo, 1985, San Salvador, 6659, r221606z, núm. 6659, case, en Freedom of Information Act [ley de acceso a la información pública] del US Department of State, Washington, DC.

<sup>13</sup> Alfredo Mena Lagos, entrevista con el autor, San Salvador, 2016.

tes tienen temor de decir quién participa de los sobornos por miedo a que los maten. La Marina podría tomar unas medidas efectivas si existiera la voluntad necesaria. Por ejemplo, otras compañías que tienen militares de alta gradación como accionistas (por ejemplo, Atarraya) reciben protección cuando se ven afectados por huelguistas u otras obstrucciones.<sup>14</sup>

Además de los oficiales militares de alta gradación, hasta los empleados de gerencia de la empresa se habían involucrado en las ventas ilegales; uno de ellos en particular se hizo bastante rico según los estándares locales.

No hay duda de que para mediados de la década de 1980, “la movida” estaba causando serios apuros financieros a las empresas. Ningún marinero quería hacer quebrar a las empresas camaronearas. Más bien, tal como se ha sugerido anteriormente, se adherían a un cálculo moral y económico de los riesgos asociados y un sentido de justicia económica, incluyendo un derecho fundamental de apropiación directa de una porción de su producción. Para muchos marineros, este sentimiento de “economía moral” persistió hasta el final, independientemente de los cambios en las redes de intercambio o de las percepciones de otros residentes del Puerto.

Los marineros echaban mano de una interpretación económica de contenido moral para promover y legitimar lo que James Scott ha denominado un “arma de los débiles”. El concepto relacionado de Scott de mensajes ocultos (hidden transcripts) también es aplicable a Puerto El Triunfo. Los marineros gozaban de abundantes

<sup>14</sup> US Embassy to Secretary of State, “Crisis in the Shrimp Industry,” 22 de marzo, 1985, San Salvador, 6659, r221606z, núm. 6659, case, en Freedom of Information Act del US Department of State, Washington, DC.

oportunidades para acceder a los espacios necesarios donde crear mensajes ocultos, es decir, para discutir y expresarse fuera de la luz pública. Pero no era un espacio igualitario. Cuando no estaban ocupados en alta mar, las discusiones se referían al capitán del barco, quien figuraba como un compañero del sindicato pero también como un superior, dotado de autoridad absoluta; su complicidad en “la movida” y los beneficios que recibía de ella eran evidentes. De hecho, los capitanes recibían cinco veces más que los marineros de ese comercio ilegal, pero solamente ganaban de dos a dos y medio veces más en salarios de la compañía. Los capitanes a menudo se enriquecían bastante como resultado de esta práctica. Las antiguas trabajadoras se acuerdan de los capitanes con especial desprecio: “Regresaban y decían yo tengo 10, yo tengo 5 [5-10 000 colones]”.<sup>15</sup>

La práctica contribuyó al surgimiento de una fracción de clase en el nivel local: los capitanes se convirtieron en pequeños burgueses acaudalados. Su estatus de clase emergente tuvo implicaciones significativas para el sindicato y las compañías. Los planes para establecer un sistema de subcontrataciones en 1987, encontraría apoyos entre los capitanes de barco, en vista de que su nuevo estatus “gerencial” sería congruente con su nueva posición de clase.

La riqueza de los capitanes de barco y el involucramiento de militares de alta gradación y de narcotraficantes plantea una pregunta escabrosa: ¿Cuándo es que esta forma de resistencia cotidiana —aceptada y hasta aplaudida por buena parte de la clase obrera del Puerto en sus etapas iniciales— se convirtió en una actividad antisocial? Esta pregunta es pertinente para nuestra narra-

<sup>15</sup> Adela Amaya, entrevista con el autor y Carlos Henríquez Consalvi, Puerto El Triunfo, mayo de 2013. 10 000 colones entonces equivalían a 2 000 dólares.

tiva porque tuvo que ver con la manera en que los trabajadores de las plantas y los marineros entendían “la movida”. La manera en que los trabajadores de las plantas percibían la práctica condicionó su relación con los marineros como grupos social y como sindicato. Para los marineros, “la movida” afectó su propia conciencia social y su actividad sindical.

El mero hecho de vender camarón en alta mar era, por supuesto, ilegal. Al comienzo, muy pocos trabajadores del Puerto o marineros se opusieron a esta práctica en términos morales. Por el contrario, lo percibieron como un acto de resistencia justificable. Desde el ciclón de 1977, cuando se convirtió en una práctica social generalizada (anteriormente hubo muchos menos casos), hasta mediados de la década de 1980, “la movida” se convirtió en un componente de una red altamente organizada. Los residentes del Puerto sabían que los militares, especialmente los de la marina, eran actores clave. Los pescadores artesanales (conocidos como “muralleros” por el pescado sin valor comercial —muralla— que los marineros regalaban) a quienes se les vendía el camarón directamente, terminaron siendo nada más que empleados a sueldo de los empresarios. Asimismo, la riqueza ostentosa de algunos de los capitanes contradice la idea de que los marineros simplemente se estaban recetando un salario “justo”. Finalmente, la diferencia entre resistencia y criminalidad parece haberse esfumado cuando las compañías comenzaron a cerrar o tambalearse financieramente a causa del efecto de “la movida”. En otras palabras, cuando dicha práctica resultó en el despido de trabajadores en las plantas, su carácter antisocial se tornó evidente.

La repercusión de “la movida” tuvo graves consecuencias para las empresas y los trabajadores de las empacadoras, fue significativo en la liquidez de las compañías. En el caso de los trabajadores

de las empacadoras, la práctica afectó no solamente su sustento, sino que también provocó una profunda desconfianza entre la fuerza de trabajo fundamentalmente femenina y los marineros, cuyo estilo de vida machista exacerbó las diferencias. A partir de sus orígenes como una forma aceptable de resistencia, “la movida” se había convertido simultáneamente en el facilitador y la expresión del comportamiento de los marineros que molestó y alienó profundamente a muchas trabajadoras.

#### EL SINDICATO TIERRA Y EL ACERCAMIENTO DE DUARTE A LOS TRABAJADORES

Como veremos en el Capítulo 5, los dueños y los gerentes de Pezca estaban vinculados con la derecha. Sin embargo, no existe evidencia de que hayan propiciado directamente las detenciones o los asesinatos de los activistas del SIP. Pezca S. A., se aprovechó del acercamiento. Ana Alvarenga recuerda que durante e inmediatamente después de la represión, la gerencia se tornó de nuevo “déspota con nosotros”.<sup>16</sup> René Cuellar Morán, el gerente general, inició la ofensiva antisindical en mayo de 1981. Sin darle aviso al sindicato, procedió a despedir a 200 trabajadores, ofreciéndoles unas indemnizaciones insuficientes.<sup>17</sup> El estado de sitio entonces vigente descartó cualquier opción por la vía de la huelga. El SIP

<sup>16</sup> Ana Alvarenga, entrevista con el autor y Carlos Henríquez Consalvi, Puerto El Triunfo, 2015.

<sup>17</sup> La indemnización no guardaba relación con la antigüedad de los empleados despedidos. El sindicato también lo denunció por no haber descontado las cuotas del sindicato a los afiliados al SIP en la flota camronera. “Acta 57”, *Libro de actas*, 3 de mayo, 1981 (Archivos de la Subseccional Pezca, Puerto el Triunfo, Usulután, El Salvador).

se encontró impotente para frenar a la gerencia. Sus llamados a FENASTRAS para que les brindara ayuda también fueron inútiles en vista de que el régimen había clausurado la sede de la federación y encarcelado a sus líderes (incluyendo a Molina Lara, como vimos en el Capítulo 3).<sup>18</sup> Finalmente, poco después de los despidos, la Guardia Nacional cateó y saqueó la sede del SIP. Ante el aumento de la represión, el sindicato optó por cerrar sus oficinas en Puerto El Triunfo.

Cuando Molina Lara se convirtió en el secretario de organización de FENASTRAS en 1979, comenzó a preparar a su reemplazo en el SIP. Se había fijado cómo Ricardo Jovel, un marinero en Mariscos de El Salvador, había mostrado su temple cuando defendió a sus compañeros en el trabajo y en reuniones. Molina Lara le habló a Jovel de la propuesta de hacerse cargo de la dirección del sindicato con una condición: tenía que dejar de tomar. Jovel protestó: “¡no hay un marinero que no tome!” Después de sopesarlo, estuvo de acuerdo, en parte porque compartía las ideas políticas y sindicales de izquierda de Molina Lara, pero también porque ya se estaba hartando de la vida de marinero. Molina Lara se las arregló para que tomara unos cursos sobre sindicalismo en San Salvador y entonces persuadió a la dirigencia local del SIP para que apoyara a Jovel en la próxima elección. El pavor, la ansiedad y el cansancio describen los primeros años de Ricardo Jovel como dirigente sindical. A pesar de su vinculación tenue con la izquier-

<sup>18</sup> La junta encarceló a la directiva de STECEL; Bernabé Recinos fue dirigente de ambos STECEL y FENASTRAS. Alejandro Molina estuvo en una gira de solidaridad en Estados Unidos durante buena parte de 1982 en apoyo a sus camaradas encarcelados.

da revolucionaria, mantuvo sus contactos con ella al mínimo.<sup>19</sup> Aunque sufrió ataques violentos contra sus líderes y sus familias, FENASTRAS le pagó un salario de subsistencia y le permitió utilizar una pequeña oficina en San Salvador.<sup>20</sup> Allí se reunía con la dirigencia del Puerto y los militantes de FENASTRAS. También conoció a Febe Velásquez (con quien se acompañó más tarde), quien sería la secretaria general de FENASTRAS entre 1986 y 1989, cuando murió junto con nueve personas más, víctimas de la bomba terrorista en la sede de FENASTRAS. Jovel también viajaba al menos una vez al mes a Puerto El Triunfo, donde se reunía con los afiliados para mantener abierta la comunicación con las bases. Sin embargo, lo que parecía necesario para asegurar su propia supervivencia no resultó aceptable para los otros dirigentes sindicales en el Puerto, y algunos miembros de las bases lo presionaron para que volviera al Puerto de manera permanente, especialmente cuando pudieron abrir las oficinas del sindicato nuevamente.

En abril de 1984, Jovel se reunió con nueve miembros de la junta directiva del Sindicato Tierra (incluyendo cuatro mujeres) en Usulután, la cabecera departamental. Decidieron enviar una comisión a la capitania del Puerto que solicitaría permiso para reabrir la sede del sindicato. El comandante naval del puerto les otorgó el permiso con la condición de que prometieran que el sindicato y su sede serían apolíticos y que escogerían a un secretario de su venia cuyo trabajo consistiría, entre otras obligaciones, en

<sup>19</sup> Estuvo afiliado al Frente de Acción Popular Unificado (en adelante FAPU) y, a través de ellos, a la Resistencia Nacional (en adelante RN), un grupo guerrillero dentro del FMLN. Jovel no participó en ninguna actividad guerrillera. Ricardo Jovel, entrevista con el autor, San Salvador, 2014.

<sup>20</sup> Un escuadrón de la muerte asesinó a la esposa e hija del líder de FENASTRAS, Bernabé Recinos, mientras estaba en prisión.

supervisar las actividades del sindicato. La dirigencia local pensó que no tenía más opción que aceptar el trato. La recaudación de las cuotas sindicales estaba por el suelo. Muchos trabajadores simplemente habían dejado de pagar sus cuotas; otros tantos habían sido despedidos o cesados. Para colmo, el oligarca Ángel Guirola, en un arranque de cólera provocado por las exigencias del sindicato y los efectos de “la movida”, decidió clausurar Mariscos de El Salvador, dejando así desempleados a varios centenares de miembros del sindicato que cotizaban.<sup>21</sup>

El momento de la reapertura de la sede del sindicato no fue casualidad. José Napoleón Duarte había sido electo presidente el mes anterior, con un amplio respaldo del movimiento obrero que interpretó su elección como la clave de la supervivencia. Después de haber sido devastada por el terror estatal, la izquierda tuvo poca presencia en el movimiento campesino u obrero entre 1981 y 1983. Por ende, el “centro” contó con tierra fértil sobre la cual organizarse. La Unión Democrática Popular (en adelante UPD) era una federación obrera y campesina aliada en términos generales con el partido Demócrata Cristiano. A partir de su fundación en 1980 con fuertes apoyos del AIFLD y la Central Latinoamericana de Trabajadores (en adelante CLAT), la UPD desarrolló su principal base de apoyo en torno al sindicato históricamente más grande, el de los 40 000 obreros de la construcción, y a los cooperativistas que se habían beneficiado de la reforma agraria. La reforma agraria de 1980, rechazada por la izquierda como una medida contra-insurgente, eventualmente benefició a unas 300 000 personas, la

<sup>21</sup> Aunque las finanzas del SIP eran frágiles, donó 15 000 colones (de los 26 000 en sus cuentas) a los trabajadores de Mariscos de El Salvador quienes recién había quedado cesantes.

mayoría de ellas organizadas en cooperativas. Sin embargo, estos campesinos tuvieron que lidiar constantemente con el gobierno para que les entregara apoyo económico (por ejemplo, abonos e implementos agrícolas) y títulos legalmente válidos, pero la mayoría pertenecía a sindicatos que apoyaban al gobierno. Fue de estas organizaciones que la UPD logró hacerse de sus amplias bases de apoyo.

La UPD firmó un “pacto social” con Duarte antes de las elecciones, que garantizaba el respeto pleno de los derechos sindicales y un fin del congelamiento de salarios, vigente desde 1981. Es más, el pacto consideró una profundización y ampliación de la reforma agraria, una representación de la UPD en los puestos clave del gobierno y una promesa de iniciar negociaciones para poner fin a la guerra civil. Existe poca duda que la victoria electoral de Duarte sobre el derechista Roberto D’Aubuisson (con un 53% de los votos) se debió en buena medida al proselitismo de la UPD, la cual, a pesar de su apoyo a la Democracia Cristiana, no estaba cerrada a un entendimiento con la izquierda, tal como se evidencia en su apoyo irrestricto a los derechos sindicales y a unas negociaciones de paz incondicionales. La mayoría de activistas obreros celebraron su victoria con optimismo, con la creencia de que la larga noche de represión anti-obrera estaba llegando a su fin.

A pesar del optimismo que se respiraba en el país, en Puerto El Triunfo solamente 95 afiliados asistieron a la primera reunión del SIP durante la reapertura de la sede en mayo de 1984, la más baja asistencia a una reunión del sindicato en casi 20 años. El acta de la reunión dice que “Se analizó la incertidumbre de muchos trabajadores para el sindicato”. Jovel agregó, “Nos comprometimos a organizar a los trabajadores de las distintas empresas para salir de

este impasse”.<sup>22</sup> También apremió a los presentes para que reclutaran a más personas para la siguiente reunión y les recordó que las sesiones gozaban del beneplácito de la capitania del Puerto.<sup>23</sup>

A pesar de sus convicciones ideológicas de derecha, Mena Lagos estaba interesado en establecer relaciones armoniosas con el SIP. La compañía se mostró proclive a ofrecer concesiones durante las negociaciones contractuales de 1984, en vista de que la industria se estaba recuperando; ese año la producción aumentó en un 37%.<sup>24</sup> Pezca aceptó un aumento de un colón diario; ese aumento casi guardó relación con la tasa de inflación (un 15 % en promedio por año desde 1980), pero los aumentos anteriores fueron sumamente inadecuados dado el congelamiento nacional de salarios. Mena Lagos decidió ceder, en parte, porque creía que el liderazgo del SIP era “responsable”, a pesar de sus inclinaciones izquierdistas.

El sindicato había comprobado su responsabilidad, por así decirlo, cuando cabildeó con éxito en la Asamblea Legislativa para que se levantara una veda de la pesca del camarón para contrarrestar una sobreexplotación. Era comprensible que el sindicato, debilitado y a la defensiva, utilizara la oportunidad para “defender” los intereses de corto plazo de la fuerza de trabajo. Las compañías también se aprovecharon de la iniciativa del sindicato para causarle daños a las necesidades de largo plazo de la industria del camarón.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> “Acta 52”, *Libro de actas*, s.f., p. 160 (Archivo General del SIP, Puerto El Triunfo).

<sup>23</sup> “Acta 54”, *Libro de actas*, 26 de mayo, 1984 (Archivo General del SIP).

<sup>24</sup> El aumento sí guardó correspondencia con el primer aumento del salario mínimo desde 1980. Mario Lungo, *El Salvador in the Eighties: Counterinsurgency and Revolution*, trad. de Amelia Shogun, Philadelphia, PA, Temple University Press, 1996, p. 95.

<sup>25</sup> La captura del camarón blanco, el que mejor se pagaba, estaba decayendo drásticamente (Archivo de la Asamblea Legislativa, San Salvador).

Hacia 1985, el SIP se había recuperado en términos de su membrecía activa y estaba logrando concesiones importantes de Atarraya (la otra planta que todavía operaba en Puerto El Triunfo) y Pezca S. A. Al sumarse las dos plantas en el departamento de La Unión, el sindicato contabilizó un total de 1 745 afiliados, una cantidad ligeramente inferior a los 2 000 que reportó en 1980. Varias razones dan fe de este éxito relativo. En primer lugar, hubo continuidad en los cuadros directivos y reconocimiento de la necesidad de un cambio táctico.<sup>26</sup> En segundo lugar, y más importante, cuando los directivos comenzaron a salir de la clandestinidad, optaron por renunciar a las huelgas a favor de paros breves en unidades específicas de la planta y de trabajo a desgano.<sup>27</sup>

Los antiguos dirigentes del sindicato se sienten orgullosos de sus logros en medio de la guerra civil. Muchos de sus logros tienen que ver con la reinstauración de aquellas prestaciones que la compañía les había quitado durante los años de represión. Ovidio Granadeño, quien colaboró con el FMLN durante la guerra civil, recuerda cómo el sindicato consiguió becas para los hijos de sus

<sup>26</sup> Pedro Henríquez Peña, Ovidio Granadeño, Rafael Antonio Vigil y otros pertenecieron a la Junta Directiva durante la segunda mitad de la década de 1970 y a mediados de la década de 1980. Hubo otras maneras en que el SIP recuperó su legitimidad, tales como el patrocinio de un equipo de fútbol.

<sup>27</sup> A pesar de sus esfuerzos por proyectar una imagen no subversiva, las reuniones del SIP también comenzaban con un “un minuto de silencio por los caídos que lucharon por conquistar los beneficios para los afiliados”. “Acta 45”, *Libro de actas*, 24 de mayo, 1986 (Archivos de la Subseccional Pezca); “Acta 52”, *Libro de actas*, 12 de agosto, 1990 (Archivos de la Subseccional Pezca). Rolando Franco rememora sobre el estado de paranoia “cuando traje el conjunto ‘El Indio’ que cantaba canciones de protesta, me criticaron mucho otros sindicalistas”. Entrevista con el autor, Los Ángeles, 2015.

miembros, acceso a una clínica de salud, y un botiquín.<sup>28</sup> También hubo otros triunfos, desde derechos especiales para trabajadoras ocasionales embarazadas hasta el funcionamiento de nuevo de un cafetín para los trabajadores con precios subsidiados.<sup>29</sup> Se logró también que los trabajadores eventuales (de estación) obtuvieran sus prestaciones de nuevo. Es más, los aumentos salariales que consiguieron desde 1984 a 1986 guardaron relación con la tasa de inflación. En 1985, los trabajadores con mediana especialización ganaban más del doble del salario mínimo en la industria. Y en las negociaciones contractuales de 1985 con Aarraya, el SIP consiguió un aumento del 75% para los marineros afiliados con el sindicato.<sup>30</sup>

Más allá de su éxito en la mesa de negociaciones, hubo otra razón de cómo lograron conservar buena parte de sus bases a pesar de la fuerte competencia del Sindicato Agua. Aunque Ricardo Jovel, Granadeño y otros dirigentes se mantuvieron alineados con la izquierda, atenuaron el tono radical en sus declaraciones. Cuando se reabrió la sede del sindicato, por primera vez en más de una década cada sesión era antecedida por las notas del himno nacional.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Hubo otros triunfos más mundanos como, por ejemplo, un segundo rollo de papel higiénico por semana. Granadeño mezcló algunas de las victorias de fines de la década de 1970 que habían sido suspendidas y posteriormente reinstituidas hacia mediados de la década de 1980. “Acta del Comité de Relaciones Obreros Patronales”, 29 de abril, 1987 (Archivos de la Subseccional Pezca).

<sup>29</sup> Parece que el viejo cafetín se había deteriorado durante el periodo de la represión.

<sup>30</sup> FENASTRAS, *Memoria anual de labores*, FENASTRAS, San Salvador, CIDAI/UCA, noviembre de 1985, p. 15.

<sup>31</sup> Véase Gobierno de El Salvador, *Memoria del Ministerio de Trabajo, 1985-1986*; “Tabla de Salario,” noviembre de 1985 (Archivos de la Subseccional Pezca).

El SIP ya no era el mismo sindicato de la década de 1970. Aunque seguía afiliado a FENASTRAS, cuando mucho unas pocas decenas de dirigentes y bases participaban en las celebraciones del Día del Trabajo o en manifestaciones de protesta en la segunda mitad de la década de 1980.<sup>52</sup> En este nuevo entorno de neutralidad ideológica y cooperación, varios dirigentes sindicales se volvieron corruptos, sucumbiendo a las prebendas que ofrecía la gerencia.<sup>53</sup>

#### EL SINDICATO AGUA

El Sindicato Agua (SGTIPAC) no se benefició de inmediato de la debilidad y la corrupción del SIP durante los primeros años de la década de 1980. Al comienzo de la década, su dirigencia también estaba sumida en corrupción. En 1982, los afiliados eligieron a Mauricio Ascencio Benítez, quien se postuló como un candidato de las bases, dedicado a luchar contra la corrupción. La mitad de los 150 miembros presentes se abstuvieron de votar. Los antiguos militantes recuerdan que aquellos que más se habían aprovechado de “la movida” —los capitanes de los barcos— y quienes habían manejado el sindicato desde sus inicios en 1971, fueron los que promovieron la opción del abstencionismo. Benítez era un

<sup>52</sup> International Labor Organization, interim report, case 1258, núm. 236, Genova, ILO, noviembre de 1984. Fue excarcelado con otros diez miembros del Sindicato de los Trabajadores Eléctricos (en adelante STECEL). Véase también, Chris Hedges, “Salvador Curbs Unions-Claps Leaders in Jail” [El Salvador restringe a los sindicatos – encarcela a sus dirigentes], *Christian Science Monitor*, 3 de octubre, 1983. La esposa e hija de Recinos fueron “desaparecidas”.

<sup>53</sup> Jovel cayó bajo sospecha de corrupción más tarde pero, de hecho, fue acusado únicamente por recibir pequeñas cantidades de camarón y pescado —para su consumo personal. Ana Alvarenga, entrevista con el autor, Montreal, 2016; Rolando Franco, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2015.

marinero eventual (no permanente, con frecuencia estacional), un trabajo que lo ubicaba en un nivel inferior en la jerarquía de los marineros. Es más, era un alcohólico en vías de recuperación, quien había vivido durante años en los márgenes extremos de la sociedad del Puerto. Después de una década de control a manos de los capitanes de barco, su elección representó un cambio importante.

La nueva directiva enfrentaba varios problemas estructurales. Los capitanes de los barcos complicaban la situación del sindicato. En todas las compañías, cumplían tres funciones: empleados y miembros del sindicato, representantes de la compañía, y autoridad indiscutible en los barcos. Su papel combinado de representantes de la patronal y dirigentes del sindicato había limitado la capacidad del Sindicato Agua de obtener salarios, prestaciones y condiciones laborales decentes para las bases del sindicato.

El papel de los eventuales planteaba otro problema estructural. Tal como se analizó en el Capítulo 2, el SIP agitó y convocó a una serie de huelgas con el objetivo de transformar el estatus de los trabajadores de las emparadoras durante la estación del chacalín (entre 35 y 40% de la fuerza laboral) en uno de trabajadores permanentes con todas las prestaciones de ley. Su victoria en 1979 constituye uno de los grandes logros del movimiento obrero salvadoreño, el cual revirtió la tendencia global hacia la informalización del trabajo. Pese a que también se caracterizó por una dimensión estacional, el problema de los eventuales entre los marineros era sustancialmente diferente. Las empresas estipulaban un límite de cinco personas en cada tripulación y las leyes nacionales (bajo la influencia de estudios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en adelante USAID)

limitaban el total de embarcaciones camaroneras a 73.<sup>34</sup> Durante varios años, los marineros presionaron sin éxito para que se agrandaran las tripulaciones, debido en parte a que la obligación de descabezar el camarón (menos el chacalín) y clasificarlo significó que la cantidad total de trabajo requerido se incrementara mucho más. Los capitanes a menudo embarcaban a una o dos personas “extras” a quienes los otros marineros les pasaban una parte de sus propios ingresos. Éstos terminaron engrosando el número cada vez mayor de eventuales.

En enero de 1983, poco después de que Benítez asumió su cargo, el sindicato protestó vehementemente contra la discriminación que sufrían los marineros mayores de 40 años y el incumplimiento de Pezca S. A., de pagar aguinaldos y vacaciones. Mauro Granados, el gerente general, amenazó con atacar al sindicato con la fuerza aérea a causa de su “subversión”. El uso de “subversivo” como epíteto, generalmente reservado para las personas de izquierda, resultaba peligroso y con frecuencia equivalía a una sentencia de muerte. La paranoia ya existente se incrementó en 1982 cuando Roberto D’Aubuisson, el infame dirigente de derechas (señalado como la cabeza del complot para asesinar a monseñor Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980), adquirió una pequeña flota de barcos camaroneros en Puerto El Triunfo. Como veremos en el Capítulo 5, durante el resto de la década, la junta directiva de su empresa camaronera, Mariscos Tazumal, incluyó a otros jefes de los escuadrones de la muerte. A lo largo de esos días oscuros, Benítez se sintió acosado por ambos la patronal y la derecha. Jovel

<sup>34</sup> Después de mediados de la década de 1980, el gobierno parece haber perdido la cuenta del número de barcos camaroneros, a pesar de que muchos permanecían varados a causa de la descapitalización.

recuerda que Benítez se mostró dispuesto a sacarle provecho a los consejos tácticos del Sindicato Tierra y alguna que otra asistencia pequeña. La actitud fraterna de Benítez comenzó a cambiar a partir de la elección de Duarte en 1984.<sup>55</sup>

Durante una reunión en julio de 1984, Benítez se dirigió a los afiliados al sindicato sobre varios problemas, incluyendo el uso de básculas defectuosas utilizadas por Pezca S. A., supuestamente para estafarles de los incentivos salariales recién instituidos, así como las acciones antisindicales de tres jefes.<sup>56</sup> Les informó que el subgerente de operaciones, José Rolando Villatoro, había dicho que “a él no le parece bien que un marino que no ha estado estudiando en una universidad devengue las cantidades que ganamos”.<sup>57</sup> El dirigente sindical también denunció los salarios bajos (debido a un congelamiento salarial de tres años) y la ausencia de prestación alguna para los trabajadores del Puerto, los talleres y los varaderos, a quienes Pezca S. A., consideró como eventuales.<sup>58</sup> Benítez también atacó el nepotismo en las contrataciones de trabajadores y los servicios de alimentación.<sup>59</sup>

<sup>55</sup> No existe evidencia directa de que el AIFLD haya apoyado a Benítez desde temprano, pero no hay duda de que respaldaron a Grande Preza, quien reclutó al líder del Sindicato Agua para que el sindicato se uniera a la CGT. Ricardo Jovel, entrevista con el autor, San Salvador, 2014; Ricardo Jovel, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2015.

<sup>56</sup> Acta de junio de 1984 (archivos digitalizados del SGTIPAC en manos del autor). Estas actas fueron entregadas al Ministerio de Trabajo. Tal como ocurre con el “Archivo” del SIP, no existe semejante archivo formal pero espero crear un archivo digital disponible al público.

<sup>57</sup> *Ibid.*, p. 7.

<sup>58</sup> El Sindicato Agua estimó que los marineros ganaban mucho menos que el salario mínimo, entonces aproximadamente 0.20 de dólar por hora.

<sup>59</sup> Mauricio Ascencio Benítez a Jonathan Liss, carta, 10 de abril, 1985, p. 6 (Archivos del SGTIPAC).

El discurso del dirigente sindical de 33 años fue una respuesta contundente ante los abusos de poder tanto simbólicos como reales, y reveló aspectos de la ideología y práctica sindical. Dejó en claro que pese a su trayectoria como marinero eventual, se dedicaría a proteger a los trabajadores permanentes de mayor edad frente a la discriminación y los despidos.<sup>40</sup> No obstante, tal como señalarían los dirigentes del SIP años después, su base de apoyo inquebrantable se encontraba entre los eventuales, para los cuales tenía esperanzas de alcanzar algún tipo de estatus permanente.

Después de la reunión, Benítez envió una carta al Ministerio de Trabajo. El sindicato presentó una queja contra tres jefes por prácticas antisindicales y nepotismo, incluyendo uno que había sido capitán de barco. Algunos exmilitantes del Sindicato Tierra aseguraron que la animosidad tenía que ver con las intenciones de los jefes de frenar la “piratería”; el excapitán de barco, Remberto Alemán, tiene que haber conocido los detalles más íntimos de esta práctica. Sin embargo, algunos exmilitantes del Sindicato Agua lo acusan de haber sido completamente corrupto al exigir un pago bajo de mesa en camarón y efectivo a cambio de hacerse de la vista gorda ante “la movida”.

En respuesta a la queja, el Ministerio de Trabajo envió a dos inspectores a Puerto El Triunfo quienes se dedicaron a investigar durante cuatro días. Aparte de la patronal y los dirigentes del Sindicato Agua, los inspectores dijeron haber hablado con 200 trabajadores dentro y fuera de la planta, incluyendo a 40 marineros. Su informe desestimó muchos de los alegatos del sindicato. Es más, dijeron que los 1 000 trabajadores de la planta no estaban a favor

<sup>40</sup> Esta es la interpretación de Ricardo Jovel, antiguo marinero, y secretario general del SIP, 1981-1987.

de quitar a los tres jefes. Rechazaron las acusaciones de nepotismo y favoritismo. Aunque Pezca insistió que los trabajadores en el varadero eran todos eventuales, los inspectores estuvieron de acuerdo con el sindicato en el sentido de que la empresa sí les adeudaba algún dinero por vacaciones y aguinaldo (la bonificación correspondiente al décimotercer mes).

Benítez acusó a los inspectores de tomarse unos tragos con los empleados de la gerencia, y de presentar datos engañosos. Su afirmación de que más de 1 000 trabajadores de la planta apoyaban a los tres jefes era completamente absurda porque, en ese momento, menos de 600 personas laboraban en Pezca S. A. Benítez también acusó a la empresa de deshonestidad flagrante. Argumentó que la gerencia evitó adrede pagar los incentivos utilizando medios arteros, incluyendo básculas inexactas en el muelle y la contaminación de la captura con combustible diesel. Aunque es imposible verificar la objetividad de estas acusaciones, revelan la profunda desconfianza y los malentendidos entre el Sindicato Agua y la compañía.

“La movida” era la causa de las sospechas. Tal como se mencionó, Alfredo Mena Lagos instituyó un sistema de incentivos para restringir las ventas ilegales. El Sindicato Agua respondió a esta iniciativa demandando un aumento en los pagos de incentivos. La respuesta de la empresa destaca la brecha discursiva entre los trabajadores y la patronal. Mientras ignoró las acusaciones de contaminación y alteraciones de las básculas, el vocero de Pezca le dijo al Ministerio de Trabajo, en relación con el aumento del pago de incentivos, que:

Los incentivos que las empresas pesqueras pagan al personal marino [...] no es una prestación más, sino un programa creado por las

empresas a iniciativa y voluntad propia. Su fin primordial es la de forzar que llegue a la planta la mayor producción que capture dicho personal [...]. En otras palabras, es un esfuerzo desesperado de las empresas para lograr mantener la fuente de trabajo del personal que labora en la planta procesadora. O sea, no se paga por mayor producción capturada, sino se incentiva la producción que llega a la planta.<sup>41</sup>

Para el sindicato, esta argumentación era a la vez inaceptable e imposible de responder de manera directa porque el tema de las ventas ilegales tenía que mantenerse en silencio por definición.

## LA HUELGA DE 1985

Después de la elección de Duarte, Benítez comenzó a distanciarse de Jovel y la dirigencia local del SIP. En el momento que el Sindicato Agua presentó su protesta ante el Ministerio de Trabajo, el sindicato se afilió a la Confederación General del Trabajo (en adelante CGT), una federación obrera pequeña controlada por la Democracia Cristiana.<sup>42</sup> Esta acción le permitió a Benítez y su grupo de líderes recibir orientaciones de José Luis Grande Preza, quien había sido formado por el AIFLD. Grande Preza se ubicaba en un espacio intermedio entre los imperativos de la Guerra Fría,

<sup>41</sup> Dirección General de Trabajo, declaración de la gerencia de Pesca, San Salvador, AAL, 11 de diciembre, 1984.

<sup>42</sup> A mediados de 1984, el Sindicato Tierra y Sindicato Agua (en adelante SGTIPAC) se retiró de la Federación Sindical Salvadoreña (en adelante FUS) (por lo general controlada por el Partido Comunista en la clandestinidad desde la década de 1960) y se afilió a la CGT (de orientación democristiana y gobiernista). Este cambio, que guarda correspondencia con la orientación anti-izquierdista del sindicato (lo cual no permite comprender la afiliación a la FUS), fue motivado por la victoria electoral del Duarte.

el AIFLD y el socialismo democrático de orientación cristiana de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT). Grande Preza había comenzado en las bases del sindicato de choferes de autobuses y ascendió gradualmente en la CGT durante los años del terror antisindical.<sup>45</sup>

Como veremos en el Capítulo 6, Duarte y sus aliados estadounidense hicieron todo lo posible para marginar a la ala izquierda del movimiento obrero sin recurrir a la violencia, que caracterizó a los primeros años de la década. El resurgimiento del movimiento obrero y el deseo del gobierno de Duarte de controlarlo, tuvo efectos inmediatos en el Puerto. Durante diciembre de 1984 y enero de 1985, los funcionarios del Ministerio de Trabajo trataron infructuosamente de resolver los reclamos. El conflicto se intensificó en la medida que la empresa reaccionó ante la retórica sindical agresiva imponiendo restricciones a los movimientos de la dirigencia del Sindicato Agua. Es más, la patronal no cedió en los asuntos de contrataciones y despidos.

El 15 de enero de 1985, la compañía despidió a un mecánico de refrigeración que pertenecía al Sindicato Agua. El sindicato argumentó que había sido despedido por pedir el mismo salario de otro mecánico que realizaba las mismas tareas. El sindicato colocó su reenganche al comienzo de la lista de reivindicaciones que incluía la remoción de los tres gerentes de nivel medio, quienes habían sido señalados por sus acciones antisindicales, así como una jornada de siete horas para los trabajadores del muelle y el varadero con todas las prestaciones de ley. Al día siguiente, el sindicato exigió que se cumpliera su pliego de peticiones dentro de 24 horas o se convocaría a huelga. El 17, entregaron un aviso al Ministerio de

<sup>45</sup> Grande Preza, entrevista con el autor, San Salvador, 2014.

Trabajo mediante una nota firmada por 70 trabajadores que decía que dejarían de trabajar al día siguiente a las 10 de la mañana.

A las 7 de la mañana del 18 de enero, de acuerdo con un informe de la empresa:

Sin esperar que esta audiencia se celebrara el Sr. Benítez procedió a excitar al personal del muelle y del varadero a que se declararan en huelga [...]. Por la confusión que se produjo inicialmente y como consecuencias de las repetidas excitativas y presiones del Sr. Benítez, el personal de la planta procesadora se unió a la huelga a partir de las 10:00 horas de ese mismo día [...] después de entrevistarse con los líderes de su propio sindicato [SIP] rectificaron su actitud inicial y volvieron al desempeño normal de sus labores a partir de las 15 horas.<sup>44</sup>

La compañía afirmó que 70 trabajadores estaban en huelga y que 550 seguían trabajando. Pero un vocero reconoció que debido a la naturaleza estratégica del muelle, la huelga afectaría a todos a pesar de que se trataba de “problemas que no son de mayor trascendencia”.

Fueran o no asuntos de poca monta, ésta no fue una huelga como cualquier otra; resultó ser un asunto complicado que involucró al Sindicato Tierra, el gobierno de Duarte, el Sindicato Agua, y la gerencia de Pezca. Las demandas del Sindicato Agua tuvieron que ver principalmente con temas relativos a trabajadores que no eran marineros, especialmente los del varadero y el muelle, lo que apunta claramente a una intención de ampliar la base sindical

<sup>44</sup> “Posición de Pezca S. A., frente a la huelga ilegal promovida por el Sr. Mauricio Ascencio Benítez”, 21 de enero, 1985 (Archivo de la Asamblea Legislativa-AAL).

más allá de los marineros.<sup>45</sup> En consonancia con la agenda de la CGT/AIFLD, uno de sus objetivos fue desplazar al supuestamente izquierdista Sindicato Tierra y ejercer su propio control.

Benítez hizo volver a los barcos de alta mar con sus cargamentos de 80 000 libras de camarón, aumentando así en unos pocos centenares el número de trabajadores en huelga (incluyendo los eventuales). El Sindicato Agua supuso que los 320 000 dólares de camarón que traían los barcos en sus bodegas sería una pieza de negociación decisiva para alcanzar el éxito. Sin embargo, durante las semanas siguientes fue el camarón en los barcos que se convirtió en el asunto central. La compañía quería que se procesara y embodegara hasta que se resolviera el conflicto. Si esa solución no era aceptada, entonces el camarón sería donado a instituciones caritativas, a la fuerza armada o a los desplazados por la guerra pero con la condición de que la compañía no pagaría salario alguno. El sindicato quería que el camarón se vendiera sin procesar en el mercado local; los ingresos de la venta se depositarían en una cuenta mancomunada hasta después de finalizado el conflicto. Aunque nunca se dijo de manera explícita, parece probable que el sindicato no quería que se procesara el camarón, porque entonces los trabajadores de las empacadoras tendrían menos razones para unirse a la huelga o de salirse de las filas del SIP. Al cabo de unas pocas semanas, el camarón se pudrió. Entonces surgió una disputa sobre quién tendría la obligación de tirarlo al mar.

<sup>45</sup> Es más, ambos sindicatos se preocuparon por proteger los derechos de antigüedad de los trabajadores permanentes mientras intentaban ampliar los derechos y las prestaciones de los eventuales. La defensa de la antigüedad resultó de mucha importancia para Benítez debido a su propia condición de marinero eventual.

El apoyo de la federación gobiernista CGT que fortaleció su legitimidad como federación obrera indujo a Benítez y sus compañeros de la dirigencia del Sindicato Agua a seguir presionando fuertemente contra Pezca. El sindicato se mantuvo intransigente, al igual que la patronal. Varios meses después, un periodista de *El Diario de Hoy* escribió:

La fetidez que emana de casi 80 mil libras del verduzco camarón descompuesto, en las bodegas de los buques pesqueros varados en el muelle del Puerto Triunfo es algo más que una repugnante experiencia olfativa. Se ha convertido en símbolo de la corrupción de principios de libre sindicalismo.<sup>46</sup>

El artículo sugiere que la huelga no fue sino una táctica del sindicato con respaldo de la Democracia Cristiana para expulsar al Sindicato Tierra de la planta. La ironía de un periódico de derecha extrema defendiendo a un sindicato dirigido por la izquierda fue motivo de risa entre los afiliados al SIP.

A pesar de una fuerte oposición de la junta directiva, Mena Lagos, el presidente de Pezca, siguió pagándoles a los trabajadores de la planta. Dichos pagos eran una táctica consciente para enfrentar la huelga y profundizar la división entre los sindicatos. Después de tres meses de haberse iniciado la huelga, Pezca se enfrentó a una crisis de liquidez, por lo que suspendió el pago de salarios y cesó a 172 trabajadores de la planta.

El SIP entonces criticó a la compañía y al Ministerio de Trabajo por su incompetencia y ofreció “solidaridad ilimitada” a los huelguistas. El comunicado del 18 de abril afirma: “SIP y la FENASTRAS [ofrecen] su solidaridad ilimitada con los compañeros del sector

<sup>46</sup> *El Diario de Hoy*, 26 de julio, 1985.

agua y hace suyas las peticiones hasta las últimas consecuencias. Que somos una sola clase, pero que los intereses del Gobierno y de la patronal, han mantenido divididas las fuerzas siendo fácil víctima de las intrigas patronales”. La declaración del SIP, al referirse a los trabajadores del muelle y el varadero, destacó particularmente la necesidad de “dar contratos definitivos a los trabajadores supernumerarios, porque esa es la forma más brutal de reprimir por hambre la expresión gremial de los compañeros”.<sup>47</sup> A pesar de que entendían las intenciones de Benítez, los trabajadores de la planta expresaron su solidaridad, de manera formal e informal, durante toda la huelga. Los afiliados de los dos sindicatos compartían los alimentos donados por varias organizaciones (incluyendo donaciones en efectivo del AIFLD) y expresaron una solidaridad mutua de diversas maneras, aun cuando Pezca siguió pagando los salarios de los trabajadores de la planta.

En respuesta a cierta presión que estaba recibiendo de sus bases, la dirigencia del Sindicato Agua aceptó reunirse con los líderes del SIP en su sede para coordinar una lucha conjunta. El jefe de la CGT, José Luis Grande Preza, se hizo presente en la reunión. De acuerdo con un documento del SIP, la reunión no produjo resultado alguno.

En primer lugar, porque el secretario general de ESGTIPAC [sic] Mauricio Ascensión Benítez intenta atacar a nuestros dirigentes señalándolos por sus supuestos vínculos con el FMLN y que nuestro sindicato

<sup>47</sup> Ambos sindicatos, echando mano de cierta demagogia, pidieron aumentos de un 100%. Durante la negociacion del contrato colectivo, que fueron interrumpidas por la huelga, el Sindicato Tierra había exigido un aumento salarial del 50%. “FENASTRAS y SIP comunican al pueblo salvadoreño”. Campo pagado, 18 de abril, 1985 (CIDAI/UCA).

pertenecía a las organizaciones revolucionarias de masa-FAPU y que eran la misma cosa. En síntesis, no llegamos a nada y nos rechazaron nuestra participación en el conflicto.<sup>48</sup>

En vista de su intención de arrogarse la representación de los trabajadores de la planta, no es de extrañar que el Sindicato Agua no correspondió a la solidaridad ofrecida ni se tomó la molestia de reconocerla. Podría suponerse que el apoyo del AIFLD a la huelga del Sindicato Agua estaba condicionada a la expectativa de que un “sindicato democrático” reemplazaría a un sindicato “izquierdista”. La eliminación del SIP resultaba congruente con los objetivos y las prácticas de la CGT y el AIFLD. Habría sido un triunfo para el gobierno de Duarte, a pesar de que las declaraciones políticas del SIP se habían atenuado desde tiempo atrás.

En unas declaraciones que dio al periódico *El Mundo* en respuesta a señalamientos de que la huelga tenía que ver principalmente con desplazar al SIP como sindicato de Pezca, Grande Preza afirmó que no tenían interés en afectar la “estabilidad del movimiento sindical”. Salió en defensa de Benítez a quien se le acusaba de actuar como un caudillo, diciendo, “... la huelga no fue decretada por el compañero Mauricio Ascencio Benítez, fue decretada por las bases del SGTIPAC [Sindicato Agua], cuya ideología eminentemente humanista contrasta abismalmente con la ideología de Sindicato Tierra [SIP]”.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> En algunos sentidos, la declaración sugiere una falta de seriedad por parte de Benítez. El FAPU prácticamente había dejado de existir —en vista de sus vínculos con la RN en el FMLN. FENASTRAS, *Memoria anual de labores*, FENASTRAS, 1984-1985, CIDAI/UCA, 7 y 8 de noviembre, 1985, p. 17.

<sup>49</sup> Citado en *El Mundo*, 24 de julio, 1985.

Éste era el *modus operandi* de ambos la CGT y el AIFLD durante el periodo: por medio de medidas no violentas, desplazar a los militantes sindicales de izquierda de la dirección de los sindicatos o persuadirles (a veces, supuestamente, mediante sobornos) para que se pasaran al campo “democrático”. Aunque Benítez odiaba a los escuadrones de la muerte y a la derecha oligárquica, no tuvo reparo alguno en utilizar el epíteto de “subversivos” para atacar a los dirigentes del Sindicato Tierra. A pesar de las amplias coinci-

La dirigencia del Sindicato Agua: Benítez, fila del medio, izquierda; Adela Amaya, fila del medio, derecha; Grande Preza, fila superior, tercero de la derecha; Ruperto Torres, fila superior, derecha



Foto: cortesía de Adela Amaya.

dencias con los objetivos del AIFLD/CGT, las acciones del Sindicato Agua mantuvieron su propia lógica y dinámica.

#### EL SUEÑO COOPERATIVISTA

Benítez tuvo un objetivo importante que no figuraba en las agendas de ninguno de los que respaldaban al sindicato. Durante el tercer mes de la huelga, junto con otros miembros del Sindicato Agua, constituyó formalmente una empresa pesquera cooperativa. El 8 de mayo, en una comunicación al presidente de la Asamblea Legislativa, Benítez y el dirigente de la CGT, Preza Grande, pidieron a dicho órgano que estudiara los requisitos legales para la expropiación de la compañía —en vista de que estaba explotando un recurso nacional— y su conversión en una cooperativa de propiedad de los trabajadores. El pago inicial por la planta y la flota pesquera serían los “salarios holgados” acumulados durante la huelga. Como un primer paso hacia ese objetivo, Benítez y Preza Grande escribieron,

En virtud que como hombres amantes del trabajo que somos, hemos acordado todos los trabajadores a la orden de Pezca S. A., constituir una cooperativa en el Puerto El Triunfo con la cual pretendemos llegar a colaborar con un granito de arena junto con ustedes, hombro a hombro a fin de obtener el tan anhelado bien común de todos los Hermanos Salvadoreños, a través de nuestro esfuerzo colectivo como trabajadores.<sup>50</sup>

Aunque la cooperativa era una organización solamente en el papel, reivindicaba un objetivo serio, a saber, la expropiación de

<sup>50</sup> Mauricio Ascencio Benítez al presidente de la Asamblea Legislativa, carta, 8 de julio, 1985 (AAL).

una de las compañías más grandes en el país y su entrega a los trabajadores. Después de que las negociaciones con Pezca se interrumpieron, Benítez envió una segunda carta a la Asamblea, reiterando el llamado para la expropiación. Durante los siguientes cinco años, el Sindicato Agua continuó cabildeando y luchando por alcanzar el objetivo de la cooperativa.

Algunos de los miembros del gobierno de Duarte y de la Asamblea Legislativa apoyaron la expropiación de Pezca S. A., y la creación de una cooperativa. Semejante objetivo era congruente en general con la agenda de la Democracia Cristiana. Sin embargo, la expropiación de Pezca habría cumplido unos objetivos más estrictamente partidarios, en vista de la política derechista que profesaban sus dueños. Es más, Benítez estaba convencido de que el proyecto era viable y que el gobierno de la Democracia Cristiana lo respaldaría de hecho. Las cooperativas de productores habían sido un pilar de la filosofía y la práctica de la Democracia Cristiana desde la década de 1960 cuando el movimiento adquirió una presencia grande en Latinoamérica. La CLAT, a la cual estaba afiliada la CGT, promovía una visión de autogestión obrera como el elemento clave de una estrategia socialista democrática. Emilio Máspero, el veterano jefe de la CLAT, entendía que las cooperativas eran instituciones fundamentales que respaldarían al movimiento para instaurar una versión no autoritaria del socialismo. Por supuesto, la orientación anticomunista de la Confederación le cerró las puertas a Máspero para establecer alianzas que le habrían dado vida a su objetivo cooperativista.

Un analista de la izquierda de la Democracia Cristiana opinó sobre la posición del gobierno de Duarte sobre la huelga en Pezca y la cooperativa:

Para la DC la solución es que la empresa se transforme en cooperativa siempre y cuando la organización de los beneficiarios esté bajo su control político. Si se tiene en cuenta que el rubro “camarones” constituye la cuarta fuente de divisas para El Salvador, se comprende a cabalidad la segunda intención de la DC: dividir la derecha económica estimulando a aquellas ramas productivas susceptibles de ingresar al esquema de economía de trabajo intensivo pero cooptando simultáneamente a las organizaciones de base asociadas a tales ramas.<sup>51</sup>

El analista identificó una estrategia más amplia de la Democracia Cristiana que neutralizaría a la élite agro-financiera (vinculada al partido ARENA de derechas) y crearía una base cooperativa industrial, con su control político. El financiamiento de semejante medida ambiciosa y transformadora tendría que provenir, al menos indirectamente, del gobierno de Reagan y los organismos internacionales de crédito. Ambas fuentes estaban comprometidas con un proyecto neoliberal que no consideraba el modelo cooperativo de desarrollo.

Las anteojeras y los imperativos de la Guerra Fría no permiten conocer del todo el fondo del pensamiento de Duarte. Sin embargo, parece que el analista estaba mayormente en lo cierto. No hay duda que Duarte se enorgulleció mucho por las numerosas cooperativas que se establecieron durante la reforma agraria de 1980.<sup>52</sup> Es más, el partido Demócrata Cristiano (PDC) estaba enfrascado en una lucha históricamente mortal con la derecha, y la idea de desplazar a la élite agro-financiera de su dominio económico era

<sup>51</sup> *Vispera. Boletín del Movimiento Popular Social Cristiano*, junio de 1985, p. 3.

<sup>52</sup> La promoción que Duarte le hacía a las cooperativas tenía sus límites, tal como se evidenció en el veto que interpuso en marzo de 1985 a una ley altamente favorable a esa forma de organización. Véase *Proceso*, 15 de marzo, 1985.

un elemento necesario de la estrategia del partido que asegurara su desarrollo futuro.

En el nivel local, el ideal cooperativo recibió apoyo de las bases del Sindicato Agua, en parte quizá porque la misma experiencia de los marineros de apropiación directa reforzó su sentido de control sobre la producción. También creyeron de manera implícita que una cooperativa resolvería el problema del empleo de los marineros eventuales.

Ricardo Jovel, el secretario general izquierdista del SIP, recuerda haber discutido la idea de la cooperativa con Benítez (a quien asegura haber asesorado a menudo a lo largo de los años). Jovel esperaba que los trabajadores de la planta serían los propietarios de la planta y administrarían sus operaciones con principios democráticos. Así fue que Jovel animó reiteradamente a Benítez: “Te voy a apoyar”. Le dijo a otros afiliados del SIP, “Si Mauricio logra esto, nosotros ganamos también”.<sup>53</sup> El Sindicato Agua recibió varias visitas del Ministerio de Trabajo, que siempre ofreció su apoyo a la idea de la cooperativa.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Ricardo Jovel, entrevista con el autor, San Salvador, mayo de 2014.

<sup>54</sup> Jovel recuerda, sin embargo, una conversación que sostuvo con el Ministro de Trabajo quién exclamó: “¡Benítez está loco! Duarte no puede hacer esto [...] no puede expropiar capital”. Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013; Adela Amaya, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013. El agregado laboral de la embajada de Estados Unidos habló con funcionarios del Ministerio de Trabajo quienes le dijeron que no existían bases legales para proceder con la expropiación, pero agregaron que los abogados de Pezca les habían dicho que si la empresa entraba en quiebra, entonces una cooperativa podía asumir su dirección. US Embassy to Secretary of State, “No Sign of Let-Up in Four-Month Strike against El Salvador’s Largest Shrimp Exporter” [No hay señas de que la huelga de cuatro meses contra el mayor exportador de camarón de El Salvador vaya a terminar], 28 de mayo, 1985, San Salvador, 6659,

Ovidio Granadeño recuerda que el Ministro de Trabajo y Luis Hidalgo, un diputado democristiano por el departamento de Usulután, visitaron el Puerto y se reunieron con miembros del SIP para persuadirles que apoyaran la cooperativa.<sup>55</sup> Granadeño y otros militantes del SIP rechazaron la oferta en gran medida debido a la enemistad entre los dos sindicatos; estaban hartos de que se les llamara “rojos” o “subversivos”, cuando semejante apelativo podría ser una sentencia de muerte. Los militantes del SIP pensaron que el respaldo del gobierno le otorgaría al Sindicato Agua el control de la cooperativa. Dicho objetivo guardaría relación con su intención de tomarse el control de la planta y desplazar al SIP. Los militantes del SIP también creyeron que perderían todas sus prestaciones porque “serían dueños y no empleados”.<sup>56</sup> Como reflejo de un nivel de desconfianza aún mayor, estaban convencidos de que “la movida” no terminaría cuando se estableciera la cooperativa. También reconocieron que el plan de la cooperativa no encaraba directamente la jerarquía que le otorgaba unas cuotas descomunales de poder e ingresos a los capitanes de barco.

La decisión del Sindicato Tierra de rechazar la postura de Jovel sobre la cooperativa también estuvo influenciada por consideraciones ideológicas y políticas. Con independencia de sus afinidades políticas, los dirigentes del SIP tomaban muy en serio su pertenencia a FENASTRAS, una organización que simpatizaba en general con la izquierda. En palabras de Cirilo Hueso en 1985, la confederación obrera ya no estaba formalmente afiliada al Frente

---

r282355z, núm. C0562655, case F-2013-1010925, en Freedom of Information Act del US Department of State, Washington, DC.

<sup>55</sup> Ovidio Granadeño, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, mayo de 2014.

<sup>56</sup> *Loc. cit.*

Democrático Revolucionario (en adelante FDR), un grupo en el exilio aliado del FMLN, sino que la vinculaba “una convergencia de objetivos”.<sup>57</sup> La afinidad ideológica con el FDR se manifestó en el Puerto. Hueso, que gozaba de más prestigio e influencia entre la dirigencia del SIP que Jovel, aconsejó firmemente que no se apoyara la cooperativa. De acuerdo con Granadeño, “Cirilo nos dijo que las cooperativas formaban parte de una estrategia contrainsurgente y así teníamos que rechazarlas”.<sup>58</sup> Semejante planteamiento estaría en sintonía con la oposición intransigente del FMLN a la reforma agraria. La izquierda se había opuesto a la reforma agraria desde su promulgación en 1980, a pesar de sus similitudes, en general, con las reformas agrarias impulsadas por los gobiernos de izquierda en Guatemala (1952) y Nicaragua (1981). La oposición se derivó en parte debido a la naturaleza militar de las expropiaciones y a la organización de las cooperativas. Aún más importante, la izquierda se opuso a la reforma porque buscaba debilitar su propia base campesina. Ahora bien, es difícil determinar qué fue lo que inclinó la balanza entre los militantes del SIP en contra de la cooperativa del Puerto. El ejemplo cercano y negativo de la cooperativa en la hacienda expropiada de Juan Wright, La Carrera, seguramente les impactó; recibió poco financiamiento y su operación fue altamente militarizada.<sup>59</sup> Por cierto, el FMLN montó un ataque a La Carrera que destruyó buena parte de la cosecha de

<sup>57</sup> Citado en Shirley Christian, “Newly Active Unions a Challenge for El Salvador”, en *The New York Times*, 16 de junio, 1985.

<sup>58</sup> Ovidio Granadeño, entrevista con el autor, febrero de 2016.

<sup>59</sup> La cooperativa de La Carrera tenía una presencia militar fuerte en sus instalaciones. En febrero de 1986, combatientes del FMLN atacaron la planta procesadora de algodón en la hacienda. Mataron o hirieron a 40 soldados y causaron 3.8 millones de colones en daños a la cosecha. Irene Sánchez Ramos, “El Salvador, 1986: el carácter global de la contrainsurgencia”, en *El Salvador*:

algodón. La guerra también afectó a las cooperativas en todo el país. Los planes de Duarte de inyectarles financiamiento chocaron con las realidades del presupuesto militar a pesar de la cuantiosa ayuda estadounidense.

#### ENEMIGOS IMPLACABLES: BENÍTEZ Y MENA LAGOS

Aparte de la oposición del SIP, Benítez también se enfrentó a una patronal intransigente cuya hostilidad se volvía cada vez más personal en la medida que avanzaba la huelga. Inmediatamente después del inicio de la huelga, Mena Lagos, el presidente de la empresa, dijo:

Durante toda su gestión, [el] Sr. Benítez ha mantenido una actitud desafiante hacia la empresa, pretendiendo imponerle sus criterios en una forma prepotente, hasta el grado de pretender forzarla a que destituya a sus principales representantes en Puerto El Triunfo. En el fondo, lo que él pretende es restarle a la empresa su autoridad y su autonomía administrativa.<sup>60</sup>

El último punto tenía un importante referente histórico: muchos de los éxitos del SIP en la década de 1970 se lograron precisamente gracias a la habilidad del sindicato de restringir la autoridad de la empresa en los puntos de producción. La represión de comienzos de la década de 1980 había contribuido mucho para restaurar la autoridad de la patronal.

---

*proceso político y guerra, Cuaderno de Divulgación*, núm. 4, San Salvador, Centro de Investigación y Acción, 1987, p. 64.

<sup>60</sup> “Posición de Pezca S. A., frente a la huelga ilegal promovida por el Sr. Mauricio Ascención Benítez”, 21 de enero, 1985 (AAL).

Más allá del aparentemente trascendental principio de autoridad patronal, la personificación de la huelga fue en respuesta a la reputación del “carácter fuerte” de Benítez, no proclive a buscar entendimientos razonables, y a sus cualidades de caudillo: virilidad y actitud desafiante. La embajada de Estados Unidos lo consideraba “errático y difícil”.<sup>61</sup> Una fuente de la embajada sostuvo que la gerencia de Pezca “odiaba a Benítez” y quería verlo “acabado como dirigente sindical”.<sup>62</sup>

Mena Lagos pensaba que Benítez era mentalmente inestable —una opinión que le trasladó a la embajada de Estados Unidos. También pensaba que el dirigente sindical era “corrupto” y “un mafioso”.<sup>63</sup> En término más precisos, el presidente de Pezca temía que el jefe del Sindicato Agua echara a perder su proyecto de racionalizar la producción del camarón. Por cierto, era de la opinión de que la huelga era fundamentalmente una respuesta al programa de incentivos de Mena Lagos para combatir las ventas ilegales de camarón. Desde la perspectiva del presidente de la empresa, la presión del Sindicato Agua para lograr la expropiación y la cooperativa eran simplemente una prolongación del gangsterismo de Benítez. Las ventas ilegales eran, en cierto sentido, una protooperativa, que se apropiaba de una porción considerable

<sup>61</sup> US Embassy to Secretary of State, “End May Be Near for 186 Day Strike” [El fin de la huelga de 186 días puede estar cerca], julio de 1985, 08542, en Freedom of Information Act del US Department of State; Ovidio Granadeño, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2015; Ana Alvarenga, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2016; Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013.

<sup>62</sup> US Embassy to Secretary of State, “196 Pezca Strike” [Huelga de Pezca 196], 7 de agosto, 1985, San Salvador, 10119, r072316z, núm. C05624766, case F-2013-10925, en Freedom of Information Act del US Department of State.

<sup>63</sup> Alfredo Mena Lagos, entrevista con el autor, San Salvador, 2016.

de la riqueza de Pezca. De no lograrse la cooperativa, Mena Lagos reconoció que el objetivo fundamental del Sindicato Agua era la eliminación del SIP, logrando así una posición más fuerte para ejercer el poder dentro de Pezca. Pese a la consternación de la embajada de Estados Unidos, Mena Lagos prefería las relaciones con los “marxistas” del SIP porque se comportaban como “profesionales”, como un sindicato dedicado a las reivindicaciones cotidianas que tomaba en cuenta la solvencia de la empresa, mientras presionaban por mejores salarios y condiciones de trabajo. Desde la perspectiva de la embajada, Mena Lagos estaba metido en “un juego peligroso” en vista del “marxismo” del SIP.

De acuerdo con Mena Lagos, la intransigencia del Sindicato Agua buscaba hacer quebrar a Pezca para facilitar la expropiación. Como respuesta, el presidente de la compañía comprometió sus recursos para superar las presiones del Sindicato Agua, a pesar del apoyo que ésta recibía del AIFLD. Pezca movilizó sus resortes empresariales para presionar al gobierno de Duarte para que interviniera, de acuerdo con su obligación legal en vista de la declaración de ilegalidad de la huelga.<sup>64</sup> De acuerdo con el agregado laboral en la embajada, “Los muelles de Pezca están ocupados por los huelguistas y Mena Lagos argumenta que el gobierno de Duarte no los despejará porque simpatiza con los huelguistas”.<sup>65</sup> El recuerdo que conserva Mena Lagos de las conversaciones que sostuvo con

<sup>64</sup> Campo Pagado, “Pezca S. A., ante las autoridades de Defensa y Seguridad Pública, de Trabajo y Economía, y ante la conciencia nacional expone”, en *La Prensa Gráfica*, 25 de junio, 1985.

<sup>65</sup> US Embassy to Secretary of State, “No Sign of Let-Up in Four-Month Strike against El Salvador’s Largest Shrimp Exporter”, 28 de mayo, 1985, San Salvador, 6659, r282355z, núm. C0562655, case F-2013-1010925, en Freedom of Information Act del US Department of State.

el presidente Duarte está matizado por su resentimiento político contra los Demócratas Cristianos. Dice que no se dirigió a él como “Señor Presidente” sino como “Ingeniero”. “Duarte me dijo: ‘Esta huelga es porque ustedes no pagan buenos salarios’. Le tiré el folder a Duarte. ‘Lea este folder. Mis capitanes ganan más que sus ministros’”.<sup>66</sup>

Como era de esperarse, la reunión no terminó en nada. Mientras la huelga se prolongaba durante el mes de julio como la más larga y costosa en la historia del país, el Ministerio de Trabajo presionó a ambos bandos para que ofrecieran concesiones.<sup>67</sup> El asunto de los salarios holgados se remitió a una comisión especial de arbitraje que dictaminó que la empresa debía pagar los salarios de un 30% de los días en huelga, equivalente a la mitad de lo que exigía el sindicato. El 1º de agosto, el sindicato y la patronal aceptaron esta solución y la huelga finalizó. Aunque todos los trabajadores despedidos fueron reenganchados, los casos de los tres empleados de gerencia se refirieron a una comisión especial; en última instancia, lograron conservar sus puestos.

El agregado laboral de la embajada de Estados Unidos dedicó tiempo y atención a la “huelga más larga en la historia de El Salvador”. Su informe destacó que, como resultado, el país perdió 4.5 millones de dólares en ingresos por exportaciones, así como más

<sup>66</sup> Mena Lagos, entrevista con el autor.

<sup>67</sup> La empresa siguió enfrentando a los dos sindicatos y subrayó la ilegalidad de la huelga (según el dictamen de un juzgado de lo laboral). Intentó proyectar una imagen pública positiva de disposición a negociar, pero no cedió un ápice en lo que tenía que ver con su “autoridad”, incluyendo su negativa de recontratar a 16 de los 82 marineros que habían sido despedidos. En vista del carácter ilegal de la huelga, rehusó reiteradamente pagar “salarios holgados” por los días en huelga. 8 de mayo, 1985 (AAL).

de un cuarto de millón de dólares en ingresos fiscales. El informe agrega,

Ambos Pezca y SGTIPAC [Sindicato Agua] han proclamado victoria. Sin embargo, no parece que el sindicato haya ganado algo como resultado de la huelga. Pezca cree que tiene sometido a SGTIPAC porque SGTIPAC no tiene la fuerza como [para] convocar a otra huelga. Por lo tanto, Pezca no piensa otorgar aumentos salariales significativos cuando comiencen las negociaciones del contrato colectivo.<sup>68</sup>

No obstante, Pezca sí le otorgó concesiones grandes a SGTIPAC. La discrepancia entre el optimismo de Pezca, que figura en el informe de la embajada, y los resultados de las negociaciones un mes después tienen que ver con la llegada a la presidencia de Pezca de Rafael Escalón (que se analizará en el Capítulo 5). Al comienzo de las negociaciones, Mena Lagos renunció como presidente de la compañía. Estaba cansado de lidiar con Benítez, por un lado, y con una junta directiva, por el otro, que se negaba a apoyar sus planes de modernización y a quien el presidente de Pezca consideraba insuficientemente leal a la compañía.

Con independencia de las causas inmediatas, el sindicato logró un salario mínimo garantizado para los marineros de 30 dólares diarios (un incremento del 400%) en un momento cuando el salario mínimo industrial era de 3.00 dólares diarios (la inflación había aumentado en 20% en 1985). Una estipulación final que resultó contenciosa obligaba al pago de un 80% de los salarios cuando los barcos camaroneros no zarparan a tiempo.

<sup>68</sup> US Embassy to Secretary of State, "196 Pezca Strike", 7 de agosto, 1985, San Salvador, 10119, r072316z, núm. C05624766, case F-2013-10925, en Freedom of Information Act del US Department of State.

A pesar de esta victoria importante, el Sindicato Agua no logró su objetivo de adjudicarse la representación de la planta.<sup>69</sup> Los militantes del SIP insistieron que la huelga “tenía como objetivo la destrucción de nuestro sindicato en Pezca, S. A., pero no alcanzaron su meta debido a la convicción y claridad de nuestros afiliados.<sup>70</sup> Al menos parte de esa claridad tuvo orígenes de género. Una mayoría considerable de las mujeres del sindicato albergaban sentimientos negativos hacia el sindicato de los marineros, debido en cierta medida a su desprecio por las mujeres activistas del SIP y a su trato en general para con las mujeres.<sup>71</sup> Ese trato incluía un desdén evidente hacia la estabilidad de la familia y expresiones desinhibidas de interés sexual hacia las mujeres. Es más, tal como se observó anteriormente, el SIP se había ganado la lealtad de sus bases gracias a sus luchas exitosas en la década de 1970 y a su capacidad constante para negociar hacia mediados de la década de 1980.

No obstante, tal era su disposición de trabajar con la patronal que las bases comenzaron a mirar a la dirigencia del SIP con cierta suspicacia. En 1987, una insurgencia de las bases liderada por Ana Alvarenga expulsó al secretario general de la seccional de Pezca y a varios otros líderes acusados de haberse “vendido” a la compañía. A pesar de las simpatías ideológicas de izquierda de la dirigencia que todavía los convertía ocasionalmente en blanco de violencia de los escuadrones de la muerte, el SIP se desempeñó como un sindicato de naturaleza moderada dedicado a asuntos puramente reivindi-

<sup>69</sup> Dirección General de Trabajo, 30 de octubre, 1985.

<sup>70</sup> FENASTRAS, *Memoria anual de labores, 1984-1985*, FENASTRAS, 7 y 8 de noviembre, 1985, p. 16 (CIDAI/UCA).

<sup>71</sup> Quizá un 20% de las trabajadoras de Pezca estaban casadas o viviendo con marineros. Menos de la mitad de ellas se afiliaron al sindicato rival a pesar de la presión de sus cónyuges para que lo hicieran.

cativos.<sup>72</sup> La victoria espectacular del Sindicato Agua en las negociaciones del contrato colectivo dejó en claro su competencia como sindicato y de esa manera siguieron siendo una amenaza para ambos la compañía y el SIP. El hecho de que Benítez pasara a formar parte de la dirigencia nacional de la CGT incrementó su prestigio.

En retrospectiva, podemos percibir que la huelga de 1985 creó un espacio para revertir en el nivel local la tendencia global hacia la informalización del trabajo. El fracaso del apoyo del SIP al plan de la cooperativa que se habría opuesto a la informalización fue un desencuentro que se derivó, en parte, a su incapacidad para comprender la gama completa de elementos ideológicos y prácticos del Sindicato Agua, que analizaremos en la siguiente sección. Las anteojeras de la Guerra Fría afectaron a la dirigencia de ambos sindicatos, lo que impidió que encontraran intereses en común. Resulta irónico que Benítez, quien promovió en términos radicales la expropiación de la empresa camaronera, un sueño de larga data de los socialistas del Puerto, haya socavado el plan en cierta medida cuando se refería siempre al SIP como un “sindicato subversivo”.<sup>73</sup>

#### EL POPULISMO DE LA CLASE OBRERA: AL ESTILO DEMOCRISTIANO

La retórica y la militancia de Benítez llamaron la atención de los marineros eventuales, el segmento más abyecto de una población

<sup>72</sup> Un escuadrón de la muerte mató al secretario de conflictos de la seccional de Aarraya en marzo de 1985. Su muerte se vinculó a un pleito que tuvo con un capataz de la empresa. Véase FENASTRAS, *Memoria anual de labores, 1984-1985*, FENASTRAS, 7-8 de noviembre, 1985, p. 18 (CIDAI/UCA).

<sup>73</sup> Ovidio Granadeño, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, julio de 2013.

cada vez más empobrecida en el Puerto. La tasa oficial de desempleo nacional en 1985 era de 16.9% con una tasa de inflación de 15%. Estas tasas aumentaron de manera alarmante el siguiente año. Es más, al menos 1 500 refugiados llegaron al Puerto durante la década de 1980, lo que intensificó las presiones sobre los empleos disponibles. A los marineros eventuales les resultó muy difícil conseguir trabajo complementario y el aumento del costo de la canasta básica resultó en más niños con hambre. Con independencia de cualquier otra cosa que puede haber motivado a Mauricio Benítez, se identificó con su sufrimiento. Algunos de sus compañeros del sindicato creen que la pasión, la militancia, la terquedad y el compromiso hacia los eventuales que manifestó Benítez se derivaron, al menos en alguna medida, de su experiencia como un borracho despreciado. “Gente lo pateaba en la calle”.<sup>74</sup> Es decir, quiso redimirse frente a la sociedad pero también cargaba con un resentimiento que logró orientar hacia las luchas sindicales. Algunos de los elementos de su visión del mundo pueden entresacarse de un manifiesto no impreso, escrito por los dirigentes del Sindicato Agua en 1987.

Si bien fueron los dirigentes locales quienes escribieron el documento, sus contactos con la CGT y la CLAT los familiarizó con los planteamientos de la democracia cristiana progresista. Con la excepción calificada de la CLAT, los democristianos de Latinoamérica rara vez se salían de unos límites impuestos por la Guerra Fría que les impedían desarrollar algunos de sus principios medulares más progresistas. En todo el hemisferio occidental durante la década de 1970, algunos elementos de izquierda influenciados

<sup>74</sup> Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, febrero de 2016.

por la Teología de la Liberación se habían separado de los partidos principales. No obstante, durante la década de 1980, muchos democristianos en Latinoamérica, especialmente los sindicalistas afiliados a la CLAT, todavía promovían el “mercado social” y el “comunitarismo” y el socialismo democrático en contraposición al capitalismo oligárquico y/o dominado desde el extranjero. Los esfuerzos de la CLAT por trazar un camino obrerista, socialista entre el imperialismo de Estados Unidos y el “estalinismo” inspiraron a Benítez sin duda alguna.

La derecha oligárquica en El Salvador, organizada en torno al partido ARENA, percibía en la Democracia Cristiana una amenaza igualmente peligrosa que la representada por la guerrilla de izquierda.<sup>75</sup> Para la derecha dura, la responsabilidad de terminar con la guerrilla descansaba en última instancia en Estados Unidos y los militares salvadoreños. Desde la masacre en 1932 de unas 10 000 personas —en su mayoría campesinos indígenas— la élite terrateniente había dependido de los regímenes militares para mantener su poder económico. Por lo tanto, para ella la guerra civil era, en cierta medida, una continuación de su estrategia política por otros medios. Para los oligarcas, los democristianos eran “sandías”, verdes por fuera y rojas por dentro, que amenazaban seriamente sus intereses de clase y, por lo tanto, en palabras de un cientista social de aquel momento, ARENA se oponía a todas las medidas del gobierno de Duarte con “una profunda intransigencia

<sup>75</sup> Véase Ignacio Ellacuría, “Las organizaciones populares ante la nueva situación”, en Rodolfo Campos [ed.], *El Salvador entre el terror y la esperanza: los sucesos de 1979 y su impacto en el drama salvadoreño de los años siguientes*, San Salvador, UCA Editores, 1982.

ideológica”.<sup>76</sup> Se quejaron ante funcionarios del gobierno de Reagan para decirles que no tenía sentido derrotar al FMLN si se habría de permitir que los democristianos llevaran a cabo su programa.

En un informe de coyuntura titulado “Posición SGTIPAC frente a la realidad que vive actualmente el país como pueblo salvadoreño”, repleto de errores ortográficos propios de un alumno salvadoreño de primaria, la dirigencia local planteó sus perspectivas sobre la sociedad y la política.<sup>77</sup> Los escritores atacan con calificativos venenosos a la oligarquía, culpando a los terratenientes de los males que padece El Salvador. Entienden que la élite se hizo del poder como consecuencia principalmente del analfabetismo de la mayoría de la población rural, que permitió que un pequeño grupo se apropiara de las tierras nacionales, convirtiéndose así en “latifundistas explotando tanto la tierra como a la clase obrera con salarios extremadamente bajos [...] relativamente ha sucedido lo mismo en el campo industrial. Socialmente hablando ha habido una profunda injusticia social”.<sup>78</sup> En términos políticos, el documento sostiene que la oligarquía dependía de su alianza con los militares para mantener la distribución desigual de la tierra, así como para reprimir a los trabajadores que luchaban por conquistar sus derechos. En términos similares, los escritores del sindicato

<sup>76</sup> US Embassy to Secretary of State, “196 Pezca Strike,” agosto de 1985, San Salvador, 10119, r072316z, núm. C05624766, case F-2013-10925, en Freedom of Information Act del US Department of State.

<sup>77</sup> La ortografía sugiere que José Luis Grande Preza no se involucró en la redacción del documento manuscrito. El documento se encontró en el archivo del SGTIPAC. Jorge Cáceres Prendes, “Estado, sociedad y política de un contexto de insurgencia popular: El Salvador 1980-1987”, en *Anuario de Estudios Centroamericanos*, vol. 14, núms. 1 y 2, 1988, p. 38.

<sup>78</sup> “Posición SGTIPAC frente a la realidad que vive actualmente el país como pueblo salvadoreño”, 1987 (Archivos del SGTIPAC).

identifican la reforma agraria de 1980 como un paso importante hacia la justicia redistributiva. En este punto del documento, los escritores incursionan en un terreno desconocido, que parece más bien una tierra de fantasía:

“[L]os que hicieron grandes inversiones para comprar armas para introducir las en el país, y usando sectores organizados en organizaciones clandestinas impulsaron la revolución con más auge violento; buscando con esto el golpe de estado que les permitiera yegar a poder” [sic].<sup>79</sup>

Los escritores del Sindicato Agua plantearon una alianza entre el FMLN y la oligarquía que le permitiría a la élite recuperar sus tierras. Ellos “instrumentalizaron a los dirigentes de la revolución para que éstos boicotearon las haciendas tomadas por la reforma agraria. Incendiaron cafetales, algodones, y dando fuego a cosechas recolectadas y dieron fuego a fábricas, instrumentalizando los movimientos sindicales, todo con el único fin de obstruir la marcha de la revolución”.<sup>80</sup> De hecho, en 1986 la guerrilla del FMLN había destruido más de 600 000 dólares de algodón en un ataque a la vecina hacienda “La Carrera”, que había sido expropiada al dueño de Pezca, Juan Wright, y convertida en una cooperativa.<sup>81</sup>

Es aquí donde los militantes del Sindicato Agua se identifican a sí mismos como los verdaderos revolucionarios. Presentan una formulación *sui generis* de anticomunismo, que destaca el concepto de clase social y no la traición a la patria. El planteamiento del Sindicato Agua también perfila una forma de discurso populista

<sup>79</sup> *Ibid.*, p. 2.

<sup>80</sup> *Ibid.*, p. 3. Ortografía corregida.

<sup>81</sup> Sánchez Ramos, *op. cit.*, p. 64.

que explica en parte el fuerte apoyo que recibió de los eventuales y de otros sectores de la población del Puerto.

Un populismo con sesgo de clase obrera salta a la vista en cada línea del texto entero, enfrentando a un bloque popular de campesinos y obreros contra la oligarquía aliada con sectores de militares. Al mismo tiempo, sin embargo, los activistas del sindicato transforman el discurso de los “dos demonios”, “las dos extremas” o “entre dos fuegos”. Este discurso de alcance continental sostuvo que la extrema izquierda y la extrema derecha eran culpables por igual de la violencia generalizada y los abusos masivos de los derechos humanos en las décadas de 1970 y 1980. En su versión local, la extrema izquierda y la extrema derecha confabulaban para impedir las reformas fundamentales —financieras y agrarias— que la junta respaldada por la Democracia Cristiana había promulgado y que el país reclamaba a gritos.

Aunque los escritores del sindicato no proporcionan evidencia empírica en apoyo a su argumento de una alianza entre la oligarquía y el FMLN, su insistencia amerita que se le preste atención precisamente porque se refiere a un espacio discursivo que los académicos y los activistas no han reconocido debidamente. Es una postura que parece absurda: la izquierda revolucionaria y la oligarquía estaban enfrascadas en un combate a muerte. Sin embargo, según los militantes del Sindicato Agua existía abundante evidencia de que la alianza entre ambas había arrancado con la oposición implacable y virulenta de la izquierda y la derecha hacia el gobierno democristiano. Sin duda, la hostilidad de los periódicos de derecha hacia la huelga de 1985 y su aparente simpatía por el SIP, fortalecieron la credibilidad del planteamiento. Es más, el apoyo abierto de Mena Lagos al SIP a pesar de (o según el Sindicato Agua, debido a) su identificación con la “derecha

recalcitrante” proporcionaba aún más pruebas sobre la alianza. El “patronalismo” —las acciones favorables a la empresa— de la dirigencia del SIP puso en duda todavía más la sinceridad de la izquierda. También resultó muy dañina la afirmación de Roberto D’Aubuisson en el sentido de que la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (en adelante UNTS) era más democrática que la Unión Nacional de Obreros y Campesinos (en adelante UNOC), la federación obrera duartista a la cual pertenecía el Sindicato Agua. Finalmente, el ataque guerrillero a la cooperativa fundada en lo que fue la hacienda de Wright a poca distancia del Puerto resultó ser una prueba contundente.<sup>82</sup> Según la perspectiva del Sindicato Agua, toda acción de sabotaje revolucionario contra la reforma agraria, el transporte o la producción industrial evidenciaba los vínculos entre el FMLN y la derecha. La formulación de una premisa clave sustentaba este planteamiento. Las reformas estructurales eran necesarias para que imperara la justicia social en el país, mismas que la izquierda había promovido desde tiempo atrás. Por lo tanto, su oposición declarada solamente se podría entender como una traición producto de una alianza oportunista con la oligarquía.

La izquierda percibía al gobierno de Duarte como su principal adversario. El FMLN alentaba la resistencia a las reformas estructurales, porque sospechaba su intención contrainsurgente y su implementación por la vía militar. El rechazo de la izquierda de las cooperativas se derivó de su oposición estratégica. Sin embargo, dicha oposición y sus desencuentros afines acarrearían unos costos altos. Centenares de miles de campesinos se unieron a las coopera-

<sup>82</sup> Ernesto Cruz, “Crónica del mes, marzo-abril”, en *Estudios Centroamericanos*, núm. 450, abril de 1986, p. 342.

tivas o esperaron recibir beneficios de la reforma agraria. Aunque mal administradas, a veces militarizadas y a menudo desfinanciadas, las cooperativas todavía se presentaban como una opción atractiva para la población sin tierra. El documento preparado por el Sindicato Agua mira con desdén a la oposición de izquierda pero, a la vez, calla sobre los aspectos contrainsurgentes de la reforma agraria junto con el papel de Estados Unidos en los asuntos internos del país. Una vez que se descarta del discurso la intervención política y militar de gran impacto de Estados Unidos, el manifiesto del sindicato se convierte en un llamado coherente a favor de los derechos obreros y la justicia redistributiva. Estos objetivos resultaban atractivos para las bases de ambos sindicatos del Puerto. No obstante, las relaciones de género cotidianas, “la movida” y la invectiva inspirada por la Guerra Fría, impidieron un entendimiento —ni hablemos de una alianza— entre la dirigencia de Tierra y Agua. Éste fue, sin duda alguna, un desencuentro fundamental que tuvo consecuencias locales devastadoras. Dos sindicatos compartían objetivos comunes de una vida digna para sus miembros, pero no pudieron unir sus fuerzas para salvar sus medios de vida.

La desindustrialización al estilo tropical que llegó eventualmente a Puerto El Triunfo fue un proceso complejo y contradictorio en el cual participaron las políticas de la Guerra Fría, unas relaciones de género hostiles, “la movida” y diversas formas de corrupción. Como veremos en el Capítulo 5, un fraude bancario de marca mayor perpetrado por los dueños de Pezca S. A., contribuyó de manera directa al colapso de la industria del camarón y al desempleo generalizado en el Puerto. Con todo, la amargura y la ira se descargan en los marineros y su sindicato; el fraude bancario amerita apenas algunas referencias en los recuerdos de los trabajadores de la empacadora. Este presagio de neoliberalismo —la

forma más cruda de financiarización de actividades previamente productivas— sigue escondido al fondo de la brecha que causó y simbolizó simultáneamente el inicio de las relaciones sociales del neoliberalismo, especialmente en lo que se refiere a la ruptura de los lazos de solidaridad. Después de la represión tremenda de 1980-1981, ese desacuerdo ocurrió con independencia de la represión violenta que sucedió en todo el país durante los años inmediatamente posteriores.<sup>85</sup>

Hoy en día, la amenaza de la violencia está presente en todo el Puerto. Ya no son los escuadrones de la muerte sino las pandillas de jóvenes que representan ese temor. Hasta hace muy poco, una lucha interna entre jóvenes subalternos sustituyó la lucha de los trabajadores. La pandilla Calle 18 y sus rivales de la pandilla MS-13 se han enfrentado a balazos con frecuencia por el control del territorio, recreando así de manera terriblemente distorsionada las divisiones que sufrió Puerto El Triunfo en la década de 1980. La derecha, los banqueros y los dueños causaron sus estragos, pero mayormente tras puertas de maderas finas o mediante cuentas bancarias fantasma y transferencias electrónicas indetectables. Hoy en día, los militares patrullan las calles ocasionalmente para proteger a los residentes del Puerto de la violencia pandilleril. Ovidio observa a esos soldados con profunda ambivalencia. El ejército había irrumpido en su vivienda en 1979, listos para matarlo a él y su familia. En 1981, rodearon su casa día y noche. La nueva presencia de los militares recrea una tragedia; no es una farsa en ningún sentido.

<sup>85</sup> El concepto de “acumulación por enajenación” de David Harvey también resulta útil para comprender este fenómeno global. Véase David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Nueva York, Oxford University Press, 2005.

## 5. LA EXTREMA DERECHA Y EL FRAUDE

Durante tres años, el gobierno de Reagan ha pretendido que no sabía que los escuadrones de la muerte y la carnicería de los militares son características intrínsecas del gobierno y las fuerzas armadas de El Salvador. Durante tres años, el gobierno ha conocido los nombres y el involucramiento de acaudalados exiliados salvadoreños que viven en Miami, Florida, quienes organizan, financian y dirigen los escuadrones de la muerte de la derecha.

ROBERT WHITE, Embajador estadounidense  
en El Salvador, 1980-1981.

El desarrollo geográfico desigual del neoliberalismo, su aplicación frecuentemente parcial y asimétrica de un Estado y formación social a otro, dan cuenta del carácter tentativo de las soluciones neoliberales y de las formas complejas en que to-

das las fuerzas políticas, las tradiciones históricas y los arreglos institucionales existentes le dieron forma al por qué y el cómo de los procesos de la neo-liberalización en la práctica.

DAVID HARVEY, *A Brief History of Neoliberalism*

Aun antes de su graduación del Menlo College en California en 1974, Alfredo Mena Lagos tomó parte activa en los negocios de su familia. En 1973, formaba parte de la junta directiva de la Pesquera del Pacífico, una de las empresas pesqueras vinculadas a Pezca, de la cual su padre era presidente. El año siguiente volvió a El Salvador y siguió trabajando con la compañía. También desarrolló amistades con figuras de la derecha política, incluyendo al famoso general José Alberto Medrano, el fundador de la Organización Democrática Nacionalista (en adelante ORDEN), una agrupación que, hacia fines de la década de 1970, se había convertido en una organización paramilitar de 100 000 miembros con presencia en las zonas rurales.

En la medida en que la revolución sandinista cobraba impulso, Mena Lagos, junto con sus compañeros de derechas, temían cada vez más un triunfo de la izquierda revolucionaria en su propio país. También reconoció la corrupción e ineficiencia del régimen militar. Aunó esfuerzos con algunos amigos, incluyendo al futuro presidente Armando Calderón Sol, para fundar el Movimiento Nacionalista Salvadoreño (en adelante MNS). Esta agrupación política planeaba efectuar un golpe de estado para instalar un gobierno que se haría cargo de la izquierda de manera implacable y eficiente. Por esos tiempos, Roberto D'Aubuisson, el segundo al mando de la oficina de inteligencia militar, la Agencia Nacional de Seguridad (en adelante ANSESAL), se dirigió al presidente, el general Romero, para presentarle un plan que no era sino un

golpe de estado para presionar a los militares para que asumieran una postura todavía más dura contra el movimiento obrero y la izquierda. Cuando el general Romero lo rechazó, D'Aubuisson se dirigió a Mena Lagos. Tal como recuerda éste:

Nosotros estábamos muy molestos con los militares por su incapacidad para contener la subversión a la cual mirábamos envalentonarse día con día. Por eso, cuando D'Aubuisson vino a mi casa a manifestarme su desacuerdo con sus superiores y su afinidad con los planteamientos de nuestro movimiento político, yo no sentí confianza en él.<sup>1</sup>

Mena Lagos le pidió al mayor D'Aubuisson que presentara pruebas de su lealtad.<sup>2</sup> Después del golpe del 15 de octubre, D'Aubuisson le llevó las pruebas: un expediente con documentos secretos que él y su socio, Fernando “El Negro” Sagrera, habían sustraído del archivo de ANSESAL. Esos documentos eran en gran medida informes sobre “subversivos” y anti-derechistas. Ambos, Mena Lagos y D'Aubuisson, estaban persuadidos de las inclinaciones izquierdistas del nuevo gobierno y se convencieron de la necesidad de impulsar medidas decisivas. El MNS operó en al menos dos frentes: el político y el militar. El blanco más famoso de D'Aubuisson fue monseñor Óscar Romero, quien murió asesinado el 24 de marzo de 1980.<sup>3</sup> Para la derecha, el arzobispo, “la voz

<sup>1</sup> Geovani Galeas, “Roberto D'Aubuisson, un hombre derrotado”, en *El Salvador Times*, 13 de octubre, 2016.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Véase Matt Eisenbrandt, *Assassination of a Saint: The Plot to Murder Óscar Romero and the Quest to Bring His Killers to Justice*, Berkeley, University of California Press, 2017, p. 158. Aunque los informes del gobierno de Estados Unidos aducen que Mena Lagos tuvo vínculos con escuadrones de la muerte, no existen pruebas de que haya estado involucrado en el asesinato de Romero. *Loc. cit.*

de los sin voz” y enemigo implacable de la represión violenta, era un comunista peligroso. El MNS (que se convirtió posteriormente en el Frente Amplio Nacional, en adelante FAN) y algunos oficiales del ejército conspiraron para derrocar a la Junta Revolucionaria de Gobierno (en adelante JRG). En mayo de 1980, el coronel Adolfo Majano, un integrante de la segunda Junta Revolucionaria (integrada por Demócratas Cristianos y militares) ordenó un allanamiento militar de la finca San Luis (propiedad de la familia Guirola) donde D’Aubuisson y algunos 25 oficiales de alta y de baja estaban reunidos y festejando. El allanamiento descubrió documentos que vinculaban —aunque sin pruebas contundentes— a D’Aubuisson y Álvaro Saravia al asesinato de Romero. El nombre de Mena Lagos también apareció junto con otros que aparentemente estaban conectados con la conspiración.<sup>4</sup> También descubrieron pruebas de un complot para derrocar a la JRG. Aunque las detenciones pueden haber debilitado a la extrema derecha, hasta los jefes militares moderados estaban conternados por la acción ordenada por Majano contra oficiales de alta jerarquía.<sup>5</sup> Junto con algunos elementos clave dentro de la fuerza

<sup>4</sup> En algún momento, Robert White sugirió que existía una relación entre el diario de Álvaro Saravia, quien definitivamente estuvo vinculado al complot, y D’Aubuisson porque el diario estaba redactado en papel membrete de Mariscos Tazumal, una empresa fundada por D’Aubuisson y Fernando “El Negro” Sagraera. Y las copias muestran una imagen de las ruinas del Tazumal, un sitio arqueológico. Tal como señaló un funcionario estadounidense más tarde, sin embargo, la empresa fue fundada en 1982 y esa aseveración parece cierta. Existe poca duda que, a pesar del error, D’Aubuisson estuvo vinculado al diario y al complot. Por supuesto, puede ser que le gustara el simbolismo patriótico del Tazumal.

<sup>5</sup> José Napoleón Duarte, *Duarte: My Story*, Nueva York, Putnam, 1986, p. 126; Eisenbrandt, *op. cit.*, p. 6.

armada, la extrema derecha se movilizó eficazmente contra las detenciones y dentro de una semana se habían retirado los cargos. D'Aubuisson, Mena Lagos y otros miembros del FAN se trasladaron a Guatemala. Dentro de dos años, Mena Lagos había vuelto a El Salvador.

Aunque Mena Lagos no expresa remordimiento por su participación en el FAN, se fue apartando gradualmente de la actividad política por completo. En 1982, la junta directiva de Pezca S. A., lo nombró presidente de la empresa. Por lo tanto, se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes de una compañía principal en la historia del país.

Sin que pueda achacársele a Mena Lagos, durante su gestión la compañía sufrió lo que David Harvey ha denominado “acumulación por enajenación”. Harvey afirma que el principal logro del neoliberalismo ha sido la redistribución de la riqueza hacia las élites y que la “enajenación” ha sido el “principal mecanismo” para alcanzar ese objetivo. Cita cuatro de sus características claves: la privatización y la mercantilización; la financiarización; el manejo y la manipulación de las crisis; y la redistribución bajo el amparo del Estado. Por lo que respecta a la financiarización, Harvey dice: “La desregulación permitió que el sistema financiero se convirtiera en uno de los principales centros de actividad redistributiva mediante la especulación, la depredación, el fraude y el robo”.<sup>6</sup> Para Harvey, “La más devastadora de todas [las prácticas ha sido] el uso del sistema crediticio como un medio radical de acumulación por enajenación”.<sup>7</sup> Este capítulo analizará esta sorprendente

<sup>6</sup> David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Nueva York, Oxford University Press, 2005, p. 161.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 159.

pero prácticamente ilegible forma de acumulación en Puerto El Triunfo, un componente clave del triunfo del neoliberalismo en el Puerto y más allá.<sup>8</sup> A la vez, continuaremos nuestra discusión sobre los dueños de la compañía camaronera que perfilamos en la introducción de este libro.

A pesar de la oposición de la derecha extrema, a comienzos de marzo de 1980, la segunda JRG llevó a cabo reformas agrarias y financieras que afectaron directamente a los dueños de las camaroneras y las haciendas de algodón, muchos de ellos miembros de la oligarquía y emparentados entre sí. Juan Wright Alcaine, el principal accionista de Pezca, también era el dueño de La Carrera, una plantación de algodón de 2 800 hectáreas de extensión, la más grande del país, cerca de Puerto El Triunfo. La familia Wright, originalmente de San Francisco, California, se había emparentado con la familia de Sola, una de las originales “14 familias”. Roberto Daglio, un miembro igualmente reconocido de la vieja oligarquía, era dueño de Atarraya S. A., así como de importantes fincas de café. La familia oligárquica de Rafael Guirola era propietaria de Mariscos de El Salvador y San Rafael (en La Unión). Robert Mathies Regalado, otro importante accionista de Pezca, graduado de la Universidad de Georgetown, también pertenecía a una familia oligárquica de cafetaleros. Las reformas de la tierra y la banca en marzo de 1980 afectaron directamente a estas cinco familias; La Carrera, la hacienda algodонера, se convirtió en una cooperativa de campesinos. Todas las familias apoyaron las expresiones políticas de derecha extrema. En 1971, un grupo guerrillero incipiente, el Ejército Revolucionario del Pueblo (en adelante ERP),

<sup>8</sup> Véase la introducción a Carlota McAllister y Diane M. Nelson [eds.], *War by Other Means: Aftermath in Post-Genocide Guatemala*, Durham, NC, Duke University Press, 2013.

había dado muerte a Ernesto Regalado Dueñas cuando intentó secuestrarlo. Como cabía esperar, su sobrino, Roberto Mathies Regalado, de 46 años de edad en ese momento, apoyó con entusiasmo al FAN y sus operaciones paramilitares. Como dueño de una agencia de automóviles Volkswagen, le donó un carro Passat al grupo de D'Aubuisson; ese automóvil fue el que trasladó al asesino a la iglesia donde monseñor Romero estaba celebrando la misa.<sup>9</sup> Después de las reformas, las familias Wright y Daglio se radicaron en Miami debido a la amenaza de los secuestros, según dijeron. Miami también ofreció un refugio seguro para las familias de Sola, Mathies Regalado y otras de la élite. Formaron parte del núcleo de lo que eventualmente sería el partido Alianza Republicana Nacionalista (en adelante ARENA).

En enero de 1981, un cable enviado por la embajada de Estados Unidos en El Salvador al secretario de Estado se refirió a una entrevista con un abogado exiliado, quien informó sobre la existencia de los Seis de Miami —un grupo de millonarios que brindaba apoyo directo a los escuadrones de la muerte y amenazaba y conminaba a otros millonarios salvadoreños para que apoyaran la causa de la derecha. En términos específicos, prometieron ejecutar a cualquier persona que colaborara en absoluto con la Junta Revolucionaria e intimidaron a aquellos que mantuvieron operando sus negocios. Pretendieron desestabilizar a la JRG y, de ser necesario, eliminar a “centenares de miles de salvadoreños bajo sospecha de simpatías liberales o izquierdistas”.<sup>10</sup> El cable afirmó que los “[Seis de Miami] organizan, financian y dirigen a los escuadrones

<sup>9</sup> Eisenbrandt, *op. cit.*, p. 86.

<sup>10</sup> US Embassy to Secretary of State, “Millionaires Murder Inc.?” cable, 6 de enero, 1981, “El Salvador: The Making of U.S. Policy, 1977-1984”, ES01151, p. 3, Collection DNSA, George Washington University, Washington, DC.

de la muerte por medio de su agente, Roberto D'Aubuisson".<sup>11</sup> De acuerdo con la fuente de la embajada, durante el año previo los seis exiliados a menudo citaban a empresarios salvadoreños en Miami, los sentaban en una mesa larga y después los amenazaban de muerte o con secuestro si seguían colaborando con el gobierno.<sup>12</sup> Roberto Daglio era uno del grupo de los Seis. El dueño de Atrarraya tenía vínculos personales y de negocio con Juan Wright. El informe también identificó a los inversionistas en Atrarraya, Juan y Ricardo Salaverría, como integrantes del grupo de los Seis.

De acuerdo con el testimonio, en 1984, del antiguo embajador, Robert White, frente a un subcomité de relaciones exteriores de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, "[Durante] los últimos tres años, el gobierno de Reagan ha ocultado los hechos" de los Seis de Miami.<sup>13</sup> White guardaba una particular animadversión hacia el gobierno de Reagan porque el secretario de Estado, Alexander Haig, no sólo lo había despedido como embajador, sino que también lo expulsó del servicio exterior porque no quiso absolver al gobierno salvadoreño por no investigar la violación y el asesinato de tres monjas estadounidenses y de una colaboradora laica en diciembre de 1980. La excusa que esgrimió el gobierno de Reagan por no investigar a los Seis de Miami era que la embajada había perdido el contacto con los informantes claves, quienes habían proporcionado la información sobre las personas que financiaban a los escuadrones de la muerte.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 2.

<sup>12</sup> Joel Brinkley, "Ex-Envoy Accuses 6 Salvadoran Exiles", en *The New York Times*, 3 de febrero, 1984.

<sup>13</sup> *Loc. cit.*

<sup>14</sup> *The New York Times*, 7 de febrero, 1984.

Bajo una fuerte presión del Congreso, la CIA y el Departamento de Estado aparentemente comenzaron una investigación conjunta de los escuadrones de la muerte en enero de 1983. En noviembre, a solicitud del Departamento de Estado, el FBI comenzó a investigar las conexiones de los de Miami. La embajada en San Salvador proporcionó al FBI una lista ampliada de 29 individuos residentes en Miami que suplían de fondos a los escuadrones de la muerte. Cuatro de los 29 supuestos financieros de los escuadrones de la muerte tenían importantes vínculos con la industria camaronera: Roberto Daglio, Alfredo Mena Lagos, Roberto Mathies Regalado y Juan T. Wright.<sup>15</sup> Sin embargo, los reportajes de los periódicos no se refirieron a la lista ampliada y solamente mencionaron a los Seis de Miami. Todos esos individuos rechazaron las acusaciones. Daglio, por ejemplo, sugirió que las acusaciones no eran más que ataques políticos velados contra el presidente Reagan. El hecho de que White había identificado erróneamente a uno de los seis no le favoreció en lo referente a su credibilidad.<sup>16</sup>

La investigación que realizó el FBI no fue exhaustiva.<sup>17</sup> Sus agentes entrevistaron a 33 personas, incluyendo a 13 empleados

<sup>15</sup> Federal Bureau of Investigation, “Furnishing Funds and Weapons to Salvadoran Death”, cable, 9 de diciembre, 1983, EL01373, “El Salvador: War, Peace, and Human Rights, 1980-1994”, Collection DNSA, p. 2. Como respuesta de los Seis de Miami a las acusaciones de White, Julio Salaverría afirmó que el antiguo embajador tiene que haberse estado refiriendo a otra persona y que su hermano Juan Ricardo había fallecido en un accidente automovilístico en 1982. Tres personas con apellido de Salaverría (incluyendo uno cuyo nombre tiene que estar equivocado) aparecen en la lista de 29. Véase la nota de AP, “Salvadoran Rebuts Charge of Death-Squad Link”, en *The New York Times*, 7 de febrero, 1984.

<sup>16</sup> Eisenbrandt, *op. cit.*, p. 89.

<sup>17</sup> Federal Bureau of Investigation, “Unknown Subjects; Furnishing Funds and Weapons to Salvadoran Death Squads in El Salvador”, cable, 15 de mayo,

del Departamento de Estado y a dos oficiales del ejército de Estados Unidos. El FBI solamente entrevistó a 3 de los 29 salvadoreños citados por financiar a los escuadrones de la muerte. Su documento —la mayoría de los informes sobre entrevistas con salvadoreños fueron censurados en parte— concluyó: “Ninguna de las diversas personas entrevistadas pudo proporcionar pruebas o conocimientos de primera mano de personas en los Estados Unidos quienes proporcionan algún tipo de apoyo o dirección a los escuadrones de la muerte salvadoreños”.<sup>18</sup> No debe sorprender que, en vista de esta conclusión, no se presentaron cargos.

Varios factores probablemente incidieron en la investigación. En primer lugar, dada la apatía previa del FBI con relación a las actividades de la extrema derecha, el gobierno Reagan probablemente no haya expresado mucho interés. En segundo lugar, el FBI estaba dedicando bastantes recursos para investigar y hostigar a los activistas estadounidenses de la solidaridad, quienes se oponían a las políticas de Estados Unidos en Centroamérica, especialmente aquellos que pertenecían al Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (en adelante CISPES). El embajador White recaló que el gobierno estadounidense no dio a conocer documentos que implicaban seriamente a D’Aubuisson en el asesinato del arzobispo Romero, debido a su condición en ese momento de presidente de la Asamblea Constituyente de 1982 a 1983. En tercer lugar, habría sido sumamente difícil separar el financiamiento legítimo al partido ARENA (fundado en 1981) del que recibían los escuadrones de la muerte conectados, por tenue que haya sido la vinculación,

---

1984, EL01374, “El Salvador: War, Peace, and Human Rights, 1980-1994”, Collection DNSA, p. 24.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 4.

al partido. Finalmente, la ola de asesinatos desatada por los escuadrones de la muerte había disminuido significativamente hacia fines de 1983 cuando el FBI comenzó sus investigaciones. Por lo tanto, los pocos testigos salvadoreños que entrevistó el FBI puede que hayan dicho la verdad cuando utilizaron el presente indicativo para expresar su ignorancia sobre los escuadrones de la muerte.

### UN HEDOR DE CORRUPCIÓN

El cable del FBI que contenía la lista de 29 individuos también daba a conocer que el 23 de noviembre de 1983, “se le había otorgado una visa a Roberto D’Aubuisson para visitar los Estados Unidos. D’Aubuisson pensaba visitar a Rafael Escalón durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias y fines de semana. Esta información fue proporcionada debido a las versiones de que D’Aubuisson estaba estrechamente vinculado a los escuadrones de la muerte de la derecha en El Salvador”.<sup>19</sup> El hecho de que D’Aubuisson haya ocupado un puesto de gobierno tan importante, seguramente, persuadió a las autoridades estadounidenses a no atacarlo públicamente y probablemente dio lugar al uso curioso de “versiones”. El documento también señala la amistad entre Rafael Escalón y el jefe de los escuadrones de la muerte, fundador del partido ARENA y presidente de la Asamblea Constituyente.

Escalón, descendiente de una familia oligárquica otrora prominente, había sido propietario y administrador de fincas de café, pero no era acaudalado según los estándares de la élite. A comienzos de la década de 1980, se convirtió en el gerente general de Ata-

<sup>19</sup> De acuerdo con un informante, D’Aubuisson, de hecho, se hospedó donde Escalón durante sus visitas a Miami. *Ibid.*, p. 3.

rraya S. A. Su matrimonio con la hija de Juan Wright apuntaló su prestigio social y, probablemente, su solvencia económica. Hacia 1984, a la edad de 42 años, viajaba de ida y vuelta entre Miami, San Salvador y Puerto El Triunfo. El informe que preparó el FBI sobre su entrevista con Escalón es bastante revelador, a pesar de la supresión de frases clave. Defendió fervorosamente a alguien —a Bobby Daglio, lo más seguro— de las acusaciones de financiar a los escuadrones de la muerte. Escalón había trabajado anteriormente en las empresas cafetaleras de Daglio. Lo había conocido desde hacía 25 años y “conservaban una muy estrecha amistad”. En apoyo a su amigo, Escalón también expresó dudas sobre la existencia de los escuadrones de la muerte porque “el odio entre las clases que ahora prevalece ha provocado las muertes violentas al azar sin que exista una organización que las dirija [...] [tachado] cree que los comunistas tanto en El Salvador como en todo el mundo son los que han dado origen a la idea de los escuadrones de la muerte”.<sup>20</sup>

Escalón agregó que él viajaba entre “El Salvador y Estados Unidos cada dos semanas aproximadamente específicamente por negocios [...] tuvo que volver a El Salvador para enfrentarse a los individuos que están robando [tachado] y provocándole fuertes pérdidas a la compañía”.<sup>21</sup> Cambiando de tema sobre la difícil situación en el Puerto, Escalón se refirió a su apoyo decidido a la campaña presidencial de D’Aubuisson, asegurándole al FBI que su apoyo solamente se concretaba en El Salvador. La entrevista se realizó poco antes de la derrota electoral en segunda vuelta del líder de ARENA.

<sup>20</sup> La referencia al nombre de Escalón como el sujeto de la entrevista fue claramente un descuido de los censores porque su nombre aparece tachado en el texto propiamente. *Ibid.*, p. 66.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 67.

Además de Escalón, D'Aubuisson mantuvo fuertes vínculos con Bobby Daglio. Esos vínculos se fortalecieron en 1982. La rama latinoamericana de la Liga Anticomunista Mundial, con sede en Guadalajara, México, ayudó a financiar la compra que hizo D'Aubuisson de ocho barcos camaroneros y la creación de Mariscos Tazumal S. A.<sup>22</sup> Daglio aparentemente también ayudó a financiar la compra. Atrarraya, propiedad de Daglio y manejada por Escalón, procesaba el camarón. Ambas compañías tenían oficinas en el mismo edificio en San Salvador. El amigo de D'Aubuisson, "El Negro" Sagrera, con vínculos similares a la extrema derecha, también trabajó en Mariscos Tazumal durante toda la década de 1980.

Escalón administró Mariscos Tazumal hasta que el teniente Carlos "Sandi" Zacapa asumió su dirección en 1984.<sup>23</sup> Trabajaron juntos muy de cerca. Sandi Zacapa era el ejecutivo del regimiento de caballería del ejército. De 1982 a 1986, Zacapa y su tío, el coronel Joaquín Zacapa, siguieron fomentando las actividades de los escuadrones de la muerte pero, simultáneamente, dirigían una banda de secuestradores. Se disfrazaban como guerrilleros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (en adelante FMLN) y secuestraban y extorsionaban a salvadoreños acaudalados, a menudo compañeros del partido ARENA.<sup>24</sup> En 1988, Maris-

<sup>22</sup> *Diario Oficial*, 15 de marzo, 1983. Álvaro Marín, el representante legal de Daglio, recibió una licencia de pesca para Mariscos Tazumal el 9 de marzo de 1985. Solicitó la licencia el 26 de noviembre de 1982.

<sup>23</sup> *Diario Oficial*, 17 de mayo, 1984, p. 40. Zacapa figura como el apoderado general de Mariscos Tazumal.

<sup>24</sup> La amenaza consistía en que los militares no parecían dispuestos a actuar contra los miembros de la Tandona (la promoción de la Escuela Militar de 1966). US Embassy to Secretary of State, "Kidnapping Case Threatens Duarte Government," cable, 2 de abril de 1986, EL00907, "El Salvador: War, Peace, and Human Rights, 1980-1994", Collection DNSA, p. 4.

cos Tazumal apareció brevemente en las noticias: su membrete figuró en un fax comprometedor que buscaba frenar la extradición de Saravia desde Miami donde estaba detenido. Supuestamente, D'Aubuisson y otros temían un juicio en El Salvador que pudiese revelar información sobre el asesinato de Romero que no querían que se diera a conocer. El embajador estadounidense, William Walker, envió el siguiente comentario a sus superiores en el Departamento de Estado: “[el fax] claramente vincula la defensa de Saravia con todo un mundo de golpistas, jefes de escuadrones de la muerte, secuestradores, ladrones de bebés, lanzabombas desquiciados, ladrones de automóviles y una variedad de otros criminales”.<sup>25</sup>

Los vínculos de la industria camaronera con la derecha extrema hasta le dieron empleo a Álvaro Saravia como jefe de seguridad en Atarraya. Saravia había trabajado de cerca con D'Aubuisson y había participado en el complot para asesinar a monseñor Romero.<sup>26</sup> Durante el breve tiempo que pasó en Atarraya, pudo mejorar su solvencia financiera porque Daglio le permitió vivir en su casa (diseñada como un castillo) en San Salvador. Desafortunadamente, Saravia era propenso al alcohol, lo que eventualmente le costó perder el empleo y su familia.

A pesar de su importante presencia en la política salvadoreña, los militantes de la extrema derecha tuvieron poco impacto en la sociedad del Puerto. Los militares, sin embargo, sí ejercieron una influencia considerable, especialmente en Atarraya, donde el SIP

<sup>25</sup> US Embassy to Secretary of State, “The Saravia Extradition and the D'Aubuisson Mafia,” cable, 3 de octubre, 1988, EL00969, “El Salvador: War, Peace, and Human Rights, 1980-1994”, Collection DNSA.

<sup>26</sup> Carlos Dada, “Así matamos a monseñor Romero”, en *El Faro*, 22 de marzo, 2010.

operaba dentro de los parámetros impuestos por los socios pasivos de los dueños de la derecha.<sup>27</sup> Y, tal como se mencionó anteriormente, varios militares de alto rango estaban muy involucrados en “la movida”.

D'Aubuisson, Sagrera y Saravia llegaron al Puerto después de la ola de amenazas y asesinatos de los escuadrones de la muerte. Es más, no pasaban mucho tiempo en el Puerto y, por supuesto, la gente los veía con recelo. Ricardo Jovel, el dirigente del SIP, recuerda un encuentro curioso.

Estaba trabajando en un problema de Pezca cuando alguien vino y me dijo que el mayor D'Aubuisson quería reunirse conmigo. Me tomé mi tiempo ya que tenía mucho trabajo que hacer con nuestros afiliados. Cuando terminé fui a la piscina de la empresa donde él se encontraba con un trago en sus manos. El Negro Sagrera estaba parado al lado de la piscina con una metralleta en las manos.

—Así que vos sos Ricardo Jovel [...] porque no querías venir a reunirme conmigo?

—Bueno tenía mucho trabajo que terminar.

—He escuchado mucho sobre vos. La gente habla bien y quiero conocerte. ¿Querés un trago?

—No señor, le respondí no tomo.

—Te gustan las mujeres.

—Sí claro.

—Bueno déjame ver que puedo hacer.

—Gracias pero todavía tengo mucho trabajo que hacer.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Véase Joel Millman, “El Salvador’s Army: A Force unto Itself”, en *The New York Times Magazine*, 10 de diciembre, 1989. También hace referencia a la práctica de larga data de las empresas camaroneras de entregar dineros a los oficiales del ejército a cambio de “protección”.

<sup>28</sup> Ricardo Jovel, entrevista con el autor, San Salvador, 2014.

Este intercambio revela poco excepto la forma mundana en que D'Aubuisson ejercía el poder. No jugaba un papel activo en Mariscos Tazumal o en Pezca. No obstante, quería que Jovel supiera al menos que estaba siendo vigilado. Quizá D'Aubuisson también le estaba recordando a Jovel el poder que manejaba, dejando en claro la distinción entre su papel a comienzos de la década de 1980 cuando fácilmente pudo haber mandado matar a Jovel por trabajar con la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (en adelante FENASTRAS) y su papel actual como político destacado y hombre de negocios. O quizá insinuaba ambos. Su ofrecimiento de conseguirle mujeres no debe entenderse como intento de soborno, sino que se enmarca más bien en el lenguaje común del machismo y del estatus de las mujeres como prebendas que pueden ser otorgadas.

No está claro del todo si Mariscos Tazumal financió a los paramilitares y/o las actividades políticas de ARENA o si fue simplemente un suplemento de los ingresos de D'Aubuisson, Sagrera y Zacapa. Algunos sugieren que pueden haberse dedicado al tráfico de cocaína. Por cierto, la relación entre la política de las derechas y la actividad social y económica en el Puerto no es muy clara. Mena Lagos, el presidente de Pezca entre 1982 y 1985, se había dedicado intensamente a la política y había trabajado de cerca con D'Aubuisson. A pesar de su identificación política de derecha, no se comportó de manera particularmente autoritaria en sus relaciones con los trabajadores en Puerto El Triunfo. Tal como se explicó en el Capítulo 4, Mena Lagos prefería relacionarse mucho más con la dirigencia de izquierdas del SIP que con un SGTIPAC afiliado a la Democracia Cristiana. A pesar de sus diferencias polí-

ticas, las bases del SIP lo recuerdan con cierto cariño como un jefe honesto y razonable.<sup>29</sup>

Rafael “Lito” Escalón también concuerda con este modelo de gerencia semibenigna. A pesar de sus vínculos con la extrema derecha, no era un gerente general particularmente autocrático.<sup>30</sup> Sin embargo, tal como se aprecia en el informe del FBI, al igual que Mena Lagos se mostró muy preocupado por “la movida”. En respuesta aparentemente a la práctica de ventas ilegales de camarón, Escalón promovió un nuevo sistema mediante el cual Atarraya alquilaba los barcos camaroneros directamente a los capitanes, quienes recibían un adelanto de la empresa para todos sus gastos. Los capitanes entonces le vendían el producto a la empresa a precios de mercado, recuperando así el alquiler y los gastos anticipados. Con semejante sistema, había menos incentivo para vender la captura en alta mar en vista de que el interés propio de los capitanes se oponía a “la movida”. Una ventaja adicional para la empresa fue que el nuevo sistema debilitaría gravemente al sindicato porque el capitán se convertía en el empleador y la tripulación de cinco marineros ya no podría operar como un sindicato. En el caso de Atarraya, el Sindicato Tierra parece haber aceptado este arreglo sin mayor oposición debido, en parte, a que parecía garantizar más producción aun cuando se perdieran afiliados al sindicato entre los marineros.

<sup>29</sup> En términos similares, a pesar de que la empresa pertenecía a Bobby Daglio y de la presencia breve de Saravia, el equipo gerencial de Atarraya no manifestó comportamientos particularmente represivos.

<sup>30</sup> Sin embargo, Rolando Franco, un dirigente del SIP en la década de 1980, recuerda que un residente del Puerto con buenas conexiones le informó que Escalón había puesto un precio sobre su cabeza.

## EL MAYOR FRAUDE DE LA HISTORIA

En marzo de 1985, Rafael Escalón tomó una decisión crucial que afectó no solamente su vida sino también el futuro de la industria camaronera. Durante los primeros días de la huelga del Sindicato Agua, Escalón, todavía gerente general de Atarraya, concertó un negocio con su suegro, Juan Wright, el principal accionista de Pezca S. A., para defraudar al Banco Agrícola Comercial (en adelante BAC) por más de 20 millones de dólares. Hicieron el trato con Rafael Tomás Carbonell, presidente del banco entonces nacionalizado, para conseguir los préstamos. En términos políticos, Carbonell y Escalón estaban en polos opuestos, ya que el primero estaba vinculado con el gobierno de Duarte, pero ambos identificaron una fabulosa oportunidad de negocio.<sup>51</sup>

¿Cuáles fueron las condiciones que posibilitaron la jugada atrevida de Escalón? Es difícil imaginarse que Escalón haya iniciado negocios con Sandi Zacapa sin estar al tanto de sus actividades criminales, y es igualmente difícil imaginarse que dicha asociación no haya afectado su integridad moral. La idea de apropiarse de la más grande compañía camaronera en Centroamérica le llamó la atención, pero el esfuerzo que suponía seguramente era abrumador. Tal como se mencionó, Escalón se encontró sumamente frustrado por las ventas ilegales de camarón en alta mar y no estaba seguro de poder controlarlas en Pezca. Es más, probablemente compartía la apreciación extremadamente negativa de Mena Lagos hacia el dirigente del Sindicato Agua, Mauricio Benítez (y su equilibrio mental) y no estaba seguro de cómo tratarlo, en vista de sus aliados

<sup>51</sup> Carbonell era cuñado de Antonio Morales Ehrlich, un político importante de la Democracia Cristiana y alcalde de San Salvador (1974-1976 y 1985-1988).

democristianos en altos puestos del gobierno. Al apoderarse de Pezca y defraudar al banco, Escalón podría potencialmente apropiarse de un botín considerable y salirse con la suya. Podría manejar una empresa importante y alcanzar un arreglo con los marineros mientras desviaba millones hacia cuentas bancarias privadas.

La política también configuró el fraude. Tal como se mencionó previamente en este capítulo, ambos Wright y Escalón estaban profundamente involucrados en el partido derechista ARENA y estrechamente vinculados con el sector agro-financiero de la oligarquía. Se opusieron enconadamente a las reformas estructurales promovidas por Duarte y los militares en 1980, incluyendo la nacionalización de la banca y la reforma agraria que afectó a todos los dueños de las compañías camaroneras. Por cierto, un muy pequeño grupo de empresarios cayó en mora —por un total de más 150 millones de dólares, lo que representaba un 243% del total del capital y las reservas bancarias de las empresas.<sup>52</sup> Existen pruebas anecdóticas que sugieren que algunos de estos “deudores” se negaron a reembolsar sus préstamos como una forma de venganza política, lo cual debilitó uno de los pilares del programa de gobierno de Duarte.<sup>53</sup>

Aunque las operaciones financieras específicas entre Carbonell y Escalón no se conocen claramente, el presidente del BAC aprobó de manera unilateral unos préstamos entre marzo y noviembre de 1985 por un total de 50 millones de colones (más de 10 millones

<sup>52</sup> “El sistema financiero de El Salvador: análisis y perspectivas”, en *Cuadernos de Investigación*, San Salvador, Centro de Investigaciones Tecnológicas y Científicas (CENITEC), mayo de 1989.

<sup>53</sup> La licenciada Ivette Bará recuerda que los funcionarios del banco eran amenazados con violencia por la extrema derecha cuando insistían en la amortización de los préstamos. Ivette Bará, comunicación con el autor, 2017.

de dólares en ese entonces) a 13 empresas ficticias. Posteriormente, el BAC otorgó préstamos a cinco empresas pesqueras subsidiarias de Pezca en condiciones similares. En octubre de 1985, el banco otorgó un préstamo adicional por 5 millones de colones a Pezca, para entonces bajo control de Escalón. Hacia fines de ese año, el BAC había prestado 87 millones de colones (aproximadamente 16 millones de dólares al cambio de entonces) a empresas en las cuales Escalón tenía un papel importante. En última instancia, Escalón y sus compinches estafaron al banco por aproximadamente 140 millones de colones.<sup>34</sup> Carbonell aprobaba los préstamos de manera unilateral el mismo día de haberse presentado la solicitud (o al siguiente), violando así las normas bancarias nacionales prescritas. Con independencia de otros cargos, la contravención de Carbonell nunca se puso en duda y terminaría siendo acusado de “un fraude contra la economía pública”. Abandonó el país tan pronto el BAC lo despidió en mayo de 1987.

El fraude fue planificado meticulosamente. Escalón a menudo utilizaba a contadores u otros empleados de bajo rango que se hacían pasar como dueños al firmar las solicitudes de préstamo. A veces, les decía que no podía firmar debido a “medidas de seguridad”, una excusa que parecía válida en tiempos de guerra.<sup>35</sup> En

<sup>34</sup> La información sobre este caso ha sido entresacada de varios miles de hojas de informes de una investigación judicial, que se encuentran en los archivos del Juzgado Segundo de lo Penal. Véase también *Los Angeles Times*, 26 de julio, 1991. Al cambio oficial en 1985, los préstamos totalizaban 56 millones de dólares y al cambio oficial en 1986 el total habría sido de 28 millones de dólares. Durante el siguiente año, estas corporaciones, bajo la dirección nominal de empleados de bajo nivel, consiguieron préstamos del BAC por un total de alrededor de 140 millones de colones.

<sup>35</sup> Testimonio de Víctor Pineda, Juzgado Segundo de lo Penal, Corte Suprema de Justicia, San Salvador, abril de 1989, Pieza 53, p. 3.

un caso, le prometió a un empleado un 10% de las utilidades que, por supuesto, nunca se concretarían. En otro caso, persuadió a un corredor de seguros que había manejado la cuenta de Atrarraya por mucho tiempo para que firmara la solicitud de préstamo de una de las empresas ficticias. Escalón se comunicó con el corredor y le insinuó que necesitaría pólizas para nuevos barcos camaroneros. El corredor firmó haciéndose pasar como director de la compañía, porque supuso que el favor le permitiría ganarse el contrato de seguros de los barcos y que su firma “no le comprometía en nada”. Luego, Escalón le informó al corredor ingenuo que había comprado una compañía de seguros y que no podría darle el contrato en cuestión.<sup>36</sup>

Para darle apariencia de legitimidad a las nuevas empresas, Escalón presentaba fotocopias de cheques por 100 000 colones que, supuestamente, representaban su capital social. Él y sus cómplices no siempre colocaban los dineros en las empresas o cuando lo hacían era para retirarlos inmediatamente y depositarlos en las cuentas de Escalón. Después de recibir las millonadas en préstamos, cambiaba los colones en el mercado negro por dólares. En un caso, convirtió un préstamo de 5 millones de colones en 800 000 dólares que terminaron, supuestamente, en su cuenta bancaria en Miami.

En al menos una oportunidad, Escalón se valió de Juan Wright Alcaine para conseguir una firma de una solicitud de préstamo. Por lo demás, Wright se mantuvo al margen de cualquier vínculo con la transacción. En agosto de 1985, Wright llamó por teléfono a Margarita Najarro de Rivera, quien había trabajado para su fa-

<sup>36</sup> Testimonio de José Roberto Imberton, Juzgado Segundo de lo Penal, 1989, Pieza 53, p. 7263.

milia desde 1955. Cuando Wright se trasladó a Miami en marzo de 1980, Najarro de Rivera quedó al frente de sus empresas como representante legal.<sup>37</sup> Desde Miami, le informó que Rafael Escalón llegaría a su oficina. Cuatro días más tarde, Escalón efectivamente la visitó y le presentó varios documentos para su firma. Resultaron ser solicitudes de préstamo al BAC por 5 millones de colones cada uno. Cuando Najarro se dio cuenta de que figuraba como representante legal de varias empresas ficticias, de las cuales no tenía conocimiento alguno, le pidió a Escalón que le diera una explicación. Escalón contestó, “Yo creía que ya le había dicho don Juan”.<sup>38</sup> Procedió a firmar obedientemente.

Con independencia del origen de cada préstamo, las operaciones financieras de Escalón no fueron enteramente fraudulentas. Él y otros hicieron uso de 33 millones de colones para comprar acciones de Pezca S. A. Hacia octubre de 1985, Escalón se había convertido en presidente de la junta directiva de la empresa en sustitución de Mena Lagos.

El recorrido de Escalón hasta alcanzar la presidencia de Pezca S. A., dependió de los préstamos del BAC y del apoyo de Wright. También se auxilió, en parte, del apoyo de Sandi Zacapa y D'Aubuisson, quienes trasladaron las operaciones de Mariscos Tazumal a Pezca, donde se comenzó a procesar la captura de camarón. Este cambio aparentemente enojó a Bobby Daglio (según la CIA un cabeza caiente), quien despidió a Escalón de su cargo de gerente general de Atarraya. Ahora bien, hasta una persona enérgica como Escalón

<sup>37</sup> Unidad Ejecutiva de la Comisión de Investigaciones de Hechos Delictivos, “Unidad de investigaciones de la Unidad Ejecutiva de la Comisión de Investigaciones de Hechos Delictivos”, Juzgado Segundo de lo Penal, informe, 3 de mayo, 1989, Pieza 54, p. 10631.

<sup>38</sup> *Loc. cit.*

puede haberse visto en problemas al manejar dos empresas grandes. Zacapa, D'Aubuisson y Sagrera permitieron que Mariscos Tazumal apoyara financieramente la creación de Productos Pesqueros del Mar en marzo de 1985. Aunque Productos Pesqueros se asemejó a las otras corporaciones ficticias en cuanto a su fecha de creación y el monto de los préstamos iniciales, Escalón y sus socios querían que esta compañía prosperara como empresa.

Por cierto, cuando Escalón empezó a hacerse del control de Pezca, le pareció a muchos de los habitantes del Puerto que su intención era que Productos Pesqueros sustituyera a la venerable empresa camaronera. Eventualmente, Productos Pesqueros se convirtió en una de las empresas camaroneras más grandes —con 6 a 9 barcos a su nombre en el Puerto— que suplía a Pezca. Cuando puso fin a sus operaciones en Puerto El Triunfo en 1988, tenía 60 empleados. En el puerto de La Unión, sin embargo, Productos tenía hasta ocho barcos camaroneros adicionales.<sup>59</sup>

Sandi Zacapa desempeñó un papel activo en Productos Pesqueros, tal como lo había hecho en Mariscos Tazumal. Zacapa y Escalón claramente esperaban que sus empresas camaroneras fueran rentables en el corto plazo, mientras las usaban como garantía para obtener aún más financiamiento del BAC. A lo mejor, pensaron que podían embolsarse el excedente de los préstamos una vez cubiertos los gastos de operación en Productos Pesqueros y Tazumal. Ambos mandaron construir casas en 1985 en la Colonia Escalón, un barrio entonces exclusivo (nombrado por un pariente lejano). Sin embargo, una operación aún más importante fue la

<sup>59</sup> Durante 1985 y 1986, Productos recibió préstamos por más de 5 millones de colones para compra de barcos, pero los investigadores no encontraron recibo alguno.

compra de acciones que les permitió el control de Aseguradora Centroamericana S. A., la empresa de seguros más grande en el país. Esa compañía aseguraría, por supuesto, las operaciones de Pezca.

En 1986, sin embargo, el pasado delictivo de secuestros de Zacapa comenzó a importunarlo.<sup>40</sup> En agosto, un juez militar ordenó que Zacapa y cinco de sus cómplices, incluyendo otros tres oficiales del ejército, se sometieran a juicio. Aunque solamente se les enjuició por tráfico de armas, su banda de secuestradores había sido destapada: habían extorsionado a cinco empresarios por más de 4 millones de dólares. Sus vínculos con la extrema derecha no les servirían de nada, en vista de la animosidad de la élite contra aquellos que se dedicaban a secuestrar a los de su propia clase. Zacapa y su tío, el coronel Joaquín Zacapa, optaron por huir del país; Sandi terminó en Brasil.<sup>41</sup>

Los negocios de Escalón y Zacapa merecen analizarse. Ambos trabajaban en un mundo oscuro, entre lo legítimo y lo ilegal e inmoral (malvado, en el caso de Zacapa). Su asociación señala esos linderos muy porosos entre las prácticas astutas e ilegales, por un lado, y los vínculos potenciales entre la política de derechas y el capital financiero, por el otro. Recuérdense que los militares habían detenido a Zacapa en la reunión de golpistas junto con D'Aubuisson y Mena Lagos en mayo de 1980. Aunque Escalón no tuvo tratos directamente con ese grupo, mucho menos con la

<sup>40</sup> El Banco Hipotecario estuvo tratando de embargar las propiedades de Zacapa pero no pudo ubicar su dirección ni a un representante legal. Raúl Beltrán, "Military Court to Try Officers in Military Court", *United Press International* (UPI), 23 de agosto, 1986; *Diario Oficial*, 3 de septiembre, 1987, p. 296.

<sup>41</sup> Algunos han sugerido que Zacapa montó un negocio de camarones en Río de Janeiro. Juzgado Segundo de lo Penal, 2 de mayo, 1989, Pieza 54.

banda de secuestradores, sí mantuvo relaciones cercanas con la derecha paramilitar. Se autoproclamaban revolucionarios debido a su defensa de un El Salvador libre, y hacían caso omiso de cualquier noción de justicia y moralidad burguesa. Ningún elemento en este conjunto de valores se oponía al enriquecimiento personal. En términos similares, al menos desde 1980, eran defensores de la propiedad privada, aunque no esgrimían una agenda productivista. Hubo una excepción clara, no obstante, a este modelo: Alfredo Mena Lagos. Aunque se identificaba con la extrema derecha y se dispuso a organizar un golpe contra la primera y la segunda JRG en 1979-1980, Mena Lagos se adhirió asiduamente a las normas gerenciales y se mostró claramente repelido por las actividades y actitudes de Escalón y otros en la junta directiva de Pezca.

Cuando Escalón asumió el control de Pezca en octubre de 1985, hizo precisamente lo contrario a lo que intentaba Mena Lagos.<sup>42</sup> Le concedió al Sindicato Agua un contrato colectivo extremadamente favorable que garantizaba un salario diario alto, con independencia de la captura de camarón, una garantía que socavó directamente la iniciativa de Mena Lagos de combatir “la movida”. Por el contrario, el salario garantizado era una invitación para dedicarse a “la movida” porque los marineros no serían sancionados por entregar cantidades más pequeñas de camarón. Otra estipulación de este contrato —descrito como “ideal” para los trabajadores— le concedía a los marineros un 80% del salario diario en caso de que el barco no partiera a tiempo por cuestiones de desperfectos mecánicos. Varios antiguos trabajadores dicen

<sup>42</sup> US Embassy to Secretary of State, “196 Pezca Strike”, 7 de agosto, 1985, San Salvador 10119, r072316z, núm. C05624766, case F-2013-10925, p. 2, en Freedom of Information Act del US Department of State.

que algunos de los marineros sabotearan los barcos para que se les entregara este beneficio.<sup>45</sup> Estas son condiciones que Mena Lagos jamás habría aceptado y obligan a preguntar por qué Escalón sí lo hizo. La valoración de Mena Lagos, confirmada por la embajada de Estados Unidos, muy probablemente haya acertado en el sentido de que el SGTIPAC no tenía suficientes recursos como para llevar a cabo otra huelga en apoyo a sus demandas. Sus fondos de reserva se habían agotado después de casi ocho meses y cuesta imaginarse que muchos marineros hayan querido iniciar otro paro de labores. Lo más seguro es que Escalón calculó que, en última instancia, se habría de salir con la suya al convertir a Pezca en un sistema de subcontrataciones, en el cual el contrato colectivo ya no tendría sentido. El contrato colectivo que firmó le permitiría ganar tiempo sin huelgas mientras consolidaba su control de la compañía y convertía parte de los préstamos del BAC en capital personal.

Sin embargo, en mayo de 1987, Escalón comenzó a verse en apuros. Bajo presión de los medios de comunicación derechistas que querían socavar al gobierno de Duarte, la Fiscalía General comenzó una investigación del BAC y sus préstamos a la industria camaronera. Durante la última parte de 1985 y todo 1986, el fraude había funcionado bien. Mientras que los accionistas clave y Carbonell se enriquecían, Pezca y sus empresas afiliadas parecían estar funcionando sin mayores problemas. Sin embargo, Carbonell no se podía hacer cargo él solo de todo el trabajo. En 1986, le encargó a una conocida de toda la vida y antigua colega en el BAC, la vicepresidenta del banco Marlena Posada de Gómez, para que procesara

<sup>45</sup> Ruperto Torres (antiguo dirigente de SGTIPAC), entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, febrero de 2016.

el refinanciamiento de todos los préstamos de 1985.<sup>44</sup> En efecto, estos nuevos préstamos le permitirían a Pezca y sus aliados cancelar intereses y pagar los salarios de los trabajadores. Posteriormente, según afirmó, en julio de 1986 comenzó a detectar anomalías en los préstamos: más de 15 millones de dólares no tenían garantía (con la excepción notable de las instalaciones y los barcos de Pezca). Se saltó las líneas de mando del banco para rendir informes, de lo que a su juicio eran ofensas con graves consecuencias, directamente al ministro de defensa, Carlos Eugenio Vides Casanova, y a Fidel Chávez Mena, ministro de planificación y director de la Junta Monetaria, así como dirigente clave del partido Demócrata Cristiano. También reportó las anomalías al presidente del Banco Central de Reserva, quien ordenó una auditoría del Banco Agrícola Comercial y de sus préstamos a Pezca y empresas afiliadas.<sup>45</sup>

Como resultado directo de los informes enviados por Posada de Gómez, el banco despidió a Carbonell en mayo de 1987 y la nombró a ella como presidente interina. Inmediatamente ordenó un embargo judicial contra Pezca y sus empresas afiliadas.<sup>46</sup> Entonces se destapó el escándalo. Los periódicos de derecha (lo únicos importantes) subrayaron el papel de Carbonell y sus conexiones con el Partido Demócrata Cristiano (en adelante PDC).<sup>47</sup> Los periódicos

<sup>44</sup> De hecho, había participado en los trámites de muchos de los primeros préstamos.

<sup>45</sup> Posada de Gómez también fue acusada posteriormente por fraude en vista de su puesto como encargada de créditos corporativos del BAC durante todo el año de 1985. Testimonio de Marlena Posada de Gómez, Juzgado Segundo de lo Penal, Pieza 53/3, p. 7298.

<sup>46</sup> Después de un mes, fue nombrada vicepresidente del BAC, un cargo que ocupó hasta su renuncia en octubre de 1987. Testimonio de Marlena Posada de Gómez, Juzgado Segundo de lo Penal, Pieza 53/3, p. 7299.

<sup>47</sup> *El Diario de Hoy*, 2 de julio, 1987.

no mencionaron a Pezca ni a Escalón o Wright, a pesar de informar sobre la intervención del BAC en las empresas que habían recibido los préstamos. En junio, la Fiscalía General de la República comenzó una investigación oficial del fraude que se desarrollaría durante los siguientes dos años.

En el transcurso de toda la investigación, Escalón siguió ocupando la presidencia de Pezca, Productos Pesqueros y otras empresas pesqueras afines. Continuó sus operaciones con el BAC. Explicó que no estaba en capacidad de cancelar los préstamos debido a las ventas ilegales de “la movida” y las huelgas. Es más, insistió en la necesidad de nuevos financiamientos para que la industria pesquera volviera a ponerse de pie. Prometió que, si obtenía los préstamos y si el BAC (y Pezca) resolvían la huelga (que había comenzado el 26 de julio de 1987, véase Capítulo 7), establecería un sistema de subcontrataciones que impulsaría una industria camaronesa nuevamente próspera. Por cierto, Escalón logró crear un sistema laboral de subcontrataciones en Productos Pesqueros, que operaba desde el puerto de La Unión.

Desde las fases iniciales de la investigación, Escalón, Wright y Roberto Mathies Regalado montaron una defensa que giraba en torno a una lectura selectiva de la historia repleta de datos, distorsiones y silencios. La defensa legal de Mathies Regalado resumió sus argumentos principales haciendo referencia a las “catástrofes” artificiales y naturales que los dueños tuvieron que enfrentar. Primero, presentó un análisis de la coyuntura de comienzos de la década de 1980. Los principales accionistas de Pezca habían sido afectados gravemente por las reformas estructurales y por el aumento en las ventas ilegales de camarón:

[...] deterioran sensiblemente la moral empresarial de los accionistas [...]. Ya para 1982 el robo en alta mar llegó a tener tan amplia di-

fusión, que había embarcaciones que después de haber estado varios días en alta mar regresaban con tan poco camarón capturado, que no alcanzaba ni a cubrir los gastos normales del viaje.<sup>48</sup>

La huelga de 1985, que se afirmó falsamente había durado más de un año (duró siete meses y medio) obligó “a algunos accionistas de vender sus acciones”. Esto último era cierto indudablemente, en vista de que Mena Lagos y su familia vendieron sus acciones en Pezca y compañías afiliadas. No obstante, la cronología desordenada ofusca la realidad de que los préstamos se otorgaron en las fases iniciales de la huelga, mucho antes de que hubiera indicios de que los accionistas habrían de vender sus acciones. Mathies Regalado también destacó el hecho de que en septiembre de 1985, Trakel Maritime Company, con sede en Miami, realizó un avalúo de Pezca S. A., y estimó que su capital en la planta y 29 barcos pesqueros ascendía a 13 millones de dólares. Sugiere que ese monto era más que suficiente para garantizar los préstamos de la empresa. Pero dejó de mencionar que, en ese momento, las finanzas de Pezca estaban en números rojos y que la huelga agravó su endeudamiento.<sup>49</sup>

Si bien era cierto que los montos de los préstamos a Pezca eran considerables, el grueso de la acusación del fiscal contra Mathies Regalado, Escalón, Wright y Carbonell tuvo que ver con los préstamos otorgados sin garantías a las 13 corporaciones ficticias. Mathies Regalado echó mano de la disimulación cuando dijo que Pezca estaba amortizando sus préstamos a tiempo hasta los últi-

<sup>48</sup> Defensa de Roberto Mathies Regalado ante el Juez Segundo de lo Penal, al emitirse una orden de captura en su contra, Juzgado Segundo de lo Penal, 12 de junio, 1991, Pieza 56/2, p. 7405.

<sup>49</sup> Los estados financieros de Pezca arrojaban una cifra en rojo por 1.7 millones de colones a fines de 1984. Su insolvencia habría aumentado notablemente a raíz de la huelga.

mos meses de 1986, cuando la empresa se enfrentó a varias catástrofes. Por el contrario, de acuerdo con un informe interno del Fiscal General, Escalón y sus asociados habían pagado solamente 2 millones de colones de los 87 millones en préstamos (a cuatro años) que habían obtenido al 15% anual.<sup>50</sup>

Para Mathies Regalado, esas “catástrofes” incluyeron una disminución de la captura de camarón blanco, el que tenía el mejor precio. Esa disminución fue consecuencia del impacto negativo de El Niño ese año, de la contaminación que se originaba en las haciendas vecinas, de los años de pesca excesiva y del problema de las ventas ilegales. Mathies Regalado omitió mencionar el papel de la empresa cuando ésta se opuso a una veda temporal de la pesca del camarón. A estos argumentos, agregó una vaga referencia cronológica: “[...] y por si fuera poco, nuevos problemas laborales originados por movimientos políticos que instrumentalizaron a los trabajadores conduciéndolos a dañar las fuentes de trabajo”.<sup>51</sup>

De nuevo, la ausencia de una especificidad cronológica es reveladora porque le permitió a la defensa sugerir que los “problemas obreros” fueron la causa principal que impidió que los dueños de las compañías amortizaran los préstamos.

El gobierno de Duarte, según esta lectura selectiva, fue el causante de los problemas de la industria. Pese a sus mejores esfuerzos por reembolsar los préstamos, la huelga del Sindicato Agua de

<sup>50</sup> Existe alguna confusión en relación a este asunto. Pezca obtuvo 29 millones de colones en préstamos del BAC en 1986 y aparentemente utilizó 9 millones de colones de esos préstamos para repagar los préstamos de 1985. Aun así, quedaron 6 millones de colones en mora. El informe original del fiscal dijo que Pezca no había amortizado nada en 1986. “Memorandum de la investigación”, Juzgado Segundo de lo Penal, Pieza 46/1, p. 6914.

<sup>51</sup> Defensa de Roberto Mathies Regalado..., Pieza 56/2, p. 7405.

1987 complicó sus problemas existentes y les resultó imposible mantenerse al día con las letras vencidas de los préstamos.<sup>52</sup> En realidad, la huelga no pudo haber impedido que Escalón y otros hayan reembolsado el crédito al momento del embargo judicial porque la huelga ocurrió dos meses más tarde. Sin embargo, en el largo plazo la huelga se convirtió en un elemento clave de la narrativa de unos empresarios atribulados y algo heroicos que tuvieron que enfrentarse a cualquier cantidad de adversidades para salvar a la economía salvadoreña de la administración corrupta y desdichada de los Demócrata Cristianos. En términos similares, su defensa impugnó al BAC y los tribunales. Después de explicar que el BAC había sido completamente negligente al no salvaguardar la planta y los barcos camaroneros, tal como era su deber, Mathies Regalado exclamó: “Ahora viene a acusarnos de inexistentes delitos. Delitos [que] cometieron quienes incitaron a las huelgas ilegales y los destrozos de las fuentes de trabajo. Delitos [que] cometieron los que se negaron sistemáticamente a combatir los robos de camarón. Delitos [que] cometieron quienes alentaron esos robos”.<sup>53</sup>

Para Mathies Regalado y Escalón, el gobierno de Duarte se había dedicado “a una política de exterminio empresarial”.<sup>54</sup> Los democristianos habían promovido las huelgas para arruinar a la compañía. El dueño de Pezca presuntamente asoció dicha táctica con el resentimiento de Duarte contra la derecha. Pero la afirma-

<sup>52</sup> La carta sugiere que estaban pagando puntualmente las letras de los préstamos hasta que se declaró la huelga. Pieza 55, 6438 (Juzgado Segundo de lo Penal).

<sup>53</sup> Defensa de Roberto Mathies Regalado frente al Juez Segundo de lo Penal, al darse la orden de captura, 12 de junio de 1991, Pieza 56/2, 7412 (Juzgado Segundo de lo Penal).

<sup>54</sup> Rafael Escalón a Ramón González Giner, Juzgado Segundo de lo Penal, 12 de marzo, 1992, Pieza 56/2.

ción también puede referirse a la exigencia del Sindicato Agua de crear una propiedad cooperativa que habría de emerger de las ruinas de Pezca.

Aunque las declaraciones en público de Mathies Regalado le echaban toda la culpa a Duarte y a los obreros, en privado ofreció una versión diferente. De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en 1990,

este antiguo contacto [...] se siente apenado por su papel en Pezca. Culpa al director gerente Escalón por la corrupción y los malos manejos que arruinaron a la compañía y reconoce que debió haberla vigilado más de cerca. También culpa a Juan Wright por no mantener a raya a su antiguo yerno. Dice que poco puede hacer sin la venia de Juan Wright quien se niega a negociar con los trabajadores [...]. Como un deudor principal de un préstamo en mora, su nombre aparecerá en una lista negra de personas no sujetas de crédito bajo los bancos recientemente privatizados.<sup>55</sup>

Así Regalado pudo trasladar la culpa a Wright y Escalón y limitar su propio papel a un problema de distracción e insuficiente supervisión de las operaciones. Así se vino abajo el frente previamente unido de accionistas oligárquicos de derecha cuando tuvo que enfrentarse con la realidad de la huelga, la investigación criminal y la intervención del BAC.

Una vez que el BAC intervino y comenzaron las investigaciones judiciales, Escalón y sus socios se dedicaron a buscar alternativas para recuperar el control de la industria y evitar un juicio criminal.

<sup>55</sup> US Embassy to Secretary of State, "No Resolution in Sight", 13 de junio, 1990, R132130z, p. 3, en Freedom of Information Act del US Department of State.

Como primer paso, contrataron a Salvador Pérez, quien había trabajado durante 20 años para el BAC.<sup>56</sup> El banco lo había despedido junto con Carbonell en vista de que fue miembro de la junta ejecutiva durante el proceso de los préstamos. Escalón quería que Pérez se ideara una estrategia para apaciguar al BAC, revivir a la industria por medio de préstamos nuevos y repagar algunos de los créditos en mora para evitar un proceso judicial criminal. Los intentos reiterados de Escalón por entrar en negociaciones con el BAC durante los tres años siguientes también contribuirían a los alegatos en su defensa, pero las conversaciones informales lo beneficiaron mucho más. En primer lugar, Escalón logró establecer un nexo de intereses compartidos con la misma institución que había iniciado una investigación en su contra.<sup>57</sup> Ahora que el BAC estaba supuestamente administrando la empresa, sus verdaderos dueños tuvieron por necesidad los mismos objetivos de asegurar la paz laboral y percibir utilidades sustanciales. En segundo lugar, cuando el Sindicato Agua se fue a la huelga el 26 de julio de 1987, ambos Escalón y el BAC se enfrentaban al mismo contrincante. Esa complicidad quizá le permitió a Escalón consagrar su narrativa sobre la politización de la huelga y sus principales consecuencias para los dueños de Pezca: su incapacidad para repagar los prés-

<sup>56</sup> Juzgado de lo Penal, Pieza 53, p. 7294.

<sup>57</sup> Sin embargo, el asunto es algo más complicado. Marlena Posada, quien fungió como vicepresidenta del BAC aun cuando estaba siendo investigada por la Fiscalía, aparentemente promovió la idea de la cooperativa con el Sindicato Agua, un objetivo que era anatema (por supuesto) para Escalón y sus asociados. Su renuncia en octubre de 1987 puede haberse debido a sus inclinaciones favorables a los trabajadores o a la investigación o a ambos. Juzgado Segundo de lo Penal, Pieza 53, p. 7295, hace referencia a las conversaciones con Roberto Morales, el nuevo presidente del BAC.

tamos del BAC.<sup>58</sup> Este marco histórico, les sirvió en su contienda legal, especialmente cuando el partido ARENA de derechas asumió el poder, primero al ganar las elecciones legislativas en 1988 y después la presidencia en 1989. Su defensa pública también contribuyó a perfilar una narrativa histórica sobre los democristianos y los trabajadores y, en términos más locales, sobre la perfidia del Sindicato Agua y su lucha por formar una cooperativa que reemplazaría a Pezca.

De acuerdo con un artículo que apareció en *Los Angeles Times* sobre el caso del fraude, “Mucha de la información adicional provino de Escalón y Wright, quienes, según fuentes, aparentemente creyeron que se les estaba tendiendo una trampa para echarles encima buena parte de la culpa. Esperaban anticiparse a cualquier castigo mediante la entrega de información y una promesa de repagar los préstamos”.<sup>59</sup> Bajo la ley salvadoreña, una persona señalada por fraude puede evitar un juicio criminal si devuelve la cantidad obtenida. Efectivamente, Escalón y Mathies Regalado eventualmente reembolsaron parte de los préstamos. En el caso de éste, en 1993 entregó al BAC una cantidad de barcos camaroneros (que por alguna razón se habían escapado del embargo del banco) por valor de 3.7 millones de colones, además de alguna tierra. Pero no existe prueba alguna que sustente la versión de que proporcionaron la información inicial a los investigadores. Sin embargo, es evidente que Escalón intentó constantemente mantener un diálogo con el BAC y obtener más financiamiento que le permitiera

<sup>58</sup> El documento insinúa claramente que el gobierno de Duarte promovió el Sindicato Agua específicamente con miras a destruir la compañía. Juzgado Segundo de lo Penal, Pieza 55, p. 6379.

<sup>59</sup> Kenneth Freed, “Salvadoran Government Shows Signs of Losing Interest in Bank-Looting Scandal”, en *Los Angeles Times*, 26 de julio, 1991.

reconstituir una flota pesquera, y quizá una planta procesadora, en el puerto de La Unión.

La Unidad Especial de Investigaciones (en adelante UEI) —capacitada por Estados Unidos— llevó a cabo una investigación meticulosa, tal como se evidencia en las más de 3 000 páginas de testimonios, el caso más voluminoso en la historia del país.<sup>60</sup> La UEI entregó sus resultados a las autoridades judiciales a mediados de 1989. Varios periodistas estadounidenses afirman que el caso entonces pasó inactivo durante un año debido a presiones políticas locales, debido a los vínculos de muchos de los acusados con el partido de gobierno ARENA y el gobierno de Cristiani. Una vez que el Congreso de Estados Unidos se hubo enterado del caso, presionó al gobierno salvadoreño negándose a entregar 20 millones de dólares en asistencia, a menos que los tribunales dieran muestras de proceder expeditamente con el caso. Después de presentarse los cargos, el comité de apropiaciones del Congreso volvió a detener la entrega de 20 millones de dólares en asistencia porque nada del dinero adeudado estaba siendo reintegrado al BAC, mientras que Estados Unidos estaba tratando de ayudar a privatizar los bancos “sobre una base sólida”.<sup>61</sup>

La presión del Congreso de Estados Unidos probablemente incidió en que el juez Daniel González emitiera una gran cantidad de cargos. El 21 de julio de 1991, González emitió órdenes de captura contra 21 individuos, muchos de ellos miembros prominentes de la élite salvadoreña —particularmente Wright y Mathies Regalado. Un diplomático dijo: “Esto ha golpeado a la clase

<sup>60</sup> *La Prensa Gráfica*, 19 de junio, 1991.

<sup>61</sup> US Congress, Senate, “Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriation Bill, 1993”, Cong. Rec. S29, 23 de septiembre, 1992, pp. 102-419.

gobernante de este país en sus posaderas”.<sup>62</sup> El presidente del Banco Central de Reserva lo calificó como “el fraude más grande en la historia [salvadoreña]”.<sup>63</sup>

Tomando en cuenta el tiempo que el caso permaneció “inactivo”, es algo sorprendente que el juez haya emitido cargos tan mal formulados. Acusó a 21 personas de haber cometido “administración fraudulenta”.<sup>64</sup> Ha habido una discusión acalorada dentro del aparato de justicia sobre este cargo, cuyas debilidades son bastante evidentes. Los abogados defensores señalaron sin demora que solamente los administradores de los bancos pueden ser acusados de ese crimen. Por lo tanto, Escalón, Wright y Mathies Regalado no podrían ser condenados con semejantes cargos. Es más, el presidente del BAC en 1991 había insistido —en vano— que se limitaran las acusaciones a las dos figuras principales, Escalón y Carbonell, en vista de que la tercera persona importante, Wright, nunca firmó un documento y, por lo tanto, sería difícil de condenar. No obstante, el juez hizo caso a las pruebas de que muchos altos ejecutivos del BAC y otros habían participado directamente en el fraude y que, por lo tanto, debían ser castigados. Algunos afirmaron que el juez González quiso lucirse en términos políticos. También es posible que los cargos iniciales hayan sido intencionalmente viciados. Sea como sea, los indiciados tuvieron más que suficiente tiempo para huir del país y preparar su defensa.

<sup>62</sup> Citado en Lee Hockstader, “Indictments Startle Salvadorans: Prominent Families Cited in Bank Case”, *The Washington Post*, 8 de julio, 1991.

<sup>63</sup> *Loc. cit.* Véase también, Douglass Mine, “Bank Fraud Scandal Rocks Salvador’s High Society”, en *Associated Press*, 9 de julio, 1991.

<sup>64</sup> Sin embargo, durante ese periodo el acusador nombrado por el BAC, el Fiscal y los jueces discutieron acerca de los cargos específicos que debían presentarse.

Hacia 1993, el tribunal absolvió a Rafael Escalón de los cargos; nadie purgó una pena de cárcel. Y Pezca —la empresa que con tanto entusiasmo se propuso revivir— estaba muerta. Un alto funcionario del órgano judicial explicó: “Esta gente tiene amigos poderosos”.<sup>65</sup> Un eufemismo para la nueva era.

\* \* \* \*

Como veremos, el fraude bancario eventualmente destruiría a Pezca S.A., y con ello el sueño de sus trabajadores para disfrutar de una vida digna. Pero el fraude resultó invisible para la gente de Puerto El Triunfo. Aún después de que la Fiscalía iniciara su investigación, los sindicatos se opusieron a las medidas que tomó Pezca (y el BAC) sin tener claridad sobre las consecuencias directas del fraude o del curso de las investigaciones. Cuando en 1991 el gobierno de Estados Unidos —ya en los últimos momentos de su multibillonario esfuerzo por aplastar a la insurgencia izquierdista— presionó al gobierno salvadoreño para que actuara con “transparencia”, ya sería demasiado tarde para los trabajadores. Por un breve momento, Puerto El Triunfo se convirtió en un microcosmos de la transición global hacia el neoliberalismo, marcada al mismo tiempo por un poderoso llamado discursivo a favor de la transparencia en todas las transacciones y una realidad en la cual las acciones más decisivas que afectaban las vidas del pueblo ocurrían en las sombras de la sociedad.

<sup>65</sup> Mine, “Bank Fraud Scandal Rocks Salvador’s High Society”.

## 6. SOLIDARIDAD Y DESACUERDOS EN EL MOVIMIENTO OBRERO 1984-1989

Esta fuerza laboral, por su división y su eventual sumisión a otros poderes, no influye como debiera, ni en la defensa de sus propios intereses ni en la propiciación de un orden social y político que objetivamente favoreciese los intereses políticos de las mayorías populares. No obstante, representa un poder actual y sobre todo tiene un potencial de gran alcance.

IGNACIO ELLACURÍA, 1987.

Si tuviéramos que llorar por cada asesinado, por cada desaparecido, por cada trabajador que es torturado y desaparecido, por cada sindicalista en prisión, las aguas del Lago Ilopango rebalsarían sus orillas.

PEDRO CRUZ, Sindicato de Trabajadores  
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social,  
diciembre de 1988.

Poco antes de las 3 de la madrugada el 2 de junio de 1985, varios hombres cargando a una persona en una camilla pasaron por una línea de piquetes y entraron a la sala de emergencias de un hospital de San Salvador. Una vez dentro, sacaron armas de fuego y encañonaron a médicos, enfermeras y empleados del hospital. Los pistoleros eran miembros de la Policía Nacional vestidos de civil en misión para desalojar a los huelguistas que habían ocupado las instalaciones por casi un mes. Después se desató el caos cuando unos soldados atravesaron unas barricadas y entraron a la fuerza. Como creyeron que se trataba de un ataque guerrillero, la policía abrió fuego. A consecuencia de la balacera, cuatro policías murieron. Los soldados agarraron a los médicos, las enfermeras y los paramédicos y los obligaron a tenderse en el suelo boca abajo. Los soldados los amarraron y procedieron a catear el hospital en busca de “armas”. Durante el operativo, sacaron a los bebés de sus cunas para revisarlas. No encontraron armas; los doctores dijeron que una paciente sufrió un paro cardíaco durante el tiroteo y no pudieron auxiliarla porque estaban, literalmente, atados de manos. A las 5 a.m., el coronel Enzo Rubio, jefe del Departamento III de la policía, entregó triunfalmente el hospital a su director, el Dr. Jorge Bustamante. Se llevaron capturados a cuatro dirigentes sindicales. Las tropas también allanaron otros 25 hospitales y clínicas como parte del operativo antihuelga.<sup>1</sup>

Sin sus aspectos tragicómicos, esta escena bien pudo haber ocurrido en 1979 en el gobierno militar, cuando las vidas de los dirigentes sindicales corrían peligro todos los días. Sin embargo, esta acción se ejecutó en el gobierno democráticamente electo de José Napoleón Duarte. Aun así, la represión antisindical bajo los

<sup>1</sup> *Proceso*, 10 de junio, 1985.

democristianos, a menudo severa no puede compararse con la de los años 1979-1983, cuando un estimado de 5 000 activistas obreros —urbanos y rurales— fueron asesinados o desaparecidos. Es notable que unos días después miles de personas marcharon por las calles de San Salvador para protestar por la represión en el hospital. No hubo detenciones ni muertos; los cuatro dirigentes del sindicato de los hospitales fueron liberados unos días más tarde cuando la huelga se resolvió en condiciones favorables para el sindicato.

El uso de tácticas represivas erráticas más que sistemáticas caracterizó al gobierno de Duarte desde sus inicios. Tal como se indicó en el Capítulo 4, el partido Demócrata Cristiano (en adelante PDC) llegó a la presidencia con el apoyo de la Unión Popular Democrática (en adelante UPD). A pesar de estos vínculos, en agosto de 1984, la federación campesino-obrera exigió públicamente que el presidente cumpliera el pacto social (analizado en el Capítulo 4) que Duarte había suscrito. El gobierno de Reagan, sin embargo, no quería que los componentes progresistas del pacto se implementaran. Eran muy pocos los que en Washington apoyaron una profundización de la reforma agraria.<sup>2</sup> Además, interpretaron los llamados estridentes a favor de unas negociaciones de paz como subversivos de la estrategia estadounidense política y militar.

El AIFLD comenzó a socavar la autoridad de los que percibió como dirigentes de izquierda (a pesar de sus credenciales demo-

<sup>2</sup> Fuera del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (en adelante AIFLD), hubo muy poco apoyo para la implementación de la Fase II de la reforma agraria que consideraba la expropiación de tierras entre 100 y 500 hectáreas. Esta medida habría afectado sobre todo las fincas de café, todavía el eje del poder oligárquico; nunca se puso en práctica.

cristianas) dentro de la UPD.<sup>3</sup> Tal como lo reconocieron los líderes del AIFLD más tarde, no fueron los momentos más felices de la organización.<sup>4</sup> Con independencia de la veracidad del sinfín de acusaciones que recibió, existen pocas dudas de que el brazo internacional de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (en adelante AFL-CIO)<sup>5</sup> expresó una forma extremadamente rara de solidaridad obrera durante los años 1984-1986: recompensando a amigos y castigando a disidentes en concordancia con los lineamientos político-militares de

<sup>3</sup> Robert Alexander, *A History of Organized Labor in Panama and Central America*, Westport, CT, Praeger Publishers, 2008, pp. 201 y 202; William Bollinger, “El Salvador”, en Gerald Michael Greenfield y Sheldon L. Maram [eds.], *Latin American Labor Organizations*, Nueva York, Greenwood Press, 1987, p. 322.

<sup>4</sup> Un análisis del papel del AIFLD en El Salvador puede encontrarse en J. Michael Luhan, “AIFLD’s Salvadoran Labor Wars: A Painful Record of Political Arm-Twisting”, en *Dissent*, vol. 33, núm. 3, julio de 1986, pp. 340-350. La respuesta al anterior es el de David Jessup, “El Salvador Unions—the Real Story”, en *Dissent*, vol. 33, núm. 4, septiembre de 1986, pp. 514-517 y la contra respuesta de J. Michael Luhan en la misma revista, pp. 517 y 518. Véase también Chris Norton, “Build and Destroy”, en *NACLA Report on the Americas*, vol. 19, núm. 6, 1985, pp. 26-36, que plantea una crítica fuerte del AIFLD. Véase también, Harry Bernstein, “US Unions Split on Central American Aid”, en *Los Angeles Times*, 14 de mayo, 1986. Una crítica más extensa del AIFLD son las de Kim Scipes, *AFL-CIO’s Secret War against Developing Country Workers*, Lanham, MD, Lexington Books, 2010; Frank Smyth, “AFL-CIO Is Spanish for Union Busting”, *Washington Monthly*, 1º de septiembre, 1987. Debe recalcar que los posteriores agregados laborales y directores del AIFLD (tales como Frances Scanlon y Norman Schipull) intentaron hasta cierto punto evitar unas intervenciones tan burdas como la que ocurrió en la UPD.

<sup>5</sup> Nota del traductor: Esta federación obrera es la amalgama de dos grandes federaciones sindicales estadounidenses —American Federation of Labor (AFL) y Congress of Industrial Organizations (CIO)— que hoy por hoy agrupan al grueso de trabajadores sindicalizados en Estados Unidos.

Estados Unidos. También fundaron sindicatos paralelos en un intento por debilitar a aquellos de línea supuestamente izquierdista. Debe mencionarse que el AIFLD logró dividir y debilitar a la UPD y contribuyó a crear una nueva confederación obrera, la Central de Trabajadores Democráticos (en adelante CTD) que se mostró más afín a las políticas y directivas del gobierno de Duarte y de Washington, particularmente una hostilidad implacable hacia la izquierda.<sup>6</sup>

La política del AIFLD hacia la UPD contradijo directamente su objetivo de fomentar la actividad sindical democrática. De hecho, pudo haber publicitado a la organización obrero-campesina como un éxito derivado, en parte, de la reforma agraria, tan vilipendiada por la izquierda y la derecha. Aunque la UPD no tuvo sino una presencia pequeña entre los trabajadores de fábrica, sí reunió una base de apoyo considerable entre los cooperativistas campesinos, los beneficiados de la reforma agraria de inspiración democristiana, quienes representaban un 15% de la población rural (unas 300 000 personas). También se había ganado un apoyo considerable entre los trabajadores de la construcción y el transporte.

El gobierno de Duarte fue cómplice de los esfuerzos del AIFLD por frenar lo que se percibió como una inclinación hacia la izquierda de la UPD. A la vez, sin embargo, el gobierno concedió espacios para todo el movimiento obrero, incluyendo la izquierda. Mientras que en 1983, algunos 2 600 obreros habían participado en 15 huelgas (10 en la industria de la construcción), en 1984 unos

<sup>6</sup> Norman Casper, “El IADSL y la corrupción del movimiento sindical de El Salvador”, en *Estudios Centroamericanos*, vol. 41, núm. 449, marzo de 1986, pp. 214 y 215; Luhan, “AIFLD’s Salvadoran Labor Wars”, pp. 340-350. La respuesta de David Jessup está en “El Salvador Unions-the Real Story”, pp. 514-517 y la contra respuesta de Luhan en las pp. 517 y 518.

26 000 se unieron a 41 huelgas. Maestros, obreros de las obras públicas, técnicos de la reforma agraria, y trabajadores de la telefonía convocaron a huelgas que terminaron todas con al menos algunos resultados favorables y sin represión significativa.

El crecimiento y la militancia del sector de los empleados públicos, condicionaron la política errática de Duarte hacia los trabajadores. Los empleados públicos constituían más del 60% de los huelguistas en 1984.<sup>7</sup> El giro de centro de gravedad del sector privado hacia el sector público habría de tener efectos notables en los movimientos obreros. Resultó más difícil organizar a los trabajadores del sector privado debido a la reducción de la tasa de utilidades de las empresas causada por la globalización y el crecimiento del sector informal; por otra parte, la represión contra los sindicatos resultó más fácil de ejecutar. Por el contrario, los empleados del sector público eran muy visibles y, por lo tanto, una represión descarada contra ellos sería más difícil de llevar a cabo, más no imposible, como vimos en la descripción del incidente mencionado al comienzo de este capítulo. El sindicalismo en el sector público tuvo sus costos. En primer lugar, en la medida en

<sup>7</sup> Existe una discrepancia entre las 36 huelgas que reporta la OIT y las 47 huelgas que menciona Rafael Guido Béjar, "El movimiento sindical después de la Segunda Guerra Mundial", en *Estudios Centroamericanos*, vol. 45, núm. 504, agosto de 1990, p. 883. A los empleados del gobierno no se les permitió legalmente organizar sindicatos, aunque sí podían formar asociaciones. Los empleados de las instituciones autónomas tales como telecomunicaciones, luz y fuerza, y acueductos y alcantarillados podían formar sindicatos, pero según la ley no se les permitía irse a la huelga. A los trabajadores rurales se les seguía prohibiendo formar sindicatos.

Parece que la cifra que menciona Guido Béjar, basada en buena medida en las huelgas registradas por *Proceso*, incluye huelgas ilegales (es decir, las de empleados públicos) y las de corta duración que pueden no haber sido registradas en las estadísticas oficiales.

que el neoliberalismo se asentaba, la presión constante por reducir la cantidad de empleados públicos condicionó la lucha sindical, en tanto que insistieron en la protección de unos empleos que dependían de los aportes de los contribuyentes. El gobierno pudo responder con relativa facilidad a las exhortaciones de solidaridad de los sindicalistas al recalcar el carácter “anti-popular” de las huelgas: los huelguistas debían saber que la ciudadanía les pagaba para que les sirvieran. En segundo lugar, esa línea de acción junto con el distanciamiento de los trabajadores de los medios de producción también parece haber tenido un impacto en el imaginario político y social de los empleados. El socialismo se convirtió cada vez más en una abstracción, en la medida que los sindicatos se alejaban de cualquier estrategia alternativa de acumulación o de relaciones laborales. Ahora bien, la apertura de espacios para la actividad sindical representó un cambio significativo para los militantes obreros que antes habían sido atemorizados y silenciados. En palabras oficiales en un boletín de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (en adelante FENASTRAS): “El año 1984 ha sido un año de luchas y resistencia [...]. Después de tres años de ausencia de las calles de la capital, los trabajadores reconquistaron nuestro derecho de expresarnos libremente”.<sup>8</sup>

Ambos gobiernos de Duarte y Reagan se enfrentaban a un dilema similar. Querían presentar —cada uno a su manera— al menos la apariencia de democracia, incluyendo el derecho de organización y expresión sin represión. Pero esas mismas formas democráticas dieron pie a un resurgimiento de la izquierda obrera urbana que amenazó sus intereses, tanto políticos como económicos. Por lo tanto, la Confederación General del Trabajo (en adelante CGT) respon-

<sup>8</sup> El *Mundo*, 11 de enero, 1985.

día al interés de Duarte y Washington (especialmente el AIFLD) de propiciar una federación obrera que estaría dispuesta a enfrentarse a los dirigentes obreros supuestamente izquierdistas, mientras intentaba representar los intereses de campesinos y trabajadores y mantener la apariencia formal de una democracia.

Ese compromiso con una democracia formal fue apoyado decididamente por el gobierno de Reagan, que necesitaba presentar al Congreso de su país un informe favorable sobre el respeto a los derechos humanos en El Salvador, para seguir recibiendo el financiamiento necesario para su estrategia contrainsurgente. Sin embargo, el respeto a los derechos humanos y laborales estaba reñido con otros dos imperativos que el gobierno de Duarte necesitaba acatar. En primer lugar, el gobierno no podía respetar todos los derechos laborales porque —junto con la embajada de Estados Unidos— actuaba bajo el supuesto de que los activistas obreros de izquierda en efecto recibían órdenes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (en adelante FMLN). Para Duarte, eran agentes del enemigo. En segundo lugar, el gobierno de Reagan y el Fondo Monetario Internacional promovieron una versión temprana del neoliberalismo que recalcaba una reducción drástica de los programas y gastos del gobierno y un fuerte apoyo a la empresa privada. Duarte no tuvo más opción que apoyar esta política de austeridad que tomaría forma en el “paquetazo” de enero de 1986, contra el cual se movilizaron todos los sectores del movimiento obrero. Semejantes medidas y represiones tuvieron el efecto de promover la solidaridad entre los sindicatos, pero unas fuerzas poderosas, incluyendo el AIFLD y la embajada de Estados Unidos, por un lado, y el FMLN, por el otro, a menudo impedían la unidad.

Las relaciones obrero-patronales de 1985 a 1990 en Puerto El Triunfo, como veremos en el Capítulo 7, imitaron el patrón nacio-

nal de represión, solidaridad y discordia pero dentro de una cronología marcadamente diferente. El ritmo propio de la actividad sindical en el Puerto fue reflejo de la interacción de las fuerzas locales. De manera particular, el carácter especial de las relaciones de género y la afiliación en masa de los marineros eventuales al sindicato pro Duarte tuvo el efecto de acentuar las divisiones en el movimiento obrero más que en la capital. Por lo tanto, la ola de neoliberalismo que se extendió por todas las Américas se sintió con especial fuerza en la Bahía de Jiquilisco, en un momento de discordia laboral que tuvo consecuencias devastadoras para la sociedad del Puerto.

En el nivel nacional, la misma retórica que vinculaba a la guerrilla con los sindicatos impulsó a Duarte y los militares a tomar acciones represivas. Unos días antes de que la izquierda montara la mayor manifestación del Primero de Mayo en cinco años, en la cual participaron entre 10 y 15 mil personas, los militares dieron a conocer el testimonio de dos desertores del FMLN, quienes afirmaron que la guerrilla ejercía un control directo sobre FENASTRAS y otros grupos obreros bajo la dirección de la izquierda. La embajada de Estados Unidos y el AIFLD también difundieron la versión de que FENASTRAS no era sino una fachada de la guerrilla. Tal como afirmó un informe de la embajada:

A comienzos de 1985, el FMLN coordinó una serie de huelgas en el sector público en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), junto con paros laborales de los maestros. Durante estas huelgas, los dirigentes no hicieron esfuerzo alguno para desautorizar el apoyo que recibieron de la clandestina Radio Venceremos del FMLN o de distanciarse de las amenazas a muerte contra los directivos del ISSS y ANDA.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> US Embassy, "Labor Trends in El Salvador," 1987, US Department of Labor, Bureau of International Labor Affairs, Washington, DC, p. 8.

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (en adelante ANDA) echó mano del mismo discurso que vinculaba al sindicato con el FMLN y procedió a despedir a más de 240 activistas obreros mientras los escuadrones de la muerte eliminaron a dos militantes y desaparecieron a otro. El director de ANDA dijo que la mayoría de los activistas sindicales eran “infiltrados enviados por grupos armados”.<sup>10</sup> Durante todo el año, los obreros sindicalizados se fueron a la huelga y la gerencia respondió destacando tropa en las instalaciones. Los militares capturaron y torturaron a activistas sindicales determinados. Hacia octubre, a pesar de grandes manifestaciones y paros solidarios, los trabajadores de ANDA habían sido derrotados.

El gobierno utilizó la represión de manera muy selectiva. En Puerto El Triunfo, tal como vimos, el Sindicato Tierra y Sindicato Agua (en adelante SGTIPAC) de orientación democristiana pudo llevar a cabo una huelga de siete meses y medio sin sufrir represión del gobierno. Pero en otras partes del país durante un periodo de seis semanas entre octubre y noviembre, las autoridades golpearon duramente a aquellos identificados con la izquierda: capturaron a 47 militantes de sindicatos, 11 fueron muertos y 4 desaparecieron. No obstante, la mayoría de huelgas en 1985 concluyó al menos con algunas victorias modestas. Los sindicatos y las asociaciones del sector público lideraron 54 de las 78 huelgas. Al igual que las huelgas en el sector privado, la mayoría de éstas fueron luchas por sobrevivencia: los sindicatos lucharon por aumentos salariales para compensar el congelamiento de salarios de tres años que terminó en 1984 y una tasa anual de inflación de 30%.

<sup>10</sup> Memoria de FENASTRAS, CIDAI/UCA, 1985, p. 21.

En noviembre de 1985, más de 15 000 empleados públicos, incluyendo los de varios ministerios y de la empresa de telefonía estatal, se declararon en huelga para protestar por la represión antisindical y para exigir un aumento del salario mensual de 300 colones (60 dólares). La respuesta del gobierno fue la militarización de varias instituciones, incluyendo la empresa de telefonía, lo que permitió que los activistas sindicales fueran condenados por tribunales militares, entre otras formas de represión. Esta vez le resultó más difícil a Duarte justificar la represión en gran escala, en vista de que la mayoría de sindicatos involucrados en la huelga eran de orientación democristiana. El 22 de noviembre, pronunció un discurso en el que culpó al FMLN por crear las condiciones que dieron pie a la huelga por medio de sabotajes e “infiltración”.<sup>11</sup> El presidente afirmó que protegería los derechos sindicales, pero que muchos activistas habían “caído en la trampa” que les tendió la izquierda para desestabilizar al gobierno.<sup>12</sup> A la vez, Duarte tomó medidas concretas para finalizar las huelgas. Acordó unos aumentos salariales de 100 colones (20 dólares) mensuales y un aguinaldo de fin de año de 120 dólares. No obstante, continuó la represión selectiva contra los sindicatos de izquierda, en particular los sindicatos de la empresa de telefonía y ANDA, y hasta fue aparente a los observadores internacionales. Una delegación de sindicatos de Alemania Occidental interpuso la siguiente protesta: “son sistemáticos y graves los esfuerzos que emprende el gobierno del Ing. Duarte para desarticular a sindicatos independientes y para intimidar a los trabajadores”.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> US Embassy, “El Salvador, 1984-1987”, en *Foreign Labor Trends*, Washington, DC, US Department of Labor, 1987, p. 30.

<sup>12</sup> *Proceso*, 15 de diciembre, 1985.

<sup>13</sup> *Proceso*, 3 de febrero, 1986.

Las acusaciones de Duarte sobre complicidad entre la guerrilla y los sindicatos obligan a plantearse las preguntas: ¿Cuál fue la relación entre el FMLN y el ala izquierda del movimiento obrero? ¿Era cada uno independiente del otro? Hasta cierto punto, las evaluaciones de Duarte y la embajada de Estados Unidos eran precisas. Algunos dirigentes sindicales clave tenían vínculos clandestinos con el FMLN. La dirigencia de FENASTRAS, en particular, pertenecía a menudo a las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (en adelante FARN), una de las cinco agrupaciones guerrilleras que conformaban el FMLN. Con todo, tal como argumentó Ignacio Ellacuría, el movimiento obrero se movía a su propio ritmo, demandas y tácticas con independencia de la afiliación de sus líderes.

“Una cosa es que el FMLN se sirva de determinadas organizaciones o que éstas respalden eventualmente sus posiciones y otra muy distinta es que esas organizaciones sean cascarones vacíos tras los que sólo se esconden las fuerzas guerrilleras”.<sup>14</sup>

En sus memorias, Mario Cabrera, un antiguo dirigente de la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños (en adelante UNTS), estuvo de acuerdo esencialmente con la valoración de Duarte y la embajada. Al opinar sobre la situación cuando se reincorporó al movimiento en 1987, escribió, “La comandancia general del FMLN vuelve a cometer el error de la década de los setentas, porque dieron la línea de reactivación de masas a partir de que necesitaban los cuadros y las masas para que fueran los proveedores de gente”.<sup>15</sup> Sin embargo, en la siguiente página modificó su apreciación:

<sup>14</sup> Ignacio Ellacuría, *Veinte años de historia de El Salvador (1969-1989)*, tomo II, *escritos políticos*, San Salvador, UCA Editores, 1991, p. 786.

<sup>15</sup> Mario Cabrera, *Piruetas*, San Salvador, Palibrio, 2012, p. 380.

“[...] algunos dirigentes de la comandancia entendían el concepto y aplicación de la autonomía en las organizaciones de masas”.<sup>16</sup>

La ambivalencia de Cabrera reflejó las relaciones cambiantes entre cada una de las organizaciones guerrilleras y otros sectores del movimiento obrero. Por lo general, la dirigencia del FMLN quería ejercer el control en última instancia sobre el movimiento popular y utilizarlo cuando fuera necesario para alcanzar determinados objetivos puntuales. Por el contrario, los militantes del FMLN en el movimiento obrero se la pasaban mayormente luchando por conseguir un estándar de vida mínimo y resistiendo las tácticas represivas del gobierno y las patronales. Ya sea como producto de una iniciativa estratégica o por pura necesidad, los activistas obreros de izquierda a menudo se mostraban dispuestos a formar alianzas con sindicatos de orientación democristiana. En términos similares, y a pesar de la hostilidad constante de Duarte contra la izquierda, la mayoría de sindicatos afiliados a la Central Latinoamericana de Trabajadores (en adelante CLAT) —bajo la influencia nominal de la Democracia Cristiana— optaron por trabajar a la par de FENASTRAS. Esa experiencia de solidaridad fue excepcional en vista de la realidad de una guerra civil que enfrentaba a sus respectivos aliados en combate militar.

En febrero de 1986, la alianza obrera de centro-izquierda protestó contra las medidas de austeridad económica —el llamado “paquetazo”— del gobierno de Duarte, que incluyó el fin de los subsidios para los alimentos y la energía, el congelamiento de los salarios y los precios, y una suspensión de nuevos empleos públicos. Decenas de miles se unieron a la manifestación, en la que también se anunció la creación de la UNTS. Varios sindicalistas del

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 381.

centro político fueron los promotores de esta nueva federación sindical, a la cual se adhirieron grupos de obreros de izquierda. Esta manifestación, en la cual participaron 150 organizaciones obreras y campesinas en un ambiente totalmente pacífico, representó el reto político más grande para Duarte desde su elección.

La respuesta del gobierno fue inmediata. A comienzos de marzo, un grupo de líderes sindicales y campesinos afines a Duarte anunciaron la creación de la Unión Nacional de Obreros y Campesinos (en adelante UNOC). Bajo el liderazgo de José Luis Preza Grande, el asesor de Mauricio Benítez muy ligado al AIFLD, la UNOC montó un acto inaugural impresionante en la capital. El 15 de marzo, la nueva federación obrera organizó una manifestación multitudinaria a la cual asistieron bastantes más personas que las que habían participado en la marcha de la UNTS. Las bases de la UNOC estaban conformadas mayormente por campesinos que se habían beneficiado de la reforma agraria de 1980. La SGTIPAC fue el sindicato más grande dentro de la CGT, que a su vez era una de las federaciones que conformaban la UNOC. La manifestación dejó en claro que Duarte no había perdido mucho de su apoyo político en el campo. La UNOC sí compartía algunos objetivos clave con la UNTS, especialmente las demandas de una profundización de la reforma agraria, el inicio de negociaciones de paz serias y unas modificaciones al paquetazo. A pesar de que estaban de acuerdo sobre estos temas importantes, las dos organizaciones no cooperaron entre sí sino años después.<sup>17</sup>

Los desacuerdos internos pronto golpearon y debilitaron a la UNTS, a causa de las presiones políticas del gobierno y, hasta cierto punto, del AIFLD. La UNTS intentó organizar varios paros laborales

<sup>17</sup> *Proceso*, 7 de mayo, 1986, p. 16.

en apoyo a demandas de incrementos salariales y negociaciones de paz. Como resultado, los sindicatos de empleados públicos del centro político se retiraron de la organización obrera. Unos meses más tarde, la UPD, para entonces una organización mayormente campesina cuyas bases se encontraban entre los beneficiarios de la reforma agraria, también se retiró de la UNTS.<sup>18</sup>

El AIFLD, trabajando en conjunto con el gobierno de Duarte, intentó crear sindicatos paralelos con el objetivo preciso de debilitar a la izquierda, y procedieron a hacerlo en fábricas e instituciones del gobierno. Un informe interno del AIFLD preparado en 1993 afirma:

En el ámbito de los sindicatos obreros, el AIFLD ha trabajado en aras al objetivo principal de fortalecer los sindicatos independientes no izquierdistas, y para lograrlo ha identificado dos sub-objetivos. Primero, para fortalecer a los sindicatos independientes, fue necesario asegurarse de que eran, de hecho, independientes, y eso significó que no estuvieran sometidos al control de la izquierda. Por lo tanto, una cierta porción de las energías del AIFLD se orientó a quitarles el control del movimiento sindical a los izquierdistas y mantener fuertes a los sindicatos que no eran de izquierda.<sup>19</sup>

Cuando resultó necesario, el AIFLD creó sindicatos paralelos y les proporcionó fondos para mantenerlos “a flote”. El AIFLD también apoyó los esfuerzos de sindicatos “independientes” para que

<sup>18</sup> La UNTS explicó su retiro debido a influencias del AIFLD. Sin embargo, no existen pruebas de que la organización obrera estadounidense haya jugado un papel directo en el retiro de la UPD.

<sup>19</sup> Stephen Stewart y Danilo Jiménez, “Final Report: Midterm Evaluation: AIFLD-AID Cooperative Agreement in El Salvador”, El Salvador, entregado a USAID, Washington, DC, junio de 1993, pp. 23 y 24.

consiguieran contratos decentes que fortalecerían al movimiento obrero “democrático”. No obstante, esta estrategia de doble carril tuvo sus inconvenientes. La negativa del AIFLD de apoyar las luchas de los sindicatos de izquierda dio la impresión, a veces, de que su postura era antisindical. Y para los empleadores, la mayoría de los cuales estaba imbuido por una ideología de derechas, el apoyo del AIFLD a los sindicatos, tales como el Sindicato Agua, le otorgó un cariz procomunista a pesar de haber surgido en plena Guerra Fría. En términos generales, no obstante, el AIFLD se mostró bastante complacido por sus esfuerzos de impedir la hegemonía de la izquierda en el movimiento obrero.<sup>20</sup>

Sin embargo, no existen pruebas documentales que involucren al AIFLD en actos de represión del gobierno o de la derecha, como el que ocurrió el 7 de julio de 1986, cuando hombres fuertemente armados vestidos de civil capturaron en un microbús a la dirigente del sindicato textil y de FENASTRAS, Febe Velásquez. Las protestas masivas no tardaron en estallar hasta que varios días después Duarte personalmente entregó a Velásquez (la compañera de Ricardo Jovel) en la sede del sindicato.<sup>21</sup> Un incidente casi idéntico ocurrió un mes más tarde. El dirigente del Sindicato de Empresa Trabajadores de ANDA (en adelante SETA), la empresa aguadora del Estado, fue secuestrado y llevado a las instalaciones de la fuerza aérea, donde se le mantuvo un día sin agua ni comida. De nuevo,

<sup>20</sup> Una intervención exitosa del AIFLD en una planta textil de propiedad japonesa puede verse en *Proceso*, 18 de junio, 1986; US Embassy, “El Salvador, 1984-1987”, en *Foreign Labor Trends*, US Department of Labor 1987, p. 31. Los dirigentes sindicales gozaban de protecciones constitucionales.

<sup>21</sup> *Proceso*, 18 de julio, 1986; Camelia Cartagena, *El silencio de los culpables: El Salvador, luchas sindicales, dos décadas de oro 1970-1989*, San Salvador, Servicios Gráficos El Salvador, 2015, p. 281.

las huelgas solidarias y la presión internacional, obligaron al gobierno a liberar al dirigente sindical. El presidente Duarte lo liberó en un acto público. En un intento por defender la acción del gobierno, dijo que “hay infiltración de guerrilleros en todas partes [...] y a esto se debió la captura del sindicalista”.<sup>22</sup>

Los analistas de la Universidad Centroamericana consideraron que la respuesta de Duarte ante los secuestros y la nueva ola de huelgas solidarias fue: “torpe e improvisado”.<sup>23</sup> Su comportamiento errático amerita estudiarse. Duarte necesitaba el apoyo de los trabajadores para mantener su legitimidad política. Como se mencionó previamente, Duarte, la embajada de Estados Unidos y el AFLD creían de manera obsesiva que toda acción de la izquierda laboral era, en cierta medida, un acto bélico porque obedecía a los dictados de su enemigo militar, el FMLN. Esta contradicción entre una postura de rechazo a la izquierda y una tolerancia democrática hacia el movimiento obrero resultó en situaciones absurdas como el secuestro de dirigentes sindicales al estilo de los escuadrones de la muerte, seguido por su liberación a manos de Duarte en persona.

Varias huelgas en los sectores público y privado estallaron en el área metropolitana entre agosto y octubre de 1986. Aparte de los incrementos salariales, la demanda más frecuente tenía que ver con la recontractación de trabajadores despedidos. En la medida de que la supuesta resolución de huelgas anteriores se venía abajo, los militantes sindicales se negaban a aceptar su derrota y siguieron apoyando a sus compañeros desempleados. Tal como observó un

<sup>22</sup> *Proceso*, 27 de agosto, 1986.

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 11; *Estudios Centroamericanos*, agosto-septiembre de 1986, pp. 454 y 455.

analista de la Universidad Centroamericana muy probablemente Ellacuría:

En primer lugar, destaca la creciente solidaridad mostrada por las clases trabajadoras hacia sí mismas, lo cual no puede menos que interpretarse como consolidación de una mayor conciencia de clase, capaz de sobreponerse en relativa medida al divisionismo existente en años pasados [...].<sup>24</sup>

El analista sigue destacando la madurez del movimiento. Sin que se sintieran intimidados por la militarización de los lugares de trabajo, los sindicatos consistentemente ofrecían negociar. Por primera vez, los sindicatos emplearon las huelgas de hambre para expresar su oposición a la represión. A pesar de toda la evidencia en sentido contrario, para la embajada de Estados Unidos y el gobierno de Duarte este movimiento huelguístico tenía el único objetivo de fortalecer al FMLN y debilitar al gobierno en la mesa de negociaciones entre trabajadores y empresas. Por cierto, las estadísticas de la misma embajada daban a entender que la mitad de todos los contratos que se habían negociado fue con sindicatos de izquierda. En pocas palabras, se habían desempeñado como cualquier sindicato.

A pesar de sus éxitos, la UNTS cayó en la jugada de Duarte, debido en parte a la estrategia del FMLN. Una vez que los elementos de centro se habían apartado de la UNTS, la izquierda comenzó a actuar de manera tal que parecía validar las acusaciones que Duarte y la embajada le lanzaban. Durante los primeros seis meses de 1987, como respuesta a la represión incesante contra los trabajadores, la UNTS organizó varias manifestaciones de protesta que

<sup>24</sup> *Proceso*, 8 de octubre, 1986.

se tornaron violentas. Una agrupación multclasista denominada Movimiento Pan, Tierra, Trabajo, y Libertad (en adelante MPTL), identificada con el Ejército Revolucionario del Pueblo (en adelante ERP), uno de los cinco grupos guerrilleros del FMLN, se unió a las manifestaciones de la UNTS. Se dedicaron a quemar autobuses y estaciones de servicio y “a saturar de pintas populares y combativas todas las paredes de las ciudades importantes”. Sus militantes también prestaban seguridad en las manifestaciones “con armas y con varillas cortopunsantes de mucho peso”.<sup>25</sup> En otras manifestaciones, este grupo mayormente estudiantil vinculado al ERP, también quemó vehículos y casetas de teléfono. Aunque la dirigencia de la UNTS le pidió al MPTL que le bajara la intensidad a sus acciones, este grupo siguió operando como “fuerza de choque” y como unidad de seguridad en las manifestaciones y las marchas.<sup>26</sup>

La embajada de Estados Unidos no tenía duda alguna sobre el papel clave que jugaba la UNTS en la estrategia del FMLN de botar al gobierno, cuando dijo: “Este periodo (1987-1988) se caracterizó por el sabotaje económico y la actividad huelguística que promueve el FMLN para empeorar las condiciones económicas bajo la teoría [sic] de que esto pondrá a los trabajadores en contra del sistema democrático”.<sup>27</sup> Durante este mismo periodo, la UNTS (acatando la línea del FMLN) hizo un llamado para que Duarte fuera reemplazado por un gobierno de “amplia participación”. A comienzos de

<sup>25</sup> Cabrera ofrece perspectivas desde el interior de la organización gracias a su presencia en la dirigencia de la UNTS, aunque se incorporó en 1987. Por ende, su opinión de que la organización nació “bajo la influencia y como apéndice del FMLN” no es acertada. Cuando se incorporó a la dirigencia, la organización estaba bajo el control indirecto del frente guerrillero. Cabrera, *op. cit.*, p. 385.

<sup>26</sup> *Ibid.*, p. 416.

<sup>27</sup> US Embassy, “El Salvador, 1988-1989”, en *Foreign Labor Trends*, US Department of Labor, 1990, p. 10.

1987, el gobierno decretó lo que vino a conocerse como un “impuesto de guerra” que afectó sobre todo a la empresa privada. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (en adelante ANEP), la principal gremial del sector privado, respondió con un cierre patronal que resultó efectiva en un 90%. La Corte Suprema entonces anuló el impuesto. El FMLN pensó que este enfrentamiento era señal del colapso inminente de Duarte y de la estrategia contrainsurgente apoyada por Estados Unidos. Para Humberto Centeno, dirigente de la UNTS y militante del Partido Comunista, el llamado para la conformación de un nuevo gobierno representó un “salto cualitativo” en el sentido de que la organización obrera había planteado una exigencia específicamente política.<sup>28</sup>

Ellacuría y otros observadores independientes entendieron que la dirigencia de la UNTS padecía de miopía. Para muchos salvadoreños —si acaso la mayoría— el logro de un gobierno democrático representó una victoria contra la oligarquía. La postura radical de la UNTS también impedía una alianza funcional con los grupos obreros del centro político que se identificaban con una democracia electoral.

Tracy Fitzsimmons y Mark Anner, en un estudio del movimiento obrero posterior al acuerdo de paz, atribuyen la debilidad de los sindicatos de izquierda y del centro a sus afinidades políticas durante la década de 1980. “Durante los años de la guerra civil salvadoreña, los grupos obreros de izquierda fungieron como la retaguardia estratégica de la guerrilla mientras que los sindicatos del centro político se convirtieron en el sostén del programa contrainsurgente de Estados Unidos”. Proceden entonces a recalcar la manera en que el FMLN aparentemente orientó a la UNTS hacia

<sup>28</sup> *Proceso*, 11 de mayo, 1988.

una fase preparatoria de lo que sería la insurrección de noviembre de 1989.<sup>29</sup>

Pese al sectarismo y la violencia de la izquierda obrera, durante todo el año de 1987 los obreros iniciaron 100 huelgas, el mayor número desde 1979. Los empleados públicos organizaron 48 huelgas entre enero y julio, y solamente 6 durante el resto del año.

La represión del gobierno fue la principal razón del declive de la actividad obrera durante la segunda mitad del año. En mayo de 1987, por ejemplo, los soldados capturaron a dos dirigentes del sindicato de trabajadores del café y los mantuvieron incomunicados por tres semanas. La respuesta de los trabajadores fue declararse en huelga en 18 plantas de procesamiento de café.<sup>30</sup> Más inquietante fueron los disparos de la policía sobre una manifestación de protesta de trabajadores de la seguridad social en julio, que dejó al menos a 15 personas heridas. Al día siguiente, la UNTS llevó a cabo una huelga de protesta con la participación de 18 sindicatos que representaban a 60 000 obreros.<sup>31</sup>

Muchos conflictos laborales se alargaron de un año para otro, en tanto que los sindicalistas abatidos volvían a levantarse para exigir el reconocimiento de su sindicato y la reincorporación de sus compañeros despedidos. Estos conflictos aparentemente inde-

<sup>29</sup> Mark Anner y Tracy Fitzsimmons, "Civil Society in a Postwar Period: Labor in the Salvadoran Democratic Transition", en *Latin American Research Review*, vol. 34, núm. 3, 1999, pp. 110 y 111. Citan a un dirigente obrero de izquierda: "Nosotros formamos a los activistas para que realizaran sabotajes y movilizaciones, no para dedicarse a una actividad de organización sostenida". *Ibid.*, p. 111.

<sup>30</sup> Cartagena, *op. cit.*, p. 292; "El movimiento laboral atenuado", en *Estudios Centroamericanos*, vol. 42, núms. 463 y 464, mayo-junio de 1987, p. 347.

<sup>31</sup> "Police Shoot Strikers, Unrest Grows", en *Central America Report*, 17 de julio, 1987.

finidos ocurrían principalmente en las instituciones autónomas del Estado, tales como ANTEL (telecomunicaciones), el ISSS (clínicas y hospitales) y ANDA (acueductos y alcantarillados). Los trabajadores de las plantas hidroeléctricas, para poner un ejemplo importante, habían estado a la cabeza del auge obrero hacia fines de la década de 1970. En 1980, la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno (en adelante JRD) había encarcelado a su dirigencia y disuelto el Sindicato de los Trabajadores Eléctricos (en adelante STECEL) por la fuerza. A partir de 1986, el sindicato había tratado de reconfigurarse legalmente como una asociación. Durante dos años, la empresa estatal se negó a reconocer la asociación amparándose en la disposición constitucional que prohibía la organización sindical de los trabajadores de los servicios públicos. El 15 de junio de 1987, los trabajadores de la hidroeléctrica se fueron a la huelga exigiendo el reconocimiento de la asociación y la reincorporación de 53 compañeros que habían sido despedidos a causa de su activismo sindical. Los efectos de la huelga fueron dramáticos porque los trabajadores no repararon en los daños a la infraestructura causados por los sabotajes de la guerrilla.<sup>32</sup>

El general Jaime Abdul Gutiérrez, un miembro de la JRG cuando disolvió al STECEL, era el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (en adelante CEL). Afirmó que el sindicato era ilegal y que actuaba bajo las órdenes del FMLN. Un equipo estadounidense dedicado a investigar la situación laboral en El Salvador informó:

El 25 de junio, siete líderes de la huelga del departamento de Ahuachapán fueron capturados por tropas del ejército quienes los entregaron a la Policía Nacional, donde fueron esposados. Cuando se

<sup>32</sup> *Proceso*, 18 de enero, 1989.

rehusaron a firmar declaraciones que vinculaban a la ATCEL al FMLN, fueron golpeados. Los comandantes militares locales amenazaron a los huelguistas de ATCEL con detención o desaparición.<sup>53</sup>

La exigencia de que firmaran un documento que vinculaba a los trabajadores con la guerrilla es un reconocimiento notable del agotamiento del marco ideológico imperante. Dicho en pocas palabras, la mayoría de autoridades políticas y militares solamente podían entender el activismo obrero en función de la guerra. Sin embargo, el coronel Mauricio Ernesto Vargas, el jefe de operaciones del ejército, expresó su desacuerdo. Al referirse a los huelguistas, afirmó que “Ellos tienen necesidades insatisfechas y pueden ser utilizados para generar violencia, pero no es cierto decir que estos grupos son comunistas”.<sup>54</sup> La huelga se mantuvo por más de un mes hasta que una comisión de la Asamblea Legislativa prometió estudiar y resolver los problemas en cuestión.

Es difícil medir con precisión los efectos de las huelgas y el sabotaje en la economía salvadoreña o en la popularidad de Duarte. En términos similares, no existen raseros claros para medir la fuga de capitales u otras formas de resistencia desde la derecha.<sup>55</sup> Dos asuntos son evidentes: en primer lugar, las condiciones so-

<sup>53</sup> En 1980, Jaime Abdul Gutiérrez era integrante de la JRG que supervisó el encarcelamiento de los dirigentes de STECEL (el sindicato de los obreros de la hidroeléctrica) y la disolución de su sindicato. National Labor Committee in Support of Democracy and Human Rights in El Salvador (NLC), *Labor Rights Denied in El Salvador: An On-Site Investigation by a Delegation of Labor-Legislative-Religious Leaders*, El Salvador/Nueva York, Labor Campaign, diciembre de 1988, p. 12.

<sup>54</sup> Citado en “The Army and Politics”, en *Central America Report*, 21 de agosto, 1987.

<sup>55</sup> Algunos estimados hablan de 5 mil millones de dólares en fuga de capitales privados de El Salvador entre 1978 y 1981. Véase Walter LaFeber, *In-*

cioeconómicas para el promedio de la población salvadoreña no habían mejorado durante los primeros cuatro años del gobierno de Duarte. Entre un 45 y un 50% de la población estaba desempleada o subempleada. La inflación se mantuvo a más de un 30% por año y los salarios reales no se habían recuperado desde su caída brusca a comienzos de la década de 1980. En segundo lugar, Duarte no intentó profundizar deliberadamente las reformas agraria y financiera de 1980. Su falta de apoyo a las intenciones originales de las reformas contribuyó directamente a su fracaso relativo. Ambos el FMLN y la derecha oligárquica se sintieron complacidos por el repliegue de Duarte. Para la oligarquía, el debilitamiento de las reformas protegía sus intereses y, para el FMLN, los límites impuestos a la reforma agraria debilitaron la estrategia contrainsurgente.

Debido en gran parte por un repudio a Duarte, el partido ARENA de derechas obtuvo una rotunda victoria sobre los Demócrata Cristianos (en adelante PDC) en las elecciones legislativas y municipales de marzo de 1988. Su cuota importante de poder político no contribuyó en nada a disminuir la represión antisindical.<sup>36</sup> Esa represión, junto a la continuación de la guerra civil y la insistencia de las bases obreras a favor de la solidaridad intersindical, presionaron lentamente al movimiento obrero en dirección a la unidad.

Luego de la implosión del apoyo obrero y popular para Duarte, el partido ARENA ganó las elecciones presidenciales en marzo de 1989. Una facción modernizante del partido encabezada por Alfredo Cristiani asumió las riendas del poder. La derrota electoral del PDC se debió en parte a la creciente apatía y resentimiento

---

*evitable Revolutions: The United States in Central America*, 2ª ed., Nueva York, Norton, 1993.

<sup>36</sup> ARENA hizo muy pocos esfuerzos por ganarse el voto obrero en las elecciones de marzo de 1989.

en sus bases populares ante la negativa de Duarte para responder en términos positivos a las exigencias de los movimientos obrero y campesino. A pesar de las promesas de Cristiani de respetar la libertad de asociación y sus reuniones con todas las facciones del movimiento obrero, durante los dos primeros meses de su presidencia, la policía y los militares cometieron abusos contra 116 sindicalistas, siempre con el pretexto de que determinado sindicato o federación no era sino una “fachada” del FMLN empeñado en promover la subversión. Al mismo tiempo, el plan económico de Cristiani se encaminaba a lograr unas reducciones masivas del gasto público, sobre todo mediante despidos de funcionarios y la privatización de diversas instituciones públicas.<sup>37</sup>

Al verse enfrentados por la represión anti-obrera de ARENA, así como por su agenda neoliberal y su hostilidad declarada a la reforma agraria, los activistas obreros de todas las tendencias ideológicas comenzaron a acercarse en busca de la unidad. La UNOC, aliada con el PDC y la CLAT, comenzó a cuestionar lo que antes habían creído: la identidad compartida de la UNTS y el FMLN. Un dirigente de la UNOC afirmó simplemente, “Representamos tácticas de lucha diferente pero existe respeto mutuo. Cualquiera que diga que la UNTS es un brazo del FMLN está completamente equivocado”.<sup>38</sup> Ante este acercamiento entre los sindicatos, el gobierno de ARE-

<sup>37</sup> *Proceso*, núm. 394, 26 de julio, 1989, pp. 9 y 10.

<sup>38</sup> Vale la pena mencionar que Grande Preza, el dirigente de la CGT y asesor de Benítez, desligó a su federación de la UNOC a causa de sus vínculos cada vez más fuertes con la UNTS. Sin embargo, el dirigente de la CGT sufrió una pérdida de prestigio debido a su incapacidad para ganar o negociar la huelga del SGTIPAC. NLC, *Labor Rights Denied in El Salvador*, p. 15. Véase US Embassy, “El Salvador, 1989-1990”, en *Foreign Labor Trends*, 1990, p. 12.

NA comenzó a utilizar el epíteto de “grupo de fachada del FMLN” cuando se refería a la UNOC.<sup>39</sup>

La UNOC, la UNTS, y otros grupos obreros se reunieron y redactaron una resolución conjunta que denunciaba al gobierno de ARENA por su carácter “anti-popular”.<sup>40</sup> En palabras de otro activista de la UNOC, el principal logro del nuevo gobierno fue unir al movimiento obrero:

Durante el primer año del gobierno de Cristiani, sindicalistas, cooperativistas y trabajadores han sido asesinados y desaparecidos con impunidad. Las fuerzas armadas han incrementado sus capturas arbitrarias e ilegales de gente trabajadora así como los cateos ilegales y el acoso constante de los lugares de trabajo y las casas de los dirigentes obreros.<sup>41</sup>

En el primer año de gobierno de ARENA, las autoridades capturaron a 633 activistas sindicales, muchos de los cuales fueron torturados; 30 desaparecieron. Las fuerzas armadas montaron 26 operaciones en contra de oficinas sindicales. En retrospectiva, sin embargo, semejantes acciones no fueron sino ensayos de un solo acto de terror. El 31 de octubre de 1989, cerca del mediodía, mientras trabajadores, activistas sindicales y otros almorzaban en la cafetería de la sede de FENASTRAS, una bomba poderosa destruyó el edificio, matando a diez personas, incluyendo a Febe Velásquez.

<sup>39</sup> Grande Preza, siempre leal al AIFLD, se salió de la UNOC para formar un nuevo grupo. Véase entrevista con el autor, José Luis Grande Preza, San Salvador, 2014.

<sup>40</sup> *Proceso*, núm. 397, 23 de agosto, 1989, p. 9.

<sup>41</sup> NLC, *El Salvador 1990: ARENA Repression Unites the Salvadoran Labor Movement*, Labor Campaign, El Salvador/Nueva York, septiembre de 1990, p. 3.

Este acto de terrorismo de derecha representó la culminación de una campaña bipartidista que por años había equiparado a los activistas sindicales con la subversión.

El bombarzo en FENASTRAS fue el pretexto que difundió el FMLN para lanzar una ofensiva el 11 de noviembre que afectó hasta los barrios de la exclusiva zona residencial de Escalón. Sin embargo, la ofensiva no provocó una insurrección de masas. Tanto el FMLN como el gobierno y la embajada de Estados Unidos se convencieron de que una paz negociada era la única opción viable. Durante la ofensiva, una unidad militar ingresó a las instalaciones de la Universidad Centroamericana y asesinó brutalmente a seis académicos jesuitas, su ama de llaves y su hija. Ignacio Ellacuría, un analista brillante de los movimientos populares y uno de los principales proponentes del proceso de paz, fue el blanco principal de este escuadrón de la muerte. En los días anteriores a la ejecución, el vicepresidente de la República había acusado a Ellacuría de haber “envenenado las mentes de la juventud de la nación” y un oficial de alto rango del ejército calificó a la universidad como un “refugio de los líderes terroristas”.<sup>42</sup>

La década concluyó con un movimiento obrero mayormente unido pero golpeado y debilitado, y un gobierno de derechas comprometido plenamente con el alcance de la paz y la implementación de un conjunto de políticas neoliberales. El gobierno de ARENA también tenía las manos manchadas con sangre fresca: 10 militantes de FENASTRAS y los intelectuales jesuitas, 16 personas de

<sup>42</sup> Citado en Teresa Whitfield, *Paying the Price: Ignacio Ellacuría and the Murdered Jesuits of El Salvador*, Philadelphia, PA, Temple University Press, 1995, pp. 307, 329.

gran valor y conocimientos que podrían haber apoyado una transición más justa, pacífica y equitativa que dejara atrás la guerra.

Como veremos, la década terminó en Puerto El Triunfo en una situación igualmente oscura, aunque mucho menos sangrienta.

## 7. LA HUELGA MÁS LARGA DE LA HISTORIA

Todo o nada, ese era su verso.

ANA ALVARENGA

“¡Que nos den 75% de fuego a todo!

¡Está lista la gasolina!”

RUPERTO TORRES

(recordando la negociación final).

Las crisis son momentos de la verdad. Ponen de manifiesto los conflictos que en la vida cotidiana están enterrados bajo las normas y las rutinas del protocolo social, detrás de los gestos automáticos de las personas, sin que le dediquen pensamiento sobre su significado y finalidad. En dichos momentos, quedan expuestas las contradicciones que subyacen la retórica de la armonía social, el consenso, la hegemonía o el control.

EMILIA VIOTTI DA COSTA

Después de haber comprendido las advertencias y la condición de los estados financieros, en marzo de 1987 el señor Josel Morán Olmos renunció como gerente general de Pezca después de cinco años en dicho cargo. Cuando el Banco Agrícola Comercial (en adelante BAC) intervino la empresa en mayo de 1987, los indicios de una crisis severa de liquidez estaban por doquier. Los tiempos de comida subsidiados para los empleados de oficina, que vivían allí fueron suspendidos y solamente se servían alimentos marinos.<sup>1</sup> La empresa dejó de entregarle camarón a sus trabajadores sindicalizados como bono mensual. Todavía más grave, hacia abril solamente 10 de los 32 barcos camaroneros de la empresa estaban funcionando; los demás estaban fondeados a causa de una falta de dinero para su mantenimiento. La empresa comenzó a despedir y cesar a marineros y dejó de pagar a tiempo salarios a todos sus trabajadores. Entre enero y junio de 1987, la producción mensual de toda la industria camaronera bajó de 136 a 26 toneladas métricas mientras que el número de barcos camaroneros fondeados aumentó de 37 a 78.

Benítez y la dirigencia del Sindicato Agua (en adelante SGTIPAC) emitieron una declaración pública en la cual analizaron la crisis en Pezca dentro de su marco populista radical:

La Administración fraudulenta de Pezca S.A. [es la] causa de la quiebra que pretende dar a creer ante el pueblo salvadoreño porque los trabajadores ya no estamos dispuestos a pagar los platos que quiebran los niños de la empresa privada afiliados a la Derecha recalcitrante,

<sup>1</sup> Ivette Bará fue subgerente de personal en Pezca S. A., durante los primeros seis meses de 1987. Ivette Bará, comunicación con el autor, 2017.

y culpable del dolor que hoy en día sufrimos [...] con esta Guerra que originó la injusticia social que tantos años fomentaron estos señores.<sup>2</sup>

Más allá del desprecio hacia los niños ricos derechistas que se hacen pasar por propietarios, el pronunciamiento vincula el mal manejo y la actividad fraudulenta de la empresa con la ideología antisocial de la derecha. Para el Sindicato Agua, su identificación y prácticas ideológicas de derechas —junto con el resto de la oligarquía— eran la causa primordial de la guerra civil y sus consecuencias. El Sindicato Agua hizo un llamado al gobierno para que investigara el fraude, pero, al mismo tiempo, cuando dice que la administración “pretende dar a creer ante el pueblo salvadoreño”, está insinuando que la crisis de liquidez de Pezca y su quiebra inminente fueron, hasta cierto punto, inventadas.

Su argumento puede describirse en los siguientes términos. El Sindicato Agua había luchado duro para lograr unos resultados buenos para sus afiliados. Ahora, debido al fraude y los malos manejos, la empresa se enfrentaba a cierta dificultad financiera. Sin embargo, Pezca intentaba resolver sus problemas no solamente incumpliendo con sus obligaciones contractuales, sino quebrando al sindicato mediante la creación de un sistema de subcontrataciones.<sup>3</sup>

Para el Sindicato Agua, el sistema de subcontrataciones fue diseñado, en parte, para quebrar al sindicato, y cada medida que tomó la empresa abonaba al logro de sus propósitos. En efecto, los capitanes se convertirían en los empleadores de cuatro trabajadores. Las empresas camaroneras ya no tendrían una gerencia, mu-

<sup>2</sup> “Comunicado de prensa de SGTIPAC afiliado a CGT, Mauricio Ascencio Benítez”, 12 de junio, 1987 (Archivo del SGTIPAC, en manos del autor).

<sup>3</sup> “Carta de SGTIPAC al Ministerio de Trabajo y la Corte Suprema”, Archivo del SGTIPAC, carta, 29 de febrero, 1988, pp. 8 y 9.

cho menos Pezca S. A. En tales condiciones, sería prácticamente imposible conservar la integridad del sindicato.

La desesperación económica de los eventuales fue el problema clave que explica la militancia del Sindicato Agua. La región oriental de El Salvador padecía las tasas de desempleo más altas del país y la inflación aumentaba el hambre de la gente (ambos índices superaban el 30%). Puerto El Triunfo se había convertido en un punto de reunión de refugiados de la guerra, de los cuales hubo entre 1 500 y 3 000 en el transcurso de la década. La mayoría de los hombres refugiados buscaron trabajo en la única industria del Puerto y engrosaron las filas de eventuales de tierra y mar, contribuyendo así a agudizar la situación laboral. Benítez, un eventual, siguió encabezando casi como líder profético a unos seguidores entre los marineros eventuales entre quienes resonaba su retórica populista radical. Un sistema de subcontratación exitoso socavaría ese apoyo, trastornaría la coherencia organizativa del sindicato, y enfrentaría entre sí a los dos sectores de los marineros.

El discurso público de Pezca sugiere que el plan de subcontratación no tenía nada que ver con un ataque al sindicato. Más bien, el vocero de la empresa se refirió al tema ausente del discurso del Sindicato Agua: “la movida” era en realidad el objetivo del nuevo sistema. El problema se había agravado. Cualesquiera haya sido el motivo de Escalón para otorgar un salario diario garantizado en 1985, no había logrado nada en términos de reducir las ventas ilegales. Ya en 1986, un informe de la embajada de Estados Unidos afirmaba que “la corrupción está llevando a Pezca a la quiebra y ha causado el despido de la mitad de los trabajadores de la planta”.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> US Embassy to Secretary of State, “Crisis in the Shrimp Industry”, 22 de marzo, 1985, San Salvador, 6659, r221606z, núm. 6659, case, en Freedom of Information Act del US Department of State, Washington, DC.

Aunque la mayor parte del camarón terminaba en países vecinos o en los restaurantes salvadoreños, las ventas ilegales seguramente explican en gran medida la discrepancia entre los 6.42 millones de libras de camarón exportado, según el gobierno salvadoreño, y la cantidad de 8.17 millones de libras de camarón salvadoreño importado a Estados Unidos, según un informe del Departamento de Comercio de ese país. Un estudio del gobierno en 1990 afirmó que: “El robo de los productos llegó a una magnitud inimaginable [...] exacerbado por aquellos que habían sido asignados a pararlo.”<sup>5</sup>

La gerencia de Pezca le solicitó a la dirigencia del Sindicato de la Industria Pesquera (en adelante SIP) que participara con ella en una comisión informal para estudiar las formas de controlar “la movida”. También lograron que la Marina Nacional apoyara la investigación (a pesar de las fuertes sospechas sobre su involucramiento en dicha actividad). Es de suponerse que la dirigencia del SIP entendió las implicaciones de su participación en la comisión, lo cual se traduciría en una intensificación de su antagonismo hacia el Sindicato Agua. Es más, la subcontratación era la solución obvia para las ventas ilegales. Pero se corría el riesgo de que la subcontratación erosionara la base de afiliados del SIP en la flota pesquera, tal como había ocurrido en Atrarraya (la otra empresa camaronera que quedaba en el Puerto). En pocas palabras, la dirigencia del SIP estaba dispuesta a actuar como un sindicato de empresa, tal y cual las acusaciones del Sindicato Agua, para proteger a sus afiliados, muchos de los cuales dependían de cuotas de

<sup>5</sup> Esta cifra no incluye el robo de algunos barcos camaroneros, un problema cada vez más grave a fines de la década de 1980 y comienzos de la de 1990. De acuerdo con una nota publicada por *El Diario de Hoy*, 30 de agosto, 1992, las pérdidas debido a “robo” (de ambos tipos) sumaban más de 15 millones de dólares al año.

producción; todos los trabajadores de la empacadora dependían, por supuesto, de la supervivencia de la empresa. Escalón prometió reiteradamente al BAC que acabaría con el problema de las ventas ilegales mediante la implementación del nuevo sistema de subcontrataciones. No existe sino evidencia anecdótica de la empresa Atrarraya que sustente esta afirmación. El capitán, como arrendatario y empleador, desarrollaría unos intereses materiales específicos que lo distanciarían de la tripulación y así se podría anular “la movida”, que siempre había dependido de la unanimidad del capitán y la tripulación.

La posición en público de la compañía también ignoró su propio papel en su colapso, específicamente que el fracaso en utilizar y reembolsar el grueso de los más de 20 millones de dólares en préstamos impidió que se consiguieran los créditos necesarios para reparar y activar la flota de nuevo. Es más, Pezca no estaba en capacidad de pagar a los marineros la cantidad considerable de dinero que se les debía. La obligación contractual de la empresa de pagarles el 80% de sus salarios cuando no podían trabajar, porque los barcos estaban en mantenimiento aumentó esa suma. El fraude cometido contra el BAC no le dejó alternativa a Pezca: la falta de crédito, las ventas ilegales y la escasez del camarón blanco de alto precio (debido a la sobre pesca y la contaminación) obligaron a la empresa a imponer el sistema de subcontrataciones. Por lo tanto, terminaron echando a la calle a marineros permanentes y debieron enfrentar la furia de Benítez y el Sindicato Agua quiénes, para junio, ya estaban amenazando con declarar una huelga.

A pesar de que tenían pocos conocimientos sobre el otro “robo” en Pezca, la dirigencia del SIP le ofreció su apoyo a la empresa y enfrentó directamente a los marineros: “Estamos conscientes que las Empresas [...] atraviesan actualmente una situación económi-

ca precaria por la falta de financiamientos y a estos agregándoles el contrabando del camarón en alta mar [...]”.<sup>6</sup> También dijeron que Marlena Posada, la presidente en funciones del BAC, intentaba trabajar con Benítez para crear la cooperativa en Pezca. A la vez, estaba reteniendo el pago de salarios para los trabajadores de la planta y los marineros.<sup>7</sup>

En la medida de que se dieron cuenta del colapso de la industria, la dirigencia del SIP optó por tomar partido por la empresa y los interventores del BAC en vez de los marineros, a quienes percibían con un antagonismo cada vez mayor. En una sesión de negociación el 12 de junio con el interventor, Raúl Marroquín, el SIP se quejó sobre los salarios no pagados y la retención de cinco meses de cuotas sindicales. Marroquín respondió que la falta de liquidez extrema de la empresa se debía al contrabando generalizado, a las deudas de la empresa y a la gran cantidad de licencias de pesca.<sup>8</sup> Afirmó que estaban tratando de aumentar las exportaciones, y que los salarios serían una primera prioridad —especialmente los de los trabajadores de la planta. A pesar de su resentimiento hacia la compañía, expresado en privado y en público, aceptaron los argumentos de Pezca.<sup>9</sup> Por cierto, en una serie de cartas enviada hacia fines de julio, el SIP apoyó totalmente “el nuevo modelo de producción [...] que representa ventajas económicas para el

<sup>6</sup> “Carta Abierta, SIP,” campo pagado, en *El Diario de Hoy*, 29 de julio, 1987.

<sup>7</sup> *Loc. cit.*

<sup>8</sup> No se entiende por qué el gobierno otorgó licencias más allá del límite tradicional de 72 en Puerto El Triunfo. Posiblemente haya sido una medida para incrementar la producción, pero probablemente haya estado asociada con corrupción.

<sup>9</sup> “Acta de Reunión entre Pezca y SIP”, Archivo General del SIP, Puerto El Triunfo, Usulután, El Salvador, 12 de junio, 1987.

sector laboral, las cuales ya estamos recibiendo al estar actualmente operando aproximadamente 30 embarcaciones pesqueras bajo este nuevo plan”.<sup>10</sup>

Aunque simpatizaban con los objetivos revolucionarios en juego, la dirigencia del SIP rechazó constantemente la expropiación de la industria que proponía el Sindicato Agua y su reemplazo por una propiedad y administración como cooperativa. Es más, la dirigencia del SIP estaba dispuesta a aceptar el nuevo plan de subcontratación que proponía la gerencia para sus marineros afiliados en la empresa Atarraya. En última instancia, la dirigencia de izquierdas percibió que la estabilidad de la empresa era su prioridad.

Es notable cómo los diferentes tipos de silencio intensificaron el desencuentro entre la dirigencia de los dos sindicatos. En el Capítulo 4, analizamos cómo el silencio en torno a “la movida” dificultó la comunicación entre los trabajadores de planta y los marineros. La crisis de liquidez y los preparativos de huelga del Sindicato Agua obligaron a la dirigencia del SIP a violar lo que había sido un entendimiento subalterno implícito: uno no se echa para atrás cuando se trata de compañeros de clase.

Las denuncias públicas del SIP en torno a “la movida” y su participación en la comisión encargada de investigar dicha práctica provocaron una respuesta de la dirigencia del Sindicato Agua de una agresividad verbal y hasta física nunca antes vista. Ricardo Jovel, a pesar de su relación de trabajo y hasta de amistad con el líder del Sindicato Agua, declaró: “Hacemos responsables a Fidel Ángel Chávez y Mauricio Benítez [...] de la integridad y segu-

<sup>10</sup> Parece que el SIP se estaba refiriendo a Atarraya. “SIP al Cmdt. Jiménez Aguilera”, carta del 26 de julio, 1987 (Archivo virtual del SIP, en manos del autor).

ridad personal de todas las personas que laboramos [...] ya que nada tenemos que ver con el conflicto de SGTIPAC [...]”. Jovel entonces afirmó que algunos militantes del Sindicato Agua habían golpeado a un miembro del SIP y proferido amenazas de muerte a la dirigencia del SIP.<sup>11</sup>

Jovel y sus compañeros también se mantuvieron callados acerca del fraude y las malas prácticas de la gerencia, que habían conducido a la empresa hasta el borde de la bancarrota. Además, la dirigencia del SIP aceptó lo que llamó el “nuevo modelo económico de producción”, sin reconocer públicamente sus implicaciones, no solamente por su ataque al Sindicato Agua, sino a todas las formas de sindicalización en alta mar.

Durante el mes de julio, los niveles de tensión entre los sindicatos se agudizaron junto con la interrupción de las negociaciones entre el Sindicato Agua y Pezca, que para entonces había pasado a estar bajo el control nominal del BAC. Para el Sindicato Agua, el comportamiento del SIP confirmó su propio análisis populista de la coyuntura política: la dirigencia de la izquierda estaba confabulando con la derecha oligárquica para subvertir los derechos de los trabajadores. La campaña del SIP contra la huelga en ciernes sólo confirmó ese análisis.

Por cierto, los dirigentes del SIP se preocuparon tanto por la huelga que solicitaron la intervención de los militares para que protegieran las instalaciones de la planta y a ellos mismos de los huelguistas. En varias oportunidades les pidieron a las autoridades que intervinieran para parar la huelga. El 20 de julio de 1987 enviaron una carta a Eugenio Vides Casanova, el ministro de defen-

<sup>11</sup> Ricardo Jovel y SIP, “Carta Abierta”, en *El Diario de Hoy*, 29 de julio, 1987.

sa, quien había sido jefe de la Guardia Nacional de 1979 a 1983, el periodo de las peores violaciones a los derechos humanos. Los dirigentes del sindicato sabían que sus manos estaban teñidas de sangre: “Por lo tanto pedimos a Usted su colaboración, de que si en un momento dado se llevara a cabo dicha huelga sería selar [sic] el orden para no entorpecer nuestras labores”.<sup>12</sup> Hicieron llegar su petición para una intervención a este hombre considerado por muchos de ser un criminal de guerra, sin darse cuenta de la ironía de que su propio sindicato había sufrido una represión letal a comienzos de la década. Como era de esperarse, los huelguistas del Sindicato Agua percibieron a los miembros del SIP como rompehuelgas.

El 26 de julio, el Sindicato Agua se fue a la huelga contra Pezca y sus cinco empresas camaroneras aliadas debido a violaciones del contrato colectivo, en tanto que la empresa ponía fin a sus operaciones, especialmente el incumplimiento del pago de indemnizaciones a 27 marineros que habían sido despedidos por la compañía. De mayor importancia fue la considerable cantidad de dinero adeudada por la compañía a todos los marineros bajo su obligación contractual de pagar un 80% del salario diario cuando las operaciones de mantenimiento de los barcos impedían que los marineros trabajaran.

El contrato también consideró el pago de salarios atrasados. El lema de Benítez — “LO CONQUISTADO NO SE ENTREGA” — resume la postura del sindicato en el sentido de que no renunciaría a las prestaciones que había ganado con tanto esfuerzo, a pesar de la aparente incapacidad de la empresa de hacerlas efectivas. Al acer-

<sup>12</sup> SIP y Subseccional Pezca al general Carlos Eugenio Vides Casanova, Archivo General del SIP, carta, 20 de julio, 1987.

Marineros descargando camarón



Foto: cortesía de Mario Sáenz.

carse la huelga, Benítez y los demás dirigentes del Sindicato Agua no se refirieron en público a su objetivo de crear una cooperativa. Pero es difícil imaginarse que esperaban una resolución favorable de su huelga, porque solamente una inyección masiva de fondos del gobierno o la banca habrían de permitirle a la empresa cumplir con las exigencias del sindicato. Quizá suponían que una propiedad cooperativa sería el fruto de sus luchas, una expectativa muy difundida entre los eventuales, quienes entendieron que era la única manera de superar su propia situación precaria. Si los planteamientos del SIP eran correctos, al menos una persona clave

en el BAC, vinculada a la Democracia Cristiana, estaba abogando por semejante desenlace.<sup>13</sup>

En vista de que Benítez había respetado escrupulosamente el procedimiento complicado establecido por el Código de Trabajo, logró una sentencia judicial a favor del sindicato, quizá facilitada debido a sus relaciones cordiales con el gobierno de Duarte. Los vínculos de Benítez se habían fortalecido gracias a su elección al cargo de secretario de conflictos de la Confederación General del Trabajo (en adelante CGT), una central obrera afín a la Democracia Cristiana. Ésta era la primera huelga legal en el país desde 1984. La legalidad de la huelga resultó ser extremadamente importante, tanto en términos propagandísticos como por la obligación del Ministerio de Trabajo de promover unas negociaciones. Es más, las empresas tenían que pagar salarios por ley mientras durara la huelga. Al prolongarse la huelga mes tras mes, lo que se le debía a los trabajadores seguía aumentando. Benítez y sus compañeros utilizaron esa deuda como una poderosa pieza de negociación: o la empresa negociaba las demandas y entregaba los salarios atrasados y los correspondientes a los días de huelga o el gobierno debía obligar a la empresa y al BAC para que entregaran las compañías al sindicato como compensación.

Poco después de que el tribunal falló a favor del Sindicato Agua, los piqueteros del sindicato se enfrentaron inesperadamente a la tropa de la marina “bajo el pretexto de que los huelguistas estaban intentando tomarse la planta”.<sup>14</sup> Los huelguistas detuvie-

<sup>13</sup> Marlena Posada no trabajaría en el BAC más allá del año y su apoyo a la cooperativa no era compartido por el resto de los directivos del banco.

<sup>14</sup> Los funcionarios de la embajada viajaron al Puerto para investigar una denuncia de violencia anti-obrera que presentó America's Watch. Curiosamente, Benítez y los otros presentaron una versión de los hechos que le restaba

ron a un camión de carga propiedad de la infantería de marina de Estados Unidos como parte de sus acciones para paralizar todas las operaciones de las empresas.<sup>15</sup> Aunque soltaron de inmediato al motorista y sus pasajeros, el sindicato denunció que la tropa naval había “provocado y golpeado” a sus piqueteros.<sup>16</sup> Más tarde, la versión del incidente presentada por el sindicato lo calificó como un “altercado menor” provocado cuando la empresa engañó a los militares. En esta versión presentada a un funcionario de la embajada de Estados Unidos, la empresa había pedido la intervención de los militares bajo falsos pretextos. De todas maneras, el sindicato aceptó que los trabajadores de la planta continuaron en sus labores y que los camiones de carga entraran y salieran de las instalaciones. Permitió que los trabajadores de la planta siguieran procesando el camarón de otras cinco empresas, incluyendo Productos Pesqueros cuyos trabajadores y marineros pertenecían al SIP.

Cuando el Sindicato Agua inició la huelga, parecía que estaba relativamente bien parado, a pesar de la oposición implacable del SIP. Marlena Posada, como se mencionó, les dio esperanzas a los afiliados de que el BAC trabajaría con ellos para crear una cooperativa. Es más, el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (en adelante AIFLD) les apoyaba fuertemente. A

---

importancia a cualquier conducta irregular por parte de los militares, muy diferente a su versión original. US Embassy to Secretary of State, “Shrimp Workers’ Strike in Puerto El Triunfo”, 26 de julio, 1988, o26051z, en Freedom of Information Act del US Department of State; *La Prensa Gráfica*, 26 de agosto, 1987.

<sup>15</sup> Los infantes de marina supuestamente estaban en misión para obtener provisiones.

<sup>16</sup> Campo pagado, “La CGT condena inoperancia del Ministerio de Trabajo”, en *El Diario de Hoy*, 13 de noviembre, 1987.

pesar de que el AIFLD no podía legalmente entregar fondos al sindicato, se las ingeniaron para trasladarles 1 600 dólares mensuales por medio de un programa educacional.<sup>17</sup> El Sindicato Agua también recibió apoyo limitado de otras organizaciones obreras internacionales tal como la Central Latinoamericana de Trabajadores (en adelante CLAT).

A pesar de las buenas relaciones de la CGT con el Ministerio de Trabajo y el gobierno de Duarte, los activistas del sindicato se sintieron decepcionados por sus aliados políticos. En octubre, la CGT y el Sindicato Agua denunciaron al comandante de la fuerza naval (quien tenía acciones en Pezca, según el sindicato) por su intención de quebrar la huelga al permitir el ingreso de barcos con combustible a Puerto El Triunfo con el objetivo de reiniciar las operaciones de pesca en las empresas en huelga.<sup>18</sup> En octubre, la empresa giró una propuesta al Sindicato Agua por medio del Ministerio de Trabajo que consideraba el pago del 70% de lo adeudado a los trabajadores y un 70% de las indemnizaciones debidas a todos los trabajadores de las empresas camaroneras. Las empresas entonces estarían en libertad de comenzar sus operaciones de nuevo e implementar el sistema de subcontrataciones.<sup>19</sup> Como era de esperarse, la CGT y el Sindicato Agua rechazaron la propuesta porque ellos “no se fueron a la huelga por indemnizaciones”,

<sup>17</sup> El dinero se entregó como un estipendio a los dirigentes del Sindicato Agua para que participaran en programas educativos. Lo emplearon para comprar alimentos para los huelguistas. Entrevista con Ruperto Torres, Puerto El Triunfo, febrero de 2017. Francis Scanlon (antiguo agregado laboral de Estados Unidos), conversación telefónica con el autor, 2014; Norman Schipull (antiguo director de AIFLD en El Salvador), comunicación electrónica con el autor, 17 de septiembre, 2014.

<sup>18</sup> *Diario Latino*, 20 de octubre, 1987.

<sup>19</sup> Campo pagado, “La CGT condena inoperancia del Ministerio de Trabajo”.

sino para que la empresa respetara su contrato y para impedir el plan de subcontrataciones. Exigieron que el Ministerio de Trabajo interviniera en las negociaciones para aminorar la injusticia social que se había agudizado a causa de la mentalidad mezquina de los sectores derechistas”. Los sindicatos también le pidieron al gobierno de Duarte que ordenara el retiro de los militares del conflicto.<sup>20</sup>

Al pintar su lucha en términos populistas, la dirigencia del Sindicato Agua hasta denunció la presencia de propiedad extranjera en la empresa. De hecho, ningún extranjero era dueño de acciones en Pezca, aunque una compañía estadounidense sí era propietaria en parte de Atarraya. Es posible que algunos militantes del sindicato percibieran a los oligarcas como “extranjeros” debido a su color de piel diferente, su estilo de ropa y sus acentos al hablar, pero lo más probable es que esta aseveración no haya sido sino un ardid propagandístico. La declaración también reflejó un giro particularmente antimilitarista. Si bien se mostró claramente opuesto al FMLN, la retórica y las formas de lucha del Sindicato Agua no eran compatibles en absoluto con los perfiles discursivos del gobierno de Duarte (o de sus aliados estadounidenses). A pesar del cariz político de la actividad sindical, Benítez siempre recalcó la naturaleza apolítica de la lucha.

El rechazo por parte del Sindicato Agua de la oferta de la empresa era de esperarse; caso contrario habría sido una renuncia tanto de los objetivos de corto plazo, así como el propósito de establecer una cooperativa. En sus discursos, Benítez utilizó el lema de la huelga de 1985 —“Todo o nada”— que resonó fuertemente entre sus bases; éste era su llamado para rechazar cualquier oferta

<sup>20</sup> *Loc. cit.*

de la compañía que no atendiera el pago de la totalidad de lo que se le adeudaba a los trabajadores.<sup>21</sup>

La dirigencia del SIP sospechó que el objetivo último de la huelga era la cooperativa, una vez que el sindicato hubiera presionado a la empresa hasta hacerla quebrar. Supusieron que un trato con el gobierno de Duarte le permitiría al Sindicato Agua controlar la cooperativa. Pero lo que realmente pesó más fue que los miembros del SIP creyeron que el sindicato de marineros, motivado por el anticomunismo y el afán de lucro, había contribuido a la destrucción de su medio de vida. En una carta dirigida al Ministerio de Trabajo, en octubre de 1987, atacaron a Benítez: “ [...] le hacemos el principal responsable de: la destrucción de nuestra fuente de trabajo, la destrucción de un pueblo que vive de las empresas, de las reacciones personales e irracionales de cualesquiera de las partes cuando esto quede destruido”.<sup>22</sup>

La última frase resultó ser profética.

El antagonismo entre los dos sindicatos y la inercia del Ministerio de Trabajo dio lugar a que la dirigencia del Sindicato Agua ampliara la huelga. El 9 de diciembre de 1987, anunciaron una huelga en las cinco empresas camaroneras restantes afiliadas a Pezca. El SIP tenía el apoyo de los trabajadores y marineros en Productos Pesqueros del Mar, que a su vez ejercía un control administrativo sobre las otras empresas. Todas estas compañías, que

<sup>21</sup> Entrevista con Ana Paniagua, Virginia Reyes, Elsie Castellón, Carmen Parada, Maura de Zelaya, y Ovidio Granadeño, Puerto El Triunfo 2012-2014. El pago de salarios atrasados se explica por la cláusula del contrato colectivo de 1985 que obligaba al pago de un 80% del salario cuando los barcos camaroneros no podían zarpar debido a la responsabilidad de la empresa.

<sup>22</sup> SIP a Miguel Ángel Gallegos, Archivo virtual del SIP, carta, 2 de octubre, 1987.

operaban desde las instalaciones de Pezca, habían estado subcontratando sus operaciones con los capitanes de barco. El Sindicato Agua aumentó la presión al cerrar las operaciones que a su criterio eran violadoras de la huelga. Aún más importante, eran de la opinión de que Productos Pesqueros había sido creado como una artimaña mediante la cual Rafael Escalón descapitalizaría a Pezca y refundaría la empresa, lo cual le permitiría eliminar todas las prestaciones de jubilación de sus trabajadores. Benítez argumentó que el sindicato había estado tratando de negociar contratos colectivos con estas empresas camaroneras durante meses, y que había acatado los mismos procedimientos del Código de Trabajo para legalizar la huelga. Sin embargo, el tribunal departamental la había declarada ilegal. Después de esta derrota legal, el Sindicato Agua comenzó a ejercer fuerza coercitiva. De acuerdo con el testimonio de los trabajadores de Productos Pesqueros presentado ante el juzgado de lo civil de Usulután:

Que el día 30 de Diciembre 1987 a las 5:30 horas un grupo de sindicalistas afiliados a SGTIPAC dirigidos por el sr. Mauricio Ascencio Benítez [...] procedieron a irrumpir violentamente las instalaciones donde nosotros normalmente laborábamos para estas empresas; además golpearon y amenazaron con arma de fuego al vigilante [...]. Que a partir de los violentos incidentes y la toma del lugar donde operábamos, el SGTIPAC no nos deja entrar, ni laborar y hemos sido amenazados si intentamos trabajar.<sup>25</sup>

Bajo el razonamiento de que el Sindicato Agua no los representaba, los trabajadores del SIP exigieron una resolución judicial

<sup>25</sup> Empleados de Productos Pesqueros al juez de lo civil de Usulután, Archivo General del SIP, carta, 8 de enero de 1988.

que les permitiera trabajar en los muelles y los barcos. A pesar del ingreso violento a la planta, los huelguistas del Sindicato Agua no lastimaron a ninguno de los trabajadores del SIP. Los trabajadores de la planta entonces tomaron sus propias medidas al ocupar la planta y sus inmediaciones. Pusieron bajo llave las bóvedas refrigeradas donde se conservaba el camarón antes de procesarlo como medida de presión para que la compañía les pagara las seis semanas previas de trabajo. Sin embargo, la huelga sí paró el trabajo de producción en la planta. Al frente de la resistencia al Sindicato Agua y en defensa de sus medios de vida estaba la nueva dirigente, Ana Alvarenga.

#### ANA ALVARENGA Y EL SINDICATO TIERRA

La vida brutal de infancia y juventud de Ana Alvarenga la habían endurecido y preparado para dirigir el sindicato. Cuando se convirtió en Secretaria General de la subseccional del SIP, era una mujer valiente, enérgica e inteligente, dedicada a su familia y a su membrecía en el sindicato. Cuando tenía seis años de edad, su padre, un pescador artesanal, desapareció en alta mar. Eran nueve hijos y su madre tuvo que asumir la responsabilidad casi imposible de alimentarlos a todos. Su madre y algunos de sus hermanos encontraron trabajo en Pezca para poder subsistir. Cuando estaba en el tercer grado, se le encargó a Ana el cuidado de sus hermanos y la preparación de la comida para la familia. También tenía que llevar la comida a sus hermanos que trabajaban en las plantas. La presión que sentía era enorme. Uno de sus hermanos la golpeaba si no estaban listas a tiempo las tortillas o si les entregaba su almuerzo tarde. A pesar de que era una excelente estudiante, no pudo terminar la secundaria debido a sus responsabilidades fami-

liares. Las golpizas continuaron. Le dolían en su cuerpo y la marcaron psicológicamente. No podía superar una sensación de temor en su existencia cotidiana. Cuando alcanzó los 17 años, consiguió un trabajo en Pezca que le permitió dejar atrás sus obligaciones domésticas. Después conoció a un capitán de barco y después de un breve noviazgo se casaron. Al principio, el matrimonio pareció

Ana Alvarenga a comienzos de la década de 1980



Foto: cortesía de Ana Alvarenga.

liberador. Pero no por mucho tiempo. Durante 14 años no dejó de golpearla.

Durante la década de 1970, trabajó en la Planta II. Eventualmente, se le promovió a la Planta I donde trabajó clasificando camarón, un trabajo mucho menos pesado que pelando chacalín. Aunque participó en actividades del SIP, durante la huelga de 1979 cuando estaba en el octavo mes del embarazo de su primer hijo, Alejandro la mandó a descansar a su casa en vez de estar haciendo piquete. En la medida que el SIP se reorganizaba después de la represión de 1980 a 1983, Ana siguió participando en las reuniones. Comenzó a darse cuenta de la corrupción de algunos de los dirigentes de la subseccional de Pezca y denunció lo que había observado —a saber, reuniones no autorizadas entre algunos de los dirigentes del sindicato y la gerencia. A su manera de ver, esos dirigentes a menudo cedían ante la patronal y algunos de ellos también parecían más prósperos a medida que pasaba el tiempo. La dirigencia de la subseccional de Pezca era dominada por hombres. No obstante, algunos de ellos no eran corruptos y admiraban el valor de Ana. La postularon para un cargo de dirección y la asamblea del sindicato la eligió en mayo de 1987, justo antes de que empezara la huelga del Sindicato Agua.

La opinión de Ana sobre el Sindicato Agua fue similar al resto de la dirigencia. No percibió absolutamente ningún beneficio para los trabajadores de la empacadora. También tuvo que hacerle frente a los intentos del Sindicato Agua de ganarse a los miembros del SIP. Reconoció que el SIP había perdido afiliados debido a su corrupción y sus relaciones demasiado estrechas con la gerencia. Por ende, asumió posturas firmes contra la corrupción y dio a conocer públicamente todos los intentos de acercamiento hacia ella desde la gerencia. Sus planteamientos contra la corrupción, combinados

con sus actividades constantes a favor de la membrecía, persuadieron a algunos de los que se habían ido del sindicato para que volvieran; desde entonces, el SIP dejó de perder afiliados. Según recuerda: “Un hombre que antes había tratado de enamorarme y se había desafiado de SIP, se me acercó cuando fui elegida a la dirigencia y me dijo que el reconocía que yo era honesta y luchadora y que se iba a afiliarse de nuevo. A su vez otros regresaron con él”.<sup>24</sup> Siempre que fuera posible, Ana llevaba a sus hijos a las reuniones en San Salvador, para dar a entender su actitud hacia las normas de género imperantes. Pero también se estaba dando cuenta simultáneamente de su identidad como militante obrera. En septiembre de 1988, asistió a una conferencia de inspiración feminista en San Salvador que se dedicó específicamente a asuntos de mujeres incluyendo el abuso doméstico.<sup>25</sup>

Durante los primeros meses de la huelga, los trabajadores de la planta continuaron procesando camarones de Productos Pesqueros y algunas empresas afines. Tal como se describió previamente, en diciembre de 1987, el Sindicato Agua presionó a los marineros para que se fueran a la huelga en las empresas restantes y obligó a Productos Pesqueros a cerrar sus operaciones.

A comienzos de 1988, después de que la huelga del Sindicato Agua se había extendido, los afiliados de la subseccional de Pezca eligió a Ana para ocupar su más alto cargo, la secretaria general. Por primera vez, una mujer ocupaba dicho cargo en una subseccional del SIP. La primera medida que tomó fue la ocupación completa de la planta de Pezca con el propósito preciso de proteger y mantener la maquinaria y los predios. La ocupación se convirtió

<sup>24</sup> Ana Alvarenga, entrevista con el autor, Montreal, 2016.

<sup>25</sup> *Loc. cit.*

en un medio para presionar a la compañía para que le pagara a los trabajadores lo adeudado de las últimas seis semanas. Seguidamente, y por el tiempo que durara la huelga, el objetivo principal de la toma fue mantener en buen estado la maquinaria y las herramientas y protegerlas de actos de vandalismo o robo hasta el día en que se volviera a trabajar.

El SIP desplegó una forma clásica de militancia obrera salvadoreña en apoyo a objetivos tan inusuales. La toma de la planta tenía, en parte, unos objetivos neoliberales. Lo cierto es que el sindicato estaba presionando para que se aceptara el plan de subcontrataciones que había propuesto Pezca y la ocupación de la planta constituía un esfuerzo por conservar la posibilidad de un empleo. A nadie se le ocurrió cómo habrían de hacer los trabajadores para producir y procesar camarón —por ejemplo, alcanzando un arreglo con pescadores independientes. No obstante, la solidaridad que movilizó el SIP les pareció legítima, así como a la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (en adelante FENASTRAS). Estaban defendiendo años de mejoras en sus condiciones de trabajo y de vida arduamente conquistadas. Sobrevivieron gracias mayormente a las donaciones de la federación obrera y de diversas iglesias.

Con independencia de su objetivo, el carácter colectivo de la toma evoca en Altagracia Granadeña (la hermana de Ovidio) y otras personas un sentimiento de nostalgia.

Teníamos que defender nuestro trabajo. Pasamos bastante tiempo adentro. Nos traían las demás organizaciones —arroz, frijoles y maíz. Cocinábamos con una cocina de leña. Formamos grupos y nos turnábamos. Allí estábamos juntos con los hijos pequeños.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Altagracia Granadeño, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2014.

Los trabajadores de la planta, organizados por turnos, acampaban en un área justamente afuera de las edificaciones, donde todos se distribuían el trabajo equitativamente.

Los antiguos trabajadores de la planta reconocen el despliegue inusual de solidaridad obrera; parte de su justificación para tomar la planta como medida defensiva se derivó de la valoración de Mauricio Benítez. Siguió jalándose a miembros del SIP. Los activistas del Sindicato Agua trataban de convencer a los trabajadores de la planta: “Si conquistamos más afiliados vamos a ganar la huelga”.<sup>27</sup> Éste fue el periodo cuando el Sindicato Agua logró reclutar al mayor número de miembros del SIP. Antes de la elección de Ana, las sospechas de corrupción estaban en su punto máximo. Ana contribuyó a detener la fuga y probablemente no más de un 10% de los afiliados se cambiaron de sindicato. Ella y otros militantes del SIP menospreciaban a Benítez y su base de apoyo entre los eventuales, como personas que “sólo habían salido en uno o dos viajes” y que no eran marineros genuinos.

Hubo veces que los activistas del SIP intentaron establecer contacto con Benítez. Hemos visto cómo Ricardo Jovel había desarrollado una relación sensata con el dirigente del Sindicato Agua y apoyaba la idea de una cooperativa. Sin embargo, parte del problema era que Jovel no disfrutaba del apoyo unánime de las bases del sindicato ni de los demás dirigentes. A pesar de sus inclinaciones izquierdistas, muchos creían que se llevaba demasiado bien con la patronal, y algunos sugirieron que su aceptación de dádivas de pequeños montos de camarón y pescado representaba algún grado de corrupción. Semejantes insinuaciones fueron suficientemente preocupantes para que FENASTRAS lo quitara de su cargo en la fede-

<sup>27</sup> Ana Alvarenga, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2015.

ración. Algunas personas recuerdan que su distanciamiento del SIP fue reflejo de su necesidad de involucrarse en actividades clandestinas. Jovel sostiene que estaba sufriendo de migrañas graves (¿quién no en semejantes circunstancias?). De todas maneras, su salida en 1987 eliminó uno de los interlocutores de Benítez en el SIP. No obstante, conforme se extendía la huelga, el SIP comenzó a asumir una postura más beligerante frente a la compañía y, posteriormente, frente al BAC cuando la compañía se declaró en quiebra. También comenzaron a compartir sus alimentos con los huelguistas. Es más, ofrecieron cierto nivel de apoyo a la idea de la cooperativa. Rolando Franco recuerda la situación en los siguientes términos: “Algunos de nosotros comenzamos a coordinar ideas con los del sector agua, y sí estaba bien la idea de implementar una cooperativa, porque era la única forma que quedaba [...] el problema fue que en las primeras pláticas [...] lo que no me gustaba de Benítez es que el quería que nosotros le diéramos el poder a él.”<sup>28</sup>

Es aquí que la posibilidad de un movimiento obrero unido y el éxito de la cooperativa giraban en torno a la personalidad de Benítez. ¿Pero puede realmente atribuirse a su temperamento, descrito por Mena Lagos y la embajada de Estados Unidos como “ines- table” y “errático”? Quizá. ¿Fue acaso la profunda desconfianza propiciada por las alianzas de la Guerra Fría que se frustraron los esfuerzos por crear la cooperativa? ¿Y qué decir de la hostilidad femenina ante el estilo de vida machista de los marineros, y la actitud agresiva de éstos hacia el SIP como impedimentos para lograr la unidad?

Cuando el Sindicato Agua se declaró en huelga en Productos Pesqueros y otras empresas camaroneras, tomaron control de siete

<sup>28</sup> Rolando Franco, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2016.

barcos pesqueros. Estos barcos pronto se convirtieron en un importante tema en la disputa. Cuando el Sindicato Agua “incauto” los barcos, Escalón optó por trasladar el resto de su flota al puerto de La Unión. Sin embargo, el sindicato ejerció parte de la influencia que le quedaba en el gobierno de Duarte y persuadió al Ministerio de Agricultura para que impidiera el desembarco del camarón en La Unión. Las empresas entonces anclaron los barcos en la bahía, donde las tormentas y el vandalismo destruyeron la mayor parte de ellos en los meses subsiguientes. Esta pérdida encajó perfectamente con la narrativa de Escalón sobre cómo las huelgas politizadas impedían la amortización de los préstamos. Es más, sus abogados persistieron en impugnar la decisión hasta que el ministerio cedió en agosto de 1988 y cuatro de los barcos camaroneros de Escalón empezaron a operar desde el puerto de La Unión.<sup>29</sup>

El gobierno de Duarte decía identificarse con los huelguistas y, en enero de 1988, el presidente le escribió a Pezca “recomendando una resolución inmediata a la disputa”.<sup>30</sup> Aunque la patronal se sentó varias veces en la mesa de negociación, no alteró sustancialmente su oferta inicial, en parte porque ya no estaba actuando con independencia. En mayo de 1988, Pezca se declaró formalmente en bancarrota y el BAC se convirtió en el dueño de la planta y los barcos. Sin embargo, la presencia de los marineros en los muelles y los barcos impedía el acceso del BAC a sus nuevas propiedades.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Rafael Escalón al BAC, carta, Juzgado Segundo de lo Penal, Corte Suprema de Justicia, San Salvador, 4 de noviembre, 1988, Pieza 56/1.

<sup>30</sup> US Embassy to Secretary of State, “Shrimp Workers’ Strike in Puerto El Triunfo”, 26 de julio, 1988, o26051z, en Freedom of Information Act del US Department of State.

<sup>31</sup> En mayo de 1988, en las oficinas del Ministerio de Trabajo, la compañía pagó unos 225 000 colones que le debía a los trabajadores de la planta por trabajo procesando camarón entregado por los marineros que trabajaban con

En este momento del impase, el agregado laboral de la embajada de Estados Unidos, Bruce Thomas, se introdujo en las discusiones en un intento por resolver el conflicto.<sup>32</sup> Al BAC le interesaba, por encima de todo, recuperar el dinero prestado y no veía como ruta viable el pago de la deuda de Pezca con los trabajadores mediante la creación de una cooperativa. El AIFLD seguramente informó a Thomas sobre la situación; el brazo internacional de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (en adelante AFL-CIO) apoyaba de manera activa a la CGT y su federación obrera aliada, la Unión Nacional de Obreros y Campesinos (en adelante UNOC). Después de algunas consultas con el BAC, Thomas se reunió con la dirigencia del Sindicato Agua. El funcionario de la embajada informó a los activistas del sindicato que el banco afirmaba que Pezca en bancarota le debía unos 8 millones de dólares aparte de lo que la empresa adeudaba a los trabajadores. Thomas entonces instó a Benítez y los otros para que negociaran con el BAC. De acuerdo con Ruperto Torres, dijo “esto podemos hacer —regatéolo [...] mi gobierno está muy preocupado”.<sup>33</sup> Thomas sugirió que la embajada podría apoyar al Sindicato Agua para conseguir el dinero para pagar lo que Pezca le debía al BAC, aunque quería que los dirigentes del sindicato negociaran una reducción de lo debido. A pesar de la oferta en potencia que extendió Thomas, el BAC le dio largas al asunto, evitando todo compromiso y ni siquiera opinando sobre la idea. Entonces Thomas dejó el cargo como agregado laboral para irse a

---

Productos Pesqueros. Esa fue la última transacción antes de declararse formalmente en quiebra.

<sup>32</sup> Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2016; Migdonio Pérez, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013.

<sup>33</sup> Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013.

trabajar al servicio exterior y en marzo de 1989 la elección de Cristiani removió a los amigos del sindicato que ocupaban altos cargos.

Por lo tanto, el banco bloqueó cada paso del Sindicato Agua en aras a convertir la deuda que tenía Pezca con ellos en propiedad de sus instalaciones. Por cierto, había mantenido las conversaciones con Escalón hasta el momento de la bancarrota con la esperanza de que la misma persona responsable por hundir la empresa podría restaurar la industria del camarón. Con independencia de las diferencias ideológicas, se impusieron los prejuicios y la identidad de clase. En palabras de Ángel Escobar, “[los oficiales de las empresas y los bancos] actuaban como un capricho mezquino, vínculos erróneos entre los ricos y los políticos. Como siempre ha existido en nuestro país, que el que está jodido está jodido y el que está arriba está arriba y dentro de los caprichos que se joda quien se joda”.<sup>54</sup>

La elección de Alfredo Cristiani en marzo de 1989 significó el fin de cualquier esperanza real de crear la cooperativa, porque el nuevo gobierno de derecha no tendría interés alguno en respaldar semejante iniciativa. Más bien, su objetivo principal era privatizar la banca, y la enajenación financiera del BAC seguramente no calzaba con ese plan.

## UN LARGO FINAL

A las 5:30 p.m., el 29 de junio de 1989, 500 soldados del Sexto Batallón del ejército, disparando al aire, tomaron los muelles de Puerto El Triunfo. Ocuparon el área hasta el día siguiente. A las 3 a.m., abordaron los seis barcos involucrados en la huelga “ile-

<sup>54</sup> Ángel Escobar, entrevista con el autor, Los Ángeles, febrero de 2017.

gal” y expulsaron a los huelguistas que estaban viviendo a bordo. La UNOC denunció la acción: “[...] los soldados a punta de fusil, evacuaron a los trabajadores de las instalaciones de Pezca S. A., y soltaron seis embarcaciones pesqueras para trasladarlas supuestamente a la Unión”.<sup>55</sup>

La tropa hirió a algunos de los marineros que se resistieron a ser expulsados. El sindicato afirmó que uno de los barcos tenía 15 000 colones (3 000 dólares) a bordo que estaban destinados para la compra de alimentos para los huelguistas, así como muchas de sus herramientas e implementos. La tropa se retiró a las 5:30 a.m., el 30 de junio.

Esta acción militar resquebrajó lo que hasta entonces había sido una unidad inquebrantable entre los miembros del Sindicato Agua. Los marineros expulsados que habían participado en la ampliación de la huelga de diciembre de 1987 ahora tuvieron que encontrar otro lugar donde vivir (lo habían estado haciendo en los barcos) y su lucha se tornó aún más desesperada y más separada de la de los huelguistas “legales”. Por si fuera poco, Atarraya y otras empresas camaroneras en el puerto occidental de Acajutla habían elaborado una lista negra, que eliminaba cualquier oportunidad de empleo para los miembros del Sindicato Agua. El sindicato protestó ante la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT), donde fue emitida una resolución que les favorecía, pero sin ninguna acción de seguimiento por parte del gobierno.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Campo pagado, *El Diario de Hoy*, julio de 1989; US Embassy to Secretary of State, “No Resolution in Sight as Three-Year Strike Drags On”, 13 de junio, 1990, 132130z, en Freedom of Information Act del US Department of State.

<sup>56</sup> ILO [OIT], Case 1506, Definitive Report, Complaint against Government of El Salvador by SGTIPAC, 1990.

A pesar de la debilidad política relativa de su posición, en octubre, Benítez pudo convocar a una asamblea del sindicato en los muelles con una concurrencia estimada en 500 miembros permanentes y eventuales. Como preludeo a unas elecciones del sindicato, presentó la última propuesta del BAC que les ofrecía un 50% de sus salarios desde abril de 1987 más un 50% de su indemnización. El BAC entonces daría por finalizados todos los contratos y establecería el sistema de subcontrataciones, lo que destruiría al sindicato y su contrato que, en palabras de Benítez, “conquistado con mucho esfuerzo y sacrificio”. Migdonio Pérez, otro dirigente sindical, instó a sus compañeros trabajadores a que “no nos dejáramos amedrentar de la Guerra psicológica impulsada por el BAC”.<sup>57</sup> Otros miembros del sindicato levantaron su voz y propusieron la posibilidad de un acuerdo y si el BAC se rehusaba, entonces el sindicato exigiría que sus miembros obtuvieran la propiedad cooperativa de Pezca. A nadie se le ocurrió sugerir que se aceptara la oferta del BAC. En las elecciones subsiguientes, Benítez le ganó a Fidel Ángel Chávez por 378 votos contra 122.<sup>58</sup>

Dos semanas después de la asamblea en los muelles, terroristas de derecha hicieron estallar la sede de FENASTRAS en San Salvador, dando muerte a 10 personas, incluyendo a Febe Velásquez, secretaria general y compañera de Ricardo Jovel. El hecho entristeció y asustó a los miembros de los dos sindicatos en Puerto El Triunfo; con independencia de sus opiniones sobre Jovel, la pérdida de Febe en circunstancias tan horribles fue dolorosa. Justo después

<sup>57</sup> Acta 109 del SGTIPAC, 134 de octubre de 1989 (Archivo del SGTIPAC).

<sup>58</sup> No está claro si durante la elección Chávez haya sugerido un arreglo, pero ciertamente lo propuso con el respaldo de los demás dirigentes del sindicato en diciembre de 1989. Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, enero de 2016.

del bombazo, comenzaron a circular los rumores de una ofensiva del FMLN. Benítez decidió que era el momento para aceptar algunas invitaciones de tiempo atrás que le había extendido el movimiento obrero estadounidense.

Aunque él decía temer por su vida, el FMLN no tenía ninguna animadversión en particular hacia Benítez; no se podía saber quién habría señalado al dirigente sindical. Otros militantes del Sindicato Agua argumentaron que los militares sabían exactamente dónde vivía cada quién; todos se enfrentaban al mismo riesgo. Algunos consideraron que la partida de Benítez fue un hecho cobarde y traicionero. Una vez que la ofensiva de noviembre menguó y la capital y el Puerto volvieron a su aparente normalidad pacífica, Fidel Ángel Chávez y los otros dirigentes del Sindicato Agua decidieron reiniciar las negociaciones. Alcanzaron un “acuerdo parcial” con el BAC y la empresa, que permitiría el reinicio de las operaciones pesqueras. Sin embargo, Benítez volvió inmediatamente después de las negociaciones y denunció el acuerdo como un acto de “cobardía”. Para los demás dirigentes, su partida había sido una muestra de “deslealtad” hacia la lucha y se desató un conflicto interno. Ruperto Torres recuerda “En las oficinas de la CGT en San Salvador llegamos a golpes. Fue cosa seria”.<sup>39</sup>

Benítez pudo recuperar el control del sindicato, echando mano de sus reservas de apoyo entre los eventuales. El sindicato votó para derogar el acuerdo con el BAC. Le comentó a un funcionario de la embajada de Estados Unidos que la aceptación y posterior rechazo fueron el resultado de una “disputa en la dirigencia”.<sup>40</sup> De nuevo

<sup>39</sup> *Loc. cit.*

<sup>40</sup> US Embassy to Secretary of State, “No Resolution in Sight as Three-Year Strike Drags On”.

Ruperto Torres en un barco camaronero, década de 1980



presionó para que se creara la cooperativa, argumentando que los activos de la empresa, al tomar en cuenta el deterioro de su flota, se habían reducido a unos 4 millones de dólares, mientras que la empresa les debía 5 millones de dólares en salarios atrasados (incluyendo los de los días de huelga) y prestaciones. El sindicato criticó al banco y la compañía de manera muy pública: “[S]e asiste a una quiebra fraudulenta originada por políticas malintenciona-

das que ejecutaron acciones de descapitalización de las empresas y estafa al Banco Agrícola Comercial, ya que el dinero obtenido por algunos empresarios lo han depositado en bancos extranjeros”.<sup>41</sup>

El sindicato exigió que el banco y el gobierno dejaran de pasarle la factura a los trabajadores por la corrupción de la patronal. El sindicato entonces insistió que el Ministerio de Agricultura activara las licencias de pesca necesarias para poner a trabajar los 32 barcos bajo su control. Pero de nuevo, ni el gobierno ni el BAC estaban interesados en permitir que la cooperativa despegara.

En junio de 1990, la embajada de Estados Unidos envió a varios de sus funcionarios al Puerto para tratar de encontrarle una solución al impase. El gobierno de Estados Unidos y el AIFLD se habían interesado en la huelga desde sus comienzos, pero ahora tenían el incentivo adicional de apoyar al banco en el proceso de privatización. Ésta fue el objetivo clave del gobierno de Cristiani, cuya agenda encajaba perfectamente con la del gobierno de George H.W. Bush. Los funcionarios de la embajada presentaron un panorama sombrío:

En Puerto Triunfo hoy en día, no existe evidencia alguna del que fue el próspero negocio de la pesca. El edificio de bloque de concreto donde estaba la planta —y que todavía alberga maquinaria que puede echarse a andar — [...] ahora está vacío. Durante una visita reciente, caminamos por un sendero largo y lodoso y pasamos por encima de un cerdo dormido para llegar a los soleados muelles donde los antiguos marineros descansaban y jugaban naipes. Los barcos camaroneros herrumbrosos están amarrados a los muelles pero no han zarpado del puerto en tres años.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> “Exigimos solución al conflicto de Pesca S. A.”, Campo pagado, SGITPAC y CGT, 16 de julio, 1990.

<sup>42</sup> *Ibid.*, p. 2.

Ruperto Torres en la cubierta de un barco camaronero



Como parte de la misma investigación, los funcionarios de la embajada entrevistaron al presidente del BAC, quien no solamente les reiteró su oposición a una cooperativa sino que destacó su estrategia legal para desalojar a los huelguistas de la planta y el muelle. Después del desalojo, planeaba operar la planta directamente “hasta que pudieran encontrarse inversionistas”. Una nueva sen-

tencia judicial había anulado la obligación de pagar los salarios atrasados a los huelguistas y, por lo tanto, fortaleció la oposición del BAC ante las exigencias del sindicato.

Sin embargo, el presidente Cristiani se pronunció a favor de un acuerdo. Dejó en claro a los huelguistas (con los cuales se reunió) como a los miembros de su gobierno que quería una solución pronta y los funcionarios de la embajada elogiaron su empeño a tal efecto a pesar de la oposición del banco recientemente privatizado. Sus motivaciones no son del todo claras. Lo más probable es que quería recalcar las credenciales moderadas de su facción en ARENA frente a la derecha dura, que había fundado el partido y que seguía proyectando su imagen nacional e internacional. Es más, una postura constructiva hacia la huelga era congruente con los objetivos del gobierno de Bush.

El informe de la embajada concluyó con un sentimiento de exasperación: “Treinta y cuatro barcos pesqueros perfectamente funcionales están amarrados a un muelle en Puerto Triunfo implorando que se encuentre una solución”.<sup>45</sup> Los funcionarios hicieron otra cosa ese día. Lograron conversar privadamente con algunos de los dirigentes del Sindicato Agua acerca del papel de Benítez en el sindicato. Dejaron en claro que la embajada ayudaría a alcanzar el mejor arreglo posible para los huelguistas, pero que no harían nada mientras Benítez siguiera al frente del sindicato. En palabras de Migdonio Pérez, “Le estaban poniendo cerco hasta que la embajada dijeron que, si Benítez sigue en la dirigencia, no iban a ayudar”.<sup>44</sup>

<sup>45</sup> *Ibid.*, p. 3.

<sup>44</sup> Migdonio Pérez, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013.

El grupo de dirigentes, ya amargados por sus acciones desde noviembre de 1989, fueron donde Benítez y le dijeron, “[O] te apartás, o te apartamos”.<sup>45</sup> Al darse cuenta de que ya no tenía margen de maniobra, el caudillo obrero decidió ya no presentarse para la reelección. En septiembre, cerca del momento cuando tomó la decisión final de no postularse para la elección, Benítez emitió un comunicado a la membrecía del sindicato. Identificó la fuente de los sufrimientos de los trabajadores: “[...] [la] problemática originada de la mentalidad fascistoide de los empresarios accionistas de nuestro país, quienes mantienen constante accionar represivo en contra de nuestro accionar [...]”. Al referirse directamente a la huelga en Pezca, denunció la interferencia de “la justicia ramera que protege a quien tiene dinero en abundancia”.<sup>46</sup>

El comunicado combina una militancia populista con cierta vaguedad y abstracción que quizá refleja el propio sentir ambivalente de Benítez. En vista de que el grueso de la membrecía del sindicato estaba cesante debido a la huelga, resulta algo extraño que se haya referido al fraude y a “la movida”: “Los empresarios con el propósito de mantener una cortina de humo, que les permita ocultar la injusticia social y los financiamientos otorgados por instituciones financieros mantienen una constante difamación en contra de los compañeros de venta ilícita de camarón”.<sup>47</sup>

Ésta fue una de las pocas veces que Benítez hizo referencia a “la movida”. Aunque la huelga había convertido dicha práctica en algo irrelevante, el fraude como el origen de la crisis todavía resonaba. Pareciera que escogió el momento cuando su propio honor

<sup>45</sup> Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2015.

<sup>46</sup> “Carta Abierta Para los Afiliados al SGTIPAC”, Archivo virtual del SGTIPAC, 17 de septiembre, 1990.

<sup>47</sup> *Loc. cit.*

y reputación estaban en entredicho para defender el honor de sus compañeros de trabajo. Después insinuó que algunos trabajadores se habían vendido a la patronal, aunque la vaguedad de su escrito no deja en claro si se estaba refiriendo a sus compañeros dirigentes del Sindicato Agua, quienes habían exigido su remoción. Finalmente, cierra su declaración con una frase que bien pudo haber sido pronunciada por cualquier militante de izquierda durante las dos décadas anteriores: “sólo unidos conquistaremos el poder necesario para contrarrestar el poder de la oligarquía que nos oprime”.<sup>48</sup>

Aunque es posible que el tono combativo del comunicado buscaba movilizar a sus simpatizantes una última vez, parece más probable que fue reflejo de un momento de angustia. El dirigente sindical no tenía más alternativa que expresar su ira y resentimiento frente al poder oligárquico. Antes de finalizar el año, a la edad de 42 años, comenzó una vida nueva con su madre en Australia.

Aun sin la presencia de Benítez y con el apoyo de Estados Unidos, la negociación no resultó fácil. Si bien es cierto que el sindicato se dio cuenta que no podía lograr la cooperativa, se empeñó por alcanzar un arreglo que le otorgaría a sus afiliados un 75% de los salarios de la huelga y un 75% de las prestaciones y demás beneficios. El BAC se opuso a estas condiciones y se aferró a su cifra original de un 50%. Esta vez, sin embargo, debido a una sentencia favorable (la “justicia ramera” en palabras de Benítez), el BAC no tenía ninguna obligación legal de pagar los salarios atrasados. Un funcionario del Ministerio de Trabajo se identificó con el banco. Ruperto Torres recuerda que el funcionario les espetó: “No son dignos de 50%!”

<sup>48</sup> *Loc. cit.*

A pesar de una aversión propia de la Guerra Fría que sentía hacia el SIP, la embajada de Estados Unidos estuvo de acuerdo con el Ministerio de Trabajo en que el SIP debía incorporarse a las negociaciones finales. Después de años de discordia, ambos sindicatos se unieron y rechazaron juntos las propuestas del BAC. Ruperto Torres recuerda la última sesión de negociaciones cuando uno de los presentes le gritó a los banqueros: “Que nos den 75% o fuego a todo! ¡Está lista la gasolina!”<sup>49</sup> No se sabe si el BAC pensó que la amenaza era en serio, pero lo cierto es que el banco aumentó su oferta de 50 a 60%.

El 22 de enero de 1991, 542 trabajadores afiliados al SIP y al Sindicato Agua recibieron sus indemnizaciones por un total de 5.2 millones de colones (alrededor de 1 millón de dólares). En promedio, cada trabajador recibió menos de 2 000 dólares. El dinero solamente se repartió entre los trabajadores permanentes. Todos esos años de lucha por los derechos de los eventuales en la planta y en alta mar no sirvieron de nada. Los antiguos trabajadores de la planta y los marineros recibieron el dinero de buena gana; todos estaban pasando grandes apuros. Pero lo recibido no se acercaba ni remotamente a lo que habían luchado por obtener todos esos años. Algunos utilizaron el dinero de la indemnización para montar unos negocios muy pequeños. Otros lo utilizaron para irse “al norte”, especialmente los marineros que habían sido incluidos en listas negras en las pocas empresas pesqueras que todavía operaban en el país. Varios de los activistas del Sindicato Agua se asociaron con exguerrilleros, sus antiguos adversarios políticos,

<sup>49</sup> Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013.

para formar una cooperativa de cultivo de camarón que todavía funciona hoy en día.<sup>50</sup>

## MEMORIAS AMARGAS

La mayoría de antiguos trabajadores de la planta están profundamente amargados cuando lamentan la pérdida de una industria que les permitió vivir en un pueblo que recuerdan como próspero y decente comparado con la miseria del actual. Los militantes del SIP, en su mayoría mujeres, no expresan sino desprecio por la huelga de 1987-1991. Más que cualquier otra cosa, el lema “todo o nada” de Benítez resumía la ideología y la acción del Sindicato Agua durante la década de 1980. En un sentido, la frase se remite a su postura maximalista, a su rechazo de cualquier arreglo con la compañía y más tarde con el BAC. Para Ana Alvarenga, quien vuelve al Puerto desde Montreal varios meses al año, esa postura condujo a un pueblo antes pujante a quedarse “sin nada”, a terminar completamente devastado. “Todo o nada” también trae a la mente el autoritarismo de Benítez. El personal de oficina que trabajaba en el departamento de planilla recuerda cómo el dirigente del Sindicato Agua entraba como una tromba cuando detectaba algún error; los regañaba y amenazaba a gritos.<sup>51</sup> Otros recuerdan que andaba armado con una pistola. Ana recuerda que, “Los de agua nos insultaban [...] que nosotros estábamos de parte de la

<sup>50</sup> La cooperativa de cultivo de camarón todavía opera hoy en día. Si perduraron algunas discrepancias ideológicas, hace tiempo fueron soslayadas. Parece que los antiguos guerrilleros recibieron tierras en Sisiguayo como parte de los acuerdos de paz, e incorporaron a Ruperto Torres y otros debido a sus conocimientos sobre el camarón y alguna amistad previa.

<sup>51</sup> Ivette Bará, comunicación con el autor, 2017.

empresa [...]”. Ella agregó: “Decían todo o nada. Ese era el verso de ellos, todo o nada y fue lo que nos llevó a la ruina”. También recuerda, “Benítez no era una persona amistosa, era amistoso solamente con su gente. Pero con los de tierra no tenía ninguna afinidad. Conmigo nos reunimos dos o tres veces en el muelle [pero] ellos nunca quisieron venir a la planta”.<sup>52</sup>

Ana, quien había sufrido violencia doméstica insoportable antes de y durante su matrimonio, quizá carga una cuota adicional de resentimiento contra el trato chauvinista de Benítez hacia ella. La indignación todavía determina sus recuerdos de él: “El no tenía nada que perder. Era un hombre borracho que vino a dar acá a Puerto El Triunfo”. Ese recuerdo también se deriva del discurso oficial y no oficial del SIP sobre él. Los militantes del SIP también trataron de deslegitimar a Benítez porque había trabajado solamente como eventual por un tiempo breve. Ana comentó, “El no tenía nada que perder ya no trabajaba para la empresa”.<sup>53</sup>

No debe causar sorpresa que varios antiguos marineros recuerdan de forma distinta los momentos y las acciones clave de la década de 1980. Al hacerlo, arrojan alguna luz sobre los desencuentros del pasado y el presente. De manera particular, interpretan el “todo o nada” bajo sus propios términos. Desde esta perspectiva, Benítez sí se mostró dispuesto a llegar a un arreglo pero no sacrificaría la integridad del sindicato para lograrlo. Los miembros del Sindicato Agua estaban totalmente de acuerdo con su líder al creer que el sistema de subcontrataciones propuesto conduciría inevitablemente a la destrucción del sindicato. Por lo tanto, el “todo” fue una declaración de que el sindicato tenía que

<sup>52</sup> Ana Alvarenga, entrevista con el autor, Montreal, 2016.

<sup>53</sup> Ana Alvarenga, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2015.

sobrevivir y que, por ende, la subcontratación tenía que impedirse. Y el “nada” significaba la destrucción del sindicato.

Los marineros también recuerdan al que pronunció ese lema como un individuo notable, sincero y dedicado a su causa. Elogian las habilidades de liderazgo de Benítez y sus logros a favor del sindicato. Tal como recuerda Ángel Escobar, “Era un magnífico dirigente; luchó con todo su empeño con todo lo que tenía. Hizo lo que pudo realmente”.<sup>54</sup>

Benítez dejó una fuerte impresión en su colega de la dirigencia del Sindicato Agua,

Migdonio Pérez: recto e inteligente [...] leía mucho.

La noche antes de una reunión importante el leía y leía. El día de la reunión ni siquiera miraba el libro porque ya lo había memorizado. Era muy inteligente no cualquiera podía memorizar todo lo que iba a hablar.<sup>55</sup>

Efectivamente, se caracterizó por unas cualidades únicas. Así se expresó Ruperto Torres,

Había sido un borracho al que la gente pateaba cuando se quedaba dormido en la calle. Dejó de tomar y comenzó a poner toda su energía en la reforma del sindicato y a ganar un trato justo para los pescadores. Pero nunca olvidó de donde venía o el dolor o las humillaciones de esas patadas recibidas.<sup>56</sup>

El poder y la resonancia de su populismo se derivó en parte de ese resentimiento hacia los poderosos que surge de lo más pro-

<sup>54</sup> Ángel Escobar, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2016.

<sup>55</sup> Migdonio Pérez, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013.

<sup>56</sup> Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013.

Ángel Escobar y su familia, década de 1980



Foto: cortesía de Ángel Escobar.

fundo. Su transformación personal también le otorgó brillo y credibilidad a su cruzada contra la corrupción en el sindicato y la empresa (con la excepción de las ventas ilegales). Recuerdan el último contrato (1985) como un logro mayúsculo. Su habilidad para negociar y conseguirse el apoyo de los poderosos también abonó al respeto que le tenían.

Pero hasta los antiguos camaradas de Benítez reconocen que tenía un lado negativo. En primer lugar, permitió que se le identificara demasiado con el partido Demócrata Cristiano, lo que “politizó” al sindicato. No obstante, a pesar de que el gobierno estaba de su lado, no fue un negociador hábil, especialmente en relación a la huelga de 1987-1991. Su valor tampoco era ilimitado. Sus camaradas recuerdan cómo se fue del país durante la ofensiva de noviembre del FMLN, cuando la guerrilla ocupó brevemente algunos sectores de la capital. Ninguno de sus compañeros del sindicato creyó que su dirigente se encontrara en algún peligro particular. Ruperto Torres piensa que se fue porque simplemente no sabía cómo proceder. Sin la cooperativa, las opciones le resultaban inaceptables. Sean cuales hayan sido sus motivos, este proceder resultó en bastante disenso dentro del Sindicato Agua y terminó eventualmente con su exilio del Puerto cuasi-obligado y su emigración a Australia. Dejó atrás recuerdos amargos de la huelga más larga en la historia de El Salvador (muy probablemente en la historia de Latinoamérica), una huelga que intentó frenar el avance global de la informalización del trabajo y crear unas relaciones laborales no-capitalistas en tierra y en alta mar.

A pesar de esa visión radical, como hemos visto el desencuentro fue profundo. El anticomunismo de mediados de la década de 1980 había disminuido cuando FENASTRAS y UNOC comenzaron a colaborar, pero los recuerdos del lenguaje ponzoñoso de la Guerra Fría perduraron, así como los del desprecio machista de la dirigencia del Sindicato Agua hacia los miembros del SIP. En el fondo, a los miembros del SIP les resultó difícil perdonar a los marineros por lo que percibieron como su codicia, la que había contribuido a la destrucción de los medios de vida de toda la gente. Antes de la huelga, habían previsto correctamente que ésta solamente traería

“miseria, hambre, dolor y desolación a Puerto El Triunfo”.<sup>57</sup> Que la huelga haya confirmado su pronóstico no facilitó en absoluto una unión de fuerzas con Benítez, ya sea en ese entonces u hoy en día en sus recuerdos.

<sup>57</sup> Ricardo Jovel y SIP, “Carta Abierta,” *El Diario de Hoy*, 29 de julio, 1987.

CONCLUSIÓN  
LA DESINDUSTRIALIZACIÓN TROPICAL  
Y SUS DESCENTENTOS

Los historiadores del siglo veinte [...] son “exiliados” y “testigos” a la vez porque se encuentran profundamente involucrados en los acontecimientos que constituyen el objeto de su estudio. No exploran un pasado remoto y desconocido, y la dificultad de su tarea es guardar la distancia del pasado reciente, un pasado en el que a menudo se han desenvuelto y observado, que todavía hace sentir su presencia en su entorno.

ENZO TRAVERSO, *Left-Wing Melancholia*

Se escuchan disparos a menudo cuando las dos maras (pandillas) en Puerto El Triunfo batallan por controlar el territorio sobre el cual se dedican a pequeñas extorsiones. Un día en 2016, un grupo de mareros se acercó a Ovidio Granadeño, el antiguo activista de 72 años de edad del Sindicato de la Industria Pesquera (en adelante SIP) que ahora trabajaba como panadero. Le exigieron que

comenzara a pagar “renta” o atenerse a consecuencias serias. Les respondió, “Vean muchachos, pasé muchos años lidiando con los escuadrones de la muerte y la Guardia Nacional. Así que [...]”<sup>1</sup> Quizá la respuesta del anciano les despertó un sentimiento de respeto o desconcierto, pero, igual, ya no volvieron a exigirle “renta”. Ya paga una forma diferente de “renta” por las horas de explotación en su trabajo que apenas le permite sobrevivir; trabaja de 4 de la madrugada hasta 2 de la tarde, seis días a la semana. No obstante, la historia de Ovidio es uno de los pocos puntos preciosos de luminosidad en el panorama oscuro de desindustrialización tropical que envuelve al Puerto.

Aunque la biografía de Ovidio es excepcional en Puerto El Triunfo, sintetiza las hebras de solidaridad que simbolizan la fuerza del SIP y, de manera más general, el movimiento obrero salvadoreño en su apogeo hacia fines de la década de 1970. Era prófugo cuando llegó al Puerto en momentos en que la huelga de febrero-marzo de 1979 llegaba a su fin. La Guardia Nacional lo había señalado para que fuera eliminado debido a sus actividades como miembro del Bloque Popular Revolucionario (en adelante BPR), especialmente por su trabajo de promoción de cooperativas en tierras de haciendas ocupadas. Combinaba su trabajo en el BPR con el activismo en su Comunidad Eclesial de Base (en adelante CEB). Su trabajo en las dos organizaciones se trasladaba con frecuencia.

De hombre recién casado, Ovidio no estuvo en capacidad de mantener a su esposa e hijo con lo que le daba el minifundio familiar, razón por la cual se trasladó a la capital donde consiguió

<sup>1</sup> Ovidio Granadeño, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2016. Un estudio excelente de las pandillas y el neoliberalismo es el de Deborah Levenson-Estrada, *Adiós Niño: The Gangs of Guatemala City and the Politics of Death*, Durham, NC, Duke University Press, 2013.

trabajo en una panadería. Poco después de haber iniciado a laborar en 1967, sus compañeros se fueron a la huelga y él decidió incorporarse. Fue entonces que conoció al secretario general del Sindicato de Panaderos, Salvador Cayetano Carpio, quien también era dirigente comunista (y después guerrillero), cuyo valor e inteligencia influyó profundamente a Ovidio.

Estas experiencias diversas de solidaridad moldearon el pensamiento y las acciones de Ovidio como militante obrero en el Puerto. Siguió siendo un militante político comprometido y colaboró con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (en adelante FMLN) durante toda la década de 1980. No obstante, mantuvo su papel como dirigente de bases en el SIP en un nivel distinto. Se abstuvo conscientemente de llegar a los niveles altos de dirigencia en el SIP por temor, en parte, a la represión pero también porque consideraba que su actividad sindical era un asunto autónomo de su militancia revolucionaria, y de menor importancia.

Por lo tanto, Ovidio contribuyó en la reconstrucción del SIP después de la ola mortal de represión en 1980-1981. Infundió al sindicato con sus ideas de moral y ética, incluyendo un sentimiento de responsabilidad hacia la maquinaria de la compañía. También instó a sus compañeros activistas del sindicato a tomar precauciones por su seguridad. Recuerda con profundo remordimiento como advirtió a Manuel Rivera que no saliera de noche después de una sesión de negociación con la empresa. Unos agentes vestidos de civil “desaparecieron” a Rivera después de llevárselo de una taberna en el Puerto. Ovidio también denunció hasta la más pequeña forma de corrupción.

Ovidio orientó al SIP durante una transformación profunda para convertirlo en un sindicato dedicado a reivindicaciones, es decir, uno que centró sus esfuerzos en salarios y prestaciones para

sus miembros. También contribuyó a darle forma a la postura mayormente negativa del SIP frente a las huelgas del Sindicato Agua y, particularmente, a su propuesta de cooperativa. La trayectoria de Ovidio como activista obrero de vocación de izquierda y raíces cristianas plantea preguntas difíciles. ¿Cómo es que un hombre tan empapado de nociones cristianas de solidaridad radical y revolucionaria llegó a rechazar, en última instancia, la solidaridad obrera tan cerca de su persona? ¿Cómo pudo un ser humano revolucionario y eminentemente decente solicitar la intervención militar en el Puerto?<sup>2</sup> Tuvo sus razones: “la movida” lo ofendía tremendamente, por un lado, y el uso deleznable y peligroso del epíteto “subversivo” por el Sindicato Agua para atacar a la dirigencia del SIP lo enojaba, por el otro. Es más, fue asesorado por la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (en adelante FENASTRAS) y por el FMLN que sostenían que toda forma de cooperativismo era contrainsurgente.

El caso de Ovidio es fascinante precisamente porque combinaba ideología y prácticas revolucionarias con una sensibilidad enraizada en un compromiso profundo con un cristianismo radical y el sindicalismo obrero. Durante un tiempo breve, en su cooperativa agrícola en 1977-1978 y después en los momentos de triunfos obreros en el Puerto en 1979, Ovidio vivió una unidad de esas tres dimensiones. No obstante, a mediados de la década de 1980, estaban compartimentadas: su militancia sindical, su trabajo con la CEB y sus actividades clandestinas en apoyo al FMLN se convirtieron en esferas de acción separadas. El sindicato le prestaba atención a

<sup>2</sup> Ovidio Granadeño, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2014-2015. Ovidio no firmó el documento que solicitó la intervención militar (fue firmado colectivamente) ni recuerda el documento propiamente. Ahora bien, sí formó parte de la dirigencia del SIP.

la planta; la CEB intentaba proveer apoyo a los refugiados empobrecidos de la guerra en el Puerto, pero carente de sus aspiraciones utópicas anteriores; y el FMLN intentaba destruir o transformar al Estado, pero el ejército guerrillero operaba en un nivel desligado casi del todo del sindicato y de las CEB. A un nivel nacional, si bien es cierto que el FMLN todavía guardaba algunos vínculos con el renaciente movimiento obrero, centró sus esfuerzos en el reclutamiento de combatientes y, en menor grado, en socavar la economía y retar (es decir, deslegitimar) al gobierno. Por estas razones, el FMLN no estaba en condiciones de promover una visión emancipadora dentro del movimiento obrero. La biografía de Ovidio resume la naturaleza compleja de la actividad sindical en el Puerto; con la guerra civil como trasfondo, los trabajadores tenían múltiples y coexistentes afiliaciones y compromisos, que contribuyeron tanto al auge de la solidaridad obrera en momentos críticos como a su eventual extinción.

Por otra parte, la transformación que vivió Ovidio también fue un indicador temprano de la propagación de la racionalidad neoliberal hasta los rincones ideológicos y geográficos más remotos del mundo. Como explica Mathieu Hilgers, “El impulso hacia la responsabilidad individual y del yo como empresa es un principio fundamental del arte neoliberal de gobernar”.<sup>5</sup> Por cierto, podemos entender la desarticulación de sus nociones de solidaridad como esenciales para el surgimiento de la racionalidad neoliberal.<sup>4</sup> De manera particular, la reducción del alcance del significa-

<sup>5</sup> Mathieu Hilgers, “The Three Anthropological Approaches to Neoliberalism”, en *International Social Science Journal*, vol. 61, núm. 202, octubre de 2011, p. 358.

<sup>4</sup> Kirsten Weld, *Paper Cadavers: The Archives of Dictatorship in Guatemala*, Durham, NC, Duke University Press, 2014, proporciona un análisis ge-

do de los términos interés y solidaridad, pasando de la amplitud geográfica y social de fines de la década de 1970 a las paredes de Pezca S. A., en la década de 1980, es reflejo de dicha transformación. Como hemos visto, las ideologías y prácticas de la Guerra Fría (por ejemplo, el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, en adelante AIFLD) y la financiarización del capital fueron precondiciones fundamentales para los conflictos en el Puerto que condicionaron esos cambios dramáticos.

*Solidaridad Bajo Asedio* es un caso de estudio de lo que David Harvey ha denominado “acumulación por enajenación”.<sup>5</sup> El fraude bancario devastador de 1985-1986 comprendió formas particulares de “financiarización”: un proceso analizado por el geógrafo marxista por medio del cual el capital productivo es sustituido por el capital financiero. En sus aspectos fundamentales, supone la transferencia de fondos de una empresa altamente productiva al sector financiero y de allí moverlos de El Salvador a Estados Unidos. El fraude descapitalizó al sistema bancario nacionalizado y, por lo tanto, facilitó la privatización en general de los bancos, que hasta entonces habían sido un baluarte frente al neoliberalismo y habían logrado algunos éxitos en relación a una redistribución limitada de capitales a las clases medias. La propagación de la ideología y las prácticas neoliberales también dependió de la desarticulación de la solidaridad obrera.

Este libro le ha seguido la pista a las prácticas y las ideas que contribuyeron a la realización de la solidaridad en el Puerto y entre las clases trabajadores salvadoreñas, en general, y su desarti-

---

neracional muy completo sobre los inicios del neoliberalismo y la racionalidad neoliberal en Guatemala.

<sup>5</sup> David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Nueva York, Oxford University Press, 2007, p. 161.

culación durante la década de 1980. El deterioro de la solidaridad de la clase obrera fue un proceso prolongado y multidimensional, hasta cierto punto derivado de ciertas fracturas que persistieron a pesar de las muestras impresionantes de solidaridad hacia fines de la década de 1970. Como hemos visto, en el Puerto dichas fracturas estaban asociadas con la segmentación del trabajo y las relaciones de género, especialmente entre los trabajadores de las plantas y los marineros. Las otras fisuras eran políticas. Recordemos que aun durante la movilización de más de 1 000 trabajadores del Puerto para la manifestación del 22 de enero de 1980, el SIP amenazó a los trabajadores con descontarles un día de salario si no participaban y al menos un 25% o más de la fuerza laboral sintió dicha coerción. En términos nacionales, aparte del antagonismo político, un sector considerable de la clase obrera industrial evitó las huelgas o las ocupaciones, por razones de oposición ideológica o por temor a provocar el cierre de una planta, un hecho que se estaba dando cada vez con más frecuencia.

No obstante esas fisuras que se mantendrían incorporadas en su seno, el movimiento obrero creció rápidamente hacia fines de la década de 1970 hasta convertirse, en términos proporcionales, entre los más grandes y más militantes en la historia del hemisferio. Esa expansión dramática dependió de la habilidad de la izquierda radical de estimular y permitir el florecimiento de una conciencia subalterna sin imponerle significados rígidos. Semejante conciencia es evidente en el surgimiento de una conciencia protosindical en el Puerto y en la capital, tal como se perfila en los primeros capítulos de este libro. Noé y Gloria, por ejemplo, adoptaron una agenda de solidaridad absoluta con el movimiento obrero urbano y rural, y de oposición implacable a las gerencias y las burocracias, así como de valores productivistas. Su rechazo

a la politización no les impidió movilizarse intensamente para la manifestación del 22 de enero, que interpretaron, al igual que Alejandro Molina Lara, como una expresión del poder obrero. En términos similares, las 46 tomas de fábricas en los primeros nueve meses de 1979 le permitió a las bases sindicales expresarse ideológicamente con énfasis en la solidaridad a toda costa. Esas expresiones se tornarían más fuertes a comienzos de 1980, cuando la izquierda revolucionaria decidió apoyar las demandas al estilo sindicalista para la autogestión de las fábricas que habían cerrado (o de aquellas a punto de cerrar).

Sin embargo, las seis semanas entre el 6 de noviembre y el 18 de diciembre de 1979 revelan consecuencias problemáticas derivadas de unas tensiones tácitas entre planteamientos ideológicos formales y conciencias, y prácticas cotidianas propias del pueblo llano. Durante esas semanas poco estudiadas y subestimadas, la izquierda radical siguió manifestando su hostilidad implacable hacia el gobierno que etiquetaron como la Junta Contrarrevolucionaria. Sin embargo, tal como se subrayó en el Capítulo 3, durante esas semanas ni hubo víctimas de escuadrones de la muerte ni represión violenta. Más bien, el periodo se caracterizó no solamente por una serie de acciones sindicales exitosas, sino también por el auge de un movimiento obrero rural, uno de los más grandes y militantes en términos proporcionales en la historia de Latinoamérica. Las mismas proclamas de la Junta Revolucionaria de Gobierno (en adelante JRG) a favor de los trabajadores del campo estimularon ese movimiento que la izquierda radical supo aprovechar. No obstante, en el campo y las ciudades, la disyuntiva entre el discurso radicalmente opuesto a la JRG y la realidad que se vivía a diario de tolerancia gubernamental hacia las expresiones disidentes y los grandes pasos que, en consecuencia, se estaban dando a favor de la

emancipación de los trabajadores, tuvieron unos impactos paralizantes en la izquierda. Y es que se mostraron incapaces de vincular el discurso y la realidad de tal manera para crear una estrategia viable que tomara ventaja de esta muy inusual coyuntura, en la cual sus verdaderos adversarios se encontraban relativamente débiles y desconcertados.<sup>6</sup>

Reconsideremos brevemente el desarrollo de la solidaridad en el Puerto, cuyos trabajadores constituirían un contingente clave en el movimiento nacional. El sindicato de los trabajadores de la empacadora lograron un alto grado de lo que la socióloga Beverly Silver denomina “poder de negociación laboral” —es decir, un alto nivel de cohesión interna que se tradujo en poder en el punto de producción, que a su vez se vinculó con un poder de negociación estructural o en el lugar de trabajo, debido a su ubicación en un “proceso de producción altamente integrado”.<sup>7</sup> El sindicato utilizó ambas formas de poder para mejorar de manera dramática el nivel de vida y las condiciones de trabajo de sus afiliados. Tuvieron éxito en buena medida debido a su resistencia constante ante las formas tempranas de lo que posteriormente se denominaría flexibilización (o informalización) del trabajo, relacionado con la segmentación laboral. Los activistas del sindicato lucharon contra la marginación de un sector grande, mayormente femenino, de la fuerza de trabajo, lo que aumentó el poder del sindicato. El caso de

<sup>6</sup> William Deane Stanley, *The Protection Racket State: Elite Politics, Military Extortion, and Civil War in El Salvador*, Philadelphia, PA, Temple University Press, 1996, pp. 167-174, formula una conclusión similar pero a partir de un análisis diferente.

<sup>7</sup> Beverly Silver, *Forces of Labor: Workers' Movements and Globalization since 1870*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 13. Ha utilizado este concepto propuesto inicialmente por Erik Olin Wright.

los trabajadores de la empacadora sugiere que se pudo obtener un alto nivel de autonomía bajo un régimen autoritario, debido especialmente a la legitimidad de un determinado estilo de sindicalismo apolítico comprometido con la defensa de intereses. Durante la década de 1970, el SIP actuó dentro de un entorno político cada vez más autoritario y, no obstante su afiliación a una federación de izquierda, el sindicato pudo ejercer influencia en todos los niveles de las relaciones laborales en el área de producción, incluyendo el despido de personal de gerencia de alto nivel y un control sustancial sobre el ritmo y las condiciones de la jornadas laborales. Como hemos visto, paramilitares de derecha de la localidad colaboraron con la dirigencia sindical y esa colaboración salvó vidas, como en los casos de activistas de la Organización Democrática Nacionalista (en adelante ORDEN) que informaban regularmente a la dirigencia del SIP sobre allanamientos inminentes de la Guardia Nacional o asesinatos que se estarían planificando.

Hacia fines de la década de 1970, el SIP había construido una forma limitada de hegemonía local. El uso que hago del término gramsciano se refiere a la capacidad del sindicato de ganarse el respeto y el consentimiento de todos los sectores de la sociedad del Puerto y de neutralizar el uso de la fuerza por las autoridades estatales. El ambiente afín a un enclave en Puerto El Triunfo y la industria camaronera propiciaron la hegemonía del sindicato. A diferencia de otros enclaves, sin embargo, los dueños oligárquicos y los gerentes de alto nivel residían en la capital.<sup>8</sup> Solamente el Partido de Conciliación Nacional (en adelante PCN), el de los mili-

<sup>8</sup> Los estudios clásicos sobre la mano de obra en los enclaves de Latinoamérica son los de Charles Bergquist, *Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela, and Colombia*, Stanford, CA, Stanford University Press, 1986 y Phillipe Bourgois, *Ethnicity at Work: Divided Labor*

tares, ya en decadencia durante la década de 1970, estaría en condiciones de retar al SIP. Aun así, el nivel de apertura del sindicato fue tal que incorporó a miembros del PCN. A su vez, esta incorporación controlada de elementos de derecha al SIP probablemente contribuyó a postergar la represión por mucho más tiempo que en otras partes del país. Es más, los activistas del sindicato crearon y promovieron el valor de una solidaridad multidimensional que pudo filtrarse a través de las demarcaciones de su apoliticismo formal. El control limitado que ejercía el SIP sobre la sociedad del Puerto se asemeja al de otros sindicatos en todo el hemisferio, especialmente en las ciudades y los pueblos y enclaves bajo dominio de una sola industria. Sin embargo, el sindicato del Puerto se distinguió por haber logrado tanto cuando el resto del país, que sufría bajo un régimen terrorista, se encontraba al borde de la guerra civil.

La movilización de mujeres fue tanto causa como consecuencia de la construcción de formas de hegemonía locales. Hemos observado cómo el sindicato movilizó a las trabajadoras eventuales, muchas de las cuales, como Gloria, descubrieron sus voces e identidades como militantes del sindicato. Por cierto, la historia de Gloria desde su niñez en los algodones hasta su ascenso a la dirigencia del sindicato es significativa, precisamente, porque revela la construcción fluida de nuevas formas de sociabilidad dentro de viejas estructuras organizativas. Ella superó la mancha y el estigma de la pobreza extrema y cosas aún peores para lograr un nivel de dignidad que es simbólica de la clase obrera femenina.

---

*on a Central American Banana Plantation*, Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, 1989.

Sin embargo, la hegemonía local del SIP y el progreso de la militancia obrera femenina se enfrentaban a delimitaciones rígidas. La segmentación del trabajo propio del proceso productivo estableció una serie de barreras a la solidaridad. Las dos divisiones fundamentales fueron entre los trabajadores de las plantas y los marineros y entre los trabajadores permanentes y los eventuales, los últimos empleados principalmente para pelar y empaclar el chacalín. Antes de fines de la década de 1970, los trabajadores y las trabajadoras permanentes se consideraban generalmente superiores a los eventuales, no solamente por razones de ingreso sino también de refinamiento social —especialmente por la distancia que los separaba de la cultura de los pobres del campo. La movilización sindical de las trabajadoras eventuales persuadió eventualmente a los trabajadores permanentes que reconocieran que su propio empoderamiento iba de la mano de los trabajadores eventuales y que dependía de ellos. La victoria de agosto de 1979 propinó un golpe, por breve que haya sido, a la patronal y su acumulación de larga data basada en la flexibilización del trabajo. Sin embargo, el triunfo del SIP duraría solamente 15 meses; no pudo resistir la ola de violencia desatada por los escuadrones de la muerte en diciembre de 1980, que mató o mandó al exilio a buena parte de la dirigencia sindical.

La guerra civil, la Guerra Fría, las ideologías de género y el avance global del neoliberalismo acentuaron y determinaron la brecha entre los sindicatos del Puerto. Aunque la derrota de los trabajadores marcó el inicio de la era de desindustrialización tropical, la historia de los dos sindicatos nos permite resistir la teleología implícita del triunfo del neoliberalismo en la región.

Este libro ofrece una perspectiva diferente sobre la política de Estados Unidos hacia El Salvador durante la guerra civil.<sup>9</sup> Como es bien sabido, Estados Unidos aportó alrededor de 6 mil millones de dólares para derrotar a la insurgencia del FMLN. Cada acción que tomó Estados Unidos en Centroamérica buscaba derrotar a la guerrilla y al gobierno sandinista en Nicaragua. Sin embargo, existía una contradicción en el centro de la política hacia El Salvador, especialmente en el gobierno de Reagan. La contrainsurgencia supuso un ataque frontal a la izquierda salvadoreña en todas sus manifestaciones. Estados Unidos reconocía que la estrategia contrainsurgente no violenta más efectiva estaba vinculada al apoyo a Duarte y a su partido Demócrata Cristiano. Esa valoración se basó tanto en la fuerza política objetiva de Duarte en 1984-1985 y en el rechazo de Estados Unidos de la extrema derecha, entre cuyos innumerables crímenes se encontraba el asesinato de dos funcionarios del AIFLD en 1980. Sin embargo, el programa democristiano de cooperativismo, un fuerte componente de propiedad estatal y un apoyo al sector laboral, estaba reñido con los valores principales del gobierno de Reagan. Por cierto, Washington conminó a Duarte para que modificara su programa de gobierno sustancialmente, al adoptar al sector “moderno” del capital y las recomendaciones

<sup>9</sup> Véase el escrito de Greg Grandin, *Empire's Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism*, Nueva York, Metropolitan Books, 2006, pp. 103 y 104. Grandin subraya la contradicción entre la estrategia contrainsurgente en general que consideró el programa reformista de Duarte con los imperativos ideológicos del gobierno de Reagan. “Lejos de promover la industrialización y una distribución más equitativa de la riqueza nacional, el gobierno de Reagan insistió que Duarte orientara la economía hacia un comercio libre mientras que recortaba el gasto social al mismo tiempo, lo cual sólo enajenó aún más a los democristianos de sus bases de apoyo en la clase trabajadora”. *Ibid.*, p. 104.

del FMI. Tal como observó Ignacio Ellacuría, “aquí está la paradoja de Duarte a resumidas cuentas. Sin la ayuda norteamericana no va a poder mantener el poder; pero entre más ayuda reciba, lo más sofocante que se le vuelve la camisa de fuerza, lo más difícil que va a ser el poder implementar sus programas que divergen de las políticas de la administración de Reagan”.<sup>10</sup> Aunque las contradicciones entre los objetivos contrainsurgentes y neoliberales se desarrollaron de muchas maneras, que todavía no se han estudiado sino mínimamente, podemos observar un ejemplo en el Puerto. El apoyo financiero y político que proporcionó el AIFLD para la huelga del Sindicato Agua en 1985 —que le costó al gobierno más de 4.5 millones de dólares en ingresos de exportación— estaba reñido con los esfuerzos del gobierno de Reagan de estabilizar la economía salvadoreña. Como vimos en el Capítulo 5, una consecuencia imprevista de esa huelga fue que dio lugar al fraude masivo de 20 a 30 millones de dólares que debilitó sensiblemente al sistema bancario y socavó la economía aún más. El AIFLD también apoyó la huelga de 1987-1991. Aunque el AIFLD no se vio involucrado directamente, es improbable que el Sindicato Agua haya convocado a una huelga sin tener asegurado el respaldo financiero limitado y el apoyo político de aquél.

La Guerra Fría también intensificó directamente las tensiones entre los dos sindicatos. El AIFLD y Duarte proporcionaron un lenguaje para atacar a la dirigencia del SIP, algunos de los cuales efectivamente simpatizaban con el FMLN y en algunos casos colaboraron con la guerrilla. Por ejemplo, Ovidio Granadeño consiguió casas de seguridad para combatientes que necesitaban descansar y

<sup>10</sup> NACLA *Report on the Americas*, vol. 20, núm. 1, enero-marzo de 1986. En inglés en el texto original.

relajarse. Otros activistas del SIP también brindaron apoyo logístico limitado.<sup>11</sup> No obstante, durante todos los años de la guerra civil no hubo ataques guerrilleros o combates en el Puerto. Las acusaciones de “subversión” que lanzaban los del Sindicato Agua a los activistas del SIP podrían interpretarse como sentencias de muerte; provocaron miedo y ansiedad adicionales entre los militantes del sindicato. Por otro lado, FENASTRAS interpretó cada movimiento de la Confederación General del Trabajo (en adelante CGT) como un componente de la estrategia contrainsurgente que tenía que derrotarse.

La Guerra Fría explica solamente un aspecto de la discordia en el Puerto. También hubo una dimensión de género muy intensa en el conflicto cuyos orígenes se ubicaron en la división del trabajo, enfrentando a los marineros y trabajadores del Puerto a las trabajadoras de la empacadora, en su mayoría mujeres. Diversos factores culturales agudizaron la división estructural: las mujeres resentían el estilo de vida machista de los marineros, al cual achacaron la desestabilización de las familias. También hubo diferencias culturales obvias en torno al trabajo y el esparcimiento. Mientras que los militantes del SIP se esforzaron por alcanzar lo que los sociólogos denominan una existencia estable de clase media (“una vida digna” es un refrán frecuente entre la población subalterna), los marineros vivían en un mundo cuasi-caricaturesco de heroísmo macho, borracheras, seducción de mujeres y des-

<sup>11</sup> Ovidio Granadeño, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2014. Una de las explicaciones por la poca actividad militar en el Puerto fue precisamente el uso que el FMLN le dio como lugar de recuperación de sus combatientes heridos o agotados.

precio en general por las normas sociales —tal como se expresó un marinero— “los pescadores somos degenerados”.<sup>12</sup>

Al igual que Gloria García, Ana Alvarenga sufrió una niñez brutal. Ya bien adentrada en la adultez, tuvo que aguantar violencia doméstica, primero a mano de sus hermanos y después de su esposo, un capitán de barco camaronero. Ana vivió una sensación de su propia liberación mediante su actividad sindical. Lo que resultó todavía más significativo, después de una vida de abusos, es que encontró su dignidad y estableció su igualdad con los dirigentes hombres mediante los discursos que dio y la movilización de los trabajadores en otras plantas en toda la región. Es más, fue delegada a la primera conferencia feminista de El Salvador que dedicó mucho esfuerzo a la formulación de estrategias legales y psicológicas para enfrentar el abuso doméstico.<sup>13</sup>

Sin embargo, el ascenso de Ana a la dirigencia sindical ocurrió justo cuando el Puerto se estaba hundiendo bajo el peso del fraude bancario y la huelga del Sindicato Agua contra el plan de subcontratación de la empresa/banco que habría de eliminar a los sindicatos. El peso del resentimiento de Ana contra el machismo del Sindicato Agua fue apenas un factor del desencuentro entre el Sindicato Tierra y el Sindicato Agua. En términos más significativos, la manera en que los marineros resistían —mediante la apropiación directa— creó un ambiente de profunda incomprensión e impidió la comunicación entre los dos grupos. Cualquier mención en público sobre esta práctica era problema seguro: no solamente estarían expuestas las tripulaciones a juicios criminales sino que

<sup>12</sup> Ruperto Torres, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2013.

<sup>13</sup> “Primer encuentro de mujeres para analizar la crisis económica y política”, en *El Mundo*, 21 de septiembre, 1988; Ana Alvarenga, entrevista con el autor, Montreal, 2016.

los militares, que también se beneficiaban de la actividad, podrían fácilmente reaccionar con represalias. Por lo tanto, hasta mediados de la década de 1980 “la movida” se mantuvo en silencio, pese a su significado en todos los aspectos de las relaciones laborales y en la supervivencia del Puerto.

Estos silencios y desencuentros sugieren un agregado al concepto de James Scott sobre los mensajes ocultos [“hidden transcripts”]. Por lo general, los mensajes ocultos revelan críticas a las fuerzas oficiales y dominantes. Este estudio sugiere que también se expresan como críticas mutuas entre fuerzas subalternas. Tal fue el caso de los mensajes en torno a “la movida”. Un análisis de estos mensajes, por fragmentarios que sean, ofrece algunas perspectivas sobre la conciencia subalterna y los desencuentros (I y II) entre diferentes sectores obreros. Si el discurso dominante es sometido a un análisis sobre el significado desde poblaciones de élite y subordinadas, los significados también se cuestionan entre los grupos subalternos, especialmente entre aquellos que se encuentran estructuralmente divididos.

Los trabajadores de planta y los marineros tenían una comprensión diferente sobre términos clave como “cooperativa” o consignas como “todo o nada”. Estas comprensiones diferentes, surgidas de particulares experiencias y posturas de clase, provocaron el colapso de alianzas en potencia. Muchos de los dirigentes del SIP eran socialistas que creían que los obreros podrían operar la industria. Sin embargo, se opusieron a los activistas del Sindicato Agua, cuya idea de una cooperativa surgió de su mensaje oculto de acumulación primaria e inspirada por el sindicalismo de línea democristiana.

Ambos, el Sindicato Tierra y el Sindicato Agua resistieron valientemente las prácticas de gerencia de inspiración neoliberal,

pero lo hicieron en momentos diferentes, con métodos particulares y con poquísima solidaridad entre los dos sindicatos. Como vimos en los Capítulos 1 y 2, durante la década de 1970 el SIP montó una lucha exitosa para transformar el estatus de las trabajadoras eventuales. La participación activa de las eventuales cambió radicalmente al sindicato, tanto en su cobertura como en su militancia. No recibieron apoyo alguno del Sindicato Agua (con la excepción de la huelga de 1979). Durante la década de 1980, el Sindicato Agua luchó contra las prácticas gerenciales de carácter neoliberal. Cuando el desempleo alcanzó el 33%, el Sindicato Agua movilizó a los marineros eventuales y vinculó sus intereses al de la fuerza laboral permanente. El Sindicato Agua se opuso por encima de todo al sistema de subcontratación que la gerencia —a imitación de la incipiente pero poderosa tendencia global— intentó, imponer. El Sindicato Tierra, sin embargo, aceptó el nuevo sistema, un presagio de las estrategias gerenciales neoliberales, como la única forma de mantener a flote la empresa. El desencuentro impidió una alianza potencial, que bien pudo haber trazado una ruta diferente en medio de la tormenta neoliberal que arrancó todo lo solidario a su paso.

Un miembro del Sindicato Agua resumió su causa: “Es mejor luchar hoy que vivir mañana como esclavos modernos de una sociedad injusta, que no reconoce los derechos de quienes trabajamos”.<sup>14</sup> Un trabajador izquierdista de planta pudo haber expresado las mismas palabras. Pronunciadas por un marinero democristiano, sin embargo, su significado se perdió en las aguas de la bahía.

<sup>14</sup> Central Latinoamericano de Trabajadores, CLAT *Informativo*, abril de 1988, p. 42.

Ana Alvarenga observa la destrucción de la desindustrialización tropical, las estructuras vacías, las bandas transportadoras que no transportan nada, la maquinaria esparcida por doquier en las instalaciones de Pezca S. A.:

Me da decepción ver una empresa que le llamaban el monstruo de Centro América donde muchas familias quedaron sin el sustento diario, gente que ha sido luchadora porque los salvadoreños somos gente trabajadora que luchamos por salir adelante y me da decepción al ver que las grandes máquinas que habían acá, todo destruido. Siento un sentimiento al ver a tanta gente afuera con necesidad.<sup>15</sup>

¿Acaso era posible otro resultado?<sup>16</sup> Para responder a esta pregunta debemos revisar con ojo crítico la transformación de la dirigencia de izquierda del SIP. De haber reconocido las posibilidades de una alianza con el Sindicato Agua en su lucha por una cooperativa, las amplias redes de solidaridad del SIP quizá hayan resistido también el embate de la racionalidad neoliberal. A la vez, el Sindicato Agua tendría que haber refrenado a su caudillo, Mauricio Benítez, para que pudieran haberse establecido unas relaciones horizontales entre los dos sindicatos. La creación de una cooperativa, que estaba al alcance de ambas, habría permitido la formación de un espacio de solidaridad, de relaciones sociales igualitarias. Tales espacios de resistencia, empero limitadas y problemáticas, son las únicas murallas existentes para aguantar el huracán glo-

<sup>15</sup> Ana Alvarenga, entrevista con el autor, Puerto El Triunfo, 2015.

<sup>16</sup> En respuesta a mi película, Puerto Triunfo, el profesor Daniel James planteó la siguiente pregunta: “En vista de la concatenación extraordinaria de violencia estatal arrolladora, la hostilidad de la compañía y una guerra civil furiosa, ¿qué otro desenlace era posible?” Comunicación personal con el autor, febrero de 2018.

bal del neoliberalismo. En 1998, el huracán Mitch provocó una devastación en toda Centroamérica. Las represas en las cercanías del cultivo del camarón en Honduras colapsaron y los torrentes de agua contaminada llegaron hasta la Bahía de Jiquilisco. Contra unos huracanes reales y metafóricos, la cooperativa de camarones quizá no habría sobrevivido.

La teórica Wendy Brown advierte en contra de la nostalgia de izquierda en parte porque el objeto del luto ha sido un Estado de bienestar profundamente defectuoso. Es más, argumenta persuasivamente que semejante afecto impide el desarrollo de alternativas serias al *statu quo*. Ana y otros trabajadores portuarios y marineros recuerdan sus momentos de liberación y triunfo con orgullo y nostalgia, mezclado con la amargura de una derrota final cuyas causas permanecen tan turbias como las aguas contaminadas de la bahía. Este libro ha intentado esclarecer algo esas aguas turbulentas de la desesperación. El lector puede que detecte esperanza en los momentos de liberación y solidaridad, compartidos por tantos que se esforzaron en crear nuevas formas sociales que reflejan dichos valores, a pesar de las ideologías y las políticas neoliberales generalizadas que no solamente impidieron su desarrollo, sino que también, le negaron su mismo derecho a existir. Los recuerdos de la solidaridad contienen su propio potencial radical: evocan sueños y aspiraciones largamente censurados de una vida digna en un mundo mejor.

## EPÍLOGO

Arnovis Guidos Portillo, detenido en la frontera sur de Estados Unidos en junio de 2018, cuando supo que su hija había sido trasladada por ICE [Immigration and Customs Enforcement, la oficina federal de migración y aduanas de Estados Unidos] a Florida o Nueva York. Había huido de la Calle 18 en Puerto El Triunfo después de un altercado con un hermano de un jefe de pandilla durante un juego de fútbol.

FUE CUANDO SENTÍ QUE EL INFIERNO ME TRAGABA

La familia Pérez zarpa al amanecer. José, Marta y sus tres hijos de 6 a 15 años de edad reman en su cayuco desde su choza en una isla hasta el otro lado de la Bahía de Jiquilisco en busca de curiles. La belleza del amanecer se desvanece cuando se adentran en las sombras profundas del manglar. Marcos, el mayor, amarra el cayuco, mientras el resto de la familia recogen sus redes y baldes. Los más pequeños se mantienen cerca del cayuco pero Marcos se

abre paso entre las ramas hasta encontrar un área lodosa en las profundidades del manglar. Los cinco trabajan en el calor y el fango, extrayendo los curiles y depositándolos en bolsas de cáñamo. Todos fuman puros caseros para espantar a las nubes de insectos. A media tarde, se bañan en las aguas de la bahía, colocan su cosecha en el cayuco y emprenden el retorno a través de la bahía hasta Puerto El Triunfo a una hora de distancia. En una cantina cerca del muelle municipal, José regatea con el dueño antes de venderle la cosecha del día. Los curiles que la familia recogió con tanta dificultad no tienen mucho valor en vista de que son bocadillos para consumir con cerveza. La familia devenga entre 80 y 120 dólares mensuales a cambio de su trabajo arduo, 365 días al año. Los niños no pueden asistir a la escuela, unas víctimas de la lucha por sobrevivir de la familia.<sup>1</sup>

Al igual que la familia Pérez, más de 3 000 residentes del área, en su mayoría mujeres y niños, pasan sus días en estas condiciones infrahumanas recogiendo curiles en el fango de los manglares. Otras 5 000 a 8 500 personas se dedican a la pesca artesanal en la bahía y 4 000 más trabajan en el cultivo del camarón. Cerca de la mitad de la población de la región, incluyendo Puerto El Triunfo, sobrevive, exclusivamente gracias a sus labores en la Bahía de Jiquilisco.<sup>2</sup> El cierre de las plantas procesadoras durante la década de 1990 aumentó la población de estos pescadores y recolectores de subsistencia. Pero las mismas fuerzas ambientales de con-

<sup>1</sup> El autor y un equipo de cine pasaron un día con la familia en mayo de 2015. Los nombres son seudónimos.

<sup>2</sup> Rafael E. Cartagena, Elías Escobar y Oscar Díaz, *La zona costera de Usulután: retos para la gobernanza ambiental territorial*, San Salvador, PRISMA, 2012, p. 11. El cultivo del camarón arrancó al finalizar la guerra y se practica generalmente a orillas de la bahía y de los bosques de mangle.

taminación química, sobreexplotación pesquera y destrucción de los manglares que afectaron a la industria del camarón también amenazan sus precarios medios de vida.<sup>5</sup>

Ya en 1976, un estudio demostró que la población que vivía cerca de la bahía tenía cinco veces más residuos de insecticidas en su sangre que el resto de la población de Centroamérica.<sup>4</sup> Esos mismos contaminantes provenientes de las plantaciones de algodón vecinas junto con la sobreexplotación del recurso pesquero contribuyeron de manera directa a una reducción del 50% entre 1978 y 1992 de la captura del camarón blanco (la contaminación afecta a larvas del camarón en la bahía).<sup>5</sup> Durante la década de 1990, el cultivo de caña de azúcar sustituyó al algodón en las plantaciones (la más grande todavía propiedad de la familia Wright) que bordean la Bahía de Jiquilisco, pero eso no disminuyó la contaminación resultante de las esorrentías agrícolas cargadas de insecticidas.

En 1998, el huracán Mitch irrumpió en el área, castigando con más estragos a los habitantes de la zona y a las empresas industriales y artesanales del camarón que quedaban.<sup>6</sup> Con independencia de la magnitud exacta de los daños, la producción de camarón (exclusivamente para el mercado local) se desplomó en más de 2 millones de kilos en 1995 a menos de 500 000 en 2000.<sup>7</sup> En tiem-

<sup>5</sup> *Loc. cit.*

<sup>4</sup> Dirección General de Recursos Naturales Renovables, “Estudio de contaminación por insecticidas en la Bahía de Jiquilisco, 1975-1976”, San Salvador, 1976, p. 84.

<sup>5</sup> La primera veda se promulgó apenas en 2002.

<sup>6</sup> Mario Sáenz, presidente de Atrarraya S. A., entrevista con el autor, San Salvador, 2015.

<sup>7</sup> Dirección General de Pesca y Acuicultura, *Consideraciones técnicas sobre la pesca en zonas costeras de El Salvador*, San Salvador, MAG/Gobierno de El Salvador, 2012.

pos recientes, la producción industrial del camarón ha vuelto a sus niveles previos al huracán, pero sin capacidad para darles trabajo a más de 250 marineros no sindicalizados.

Habría sido muy difícil pero no imposible que la cooperativa que Benítez tuvo en mente sobreviviera los efectos combinados de la devastación del huracán, el deterioro ambiental, y las décadas de sobreexplotación pesquera. No obstante, el espíritu cooperativo de la década de 1980 ha perdurado en los entornos de la Bahía de Jiquilisco. La mayoría de pescadores artesanales y criadores de camarón están organizados en cooperativas y varios antiguos activistas sindicales se encuentran a la cabeza de organizaciones comunales, que promueven esfuerzos para mejorar la seguridad en esta zona asolada por pandillas y alcanzar los requerimientos mínimos para una vida digna.

Como es de esperarse, a los exiliados en Norteamérica les ha tocado otra condición. Aunque están mejor económicamente, ninguno de ellos es rico. Todos sienten nostalgia por el Puerto y El Salvador. Saben que no tenían alternativa más que partir, pero aun así persiste una sensación de remordimiento en sus conciencias debido a su ausencia del terruño. Sienten mucha empatía hacia los nuevos inmigrantes de Centroamérica, quienes tampoco tuvieron opción alguna, si acaso, sino emigrar.

Alejandro Molina Lara se fue al exilio en agosto de 1981. Sin embargo, antes de irse, sus camaradas de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (en adelante FENASTRAS), la mayoría de los cuales guardaba prisión, le informaron que anticipaban su retorno para el próximo congreso a fines de año para poderlo elegir secretario general. En Los Ángeles tuvo dificultades para conseguir el dinero para volver y, en consecuencia, llegó unas semanas tarde. Se reunió con un militante del Frente de Acción

Popular Unificado (en adelante FAPU) quien le informó que como castigo por su inasistencia al congreso tendría que trabajar en una fábrica en vez de asumir la dirigencia de la federación sindical. En ese momento, FAPU estaba vinculado a la guerrilla y ejercía un control prácticamente total sobre FENASTRAS. Enojado y desilusionado, Alejandro viajó clandestinamente a Puerto El Triunfo donde sus compañeros del sindicato recabaron suficiente dinero para su viaje de retorno a Estados Unidos.

De vuelta en Los Ángeles, fue contactado por militantes de FENASTRAS, quienes se disculparon y le explicaron que el dirigente de FAPU que lo había sancionado actuó incorrectamente. Entonces le pidieron que emprendiera una gira en apoyo a sus camaradas encarcelados. Aceptó sus disculpas y se dedicó durante el resto de 1982 a viajar por Estados Unidos. Con el patrocinio de CISPE (Committee in Solidarity with the People of El Salvador) y sindicatos progresistas, se desplazó desde las minas de carbón de West Virginia hasta las minas de cobre de Arizona, dando discursos apasionados a miembros de sindicatos sobre las luchas obreras salvadoreñas.<sup>8</sup>

Alejandro volvió a Los Ángeles e inmediatamente trajo a sus cuatro hijos y a su esposa, de quien estaba separado para que vivieran con él. Un contacto en el Sindicato de Trabajadores Eléctricos Unidos (United Electrical Workers' Union, en adelante UE) que conoció durante sus giras le consiguió un trabajo como soldador en una pequeña fábrica industrial de alambres. Se involucró decididamente en la seccional 1421 de la UE, en esos tiempos uno de los sindicatos más progresistas. Al cabo de un año, los trabajadores

<sup>8</sup> "Salvadoran Trade Unionist on Tour in U.S. Coalfields", en *The Militant*, 26 de noviembre, 1982.

hispanohablantes lo eligieron delegado sindical y eventualmente presidente de la seccional 1421 con presencia en siete fábricas. En 1998, dirigió una huelga mayormente exitosa contra la Industrial Wire Company en procura de un aumento salarial (de 9.30 la hora a 13 dólares) y en contra de turnos de 12 horas sin pago de horas extras.<sup>9</sup> Al igual que en el Puerto en 1979, Molina Lara de nuevo dirigió una huelga que duró por meses. Después de la huelga, la gerencia tomó represalias contra él, cambiándolo de su trabajo como soldador de mantenimiento a la línea de producción. Una confrontación con un dirigente sindical regional lo privó de un apoyo posible, justo en este momento crítico. El cambio a la línea de producción resultó agotador porque estaba más ajustado para personas menores. En ese momento, Alejandro se acercaba a los 60 años de edad. Después de dos años, una bobina grande de alambre industrial le cayó encima; sufrió graves heridas en la espalda y el hombro. Cuando se agotaron los subsidios por incapacidad, se jubiló y comenzó a vivir de las prestaciones de la seguridad social.

Al recordar su trayectoria en el movimiento obrero internacional, Alejandro no siente ningún remordimiento. No obstante, su compromiso fuerte e inquebrantable tuvo sus costos personales. No tuvo suficiente tiempo para dedicarse a sus hijos.

Gloria también huyó hacia Los Ángeles en 1981. No tenía parientes o amistades que le apoyaran aunque en 1988 su hermana, también una trabajadora en Pezca, se le unió. Gloria encontró trabajo primero en un restaurante mexicano. Cuando obtuvo la residencia en 1985, consiguió empleo en un pequeño taller de metalmecánica donde no había sindicato. En 1990, sufrió una he-

<sup>9</sup> *The Militant*, 19 de enero, 1998; Molina Lara, entrevista con el autor, Los Ángeles, 2017.

rida grave en la espalda mientras trabajaba. La compañía no le ayudó, sino con las prestaciones por invalidez. En 1991, le entregaron 1 000 dólares por indemnización. Después solamente pudo conseguir trabajos que no le agravaran la herida en la espalda, tales como cuidar niños. Se sometió a varias operaciones pero todavía padece dolor. Gloria se lamenta que tuvo que aguantar tanta pobreza en Los Ángeles por tanto tiempo. “nunca pude darles a mis hijos nada especial. Nunca tuvieron ropa de marca”.<sup>10</sup> Tampoco disfrutó de vacación alguna. Durante la filmación de Puerto Triunfo, la llevamos a pasear al observatorio en Griffith Park, un lugar muy concurrido en Los Ángeles. Sonriendo, nos comentó, “primera vez que vengo aquí”. Sus hijos pudieron completar sus estudios y eventualmente consiguieron buenos empleos. Un hijo es policía y el otro es operario de trenes en el puerto de San Pedro. Sus hijos la apoyan y cada cierto tiempo le compran un boleto para que visite a sus familiares y amistades en Puerto El Triunfo. A pesar de los años de precariedad económica, su vida familiar ha sido gratificante; vive de manera alterna con sus dos hijos y sus cónyuges e hijos. Gloria se siente realizada en su relación con sus cinco nietos, quienes le brindan mucha alegría.

Justo después de la bomba en FENASTRAS en octubre de 1989, Ana Alvarenga decidió que ya no podía soportar las amenazas de muerte que recibía constantemente. Logró conseguir un estatus de refugiada a través de la embajada de Canadá. El sistema de seguridad social de ese país cuidó de ella y sus seis hijos. Todos recibieron una buena educación y hoy en día son profesionales trilingües. Al igual que Gloria, Ana está encantada con sus nietos. Sus hijos la apoyan bien. Puede volver todos los años a Puerto El

<sup>10</sup> Gloria García, entrevista con el autor, Los Ángeles, febrero de 2017.

Triunfo, donde mantiene una casa con aire acondicionado y participa en organizaciones religiosas y comunales.

Sus antiguos compañeros de sindicato que viven en Los Ángeles están comenzando a sentir la ansiedad de sus comunidades después de la victoria electoral de Trump. Alejandro la interpreta como un reflejo de racismo antilatino. Ángel Escobar cree que la única solución para hacerle frente a la desesperación que embarga a la comunidad latina sería una huelga general de una semana de duración.<sup>11</sup> Gloria teme que el gobierno de Trump pueda despojarla a ella y a otros latinos de su ciudadanía. Ella me confió esa ansiedad en febrero de 2017. A manera de confirmación de sus preocupaciones por su estatus, el gobierno de Trump ha intensificado el acoso en la frontera sur a los refugiados centroamericanos, criminalizando a los que solicitan asilo y deteniéndolos en grandes cantidades, separándolos de sus hijos, y deportando a muchos. Entre aquellos se encuentra Arnovis Guidos Portillo, separado de su hija de seis años de edad y deportado de vuelta a El Salvador, desde donde había huido por temor a la pandilla de la Calle 18 en Puerto El Triunfo.<sup>12</sup> El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos también ha intensificado sus investigaciones de aquellos ciudadanos naturalizados bajo sospecha de haber obteni-

<sup>11</sup> Ángel Escobar fue colocado en una lista negra junto con otros activistas del Sindicato Agua y no pudo encontrar trabajo en alta mar, razón por la cual se vio obligado a emigrar. Hoy trabaja como cocinero en Universal Studios.

<sup>12</sup> Joshua Partlow, "U.S. Officials Separated Him from His Child", en *Washington Post*, 23 de junio, 2018. En [www.washingtonpost.com/world/the-americas/u-s-officials-separated-him-from-his-child-then-he-was-deported-to-el-salvador/2018/06/23/37b6940a-7663-11e8-bda1-18e53a448a14\\_story.html?utm\\_term=.9e7a1945dae7](http://www.washingtonpost.com/world/the-americas/u-s-officials-separated-him-from-his-child-then-he-was-deported-to-el-salvador/2018/06/23/37b6940a-7663-11e8-bda1-18e53a448a14_story.html?utm_term=.9e7a1945dae7) (fecha de consulta: 9 de julio, 2018).

do la ciudadanía fraudulentamente con el objetivo de quitársela.<sup>15</sup> Todos estos aspectos de la política migratoria, de cero tolerancia de Trump corroboran los temores expresados por Gloria. Para ella, es el momento de poner a un lado las diferencias dentro de la comunidad y resistir todos juntos, hasta donde sea posible.

En febrero de 2018, Carlos Henríquez Consalvi y yo presentamos la película, Puerto El Triunfo, ante unos 50 residentes del Puerto durante un evento convocado por la Casa de la Cultura. Anticipé que la película sería duramente criticada por ambos lados de la división histórica entre los sindicatos de Tierra y Agua, en vista de la perspectiva equilibrada que presenta el documental del conflicto de la década de 1980. Mientras esperaba que me hicieran la primera pregunta, Carmen Minero se levantó y caminó hacia el podio. Le cedí el puesto y comenzó un relato apasionado sobre sus arduas labores como trabajadora y luchadora del SIP. De hecho, repitió mucho de su testimonio que figura en el documental. Otros también se pusieron de pie y ofrecieron su testimonio. Se me ocurrió después que lo que estaban diciendo los protagonistas, en cierto sentido, era una validación de ellos mismos y de la película, con lo que subrayaban tanto las diferencias como las continuidades entre su imagen filmica y sus palabras editadas y ellos mismos como seres físicos. Otros que no figuraron en la película hicieron comentarios similares sobre el valor de sus luchas colectivas. Nadie preguntó sobre la película. Por cierto, no tuvieron necesidad de preguntar algo porque ellos eran autoridades sobre sus propias experiencias.

<sup>15</sup> Jamelle Bouie, “White Fight”, en *Slate*, 8 de julio, 2018. En <https://amp.slate.com/news-and-politics/2018/07/donald-trump-is-leading-the-republican-charge-to-preserve-a-shrinking-white-majority.html> (fecha de consulta: 9 de julio, 2018).

El terror que embargó a los activistas del SIP en 1980 y 1981 todavía atormenta a algunas personas. Ovidio se siente casi paralizado por su ambivalencia cuando ve soldados patrullando las calles. Y Gloria, desde su situación relativamente segura en Los Ángeles, reflexiona sobre el pasado. Durante una presentación de la película en la Universidad de California en Irvine, en respuesta a una pregunta de la audiencia sobre el terror y el trauma, comentó, “Las heridas ya no sangran pero siempre duelen”.<sup>14</sup>

Los recuerdos del terror y la pérdida de sus medios de vida persisten en las mentes de ambos, los residentes del Puerto y los exiliados de edad madura. Todos viven con fuertes sentimientos de ambivalencia. Puerto El Triunfo parece estar saliendo de la larga noche de violencia pandilleril pero, como en el caso de Ovidio, muchos ven a los militares que patrullan las calles con una mezcla de gratitud y pavor, gratitud por proporcionar una sensación de seguridad frente a las pandillas y pavor por evocar los recuerdos de la represión militar durante la guerra civil. Han superado las divisiones del pasado para emprender esfuerzos colectivos, que intentan mejorar las condiciones de vida para todos y crear oportunidades para la juventud del área. Sin embargo, los sueños de igualdad y prosperidad encarnados en sus luchas sindicales ahora parecen casi inimaginables.

Los exiliados en Estados Unidos sienten orgullo y una pizca de resentimiento contra “el sistema absorbente,” en palabras de Alejandro, cuando observan la americanización total de sus hijos y nietos. Se sienten relativamente cómodos, aunque alienados de la corriente cultural dominante. Después de vivir décadas en Estados

<sup>14</sup> Gloria García, comentarios a la audiencia durante la presentación de la película, UC Irvine, marzo de 2018.

Unidos, desean seguir siendo parte del tejido social salvadoreño. Lo hacen volviendo a casa cuando pueden, apoyando proyectos locales con los recursos que tienen disponibles y defendiendo a la comunidad de la diáspora contra lo que perciben como una agresión implacable, aunque distinta a la de 1980. Algunos sugieren que la hostilidad y la agresión se originan en el mismo lugar, entonces y ahora. En respuesta, todavía saben cómo lanzar una red de solidaridad.

## AGRADECIMIENTOS

En primer lugar quiero agradecer el trabajo de Knut Walter, cuyo resultado es esta excelente traducción.

Desde que comencé este proyecto en 2011, he dependido de la bondad y la asistencia de numerosas personas. Apenas iniciado el proyecto, conocí a Ovidio Granadeño en Puerto El Triunfo, quien resultó ser un informante inestimable. Es más, me permitió acceder a la ahora decrépita sede sindical donde me mostró montones de papeles que describió como el archivo. Por suerte, encontré un valiente y capaz asistente de investigación, David Segovia, quien soportó las adversidades del Puerto y fotografió todos los papeles desordenados y elaboró un esquema rudimentario de organización para el archivo. Después de conocer a Adela Amaya y Ruperto Torres, antiguos activistas del Sindicato Agua, pude tener acceso al pequeño pero invaluable archivo del sindicato, que David también fotografió.

En el Puerto, también fui apoyado por las entrevistas que me concedieron Migdonio Pérez, Migdalia Chavarría, Virginia Reyes y Maura de Zelaya. Juan Raúl Alberto quienes me proporcionaron información y perspectivas valiosas por medio de correos electrónicos y en persona. Entrevisté y consulté a Ricardo Jovel en San Salvador y en el Puerto. Sin embargo, desarrollé las más extensas y profundas relaciones con tres exiliados de la década de 1980: Gloria García en Los Ángeles, Alejandro Molina Lara en Los Ángeles y Puerto El Triunfo, y Ana Alvarenga en Montreal y el Puerto. Ángel Escobar (Los Ángeles) también proporcionó unas perspectivas fascinantes como antiguo marinero de barco camaronero al igual que Rolando Franco (Los Ángeles), quien fue dirigente sindical hacia fines de la década de 1980. También entrevisté a Noé Quinteros en Houston, con quien desarrollé una valiosa correspondencia por correo electrónico. Le debo a él una muy detallada descripción del proceso productivo de la industria del camarón. Yvette Bará quien se desempeñó en la gerencia de Pezca S. A., justo antes de la huelga de 1987 y volvió para realizar trabajo de campo sociológico, también resultó ser de mucha ayuda.

Le debo mucho a Carlos Henríquez Consalvi (Santiago), con quien colaboré en dos películas documentales y en mi más reciente titulada “Puerto El Triunfo”. Santiago proporcionó transporte, colaboró en las entrevistas, y nos acompañó (junto con su muy creativo hijo Camilo) en todos los viajes que hicimos al Puerto. El cineasta Guillermo Escalón nos acompañó a menudo y no paraba de comentar sobre las entrevistas (y el entrevistador) en términos ocurrentes e interesantes. También aproveché extensamente los archivos y las instalaciones del Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) en San Salvador, que está bajo la dirección de Santiago.

También fui apoyado por el trabajo altamente competente de varios otros asistentes de investigación durante el desarrollo del proyecto: Luis Rubén González, Herberth Stanley Morales, Jonathan Warner y Casey Korducki. Chris Eichstedt me proporcionó copias de materiales que ubicó en la ciudad de Ámsterdam.

Verónica Guerrero, la bibliotecaria del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, proporcionó ayuda invaluable tanto en la misma biblioteca como a distancia. Respondió de inmediato a numerosas solicitudes enviadas por correo electrónico y después escaneó documentos y fotos. Tengo una enorme deuda con esta infatigable bibliotecaria.

Recibí gran apoyo financiero de los siguientes programas en Indiana University: Center for Latin American and Caribbean Studies, College Arts and Humanities Institute, New Frontiers in the Arts and Humanities, Mellon Short Term Faculty research program.

En el Instituto para Estudios Superiores [Institute for Advanced Study, IAS] (2012-2013), donde disfruté de un año dedicado a la investigación y la reflexión, Marcia Tucker, la bibliotecaria, se extralimitó para ayudarme. El resto del equipo del IAS también me ayudó mucho, especialmente Marian Zelazny.

En el Centro Charles Warren de la Universidad de Harvard, Monnikue McCall y Arthur Patton-Hoc proporcionaron asistencia administrativa que mucho aprecio. Fred Burchsted me ayudó para conocer los recursos de la biblioteca Widener. Kirsten Weld y Brandon Terry se lucieron al dirigir un seminario fascinante, en el cual tuve la oportunidad de presentar algunos elementos de este proyecto.

En el Centro Warren, también tuve la fortuna de formar parte de un pequeño grupo dedicado a los estudios sobre Latinoamérica.

Carlos McCallister, Forrest Hylton y Kirsten Weld intercambiaron capítulos. Sus comentarios resultaron extremadamente oportunos, y disfruté enormemente la lectura y discusión de sus trabajos.

También presenté versiones preliminares de esta obra en la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Yale. Agradezco a David Díaz por organizar la presentación en aquella y a Gil Joseph por la presentación en ésta.

Tuve la oportunidad de presentar ponencias basadas en las investigaciones preliminares en las siguientes conferencias: “Global Labour in the 1970s: A Research Agenda” [La mano de obra global en la década de 1970: una agenda de investigación], ReWork, 2015, Humboldt University. Agradezco a Alex Lichtenstein por organizar un taller tan excelente y a Paulo Fontes por sus comentarios.

“From Proletariat to Precariat: Changing Labor Relations in the Twentieth and Twenty-First Centuries” [De proletariado a precariado: la cambiantes relaciones de trabajo en los Siglos Veinte y Veintiuno], Indiana University, 2014. Mis agradecimientos a Eddie Brudney por sus habilidades organizativas y a John French por sus comentarios que me obligaron a reevaluar algunos de mis supuestos originales.

Varios colegas aportaron comentarios invaluable al manuscrito. En estos días de mayores exigencias de trabajo para los docentes, reconozco el nivel de dedicación que supone leer un manuscrito entero (o partes considerables de uno). Mis más profundos agradecimientos a Purnima Bose, David Díaz Arias, Heidi Tinsman, Peter Guardino, Danny James, Heather Vrana y Kirsten Weld. En la Universidad de Indiana, debo agradecer el apoyo administrativo de Becky Bryant y Deana Hutchins. Luis González, nuestro

bibliotecario encargado de los recursos latinoamericanos, ha sido de enorme ayuda durante toda mi carrera académica.

Ha sido para mí un gran placer trabajar con mi editora en la editorial de la Universidad de Cambridge. Nunca he tenido una relación de trabajo tan intensa y productiva con una editora. Leyó meticulosamente cada capítulo y anotó observaciones perspicaces en cada página. Este libro ha resultado infinitamente mejor gracias a su asistencia.

De nuevo, tengo una gran deuda con Ellie por aguantar mis viajes, temores y frustraciones durante otro proyecto centroamericano. Gabriela, Mónica y Carlos también me han apoyado desde lejos. Cuando le insistí a Sofía, nuestra nieta de cinco años, que tenía que ir a la oficina para terminar el libro, me respondió “¿Te vas a trabajar en esas fachas?”

Me costó explicarle mi forma de vestir, pero me inspiró de todas maneras.

## BIBLIOGRAFÍA

### FUENTES DE ARCHIVO

Puerto El Triunfo – Todos digitalizados  
Sindicato de la Industria Pesquera (SIP), Archivo General  
Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera (SGTI-  
PAC-Sindicato Agua), Archivos  
SIP Archivos Departamentales  
Subseccional Atarraya Archivos  
Subseccional Pezca Archivos

### SAN SALVADOR

Archivo de la Asamblea Legislativa (AAL)  
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)  
Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investiga-  
ción (CIDAÍ)  
Centro Intercultural de Documentación (CIDOC)



SOLIDARIDAD BAJO ASEDIO

PAÍSES BAJOS

Erasmus University Rotterdam

Kooster Collection, International Institute of Social Studies

ESTADOS UNIDOS

Digital National Security Archive (DNSA)

El Salvador: The Making of U.S. Policy, colección de 1977–1984

El Salvador: War, Peace, and Human Rights, colección de 1980–  
1994

North American Congress on Latin America (NACLA) Archivo

DOCUMENTOS OFICIALES

Corte Suprema de Justicia

Diario Oficial

Juzgado Segundo de lo Penal

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

US Congress, Senate

US Department of Labor

US Department of State

ENTREVISTAS Y CORRESPONDENCIA

Alvarenga, Ana

Amaya, Adela

Bará, Ivette

Campos, Fidel Caifás  
Castellón, Elsie  
Chavarría, Migdalia  
de Zelaya, Maura  
Escobar, Ángel Escolástico  
Franco, Roberto  
Franco, Rolando  
Galileo, Amilcar  
García, Gloria  
Granadeño, Altagracia  
Granadeño, Ovidio  
Grande Preza, José Luis  
Huezo Mixco, Miguel  
Jovel, Ricardo  
Mena Lagos, Alfredo  
Minero, Carmen  
Molina Lara, Alejandro  
Palma, Evelio Ortiz  
Paniagua, Ana  
Parada, Carmen  
Pérez, Migdalia  
Pérez, Migdonio  
Quinteros, Noé  
Reyes, Virginia  
Sáenz, Mario  
Scanlon, Francis  
Schipull, Norman  
Segovia, Eloísa  
Torres, Ruperto

PERIÓDICOS Y REVISTAS

Agence France-Presse  
Associated Press  
Central America Report  
*Christian Science Monitor*  
*Diario Latino*  
Dissent (United States)  
*El Diario de Hoy*  
*El Faro*  
*El Independiente*  
*El Mundo*  
*El Salvador Times*  
Executive Intelligence Review  
*La Crónica*  
*La Prensa Gráfica*  
*Latin American Weekly Report*  
*Los Angeles Review of Books*  
*Los Angeles Times*  
*The Militant*  
*New York Times*  
*New York Times Magazine*  
*Panama City* ACAN  
*Proceso* (El Salvador)  
*Pueblo*  
*Pueblo Internacional*  
*Radio Reloj* (Costa Rica)  
*Slate*  
United Press International

*Washington Monthly*  
*Washington Post*  
*Vispera*

## FUENTES

- Albiac, María Dolores, “Los ricos más ricos de El Salvador”, en Rodolfo Cardenal y Luis Armando González [coords.], *El Salvador: la transición y sus problemas*, San Salvador, UCA Editores, 2002, pp. 153-183.
- Alexander, Robert, *A History of Organized Labor in Panama and Central America*, Westport, CT, Praeger Publishers, 2008.
- Almeida, Paul, *Waves of Protest: Popular Struggle in El Salvador, 1925-2005*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008.
- American Arbitration Association Commercial Arbitration Tribunal, “Award in the Matter of the Arbitration between Beckman Instruments, Inc. and Overseas Private Investment Corporation”, en *American Society of International Law*, vol. 27, núm. 5, septiembre de 1988, pp. 1260-1280.
- Anaya, Eugenio, “Crónica del mes”, en *Estudios Centroamericanos*, vol. 34, núm. 374, noviembre-diciembre de 1979, pp. 1088-1093.
- Arias Segundo, José Isidro, *Puerto El Triunfo: 487 años de antología histórica*, Puerto El Triunfo, Centro de Tecnología, 2009.
- Bataillon, Gilles, *Génesis de las guerras intestinas en América Central (1960-1983)*, México, FCE, 2008.
- Bayard de Volo, Lorraine, *Women and the Cuban Insurrection: How Gender Shaped Castro's Victory*, Nueva York, Cambridge University Press, 2018.

- Bayertz, Kurt, “Four Uses of Solidarity”, en Kurt Bayertz [coord.], *Solidarity*, Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 1999, pp. 3-28.
- Bergquist, Charles, *Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela, and Colombia*, Stanford, CA, Stanford University Press, 1986.
- Bollinger, William, “El Salvador”, en Gerald Michael Greenfield y Sheldon L. Maram [coords.], *Latin American Labor Organizations*, Nueva York, Greenwood Press, 1987, pp. 307-388.
- Bosteels, Bruno, *Marx and Freud in Latin America, Politics, Psychoanalysis, and Religion in Times of Terror*, Londres, Verso Press, 2012.
- Bourdieu, Pierre, *Sociology in Question*, Londres, Sage, 1993.
- Bourgeois, Phillipe, *Ethnicity at Work: Divided Labor on a Central American Banana Plantation*, Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, 1989.
- Brockett, Charles D., *Political Movements and Violence in Central America*, Nueva York, Cambridge University Press, 2005.
- Cabarrús, Carlos Rafael, *Génesis de una revolución: análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, 1983.
- Cabrera, Mario E., *Piruetas*, San Salvador, Palibrio, 2012.
- Cáceres Prendes, Jorge, “Estado, sociedad y política de un contexto de insurgencia popular: El Salvador 1980-1987”, en *Anuario de Estudios Centroamericanos*, vol. 14, núms. 1 y 2, 1988, pp. 25-49 y 51-68.
- Campos, Rodolfo R. [ed.], *El Salvador entre el terror y la esperanza: los sucesos de 1979 y su impacto en el drama salvadoreño de los años siguientes*, San Salvador, UCA Editores, 1982.

- Campos, Tomás (Ellacuría), “La iglesia y las organizaciones populares en El Salvador”, en *Estudios Centroamericanos*, vol. 33, núm. 359, septiembre de 1978, pp. 692-702.
- Cartagena, Camelia, *El silencio de los culpables: El Salvador, luchas sindicales, dos décadas de oro (1970-1989)*, San Salvador, Servicios Gráficos El Salvador, 2015.
- Cartagena, Rafael E., Elías Escobar y Oscar Díaz, *La zona costera de Usulután: retos para la gobernanza ambiental territorial*, San Salvador, PRISMA, 2012.
- Casper, Norman, “El IADSL y la corrupción del movimiento sindical de El Salvador”, en *Estudios Centroamericanos*, vol. 41, núm. 449, marzo de 1986, pp. 205-229.
- Caulfield, Sueann, Sarah Chambers y Lara Putnam [eds.], *Honor, Status, and Law in Modern Latin America*, Durham, NC, Duke University Press, 2005.
- Colindres, Eduardo, *Fundamentos económicos de la burguesía salvadoreña*, San Salvador, UCA Editores, 1977.
- Cruz, Ernesto, “Crónica del mes, marzo-abril”, en *Estudios Centroamericanos*, vol. 41, núm. 450, marzo-abril de 1986, pp. 342-353.
- Chávez, Joaquín, *Poets and Prophets of the Resistance: Intellectuals and the Origins of El Salvador's Civil War*, Nueva York, Oxford University Press, 2017.
- Ching, Erik, *Stories of Civil War in El Salvador: A Battle over Memory*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2016.
- Dardot, Pierre y Christian Laval, *The New Way of the World: On Neoliberal Society*, Nueva York, Verso, 2014.
- Díaz, Arlene J., *Female Citizens, Patriarchs, and the Law in Venezuela, 1786-1904*, Lincoln, University of Nebraska Press, 2004.
- Duarte, José Napoleón, *Duarte: My Story*, Nueva York, Putnam, 1986.

- Eisenbrandt, Matt, *Assassination of a Saint: The Plot to Murder Óscar Romero and the Quest to Bring His Killers to Justice*, Berkeley, University of California Press, 2017.
- Ellacuría, Ignacio, *Veinte años de historia de El Salvador (1969-1989), tomo II, escritos políticos*, San Salvador, UCA Editores, 1991.
- \_\_\_\_\_, “Las organizaciones populares ante la nueva situación”, en Rodolfo R. Campos [ed.], *El Salvador entre el terror y la esperanza: los sucesos de 1979 y su impacto en el drama salvadoreño de los años siguientes*, San Salvador, UCA Editores, 1982, pp. 613-615.
- Estudios Centroamericanos*, núms. 454-455, agosto-septiembre de 1986.
- Farnsworth-Alvear, Ann, *Dulcinea in the Factory: Myths, Morals, Men, and Women in Colombia’s Industrial Experiment, 1905-1960*, Durham, NC, Duke University Press, 2000.
- Fitzsimmons, Tracy y Mark Anner, “Civil Society in a Postwar Period: Labor in the Salvadoran Democratic Transition”, en *Latin American Research Review*, vol. 34, núm. 3, 1999, pp. 103-128.
- Freeman, Carla, *High Tech and High Heels in the Global Economy: Women, Work and Pink Collar Identities in the Caribbean*, Durham, NC, Duke University Press, 2000.
- French, John D., *Lula’s Politics of Cunning: From Trade Unionism to the Presidency. Part 2*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, en prensa.
- \_\_\_\_\_, y Daniel James [eds.], *Gendered World of Latin American Women Workers: From Household and Factory to the Union Hall and Ballot Box*, Durham, NC, Duke University Press, 1997.

- García Linera, Álvaro, “Indianismo y marxismo: el desencuentro de dos razones revolucionarias”, en *Revista Donataria*, núm. 2, marzo-abril de 2005, pp. 477-500. En <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/linera/7.3.pdf>.
- Gill, Lesley, *A Century of Violence in a Red City: Popular Struggle, Counter-insurgency, and Human Rights in Colombia*, Durham, NC, Duke University Press, 2016.
- Gould, Jeffrey L., “Ignacio Ellacuría and the Salvadorean Revolution”, en *Journal of Latin American Studies*, vol. 47, núm. 2, mayo de 2015, pp. 285-315.
- \_\_\_\_\_, *To Die in This Way: Nicaraguan Indians and the Myth of Mestizaje, 1880-1965*, Durham, NC, Duke University Press, 1998.
- \_\_\_\_\_, *To Lead as Equals: Rural Protest and Political Consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912-1979*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1990.
- Gould, Jeffrey L. y Aldo A. Lauria-Santiago, *To Rise in Darkness: Revolution, Repression, and Memory in El Salvador, 1920-1932*, Durham, NC, Duke University Press, 2008.
- Grandin, Greg, *The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War*, Chicago, University of Chicago Press, 2011.
- \_\_\_\_\_, “Living in Revolutionary Time: Coming to Terms with the Violence of Latin America’s Long Cold War”, en Greg Grandin y Gilbert M. Joseph [eds.], *A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin America’s Long Cold War*, Durham, NC, Duke University Press, 2010, pp. 1-43.
- \_\_\_\_\_, *Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism*, Nueva York, Metropolitan Books, 2006.

- Gross, George B., "Shrimp Industry of Central America, Caribbean Sea, and Northern South America", en *Marine Fisheries Review*, vol. 35, núms. 3 y 4, 1973, pp. 36-55.
- Guerra, Tomás, *El Salvador, octubre sangriento: itinerario y análisis del golpe militar del 15 de octubre de 1979*, San José, Centro Víctor Sanabria, 1979.
- Guerra y Guerra, Rodrigo, *Un golpe al amanecer: la verdadera historia de la proclama del 15 de octubre de 1979*, San Salvador, Índole Editores, 2009.
- Guido Béjar, Rafael, "El movimiento sindical después de la Segunda Guerra Mundial", en *Estudios Centroamericanos*, vol. 45, núm. 504, agosto de 1990, pp. 871-892.
- Harvey, David, *A Brief History of Neoliberalism*, Nueva York, Oxford University Press, 2005.
- Herrera Schlesinger, Ana Eloísa, "Los trabajadores de la industria pesquera", 1980 (Tesis doctoral en derecho, Universidad de El Salvador).
- Hilgers, Mathieu, "The Three Anthropological Approaches to Neoliberalism", en *International Social Science Journal*, vol. 61, núm. 202, octubre de 2011, pp. 351-364.
- James, Daniel, *Doña María's Story: Life, History, Memory and Political Identity*, Durham, NC, Duke University Press, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class 1946-1976*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
- Joseph, Gilbert M., "Latin America's Long Cold War: A Century of Revolutionary Process and U.S. Power", en Greg Grandin y Gilbert M. Joseph [eds.], *A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin America's Long*

- Cold War*, Durham, NC, Duke University Press, 2010, pp. 397-414.
- Kantor, Mark, Michael D. Nolan y Karl P. Sauvant, *Reports of Overseas Private Investment Corporation Determinations*, Oxford, Oxford University Press, 2011.
- LaFeber, Walter, *Inevitable Revolutions: The United States in Central America*, 2ª ed., Nueva York, Norton, 1993.
- LeoGrande, William M., *Our Own Backyard: The United States in Central America, 1977-1992*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1998.
- Levenson-Estrada, Deborah, *Adiós Niño: The Gangs of Guatemala City and the Politics of Death*, Durham, NC, Duke University Press, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Trade Unionists against Terror: Guatemala City, 1954-1985*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1994.
- Lindo-Fuentes, Héctor y Erik Ching, *Modernizing Minds: Education Reform and the Cold War, 1960-1980*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2012.
- Lungo, Mario, *El Salvador in the Eighties: Counterinsurgency and Revolution*, trad. al inglés por Amelia Shogun, Philadelphia, Temple University Press, 1996.
- \_\_\_\_\_, *La lucha de las masas en El Salvador*, San Salvador, UCA Editores, 1987.
- Majano, Adolfo Arnoldo, *Una oportunidad perdida: 15 de octubre 1979*, San Salvador, Índole Editores, 2009.
- Martí, César, “LP-28: Unidad revolucionaria y perspectivas de poder”, en *El Salvador: alianzas políticas y proceso revolucionario. Cuadernos de Coyuntura*, núm. 5, México, Sociedad de Economía Política Latinoamericana, 1979, pp. 21-25.

- McAllister, Carlota y Diane M. Nelson [eds.], *War by Other Means: Aftermath in Post-Genocide Guatemala*, Durham, NC, Duke University Press, 2013.
- \_\_\_\_\_, “Aftermath: Harvests of Violence and Histories of the Future”, en Carlota McAllister y Diane M. Nelson [eds.], *War by Other Means: Aftermath in Post-Genocide Guatemala*, Durham, NC, Duke University Press, 2013, pp. 1-46.
- Menjívar Larín, Rafael, *Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño*, San Salvador, UCA Editores, 1982.
- \_\_\_\_\_, *El Salvador: el eslabón más pequeño*, San José, Editorial Universitaria Centroamericana, 1980.
- \_\_\_\_\_, “BPR: para una política revolucionaria”, en *El Salvador: alianzas políticas y proceso revolucionario. Cuadernos de Coyuntura*, núm. 5, México, Sociedad de Economía Política Latinoamericana, 1979, pp. 15-20.
- Menjívar Ochoa, Rafael, *Tiempos de locura: El Salvador, 1979-1981*, San Salvador, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2006.
- Montgomery, David, *The Fall of the House of Labor: The Workplace, the State, and American Labor Activism, 1865-1925*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
- Morales Velado, Óscar A., *La resistencia no violenta ante los regímenes salvadoreños que han utilizado el terror institucionalizado en el periodo 1972-1987*, San Salvador, UCA Editores, 1988.
- \_\_\_\_\_, “El movimiento laboral atenazado”, en *Estudios Centroamericanos*, vol. 42, núms. 463 y 464, mayo-junio de 1987, pp. 344-348.
- NACLA, *Report on the Americas*, vol. 20, núm. 1, enero-marzo de 1986.
- National Labor Committee in Support of Democracy and Human Rights in El Salvador, *El Salvador 1990: ARENA Repression Uni-*

- tes the Salvadoran Labor Movement*, El Salvador/Nueva York, Labor Campaign, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Labor Rights Denied in El Salvador: An On-Site Investigation by a Delegation of Labor-Legislative-Religious Leaders*, El Salvador/Nueva York, Labor Campaign, 1988.
- Nevins, M. Eleanor, “Intertextuality and Misunderstanding”, en *Language & Communication*, vol. 30, núm. 1, enero de 2010, pp. 1-6.
- Norton, Chris, “Build and Destroy”, en *NACLA Report on the Americas*, vol. 19, núm. 6, 1985, pp. 26-36.
- Paige, Jeffrey, *Coffee and Power: Revolution and the Rise of Democracy in Central America*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1998.
- Phillips, Peter y Charles Cole, “Fisheries Resources of Jiquilisco Bay, El Salvador”, en *Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute*, 30th Annual Session, noviembre de 1977.
- Pirker, Kristina, *La redefinición de lo posible: militancia política y movilización social en El Salvador, 1970-2012*, México, Instituto Mora, 2017.
- \_\_\_\_\_, “Radicalización política y movilización social en El Salvador: los frentes de masas”, en *Observatorio Latinoamericano*, núm. 9, noviembre de 2012, pp. 62-77.
- Ramos, Julio, *Divergent Modernities: Culture and Politics in Nineteenth Century Latin America*, Durham, NC, Duke University Press, 2001.
- Romero, Óscar A., *Archbishop Óscar Romero: A Shepherd’s Diary*, trad. de Irene B. Hodgson, Cincinnati, OH, St. Anthony Messenger Press, 1993.
- Samayoa, Salvador y Guillermo Galván, “El movimiento obrero en El Salvador ¿resurgimiento o agitación?”, en *Estudios Cen-*

- troamericanos*, vol. 34, núms. 369-370, julio-agosto de 1979, pp. 591-600.
- \_\_\_\_\_, “El cierre patronal de las empresas: prueba de fuego para el sindicalismo revolucionario en El Salvador”, en *Estudios Centroamericanos*, vol. 34, núm. 371, septiembre de 1979, pp. 793-800.
- Sánchez Ramos, Irene, “El Salvador, 1986: el carácter global de la contrainsurgencia”, en *El Salvador: proceso político y guerra. Cuaderno de Divulgación*, núm. 4, San Salvador, Centro de Investigación y Acción, 1987, pp. 44-73.
- Scipes, Kim, *AFL-CIO’s Secret War against Developing Country Workers: Solidarity or Sabotage?*, Lanham, MD, Lexington Books, 2010.
- Silver, Beverly J., *Forces of Labor: Workers’ Movements and Globalization since 1870*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
- \_\_\_\_\_, “El sistema financiero de El Salvador: análisis y perspectivas”, en *Cuadernos de Investigación*, San Salvador, Centro de Investigaciones Tecnológicas y Científicas, mayo de 1989.
- Stanley, William Deane, *The Protection Racket State: Elite Politics, Military Extortion, and Civil War in El Salvador*, Philadelphia, PA, Temple University Press, 1996.
- Stern, Steve J., *Secret History of Gender: Women, Men and Power in Late Colonial Mexico*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1995.
- Stewart, Stephen O. y Danilo Jiménez, “Final Report: Midterm Evaluation: AIFLD-AID cooperative agreement in El Salvador”, El Salvador/Washington DC, USAID, junio de 1993.
- Thackray, Arnold y Minor Myers Jr. Arnold O., *Beckman: One Hundred Years of Excellence*, Philadelphia, PA, Chemical Heritage Foundation, 2000.

- US Department of State, “Telegram from the Embassy in El Salvador to the Department of State, ‘Updating Our Strategy for El Salvador’”, en *Foreign Relations of the United States, 1977-1980*, vol. xv: *Central America, 1977-1980*, Washington, DC, Government Publishing Office, 26 de mayo de 1980.
- \_\_\_\_\_, “Telegram from the Embassy in El Salvador to the Department of State, Subject: High Level Dialogue with GOES”, en *Foreign Relations of the United States, 1977-1980*, vol. xv: *Central America, 1977-1980*, Washington, DC, Government Publishing Office, 29 de mayo de 1979.
- Viterna, Jocelyn, *Women in War: The Micro-Processes of Mobilization in El Salvador*, Nueva York, Oxford University Press, 2013.
- Volosinov, V. N., *Marxism and the Philosophy of Language*, trad. de Ladislav Matejka y I. R. Titunik, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1975.
- Weinstein, Barbara, *For Social Peace in Brazil: Industrialists and the Remaking of the Working Class in São Paulo, 1920-1964*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1996.
- Weld, Kirsten, *Paper Cadavers: The Archives of Dictatorship in Guatemala*, Durham, NC: Duke University Press, 2014.
- Whitfield, Teresa, *Paying the Price: Ignacio Ellacuría and the Murdered Jesuits of El Salvador*, Philadelphia, PA, Temple University Press, 1995.
- Winter, Jay, *Dreams of Peace and Freedom: Utopian Moments of the Twentieth Century*, New Haven, CT, Yale University Press, 2006.
- Wood, Elisabeth Jean, “Conflict-Related Sexual Violence and the Policy Implications of Recent Research”, en *International Review of the Red Cross*, vol. 96, núm. 894, septiembre de 2014, pp. 457-478.

*Solidaridad Bajo Asedio. El movimiento obrero salvadoreño entre el cielo y el infierno, 1970-1990*, editado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, se terminó de imprimir en digital el 16 de mayo de 2021 en los talleres de Ultradigital Press, S.A. de C.V., Centeno No . 195, Col. Valle del Sur, Iztapalapa, C.P. 09819 Ciudad de México. Su composición y formación tipográfica, en tipo Walbaum de 12:15 puntos, estuvo a cargo de Irma Martínez Hidalgo. La edición consta de 150 ejemplares a tiro bajo demanda. La preparación de archivos electrónicos a cargo de Beatriz Méndez Carniado. El cuidado de la edición estuvo a cargo de María Angélica Orozco Hernández.

## PORT TRIUMPH

A finales de la década de los 70s, el movimiento obrero salvadoreño proporcionalmente era entre los mas grandes y mas militantes en America Latina. El libro narra su trayectoria en esos años y su declive bajo la represión terrorista y su renacimiento parcial bajo el gobierno demo-cristiano entre 1984-1987, enfocando el caso de Puerto El Triunfo, puerto camaronero en el departamento Usulután, cuando el rubro de camarones era fuente principal de divisas. Unos 1500 trabajadores sindicalizados mayormente mujeres se transformaron desde la pasividad a la exitosa militancia bajo la bota del régimen militar. En 1980, los escuadrones de la extrema derecha mataron o exiliaron a la dirigencia local. El libro también enfoca las relaciones de genero entre las trabajadoras de las plantas y los pescadores, decisivas en su historia en los 80 cuando existía la posibilidad de formación a una gran cooperativa que hubiera representado una alternativa local al neoliberalismo y al cierre de la industria camaronera.



ISBN 978-607-30-4502-5



**CIALC**  
Centro de Investigaciones sobre  
América Latina y el Caribe